

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos

Escrito amicus presentado por los Relatores Especiales de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos (Marcos Orellana), Derechos Humanos y el Medio Ambiente (David Boyd), y el Derecho al Desarrollo (Surya Deva)

22 de noviembre de 2023

TABLA DE CONTENIDOS

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	EXPERIENCIA Y CUALIFICACIONES DE LOS RELATORES DE LA ONU	5
a.	Admisibilidad de la presentación de los Relatores de la ONU	5
b.	Los Relatores de la ONU son expertos independientes sobre las conexiones entre la emergencia climática y los derechos humanos	6
1.	Dr. Marcos Orellana: Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos	6
2.	Dr. David Boyd: Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente	6
3.	Sr. Surya Deva: Relator Especial de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.....	7
III.	LA LIBERACIÓN ANTROPOGÉNICA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO HA CREADO UNA EMERGENCIA CLIMÁTICA QUE AMENAZA LOS DERECHOS PROTEGIDOS	7
a.	La emergencia climática es un fenómeno global que representa una amenaza existencial para la humanidad.....	8
b.	La emergencia climática impacta negativamente en las Américas y el Caribe.....	10
c.	La emergencia climática se agravará	11
IV.	LA EMERGENCIA CLIMÁTICA PERJUDICA LOS DERECHOS HUMANOS	13
a.	Los principales órganos del sistema interamericano de derechos humanos han reconocido que la emergencia climática pone en peligro los derechos de la Convención.....	14
b.	Los organismos de derechos humanos de la ONU han reconocido que la emergencia climática perjudica los derechos humanos	15
c.	Las leyes ambientales internacionales reconocen que la emergencia climática perjudica los derechos humanos.....	17
d.	La interpretación de la Convención debe guiarse por el principio de integración sistémica.....	19
e.	Derechos protegidos perjudicados por la emergencia climática.....	20

1.	La emergencia climática perjudica el derecho a la vida, incluso sus condiciones necesarias	21
2.	La emergencia climática perjudica los derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento.....	23
3.	La emergencia climática perjudica el derecho a un medio ambiente saludable	26
4.	La emergencia climática perjudica los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su derecho a la propiedad	28
5.	La emergencia climática perjudica el derecho a la libre determinación ...	30
6.	La emergencia climática perjudica el derecho a la vivienda, la vida privada y la vida familiar	33
V.	OBLIGACIONES ESTATALES EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA	34
a.	Principios rectores.....	35
1.	Cooperación internacional	35
2.	Prevención de daño medioambiental	37
3.	Precaución.....	39
4.	Principio de que el contaminador paga	40
5.	Mejor conocimiento científico disponible	41
6.	No regresión.....	42
7.	Igualdad y no discriminación.....	43
8.	Igualdad intergeneracional.....	44
9.	Obligaciones diferenciadas	45
(a)	Responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades	46
(b)	La mayor ambición posible y el máximo de recursos disponibles	47
b.	Las obligaciones del Estado con relación a cuestiones específicas planteadas en la Solicitud de Opinión Consultiva	48

1.	Las obligaciones del Estado se derivan de los deberes de prevención y garantía de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, en relación con la emergencia climática (Parte IV.A de la Solicitud de Opinión Consultiva).....	48
2.	Las obligaciones del Estado de preservar el derecho a la vida y a la supervivencia en relación con la emergencia climática a la luz de la ciencia y los derechos humanos (Parte IV.B de la Solicitud de Opinión Consultiva).....	50
3.	Las obligaciones de los Estados en relación con los derechos de los niños y las generaciones futuras ante la emergencia climática (Parte IV.C de la Solicitud de Opinión Consultiva)	51
4.	Las obligaciones del Estado derivadas de los procedimientos de consulta y procedimientos judiciales por la emergencia climática (Parte IV.D de la Solicitud de Opinión Consultiva)	55
	(a) Acceso a la información.....	55
	(b) Participación en la toma de decisiones ambientales	56
	(c) Acceso a la justicia.....	59
	(d) Derecho a la indemnización y a la tutela judicial efectiva.....	59
5.	Obligaciones estatales relacionadas con la protección de defensores territoriales y ambientales, así como de mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de la emergencia climática (Parte IV.E de la Solicitud de Opinión Consultiva).	61
	(a) Defensores del clima.....	64
	(b) Mujeres, niñas y personas con diversidad de género	65
	(c) Pueblos Indígenas	67
	(d) Pueblos afrodescendientes	68
6.	Las obligaciones y responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática (Parte IV.F de la Solicitud de Opinión Consultiva).....	70
VI.	LOS ESTADOS DEBEN CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA SATISFACER SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA EMERGENCIA CLIMÁTICA	72

a.	Los Estados deben eliminar progresivamente la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)	72
1.	Los Estados deberían evitar nuevas inversiones en combustibles fósiles	74
2.	Los Estados deben evitar nuevos subsidios a los combustibles fósiles y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles existentes	75
3.	Los Estados deberían eliminar gradualmente la extracción y el uso del carbón.....	76
4.	Los Estados deben reducir y eliminar progresivamente la producción actual de petróleo y gas.....	78
5.	Los Estados deben reducir las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta	78
b.	Los Estados deben aumentar la producción de energías renovables	81
c.	Los Estados deben gestionar la transición energética de forma responsable, teniendo en cuenta los derechos humanos en la explotación de minerales críticos para dicha transición	83
d.	Los Estados deben evitar la dependencia desmedida de las tecnologías de eliminación del carbono y garantizar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de dichas tecnologías	85
1.	Las Tecnologías de Bioenergía, Captura y Almacenamiento de Carbono y Captura Directa de Aire plantean preocupaciones en materia de derechos humanos	85
2.	Los Estados deben preservar y restaurar los ecosistemas naturales que mitigan el carbono.....	88
3.	Los Estados deben garantizar la protección de los derechos humanos en cualquier implementación de programas de mercados de carbono, incluidos los créditos forestales	89
e.	Los Estados deben reducir y acabar con la deforestación.....	90
f.	Los Estados deben aumentar sus niveles de financiamiento climático.....	91
1.	Los Estados deben ser proactivos al superar los obstáculos que impiden una financiación adecuada	94

2.	Los Estados deben considerar poner un precio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero	95
3.	Los Estados deben considerar participar en esquemas colaborativos, incluyendo los canjes de deuda por acción climática	96
g.	Los Estados deben implementar supervisión y programas de educación para crear conciencia sobre la emergencia climática.....	97
VII.	PÉRDIDAS Y DAÑOS	97
VIII.	CONCLUSIÓN.....	99
	REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES QUE PRESENTAN	102

I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Los Relatores Especiales de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos (Marcos Orellana), sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (David Boyd), y sobre el Derecho al Desarrollo (Surya Deva) (conjuntamente, los “**Relatores de la ONU**”) presentan este escrito *amicus* a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “**Corte**”) en el procedimiento relativo a la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Chile y Colombia sobre las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho internacional frente a la emergencia climática (la “**Solicitud de Opinión Consultiva**”).
2. Como se establece en la Sección II, los Relatores de la ONU están especialmente cualificados para asesorar a la Corte sobre las cuestiones planteadas en la Solicitud de Opinión Consultiva. Los Relatores de la ONU han escrito extensamente sobre la emergencia climática y otros desafíos ambientales, enfatizando su conexión con los derechos humanos.¹ Los Relatores de la ONU solicitan respetuosamente que la Corte acepte esta presentación amicus en el expediente del caso.
3. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (el “**IPCC**”) ha sido inequívoco al afirmar que la emergencia climática amenaza a todas las regiones del mundo. Como se discute en la Sección III, la emergencia climática afecta a las Américas y el Caribe de manera crítica. La mejor evidencia científica disponible indica que la amenaza existencial que representa la emergencia climática para la humanidad sólo aumentará y empeorará a menos que se realicen intervenciones urgentes, ambiciosas y efectivas por parte de los gobiernos de todo el mundo que cooperen y coordinen sus esfuerzos en conjunto.
4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (la “**Convención**”), y el derecho internacional de los derechos humanos en general, exige que los Estados respeten, protejan y cumplan los derechos humanos de las personas y comunidades potencialmente afectadas al prevenir, mitigar, adaptarse y remediar los efectos de la emergencia climática. Como se analiza en la Sección IV, los principales órganos del sistema interamericano de derechos humanos ya han constatado que la emergencia climática amenaza y pone en peligro los derechos de la Convención.

¹ Véase, por ejemplo, Marcos Orellana (Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos del manejo y la eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos), *Los efectos tóxicos de algunas soluciones propuestas para el cambio climático*, U.N. Doc. A/HRC/54/25 (13 de julio de 2023); David Boyd (Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible) y Marcos Orellana (Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos del manejo y la eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos), *El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: medio ambiente no tóxico*, U.N. Doc. A/HRC/49/53 (12 de enero de 2022); David Boyd (Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible), *Los derechos humanos y la crisis mundial del agua; contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua*, U.N. Doc. A/HRC/46/28 (19 de enero de 2021); David Boyd (Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible), *Obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible: un clima seguro*, U.N. Doc. A/74/161 (15 de julio de 2019); Surya Deva (Relator Especial sobre el derecho al desarrollo), *Revitalización del derecho al desarrollo: una visión para el futuro*, U.N. Doc. A/HRC/54/27 (4 de agosto de 2023) y *El papel de las empresas en la realización del derecho al desarrollo*, U.N. Doc. A/78/160 (12 de julio de 2023).

Además, los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño han reconocido el impacto adverso de la emergencia climática sobre los derechos humanos.

5. Como se discute en la Sección IV.e, la emergencia climática ya está impidiendo el pleno disfrute de una serie de derechos humanos para ciertos individuos, comunidades y poblaciones, incluyendo, *entre otros*, los derechos a: la vida; la salud, la alimentación y el saneamiento del agua; un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; la libre determinación de las poblaciones vulnerables, en particular los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; el hogar, la privacidad y la vida familiar; y el desarrollo. Además, los mejores datos científicos disponibles dejan claro que determinadas poblaciones y/o Estados experimentarán de forma desproporcionada los efectos adversos de la emergencia climática sobre el disfrute de los derechos humanos y que estos efectos adversos no harán sino empeorar con el tiempo.
6. Fundamentalmente, los Estados deben responder a esos daños, independientemente de la magnitud de sus contribuciones a la emergencia climática. Los Estados deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en curso. Además, algunos Estados pueden ser responsables de pérdidas y daños causados por emisiones históricas y en curso.
7. Se aplican determinados principios rectores para determinar el alcance de las obligaciones de los Estados y la forma en que éstos deben cumplirlas. En la Sección V.a se analizan estos principios rectores aplicables, tales como:
 - (i) la cooperación internacional entre Estados, que incluye la notificación, la consulta y el intercambio de información sobre el riesgo previsible de daños graves a los derechos humanos como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero;
 - (ii) la prevención de daños y, en relación con ella, la aplicación del principio de precaución a las actividades que puedan dar lugar a emisiones de gases de efecto invernadero;
 - (iii) el principio de quien contamina paga, según el cual la parte responsable del daño debe asumir el coste de hacer frente al daño causado;
 - (iv) aplicación de la no regresión, que prohíbe a los Estados permitir o proseguir acciones que hagan retroceder las acciones climáticas o tengan el efecto neto de disminuir la protección legal del medio ambiente;
 - (v) igualdad y no discriminación en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos; y

- (vi) el uso de los mejores conocimientos científicos disponibles en la aplicación de la acción del Estado.
8. El alcance de determinadas obligaciones de los Estados dependerá de los recursos disponibles y de las contribuciones históricas y actuales de cada Estado a la emergencia climática. Los principios aplicables en relación con estas responsabilidades diferenciadas de los Estados incluyen: responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas; la mayor ambición posible; el máximo de recursos disponibles; y la realización progresiva de los objetivos de acción climática.
9. Los derechos analizados en la Sección IV y los principios que rigen las obligaciones del Estado en relación con el riesgo previsible de daño grave a esos derechos analizados en la Sección V responden a las preguntas planteadas en la Solicitud de Opinión Consultiva. La Sección V.b proporciona respuestas complementarias a algunas de las cuestiones específicas planteadas en las Partes IV.A a IV.F de la Solicitud de Opinión Consultiva. Concretamente, los Estados deben:
- (i) garantizar que todas las leyes, políticas y acciones sean compatibles con los derechos de la Convención y el deber de prevenir daños. Esas obligaciones van más allá de la notificación e incluyen amplias obligaciones de aplicación y ejecución.
 - (ii) actuar de manera coherente con sus obligaciones relativas al derecho a la vida, incluido el deber de proteger, respetar y cumplir el derecho y sus condiciones necesarias cuando exista un riesgo previsible de que el derecho pueda verse amenazado. Dichas acciones deben ser coherentes con la mejor ciencia disponible sobre la emergencia climática, incluidas sus causas e impactos.
 - (iii) actuar de manera coherente con los principios de equidad intergeneracional y las obligaciones diferenciadas que se le deben a los niños, niñas y jóvenes.
 - (iv) respetar, proteger y cumplir los derechos procesales relativos al acceso a la información; participación en la toma de decisiones ambientales; y el acceso a la justicia y a la reparación.
 - (v) respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas defensoras territoriales, ambientales y climáticas, adoptando un enfoque interseccional que reconozca las vulnerabilidades particulares de los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones rurales y las comunidades afrodescendientes.
 - (vi) proseguir la cooperación y la asistencia internacionales y regionales, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

10. La Sección VI identifica las medidas específicas que los Estados deben considerar implementar para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Concretamente, los Estados deben:
 - (i) eliminar progresivamente la quema de combustibles fósiles de acuerdo con el principio de transición justa;
 - (ii) aumentar la producción de energía renovable de manera responsable;
 - (iii) garantizar el suministro de minerales fundamentales para la transición energética de manera que se protejan y respeten los derechos humanos de las comunidades potencialmente afectadas;
 - (iv) evitar la dependencia excesiva de las tecnologías de eliminación de carbono y garantizar que se respeten los derechos humanos de las comunidades potencialmente afectadas en la aplicación de dichas tecnologías;
 - (v) garantizar la protección de los derechos humanos en cualquier implementación de programas de mercados de carbono y créditos forestales;
 - (vi) preservar sus sistemas naturales de mitigación de carbono;
 - (vii) reducir y poner fin a la deforestación;
 - (viii) aumentar sus niveles de financiación climática, incluida la financiación de la adaptación al cambio climático y el intercambio de tecnologías verdes; y
 - (ix) promover la sensibilización y la educación sobre la emergencia climática.
11. Por último, los Estados deben abordar los daños económicos y no económicos derivados de la emergencia climática o relacionados con ella, incluidos los daños a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas. En la Sección VII se abordan las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de reparar esos daños.
12. Los Relatores de la ONU han centrado esta presentación principalmente en las obligaciones de los Estados Parte en la Convención. Sin embargo, esta Corte ha emitido opiniones integrales sobre temas críticos que afectan los derechos humanos, incluyendo la *Opinión Consultiva OC-23/17*, que reconoció la conexión entre la emergencia climática y el derecho a un medio ambiente sano. De hecho, en la *Opinión Consultiva OC-23/17*, esta Corte observó que al considerar el alcance del artículo 1(1) de la Convención al responder a una solicitud de opinión consultiva, la Corte no debe limitar su respuesta a países específicos, sino que las

- obligaciones ambientales pueden ser de “importancia para todos los Estados del planeta.”²
13. La Solicitud de Opinión Consultiva plantea preguntas importantes sobre el papel de los derechos de la Convención en la información de las obligaciones de los Estados de luchar contra la amenaza existencial para la humanidad que plantea la emergencia climática. Los Relatores de la ONU respetuosamente hacen esta presentación con el objetivo de ayudar a la Corte en el cumplimiento de la monumental tarea que tiene por delante. Los Relatores de la ONU han dirigido su análisis a las obligaciones de los Estados Parte de la Convención cuando corresponde, al tiempo que han abordado las obligaciones de los Estados Miembros de la OEA en la respuesta a la emergencia climática.

II. EXPERIENCIA Y CUALIFICACIONES DE LOS RELATORES DE LA ONU

14. Los Relatores Especiales de la ONU forman parte del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Son expertos independientes de todo el mundo nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para contribuir a la promoción y realización de los derechos humanos en áreas relacionadas con su experiencia profesional. Los Relatores Especiales de la ONU realizan visitas a los países, actúan sobre los casos de violaciones e infracciones denunciadas a través de comunicaciones con los Estados y las empresas implicados, y contribuyen al desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos. Ellos trabajan en estrecha colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos e informan anualmente tanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como a la Asamblea General de la ONU.

a. Admisibilidad de la presentación de los Relatores de la ONU

15. Los Relatores de la ONU califican como *amici* para hacer esta presentación de conformidad con el Reglamento de la Corte. El artículo 2, apartado 3, del Reglamento de la Corte, modificado en 2009, define *amicus curiae* como:

la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia [...].³

² *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 35: “Esta Corte ha indicado que, debido al interés general de sus opiniones consultivas, su alcance no debe restringirse a Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud van más allá de los intereses de los Estados parte de la Convención de Cartagena y son importantes para todos los Estados del planeta. Por lo tanto, la Corte considera que no debe limitar su [sic] respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena.”

³ Artículo 2(3) del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. Los Relatores de la ONU cumplen con estos requisitos para calificar como *amici*. Son independientes de las partes que hicieron la Solicitud de Opinión Consultiva. Los Relatores de la ONU son expertos cualificados e independientes. Además, como se analiza inmediatamente más adelante en la Sección II.b, son expertos en temas de derechos humanos, incluida la relación entre la emergencia climática y los derechos humanos.
- b. **Los Relatores de la ONU son expertos independientes sobre las conexiones entre la emergencia climática y los derechos humanos**
1. **Dr. Marcos Orellana: Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos**
17. En 1995, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció un mandato para examinar las consecuencias para los derechos humanos de la exposición a sustancias peligrosas y desechos tóxicos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato en 2011 para incluir todo el ciclo de vida de los productos peligrosos, desde la fabricación hasta la eliminación final, estableciendo un Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos (“**Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos**”). El mandato incluye el examen de las emisiones de sustancias peligrosas procedentes de todas las fuentes, la presentación de informes sobre las consecuencias adversas de la gestión y eliminación ilícitas de desechos y sustancias peligrosos, y el estudio de las conexiones entre la ciencia y la política en lo que respecta a los riesgos para los derechos humanos que plantea el ciclo de vida de las sustancias y los desechos peligrosos.
18. El Dr. Marcos Orellana ha trabajado como asesor legal de varias agencias de la ONU, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, incluida la Presidencia de la 25^a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (“**CMNUCC**”), y como negociador climático representando a la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe en las negociaciones del Acuerdo de París. El Dr. Orellana comenzó su mandato como Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos en agosto de 2020 y fue reelegido en 2023 para un segundo mandato de tres años.
2. **Dr. David Boyd: Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente**
19. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó en 2011 el mandato sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. El mandato se formalizó como Relator Especial en 2015 (“**Relator Especial sobre el Medio Ambiente**”). El mandato incluye el estudio de las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; la promoción de buenas prácticas en los enfoques de la formulación de

- políticas ambientales basados en los derechos; y promover el reconocimiento y la implementación del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
20. El Dr. David Boyd es profesor de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, nombrado conjuntamente en el Instituto de Recursos, Medio Ambiente y Sostenibilidad y la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales. El Dr. Boyd ha presentado escritos *amicus* ante más de una docena de cortes y tribunales nacionales, regionales e internacionales, incluidos los Tribunales Supremos de Brasil y Noruega, la Corte Constitucional de Ecuador, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Dr. Boyd comenzó su mandato como Relator Especial sobre el Medio Ambiente en agosto de 2018 y fue reelegido en 2021 para un segundo mandato de tres años.
- 3. Sr. Surya Deva: Relator Especial de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo**
21. La Asamblea General de la ONU proclamó el derecho al desarrollo en 1986. Para promover la promoción y el cumplimiento de este derecho, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2016 el mandato del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo (“**Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo**”). El Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo tiene a su cargo promover el derecho de los pueblos a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político. El Relator Especial se relaciona con los Estados Miembros de la ONU y las partes interesadas pertinentes e informa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Asamblea General de la ONU. El Relator también ayuda a crear conciencia y hacer efectivo el derecho al desarrollo en el trabajo de los órganos de la ONU, las instituciones financieras y los proyectos internacionales de desarrollo.
22. El Sr. Surya Deva es profesor de la Facultad de Derecho de Macquarie y director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Macquarie, Australia. Ha publicado extensamente en el campo de las empresas y los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El Sr. Deva ha asesorado a organismos de la ONU, gobiernos, instituciones nacionales de derechos humanos, empresas multinacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en cuestiones relacionadas con su experiencia. Se desempeñó como miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2022. El Sr. Deva asumió el cargo de Relator Especial de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo el 1 de mayo de 2023.

III. LA LIBERACIÓN ANTROPOGÉNICA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO HA CREADO UNA EMERGENCIA CLIMÁTICA QUE AMENAZA LOS DERECHOS PROTEGIDOS

23. Los impactos actuales de la emergencia climática demuestran que la temperatura de la superficie global, que es 1,2 °C más alta en promedio que los niveles preindustriales, ya está teniendo un impacto adverso importante en ciertas

poblaciones e impidiendo que las comunidades vulnerables disfruten de todos sus derechos humanos. Los Relatores de la ONU opinan que los compromisos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial "muy por debajo de los 2 °C y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales" no son seguros ni suficientes. Más bien, la humanidad debería aspirar a reducir el aumento de la temperatura media mundial a 1,0 °C, ya que este fue el límite exterior del rango estable experimentado por la humanidad durante el Holoceno.⁴

- a. **La emergencia climática es un fenómeno global que representa una amenaza existencial para la humanidad**
- 24. La emergencia climática amenaza a todas las regiones del mundo. La temperatura de la superficie global fue, en promedio, 1,59 °C más alta sobre la tierra y 0,88 °C más alta sobre el océano durante el período comprendido entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900.⁵ El cambio climático causado por el hombre ya está afectando a los patrones meteorológicos y creando fenómenos climáticos extremos en todo el mundo.⁶ Los cambios en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biosfera son generalizados y acelerados. Los cambios observados en los extremos climáticos, en particular las olas de calor, las fuertes precipitaciones, los incendios forestales, las sequías y los ciclones, han aumentado en frecuencia desde el IE5 del IPCC, que se finalizó en el 2014.⁷
- 25. La emergencia climática afecta a muchos aspectos del bienestar humano. Aproximadamente entre 3,3 y 3,6 billones de personas viven en entornos altamente vulnerables al cambio climático.⁸ El cambio climático ha causado daños sustanciales y pérdidas cada vez más irreversibles en los ecosistemas terrestres, de agua dulce, criósfericos y marinos.⁹
- 26. La emergencia climática ha frenado los avances de la productividad agrícola en los últimos 50 años y ha revertido los avances en la reducción de la malnutrición.¹⁰ Aproximadamente la mitad de la población mundial experimenta ahora una grave escasez de agua durante al menos parte del año debido a factores climáticos y no

⁴ Véase Darrell Kaufman et al., *Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach*, Sci. Data 7, 201 (2020), <https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7>.

⁵ IPCC, *Informe de síntesis del IE6: Cambio climático 2023*, párr. A.1.1.

⁶ *Id.* en párr. A.2.

⁷ *Id.* en párr. A.2.1.

⁸ *Id* en párr. A.2.2.

⁹ *Id.* en párr. A.2.3.

¹⁰ *Id* en párr. A.2.5.

climáticos.¹¹ A nivel mundial, el aumento del calor extremo ha provocado mortalidad y morbilidad humana.¹² En las zonas urbanas, el cambio climático ha causado efectos adversos en la salud, los medios de subsistencia y la infraestructura.¹³

27. La emergencia climática ha provocado que los océanos del mundo absorban más del 90% de la energía adicional atrapada por el efecto invernadero y aproximadamente el 30% del dióxido de carbono antropogénico de la atmósfera.¹⁴ Esta absorción ha calentado, desoxigenado y acidificado los océanos del mundo.¹⁵ El aumento del nivel del mar pone en peligro a las comunidades costeras con inundaciones, salinización, marejadas ciclónicas y erosión.¹⁶ El aumento del nivel del mar amenaza la existencia misma de muchas comunidades, en particular en los Estados Insulares en Desarrollo y de baja altitud.¹⁷
28. Existe el riesgo de que, incluso si las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero se reducen en el futuro, los efectos a largo plazo de las emisiones pasadas y existentes sigan causando daños en el futuro.¹⁸ Por ejemplo, los científicos han advertido que la deforestación está empujando a la Amazonía hacia un cambio potencialmente irreversible de bosque a sabana.¹⁹
29. Las incertidumbres y los peligros asociados a los puntos de inflexión recalcan la importancia del principio de precaución y la urgencia de adoptar medidas inmediatas para descarbonizar la economía mundial, detener la deforestación y transformar la agricultura.

¹¹ *Id.* en párr. A.2.4.

¹² *Id.* en párr. A.2.5.

¹³ *Id.* en párr. A.2.6.

¹⁴ Ian Fry, Marcos Orellana & David Boyd, *Amicus curiae presentado al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por los Relatores Especiales de la ONU*, 30 de mayo de 2023, [Resumen ITLOS], página 8; IPCC, *Informe del Grupo de Trabajo I (Fundamentos de Ciencias Físicas)*, AR6: *Resumen para los encargados de la formulación de políticas*, párr. A.4.2; IPCC Grupo de Trabajo II, AR5: *Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad al Cambio Climático 2014*, página 1658.

¹⁵ Escrito ITLOS, página 8.

¹⁶ Escrito ITLOS, páginas 8-9; IPCC, *Informe de síntesis AR6: Cambio climático 2023, Resumen para los responsables de la formulación de políticas*, página 5, párr. B.3.1, B.7.2.

¹⁷ El Relator Especial, Dr. Boyd, ha observado de primera mano este tipo de reubicaciones causadas por el cambio climático, como en Fiji, durante una misión en 2018. A/HRC/43/53/Add.1.

¹⁸ Will Steffen et al., *Trajectories of the Earth System in the Anthropocene* (Aug. 2018).

¹⁹ T.E. Lovejoy y C. Nobre, Punto de inflexión de Amazonas: última oportunidad para la acción, *Science Advances*, Vol. 5, no. 12, eaba2949.

- b. La emergencia climática impacta negativamente en las Américas y el Caribe**
30. La emergencia climática impacta negativamente en las Américas y el Caribe de muchas maneras. El aumento de la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos ha afectado gravemente a las comunidades de América Central y del Sur, así como a las islas del Caribe, y ha afectado especialmente a los pueblos indígenas, a los pequeños productores de alimentos y a los hogares de bajos ingresos.²⁰ Los Estados centroamericanos se encuentran constantemente entre los que corren mayor riesgo de verse afectados por eventos climáticos extremos, en particular los Estados situados en el “Corredor Seco,” una región de bosque seco tropical en la costa del Pacífico.²¹ Los pequeños Estados insulares del Caribe también se ven afectados de manera desproporcionada.²² Los cambios a gran escala impulsados por el clima en la selva amazónica afectan a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Chile sufre una megasequía que ha convertido la escasez de agua en una crisis nacional.²³
31. La emergencia climática afecta la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica en las Américas y el Caribe. El cambio climático provoca sequías más frecuentes y/o prolongadas y una disminución de las precipitaciones, lo que se traduce en una reducción de los rendimientos de los cultivos clave.²⁴ Junto con una alta tasa de crecimiento de la población, la reducción de la productividad agrícola expone a más personas a la inseguridad alimentaria y la malnutrición.²⁵ Los cambios y la disminución general de la disponibilidad estacional de agua se traducen en una mayor inseguridad hídrica.²⁶
32. Las Américas están cada vez más amenazadas por los desastres inducidos por el clima, como inundaciones, deslizamientos de tierra, epidemias y la consiguiente presión sobre los sistemas de servicios públicos. El cambio climático trae consigo tormentas más frecuentes y severas, fuertes precipitaciones y el deshielo del permafrost y los glaciares.²⁷ Más personas, especialmente las poblaciones marginadas y de bajos ingresos, se ven amenazadas por el aumento de las inundaciones y los deslizamientos de tierra y la interrupción de los sistemas de

²⁰ IPCC, *Informe de síntesis del IE6: Cambio climático 2023*, párr. A.2.

²¹ Grupo de Trabajo II del IPCC, *IE6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022*, página 1699.

²² IPCC, *Informe de síntesis del IE6: Cambio climático 2023*, párr. A.2.5.

²³ John Bartlett, “Las consecuencias serán nefastas”: la crisis hídrica de Chile está llegando a un punto de ruptura, The Guardian (1 de junio de 2022), <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/chiles-water-crisis-megadrought-reaching-breaking-point>.

²⁴ Grupo de Trabajo II del IPCC, *IE6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022*, página 1722.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

infraestructura y servicios críticos.²⁸ Las temperaturas más altas amplían el rango geográfico de los vectores que llevan enfermedades.²⁹ Con las malas condiciones de saneamiento en muchas partes de las Américas, la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, el dengue, el zika y la leishmaniasis, aumentará, lastrando aún más los sectores económico y de salud.³⁰

33. La emergencia climática también pone en peligro los sistemas ecológicos críticos de la región. Las sequías más frecuentes y persistentes, combinadas con la degradación antropogénica de los bosques y la deforestación, están reduciendo la capacidad de la Amazonía para absorber y secuestrar carbono, así como disminuyendo la miríada de productos forestales y servicios ecosistémicos de los que dependen los pueblos indígenas y las comunidades locales.³¹ El aumento de los niveles regionales de CO₂ en el agua del mar conduce a la acidificación de los océanos y al blanqueamiento de los corales, degradando y posiblemente matando el arrecife de coral mesoamericano, que es el segundo arrecife más grande del mundo y un hábitat vital y una fuente de alimento para muchas especies marinas.³² El aumento del nivel del mar provoca inundaciones y erosión costeras, perjudicando a las poblaciones costeras y dañando la infraestructura.³³

c. La emergencia climática se agravará

34. La emergencia climática se intensificará con nuevos aumentos de la temperatura global. Según el IPCC, el calentamiento global empeorará a causa del aumento de las emisiones acumuladas de CO₂ “en casi todos los escenarios considerados y trayectorias modeladas.”³⁴ Incluso en el escenario de muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero del IPCC, es “más probable que no” que el calentamiento global alcance los 1,5 °C antes de 2040.³⁵ De hecho, algunas fuentes sugieren que el umbral de 1,5 °C podría superarse mucho antes de 2040.³⁶ Se espera que la tendencia ascendente del calentamiento global intensifique aún más el ciclo del agua global, que resultará en un clima muy húmedo y muy seco y a otros fenómenos

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*, página 1723.

³¹ *Id.*

³² *Id.*

³³ *Id.*

³⁴ IPCC, *Informe de síntesis del IE6: Cambio climático 2023*, párr. B.1.

³⁵ *Id.* párrafo B.1.

³⁶ *A medida que se avecinan 1,5 grados, los científicos ven un riesgo creciente de calentamiento desbocado, necesidad urgente de reducir las emisiones*, Yale Env't 360 (15 de marzo de 2023), <https://e360.yale.edu/digest/1.5-degrees-climate-change-tipping-points-2030>.

extremos, como los incendios forestales.³⁷ Más calentamiento podría someter a todas las regiones a olas de calor y sequías más frecuentes.³⁸ Los océanos se están calentando a un ritmo aún más rápido.³⁹ Las emisiones pasadas han comprometido al océano global con el calentamiento futuro a un nivel de dos a ocho veces mayor que el que se ha experimentado en los últimos 50 años.⁴⁰

35. Las acciones a corto plazo que limiten el calentamiento global a más o menos 1,5 °C para 2040, combinadas con importantes inversiones en adaptación, podrían reducir sustancialmente las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática.⁴¹ Sin embargo, ya se han producido pérdidas y daños sustanciales que inevitablemente continuarán a corto plazo.⁴² El nivel de riesgo para el clima, los ecosistemas y la vida humana que plantea el calentamiento global de 1,5 °C dependerá en parte de las tendencias concurrentes a corto plazo en el nivel de adaptación al clima.⁴³
36. A pesar de la escalada de los riesgos climáticos y de la necesidad urgente de adaptarse, el estado actual de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático es muy insuficiente. Ha habido algunas acciones significativas: las leyes y políticas de mitigación y adaptación han progresado, y⁴⁴ la tasa de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la última década se ha desacelerado en comparación con la década anterior.⁴⁵ La mayoría de los Estados que son partes del Acuerdo de París han presentado contribuciones nuevas o actualizadas determinadas al nivel nacional con objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos.⁴⁶ La aplicación plena de las contribuciones totalmente nuevas o incondicionales determinadas a nivel nacional podría conducir a una modesta reducción de las emisiones anuales de CO₂ para 2030.⁴⁷ Sin embargo, dado el historial de la mayoría de los Estados desde 1992, es muy improbable que se cumplan plenamente los compromisos. Además, los esfuerzos de mitigación y adaptación de los Estados de América Central y del Sur están entorpecidos a causa

³⁷ *Id.* párrafo B.1.3.

³⁸ *Id.* párrafo B.1.4.

³⁹ Cheng, L.J. et al., 2023: Otro año de calor récord para los océanos, *Adv. Atmos. Sci.*, 40(6), 963-9974.

⁴⁰ Grupo de Trabajo I del IPCC, *IE5: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático en 2014*, párr. B.5.1.

⁴¹ Grupo de Trabajo II del IPCC, *IE6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022*, párr. B.3.

⁴² *Id.* párrafo B.3.

⁴³ *Id.* párrafo B.3.

⁴⁴ IPCC, *Informe de síntesis del IE6: Cambio climático 2023*, párrs. A.3, A.4.

⁴⁵ *Informe sobre la brecha de emisiones 2022, PNUMA (27 de octubre de 2022)*, página 5.

⁴⁶ *Id.* página 12.

⁴⁷ *Id.* página 13.

- de muchos obstáculos, como la inestabilidad institucional, las estructuras de gobernanza débiles, el acceso inadecuado al financiamiento climático y a las tecnologías verdes, la desigualdad y la pobreza.⁴⁸
37. Los derechos humanos de las personas y las comunidades se ven afectados por las sequías (especialmente en las regiones amazónicas, andinas y del Corredor Seco);⁴⁹ pérdida de humedales;⁵⁰ retroceso de los glaciares (que provoca la erosión del suelo y la pérdida de acceso al agua);⁵¹ incendios;⁵² y la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores.⁵³ El IPCC ha observado que la emergencia climática “convertirá los riesgos existentes en la región en graves riesgos fundamentales,” como la inseguridad alimentaria, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, la inseguridad hídrica, las epidemias de enfermedades transmitidas por vectores, los cambios en los ecosistemas amazónicos y de arrecifes de coral, y los riesgos para las comunidades costeras.⁵⁴
38. El control de la emergencia climática requiere que los Estados apliquen nuevas medidas y políticas ambiciosas para frenar el cambio climático antropogénico, reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de carbono. Como se analizó en la sección VI, el camino a seguir requiere cambios sistémicos, incluida la reforma de la infraestructura energética existente en favor de las energías verdes y renovables, el inicio y la ampliación de los avances tecnológicos con cero emisiones de carbono, el apoyo a los procesos industriales con cero emisiones de carbono y la planificación de la infraestructura para reducir la demanda de viajes.⁵⁵ La acción estatal es crucial para implementar estos cambios y los Estados deben exigir a las empresas que descarbonicen sus operaciones con carácter de urgencia.

IV. LA EMERGENCIA CLIMÁTICA PERJUDICA LOS DERECHOS HUMANOS

39. Como se analizó en la sección III, la emergencia climática perjudica a toda la gama de derechos humanos. Los Estados deben respetar, proteger y cumplir de manera

⁴⁸ *Id.* página 1963.

⁴⁹ Grupo de Trabajo II del IPCC, *IE6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022*, 12.3-12.4.

⁵⁰ *Id.* 12.3, 12.5.2.

⁵¹ *Id.* páginas 12.3.2 y 12.3.7.

⁵² *Id.* 12.2, 12.3 (señalando, en 1691, que “[e]n promedio, las personas de la región [de América Central y del Sur] estuvieron más expuestas a un alto peligro de incendio entre 1 y 26 días adicionales, según la subregión, para los años 2017-2020 en comparación con 2001-2004”).

⁵³ *Id.* 12.3 (señalando, en 1691, que “[e]l potencial de reproducción para la transmisión del dengue aumentó entre un 17% y un 80% para el período 1950-1954 a 2016-2021, dependiendo de la subregión, como resultado de los cambios en la temperatura y las precipitaciones”).

⁵⁴ *Id.* página 1692.

⁵⁵ *Id.* página 16; PNUMA, *Informe sobre la brecha de emisiones 2022* (27 de octubre de 2022), páginas 39, 45, 48.

proactiva los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Estas obligaciones se deben a las personas y comunidades dentro de la jurisdicción de un Estado determinado. También se deben a personas y comunidades fuera del Estado cuando: 1) existe un nexo causal entre los actos u omisiones del Estado en cuestión y el impacto negativo en esas personas y comunidades fuera del territorio de ese Estado; y 2) el Estado de origen ejerce un control efectivo sobre las fuentes de las emisiones de que se trate.⁵⁶ Cuando los Estados no salvaguardan los derechos de las personas y las comunidades, tanto dentro como fuera de sus territorios, contra las amenazas previsibles de daños graves relacionados con el clima, deben proporcionar una reparación adecuada.⁵⁷

40. Estas obligaciones surgen independientemente de si un Estado ha contribuido significativamente a la emergencia climática a través de sus emisiones de gases de efecto invernadero.⁵⁸ Como parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos, los Estados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, aunque el grado de urgencia con que deben actuar depende en parte de sus emisiones históricas y de su condición de Estados de bajos ingresos o en desarrollo, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de sus respectivas capacidades.⁵⁹ Los Estados que son grandes emisores actuales o históricos tienen obligaciones adicionales, incluso reducciones mayores y más rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuciones sustanciales a la financiación climática para ayudar a los Estados vulnerables al clima con la mitigación y la adaptación, garantías de no repetición e indemnización por pérdidas y daños, porque sus acciones han contribuido de manera desproporcionada a los daños sufridos como resultado de la emergencia climática.
 - a. **Los principales órganos del sistema interamericano de derechos humanos han reconocido que la emergencia climática pone en peligro los derechos de la Convención**
41. En 2008, la Organización de los Estados Americanos reconoció por primera vez que los efectos adversos del cambio climático afectan negativamente al disfrute de los derechos humanos.⁶⁰ Posteriormente, la Secretaría de la Organización de los

⁵⁶ Sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados parte de la Convención, véase Medio Ambiente y Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, Corte I.D.H. (15 de noviembre de 2017), págs. 32-44. [Opinión Consultiva OC-23/17].

⁵⁷ *Billy c. Australia*, (2019) CCPR/C/135/D/3624/2019, Dictamen aprobado por el Comité en virtud del artículo 5(4) del Protocolo Facultativo relativo a la comunicación n.º 3624/2019 (22 de septiembre de 2022), párr. 8.9. [*Billy c. Australia*].

⁵⁸ Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible*, U.N. Doc. A/HRC/31/52 (1 de febrero de 2016), párr. 37 [*Informe N° 1 del Relator Especial sobre el Medio Ambiente*], citando *Budayeva c. Rusia*, (2008) App. N° 15339/02, párr. 138.

⁵⁹ Véase la sección V.b.6 infra, en la que se examina el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas de los Estados.

⁶⁰ Resolución sobre Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas adoptada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 3 de junio de 2008, AG/RES. 2429 (XXXVIIIO/08).

Estados Americanos catalogó las amenazas que representa la emergencia climática para los derechos a la vida, la libertad y los derechos económicos.⁶¹ La Secretaría identificó amenazas a los derechos de las personas en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, así como amenazas particulares a los derechos de las personas desplazadas en el Caribe y América Central.⁶² La Secretaría resaltó que todas las respuestas de los Estados a la emergencia climática deben guiarse por las obligaciones en materia de derechos humanos.⁶³

42. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con el Relator Especial de la Comisión para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, adoptó la resolución *Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos*.⁶⁴ En esta resolución, la Comisión Interamericana reconoció que “[e]l nexo entre el cambio climático y los derechos humanos es cada vez más evidente.”⁶⁵ Además, señaló “la existencia de una relación directamente proporcional entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero [...] y la frecuencia e intensidad de los cambios meteorológicos, lo que implica la amplificación de los riesgos para las sociedades, las personas y los sistemas naturales.”⁶⁶ Asimismo, la resolución restacó que “el cambio climático es una de las mayores amenazas para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el planeta.”⁶⁷

b. Los organismos de derechos humanos de la ONU han reconocido que la emergencia climática perjudica los derechos humanos

43. Desde 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado varias resoluciones en las que reconoce que la emergencia climática amenaza el disfrute de los derechos humanos, en particular de las poblaciones más vulnerables del mundo. Junto con otros relatores especiales de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre el Medio Ambiente y el Relator Especial sobre el Cambio Climático

⁶¹ Secretaría General de la OEA, *Cambio Climático: Vida, Democracia, Libertad, Justicia, Igualdad* (2022), pág. 8.

⁶² *Id.* 26-27, 29-30.

⁶³ *Id.* 7-8.

⁶⁴ *Emergencia Climática: Alcance de las Obligaciones Interamericanas en materia de Derechos Humanos*, Resolución de la Comisión Interamericana No. 3/2021, adoptada el 31 de diciembre de 2021. [Resolución de la Comisión Interamericana No. 3/2021].

⁶⁵ *Id.* 4.

⁶⁶ *Id.* 4.

⁶⁷ *Id.* 8.

han detallado los impactos específicos de la emergencia climática en una serie de derechos protegidos.⁶⁸

44. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos han afirmado consistentemente que los Estados tienen la obligación de prevenir y remediar las amenazas previsibles de daños graves resultantes de la emergencia climática.⁶⁹ Las respuestas de los Estados deben abordar tanto la falta de adopción de medidas para prevenir los daños previsibles como la falta de regulación de las actividades en curso que contribuyen a esos daños.⁷⁰ El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas identificó obligaciones relacionadas con la mitigación, la

⁶⁸ Véase, por ejemplo, Relator Especial sobre el Medio Ambiente, *Informe sobre el clima N° 1*; David Boyd, Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible: Un clima seguro, U.N. Doc. A/74/161 (15 de julio de 2019) [Relator Especial sobre el Medio Ambiente, *Informe sobre el Clima No. 2*]; Ian Fry, Promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, U.N. Doc. A/77/226 (26 de julio de 2022) [*Informe de julio de 2022 del Relator Especial sobre el Cambio Climático*]. Véase también Pedro Arrojo Agudo (Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento), *Informe temático especial sobre el cambio climático y los derechos humanos al agua y al saneamiento* (enero y marzo de 2022); Clement Nyaletsossi Voule (Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación), *El ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación como elemento esencial para promover la justicia climática*, U.N. Doc. A/76/222 (23 de julio de 2021), párrafo 90(g); Saad Alfarargi (Relator Especial sobre el derecho al desarrollo), *Acción climática a nivel nacional*, U.N. Doc. A/HRC/48/56 (2 de julio de 2021); Philip Alston (Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos), *Cambio climático y pobreza*, U.N. Doc. A/HRC/41/39 (17 de julio de 2019); Balakrishnan Rajagopal (Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto), *Hacia una transformación justa: la crisis climática y el derecho a la vivienda*, U.N. Doc. A/HRC/52/28 (23 de diciembre de 2022); Raquel Rolnik (Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto), *El derecho a una vivienda adecuada*, U.N. Doc. A/65/255 (6 de agosto de 2009); Hilal Ever (Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación), *Derecho a la alimentación*, U.N. Doc. A/70/287 (5 de agosto de 2015); Cecilia Jiménez-Damary (Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos), *Protección y asistencia a los desplazados internos*, U.N. Doc. A/66/285 (9 de agosto de 2011); Ian Fry, *Proporcionar opciones legales para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas a través de las fronteras internacionales debido al cambio climático*, U.N. Doc. A/HRC/53/34 (18 de abril de 2023); Karima Bennoune (Relatora Especial sobre la esfera de los derechos culturales), *Esfera de los derechos culturales*, U.N. Doc. A/75/298 (10 de agosto de 2020); Reem Alsalem (Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias), *Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la crisis climática, incluida la degradación ambiental y la gestión y respuesta ante el riesgo de desastres*, U.N. Doc. A/77/135 (11 de julio de 2022); Siobhan Mullally (Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños), *Abordar las dimensiones de género de la trata de personas en el contexto del cambio climático, el desplazamiento y la reducción del riesgo de desastres*, U.N. Doc. A/77/170 (15 de julio de 2022); François Crépeau (Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes), *Derechos humanos de los migrantes*, A/67/299 (13 de agosto de 2022); Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas), *Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas*, U.N. Doc. A/HRC/36/46 (1 de noviembre de 2017); Victoria Tauli-Corpuz, *Consulta regional sobre los derechos de los pueblos indígenas en Asia*, U.N. Doc. A/HRC/45/34/Add.3 (4 de septiembre de 2020).

⁶⁹ Véase Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General n.º 36 (derecho a la vida), Doc. de la ONU CCPR/C/GC/36 (3 de septiembre de 2019), párr. 62 [Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos]; *Billy c. Australia*, párrafo 8.12 (en el que se observa que el hecho de que Australia no aplicara medidas de adaptación adecuadas para contrarrestar el aumento del nivel del mar equivalía a una falta de protección contra “violaciones previsibles y graves de la vida privada y familiar y del hogar”); párrafo 8.14 (en el que se concluye que se violó el derecho a la cultura de los autores cuando los efectos “podrían haber sido razonablemente previstos por el Estado Parte”); *Sacchi c. Argentina*, CRC/C/88/D/104/2019 (2022) [Sacchi c. Argentina], párr. 10.6 (“[I]a prohibición de adoptar medidas para prevenir los daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático o de regular las actividades que contribuyen a dichos daños podría constituir una violación de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos”).

⁷⁰ Véanse *Sacchi c. Argentina*, párrafo 10.6; El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, *Declaración Conjunta sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático*, U.N. Doc. HR1/2019/1 (14 de mayo de 2020), párr. 1.

adaptación, las pérdidas y los daños, las empresas y el cambio climático, y la financiación climática.⁷¹ El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU advirtió a los Estados que deben movilizar el máximo de recursos disponibles para prevenir las previsibles violaciones de derechos humanos derivadas de la emergencia climática.⁷² No hacerlo equivale a una violación de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.⁷³

45. El Comité de Derechos Humanos de la ONU identificó la emergencia climática como “[una] de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida”.⁷⁴ En *el caso Billy c. Australia*, el Comité examinó una comunicación presentada por residentes indígenas de las Islas del Estrecho de Torres de Australia, en la que se alegaba que Australia había violado los derechos de los demandantes al no protegerlos adecuadamente de los peores efectos de la emergencia climática.⁷⁵ El Comité determinó que Australia había violado su obligación de proteger a los demandantes contra los riesgos previsibles de daños graves, lo que equivalía a violaciones de sus derechos a la vida privada y familiar y a la cultura. En *el caso Sacchi c. Argentina*, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas observó que los Estados pueden tener obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño cuando no protegen los derechos de los niños frente a amenazas graves y previsibles.⁷⁶

c. **Las leyes ambientales internacionales reconocen que la emergencia climática perjudica los derechos humanos**

46. Desde la Declaración de Estocolmo de 1972, que es uno de los documentos fundacionales del derecho ambiental internacional, se han reconocido los amplios efectos de la degradación ambiental en los derechos humanos.⁷⁷ La relación entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo está analizada con más detalle en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reafirmó que los seres humanos

⁷¹ Observación general n.º 26 (2023) sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático, Doc. de la ONU CRC/C/GC/26, [*Observación general 26 del Comité de los Derechos del Niño*], párrafos 95-115.

⁷² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Cambio Climático y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, U.N. Doc. E/C/12/2018/1* (8 de octubre de 2018).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Observación general N° 36*, párrafo 62.

⁷⁵ *Billy c. Australia*.

⁷⁶ *Sacchi vs. Argentina*.

⁷⁷ Declaración de Estocolmo, U.N. Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, 16 de junio de 1972; Resolución 2994/XXVII, 2995/XXVII y 2996 XXII de la Asamblea General de las Naciones Unidas (15 de diciembre de 1972) [*Declaración de Estocolmo*], Principio 1: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida adecuadas, en un medio ambiente de calidad que permita una vida digna y de bienestar.”

“tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza” y que “la protección del medio ambiente constituirá parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse aisladamente de él.”⁷⁸ Tanto la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como la Declaración y Programa de Acción de Viena dejan claro que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.”⁷⁹

47. El Preámbulo del Acuerdo de París establece que los Estados partes:

al adoptar medidas para hacerle frente ... deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables.⁸⁰

48. Esta cláusula tiene dos dimensiones. En primer lugar, los Estados deben considerar los derechos humanos como una razón para actuar (en materia de mitigación, adaptación y pérdidas y daños) en respuesta a la emergencia climática. En segundo lugar, los Estados deben asegurar que todas las medidas sean compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente en relación con las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación.
49. Los tribunales superiores de varios Estados parte de la Convención han reconocido que la falta de adopción de medidas efectivas en respuesta a la emergencia climática puede violar las obligaciones nacionales en materia de derechos humanos.⁸¹ Existe un estrecho vínculo entre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, las obligaciones internacionales en materia climática y las garantías nacionales y regionales de los derechos. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, por ejemplo, confirmó recientemente que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos con un estatus supremo en la ley nacional.⁸²

⁷⁸ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, Principios 1 y 4.

⁷⁹ Declaración de Río, Principio 3.

⁸⁰ Acuerdo de París, Preámbulo.

⁸¹ Véase, por ejemplo, *Tribunal Supremo de Brasil, Partido Socialista Brasileiro (PSB) y otros c. Brasil*, ADPF 708, (1 de julio de 2022); *Generaciones Futuras vs. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible*, República de Colombia Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 (5 de abril de 2018).

⁸² Tribunal Supremo de Brasil, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) y otros vs. Brasil*, ADPF 708, (1 de julio de 2022).

50. Esta Corte trató ampliamente la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente en su *Opinión Consultiva OC-23/17*, opinando que “los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos.”⁸³
- d. **La interpretación de la Convención debe guiarse por el principio de integración sistémica**
51. En su *Opinión Consultiva OC-23/17*, la Corte afirmó un enfoque de e “interpretación armónica” y “sistemática” entre diferentes cuerpos de ley relevante.⁸⁴ Al adoptar este enfoque, esta Corte confirmó que “debe tomar en consideración la normativa internacional de protección ambiental al momento de especificar el contenido y alcance de las obligaciones asumidas por los Estados bajo la Convención Americana, en particular al precisar las medidas que deben adoptar los Estados.”⁸⁵ Esto incluye tratados internacionales vinculantes, instrumentos no vinculantes y jurisprudencia relevante.⁸⁶
52. El artículo 29 de la Convención establece que la Convención no podrá interpretarse para “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido … con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o … con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados,” para “excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno,” ni para “excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. . .”⁸⁷ Por lo tanto, la referencia a los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente y los derechos humanos es pertinente y, de hecho, necesaria para interpretar y aplicar adecuadamente el texto de la Convención.
53. A la hora de armonizar e integrar estos regímenes, esta Corte se guía por el principio *pro persona*, que favorece la interpretación que ofrece más protección al individuo.⁸⁸ En *El caso de la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo*, esta Corte reconoció el principio *pro persona* para prohibir la restricción externa en los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.⁸⁹ Gran parte de nuestra comprensión de este principio se lo debemos al difunto Magistrado Antônio Cançado Trindade, quien lo desarrolló

⁸³ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 47. Véase también el análisis de la emergencia climática en los párrafos 54 y 96.

⁸⁴ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 44.

⁸⁵ *Id.* párrafo 44.

⁸⁶ *Id.* párrafo 44.

⁸⁷ Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29(b)-(d).

⁸⁸ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 42.

⁸⁹ Corte IDH, “Colegiación obligatoria a una asociación prescrita por la ley para el ejercicio del periodismo (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva (13 de noviembre de 1985), párr. 52.

durante su mandato en la magistratura de esta Corte y de la Corte Internacional de Justicia.⁹⁰

54. El enfoque de la integración sistemática es consistente con el artículo 31(3)(c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). El artículo 31(3)(c) exige que los tribunales y cortes, cuando interpretan los tratados internacionales, consideren “las normas pertinentes de derecho internacional aplicables en las relaciones entre las partes.” El conjunto de normas pertinentes incluye no sólo tratados, sino también principios y normas generales del derecho internacional consuetudinario,⁹¹ como la prevención de daños, la precaución, la no regresión y la aplicación de la mejor ciencia disponible.

e. **Derechos protegidos perjudicados por la emergencia climática**

55. La emergencia climática perjudica a todo el espectro de derechos. Como ha observado el Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático:⁹²

En todo el mundo, a las personas se les niegan sus derechos como consecuencia del cambio climático. Ello supone la negación de los derechos, entre otros, a la vida, la salud, la alimentación, el desarrollo, la libre determinación, el agua y el saneamiento, el trabajo, la vivienda adecuada y la ausencia de violencia, explotación sexual, trata y esclavitud.

56. Muchos relatores especiales de la ONU han documentado cómo la emergencia climática viola y amenaza aún más toda esta gama de derechos humanos.⁹³ En aras de la brevedad, nos centramos en el conjunto de derechos más relevantes para la Corte al responder a la Solicitud de Opinión Consultiva. Este conjunto incluye derechos protegidos por la Convención Americana, así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que han sido ratificados por todas las partes de

⁹⁰ Véase *Solicitud del ICSFT y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Ucrania contra la Federación de Rusia)*, Sep. Op. Cançado Trindade (8 de noviembre de 2019), párr. 70 (“Las convenciones de derechos humanos... ir más allá de la anticuada perspectiva interestatal, atribuyendo una posición central a las víctimas individuales, en lugar de a sus Estados”).

⁹¹ Para ejemplos de cortes y tribunales internacionales que se basan en los principios generales y el derecho internacional consuetudinario, véase *Oil Platforms (Iran v. U.S.)*, Preliminary Objections, 1996 I.C.J. 803 (12 de diciembre), ¶ 41; *Fiscal v. Anto Furundžija*, Caso No IT-95-17/1-A, Sentencia (Declaración del Juez Patrick Robinson), ¶ 283 (Int'l Crim. Trib. ffor ex Yugoslavia, 21 de julio de 2000); *Pope & Talbot Inc v. Gobierno del Canadá*, Laudo por daños y perjuicios dictado por un tribunal arbitral, Tribunal Arbitral de 2002, pág. 4, ¶ 8 (31 de mayo); Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón (asunto Camarón - Tortuga), AB - 1998-4, informe del Órgano de Apelación (12 de octubre de 1998), párrafo 158; *Al-Adsani c. Reino Unido*, 34 Eur. Ct. H.R. 11 (2002).

⁹² Véase Ian Fry (Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático), *Promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático*, U.N. Doc. A/77/226 (26 de julio de 2022), párr. 88.

⁹³ Véase en general Los informes identificados en la nota 68 *supra*.

la Convención). Nuestro enfoque no debe interpretarse en el sentido de que estos son los únicos, o los más importantes, derechos afectados por la emergencia climática. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

1. La emergencia climática perjudica el derecho a la vida, incluso sus condiciones necesarias

57. El artículo 4.1 de la Convención establece que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. En su *Opinión Consultiva OC-23/17*, esta Corte identificó el derecho a la vida como “particularmente vulnerable[] a afectaciones ambientales.”⁹⁴
58. El derecho a la vida ocupa un lugar central en la jurisprudencia de esta Corte. Esta Corte ha reconocido que de “su salvaguarda depende la realización de los demás derechos”⁹⁵ y que “en virtud de ello, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.”⁹⁶ Esto incluye tanto las obligaciones negativas (abstenerse de privar a las personas del derecho a la vida), como las obligaciones positivas de regular y proteger a sus ciudadanos contra los actos de terceros, incluso las empresas.⁹⁷ Los Estados deben “regular, supervisar o vigilar” a terceros y agentes privados.⁹⁸ Los Estados violan este deber cuando saben (o deberían saber) de un peligro real e inminente para la vida de determinadas personas o grupos; cuando no adoptan las medidas necesarias para prevenir o evitar ese peligro; y cuando existe una relación causal entre la degradación del medio ambiente y el impacto en el derecho a la vida.⁹⁹
59. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente informó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que:¹⁰⁰

El cambio climático tiene numerosos efectos directos e indirectos para el pleno disfrute del derecho a la vida. Las muertes relacionadas con el clima son causadas por fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, inundaciones, sequías, incendios forestales, enfermedades

⁹⁴ *Opinión Consultiva OC-23/17*, nota anterior 56, apartado 65.

⁹⁵ *Id.* párrafo 108. Véase también *el caso de los “niños de la calle” (Villagrán Moreals y otros) c. Guatemala. Méritos*. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144; *Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas*. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Serie C No. 338, párr. 100.

⁹⁶ *Id.* párrafo 109.

⁹⁷ *Id.* párrafos 118 y 19.

⁹⁸ *Id.* párrafos 118.19.

⁹⁹ *Id.* párrafo 120.

¹⁰⁰ *Relator Especial sobre el Medio Ambiente, Informe sobre el Clima N° 2*, párrafo 29. [no se reproducen las notas de pie de página].

transmitidas por el agua y por vectores, la malnutrición y la contaminación atmosférica. A nivel mundial, al menos 150.000 muertes prematuras anuales han estado vinculadas al cambio climático. ... La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, para 2030, el estrés térmico, la malaria, la diarrea y la malnutrición provocarán por sí solos aproximadamente 250.000 muertes anuales relacionadas con el clima. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que “en los casos más extremos, el cambio climático mata.”

60. Esta Corte ha identificado varias condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la vida. Estas condiciones incluyen el acceso a (y la calidad de) el agua, los alimentos, la salud y un nivel adecuado de protección del medio ambiente.¹⁰¹ Estas condiciones necesarias son en sí mismas derechos protegidos. Como se comenta a continuación, todas estas condiciones se ven amenazadas por la emergencia climática. Esta Corte ha determinado que los Estados deben “abstenerse de (i) cualquier práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso, en condiciones de igualdad, a los requisitos para una vida digna”; y no deben “contaminar ilícitamente el medio ambiente de forma que se afecte las condiciones que permiten la vida digna de las personas.”¹⁰²
61. El artículo 4 de la Convención corresponde al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha llegado a muchas de las mismas conclusiones sobre el contenido del derecho a la vida que las alcanzadas por esta Corte en la *Opinión Consultiva OC-23/17*. Sostuvo que este derecho “[e]s el derecho a no ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna.”¹⁰³ El Comité continuó: “La obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la vida resulta extensible a los supuestos razonablemente previsibles de amenazas y situaciones de peligro para la vida que puedan ocasionar muertes. Los Estados partes pueden haber incurrido en una violación del artículo 6, incluso si esas amenazas y situaciones no dan lugar a la pérdida de vidas.”¹⁰⁴ Por lo tanto, los Estados tienen el “deber de adoptar medidas positivas,” incluidas las obligaciones de diligencia debida antes de que el derecho se vea amenazado.¹⁰⁵ El

¹⁰¹ *Id.* párrafos 109 a 11; véase también *Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas*. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 163-67; *Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas*. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 156-78.

¹⁰² *Relator Especial sobre el Medio Ambiente, Informe sobre el clima N° 2*, párrafo 117.

¹⁰³ *Observación general N° 36*, párrafo 3.

¹⁰⁴ *Observación general N° 36*, párrafo 7.

¹⁰⁵ *Observación general N° 36*, párrafo 21.

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha llegado a conclusiones similares.¹⁰⁶

62. En el caso *Billy c. Australia*, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aplicó estos principios en el contexto de la emergencia climática. Concretamente, el Comité examinó si el hecho de que Australia no protegiera a los reclamantes del aumento del nivel del mar equivalía a una violación de las obligaciones contraídas por Australia en virtud del artículo 6. El Comité llegó a la conclusión de que, sobre la base de los hechos del caso, Australia no había violado el derecho a la vida de los autores. Ello se debió a que los efectos devastadores del aumento del nivel del mar aún no habían expuesto a los autores “a una situación de peligro físico o precariedad extrema que pudiera amenazar su derecho a la vida, incluido su derecho a vivir con dignidad.”¹⁰⁷ Sin embargo, el Comité observó que en los próximos 10 a 15 años, si los Estados no adoptan medidas activas de mitigación y adaptación, “los efectos del cambio climático pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos en virtud del artículo 6.”¹⁰⁸ Esta violación es particularmente probable cuando un país entero, como un pequeño Estado insular en desarrollo, corre el riesgo de quedar sumergido.¹⁰⁹ Aunque el Comité de Derechos Humanos en el caso *Billy c. Australia* no encontró una violación del derecho a la vida, el razonamiento del Comité indicaba claramente que la emergencia climática podría violar el derecho a la vida.

2. La emergencia climática perjudica los derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento

63. Esta Corte ha determinado que los derechos a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento son “condiciones que garanticen una vida digna” y, por lo tanto, están protegidos por el artículo 4 de la Convención.¹¹⁰ Además, en virtud del artículo 26 de la Convención, los Estados tienen la obligación de perseguir los objetivos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, incluidos la alimentación y la nutrición, mediante la realización progresiva.¹¹¹ Los derechos a la alimentación y a la salud también están protegidos por el Protocolo de San

¹⁰⁶ *Observación general N° 26 del Comité de los Derechos del Niño*, párrafos 20 a 25.

¹⁰⁷ *Billy c. Australia*, párrafo 8.6. Sin embargo, véase *Billy c. Australia*, anexo III (Arif Bulkan, Marcia V. J. Kran y Vasilka Sancin (parcialmente disidente)) (“A pesar de las múltiples solicitudes y del conocimiento de las repercusiones que se siguen teniendo en la vida de los autores, el Estado Parte no adoptó medidas de adaptación a su debido tiempo. En consecuencia, constatamos que el Estado Parte violó el derecho a la vida de los autores consagrado en el artículo 6 del Pacto, además de las violaciones constatadas por la mayoría”).

¹⁰⁸ *Id.* párrafo 8.7.

¹⁰⁹ *Id.* párrafo 8.7.

¹¹⁰ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 109; véanse también *Yakye Axa*, párrafo 167; *Sawhoyamaxa*, párrafos 156-78.

¹¹¹ Carta de la Organización de los Estados Americanos (27 de febrero de 1967), Art. 34(j).

Salvador, ratificado por 16 Estados Partes en la Convención.¹¹² Estos derechos, a su vez, dependen del mantenimiento de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.¹¹³ Si bien estos derechos pueden ejercerse progresivamente, también contienen un núcleo mínimo de obligaciones inmediatas.¹¹⁴ Esto incluye las obligaciones de igualdad y no discriminación.

64. La emergencia climática implica cada uno de esos cuatro derechos.
65. En primer lugar, la realización del derecho a la salud depende de la existencia de un entorno natural propicio, incluso un sistema climático seguro.¹¹⁵ Esta relación se refleja en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige a los Estados, como parte de su obligación de proteger el derecho a la salud, que adopten medidas para “el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.”¹¹⁶
66. Como ha informado el Relator Especial sobre el Medio Ambiente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la emergencia climática amenaza el derecho a la salud de muchas maneras:¹¹⁷

Los efectos perjudiciales del cambio climático no solo incluyen las muertes prematuras, sino también el aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, la malnutrición, el retraso del crecimiento, la emaciación, alergias, insolación, lesiones, enfermedades transmitidas por el agua y transmitidas por vectores y enfermedades mentales. El dengue es la enfermedad transmitida por vectores que más rápido se está propagando, ya que su incidencia mundial se ha triplicado debido principalmente al cambio climático. Cientos de millones de personas están expuestas anualmente a fenómenos meteorológicos extremos, lo que da lugar a lesiones y enfermedades y afecta a la salud mental. El cambio climático también erosiona muchos de los principales determinantes sociales y ambientales de la salud, como el acceso a una alimentación adecuada, agua potable, aire limpio, la

¹¹²Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Protocolo de San Salvador, arts. 10 y 12.

¹¹³ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párrs. 66, 110-11. Véanse también la *Observación general N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, párrafos 7 y 8; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observación General N° 15 (el derecho al agua)*, Doc. de la ONU E/C.12/2002/11 (20 de enero de 2003) [Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales], párrs. 10-12.

¹¹⁴ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 111.

¹¹⁵ *Id.* párrafo 66.

¹¹⁶ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12(2)(b).

¹¹⁷ *Relator Especial sobre el Medio Ambiente, Informe sobre el clima N° 2*, párrafos 31 y 32 [no se reproducen las notas de pie de página].

cultura y medios de vida. La salud también se ve afectada por los desplazamientos relacionados con el clima, la migración y el acceso limitado a los servicios de atención de la salud.

67. En segundo lugar, el derecho a la alimentación está protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En virtud de ese Pacto, los Estados deben adoptar medidas positivas para salvaguardar el acceso de las personas a los alimentos y la nutrición.¹¹⁸ Varios órganos de tratados de la ONU han reconocido la dimensión ambiental del derecho a la alimentación desde al menos 1997.¹¹⁹ Más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que la emergencia climática amenaza el derecho a la alimentación.¹²⁰
68. El Relator Especial de la ONU sobre el Medio Ambiente ha resumido el impacto de la emergencia climática en el derecho a la alimentación en los siguientes términos:¹²¹

La producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el disfrute del derecho a la alimentación se ven afectados por los cambios en los regímenes de precipitaciones, el aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos, los cambios en las condiciones de hielo marino, las sequías, las inundaciones, la floración de algas y la salinización. Los cambios en el clima ya están socavando la producción de cultivos importantes, como el trigo, el arroz y el maíz. Sin adaptación, o con una adaptación insuficiente, se prevé que la situación empeore a medida que las temperaturas aumenten y sean cada vez más extremas. En el océano, los cambios de temperatura, la decoloración de los arrecifes de coral y la acidificación están afectando a la pesca. El cambio climático también exacerba las causas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, como los conflictos y la pobreza.

69. En tercer lugar, esta Corte ha reconocido que los derechos al agua y al saneamiento son “particularmente vulnerables a afectaciones ambientales.”¹²² Esto incluye las amenazas derivadas de los cambios en los patrones de precipitación, las sequías, las inundaciones, la desglaciación, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, así como las amenazas a los acuíferos subterráneos, los humedales y

¹¹⁸ *Observación general N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, párrafo 6.

¹¹⁹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observaciones finales sobre la Federación de Rusia*, Doc. de la ONU E/C.12/Add.13 (20 de mayo de 1997), párrafos 24 y 38.

¹²⁰ Consejo de Derechos Humanos, *Resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2019*, U.N. Doc. A/HRC/RES/40/7 (21 de marzo de 2019).

¹²¹ *Relator Especial sobre el Medio Ambiente, Informe sobre el clima N° 2*, párrafos 33 a 36.

¹²² *Opinión Consultiva OC-23/17*, pár. 66; véase también la *Observación general N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, párrafos 10 a 12.

los ecosistemas ribereños.¹²³ Refiriéndose específicamente a América del Sur y Central, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre agua potable y saneamiento ha observado “la vulnerabilidad de una alta proporción de la población en un contexto general de aumento de ríos y acuíferos, deforestación y crecientes riesgos de sequías e inundaciones.”¹²⁴ El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente ha observado:¹²⁵

El cambio climático está afectando a los regímenes de precipitaciones de todo el mundo, de modo que algunas zonas áridas reciben menos precipitaciones y las zonas húmedas reciben precipitaciones con mayor frecuencia e intensidad. Los cuatro elementos fundamentales de los derechos al agua y el saneamiento están en riesgo: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtió de una vulnerabilidad especialmente alta al estrés hídrico en los pequeños Estados insulares en desarrollo y en algunas partes de África, Asia y América Latina. El cambio climático ya ha contribuido a la crisis del agua en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde los glaciares están retrocediendo y en las grandes ciudades ha sido necesario racionar el agua. ... El derecho al saneamiento podría verse amenazado debido a que el agua es cada vez más escasa y a que las inundaciones, las precipitaciones intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos dañan la infraestructura u obstaculizan el acceso. El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como la fiebre tifoidea y el cólera.

3. La emergencia climática perjudica el derecho a un medio ambiente saludable

70. Esta Corte ha reconocido el derecho autónomo a un medio ambiente saludable. El derecho está reconocido explícitamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la Convención ha servido de conducto para la aplicación de ese derecho bajo el sistema de peticiones individuales a la Corte. El tratamiento de la Corte al desarrollo de este derecho es coherente tanto con el método de la integración sistémica como con el reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.¹²⁶

¹²³ Pedro Arrojo Agudo, *Informe temático especial sobre el cambio climático y los derechos humanos al agua y al saneamiento del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento* (enero de 2022).

¹²⁴ *Id.* párrafo 57.

¹²⁵ *Relator Especial sobre el Medio Ambiente, Informe sobre el clima N° 2*, párrafos 38 y 39.

¹²⁶ *Id.* párrafo 57.

71. A nivel internacional, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (“derecho a un medio ambiente saludable”) ha sido reconocido en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General.¹²⁷ Ningún Estado votó en contra de ninguna de esas resoluciones.
72. El derecho a un medio ambiente saludable está reconocido extensamente a través de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. El artículo 24 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce el derecho de todos los pueblos a “un medio ambiente satisfactorio favorable a su desarrollo.”¹²⁸ El derecho también está reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,¹²⁹ la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN,¹³⁰ y la Carta Árabe de Derechos Humanos.¹³¹ El derecho está reconocido en constituciones, legislación, sentencias judiciales u obligaciones de tratados en al menos 161 Estados Miembros de la ONU.¹³²
73. Como esta Corte ha reconocido, el derecho tiene “tanto connotaciones individuales como colectivas.”¹³³ Además, el derecho no solo beneficia a los humanos, sino también a componentes del medio ambiente natural “como intereses jurídicos por sí mismos, incluso sin que haya certeza o indicios de riesgo a las personas.”¹³⁴
74. Como se analiza en la sección V.b.4 más adelante, el derecho también incluye tres elementos procesales en el contexto del medio ambiente: (a) el derecho a la información; (b) el derecho a participar en la toma de decisiones; y (c) el acceso a la justicia y a recursos efectivos.
75. Los elementos substantivos del derecho a un medio ambiente saludable incluyen un clima saludable, un aire limpio, suficiente agua potable, una sanidad adecuada,

¹²⁷ Consejo de Derechos Humanos, “El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, Doc. de la ONU A/HRC/RES/48/13 (18 de octubre de 2021); Asamblea General, “El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, Doc. de la ONU A/76/300 (18 de julio de 2022).

¹²⁸ Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Art. 24.

¹²⁹ Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 19.

¹³⁰ Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN, Art. 28(f).

¹³¹ Carta Árabe de Derechos Humanos, Art. 38.

¹³² David Boyd, *Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible*, Doc. de la ONU A/HRC/43/53 (8 de enero de 2019). Naciones que han reconocido el derecho por ley desde 2020 incluyen Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Granada y Santa Lucía. Véase también el reconocimiento reciente en la Observación general 26 del Comité de los Derechos del Niño.

¹³³ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 59.

¹³⁴ *Id.* Párr. 62.

comida saludable producida de manera sostenible, un medio ambiente no tóxico en el que vivir, trabajar, estudiar y jugar, y biodiversidad y ecosistemas saludables.¹³⁵

76. Todos estos elementos dependen de un sistema climático estable. El no tomar medidas adecuadas de mitigación y adaptación puede constituir una vulneración del derecho a un medio ambiente saludable.¹³⁶ Esta conclusión está respaldada por jurisprudencia de cortes nacionales y de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas.¹³⁷

4. La emergencia climática perjudica los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo su derecho a la propiedad

77. Como se analiza al detalle en la sección III anterior, la emergencia climática amenaza todas las regiones del mundo, pero afecta de manera desproporcionada a ciertas comunidades y poblaciones que viven en áreas más propensas a los impactos del cambio climático. La Solicitud de Opinión Consultiva solicita explícitamente a esta Corte que exprese las obligaciones de los Estados hacia las comunidades y poblaciones que son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, como los niños (sección IV.C) y los Pueblos Indígenas (sección IV.E). Mucha de la jurisprudencia de esta Corte sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y otras poblaciones está derivada del derecho a la propiedad Indígena y tribal. Esta sección expone la jurisprudencia pertinente de la Corte. La sección V más adelante analiza las obligaciones específicas que los Estados deben a las poblaciones y comunidades más vulnerables frente a la emergencia climática.
78. Esta Corte ha reconocido desde hace mucho tiempo que los derechos humanos de los Pueblos Indígenas son especialmente vulnerables a la degradación medio ambiental. Estas amenazas crean obligaciones acrecentadas, incluyendo “medidas positivas encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una vida digna – que comprende la protección de la estrecha relación que mantienen con la tierra – y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual como colectiva.”¹³⁸ Como esta Corte ha explicado, la vulnerabilidad de las comunidades Indígenas está derivada no solo de la “especial relación espiritual y cultural con sus

¹³⁵ David Boyd (Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible), *Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible*, Doc. de la ONU A/74/161 (15 de julio de 2019). Véase también *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 60.

¹³⁶ *Id.* párr. 44.

¹³⁷ Véase, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia de Colombia, *Demand Generaciones Futuras vs. Minambiente*, sentencia del 5 de abril de 2018; Corte Suprema de Lahore, *Leghari vs. Federation of Pakistan*, W.P. No. 25501/201, sentencia del 4 de abril de 2015; Tribunal Federal Supremo de Brasil, *PSB et al. vs. Brazil*, sentencia del 1 de julio de 2022; Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, *Consulta nacional sobre el informe del cambio climático*, Caso no. CHR-NI-2016-0001 (mayo de 2022); *Held v Montana*, No. CV 22-137, 2023 WL 1997864 (D. Mont. 14 de agosto de 2023); Tribunal Supremo del Estado de Hawaï'i, *In the matter of Hawai'i Electric Light Company*, SCOT—22—0000418, sentencia del 13 de marzo de 2023.

¹³⁸ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 48, citando *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas*. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 163; *Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párrs. 181.

territorios ancestrales, sino también en razón de su dependencia económica de los recursos ambientales.”¹³⁹ Asimismo, en el 2020 esta Corte determinó que el derecho a un medio ambiente saludable de los Pueblos Indígenas fue vulnerado por las actividades no reguladas de los colonos (que criaban ganado e instalaban alambrados) que afectaron a los métodos tradicionales de obtener comida de las comunidades Indígenas. La Corte ordenó a Argentina, que tenía conocimiento de estas actividades, que regularizase con prontitud la titularidad de las tierras de los Pueblos Indígenas; que retirase el ganado y los alambrados; y que facilitase el acceso de los Pueblos Indígenas a comida nutritiva y culturalmente aceptable.¹⁴⁰

79. Los Pueblos Indígenas tienen derecho al respeto, protección y cumplimiento de todos sus derechos bajo la Convención. Esta dimensión colectiva o comunitaria de los derechos bajo la Convención de los Pueblos Indígenas fue reconocida por esta Corte en el caso *Awas Tingni vs. Nicaragua*, en el que la Corte determinó que el derecho a la propiedad protege las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas.¹⁴¹ En *Saramaka* y otros casos esta Corte ha desarrollado aún más los derechos de propiedad de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, incluyendo protecciones para asegurar su supervivencia como el derecho al consentimiento previo, libre y fundamentado.¹⁴²
80. Esta Corte ha resaltado repetidamente que grupos Indígenas potencialmente afectados deben ser consultados de buena fe. En *Saramaka*, la Corte determinó que los Estados deben actuar para asegurar y proteger los derechos de los pueblos Indígenas y Tribales a participar efectivamente en los procesos de consulta. La participación efectiva requiere que los Estados se aseguren de que los pueblos afectados “tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten [la actividad] propuest[a] con conocimiento y de forma voluntaria.”¹⁴³ Los Estados también deben “consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones”¹⁴⁴ y, para eso, “tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones.”¹⁴⁵

¹³⁹ *Opinión Consultiva OC-23/17*, n. 121.

¹⁴⁰ Caso *Comunidades Indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina*, sentencia del 6 de febrero de 2020 (Fondo, reparaciones y costas), Inter-Am. Ct. H.R. Serie C No. 400, párr. 248.

¹⁴¹ Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) *Awas Tingni Vs. Nicaragua* (Fondo, reparaciones y costas), IACRH Serie C No 79, [2001] IACRH 9, IHRL 1462 (IACRH 2001), (31 de agosto de 2001).

¹⁴² Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Inter-Am. Ct. H.R. Serie C No. 172, párr. 92.

¹⁴³ *Id.* párr. 133.

¹⁴⁴ *Id.*

¹⁴⁵ *Id.*

81. Asimismo, *Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam* trató sobre los esfuerzos de los Pueblos Kaliña y Lokono para obtener información de los gobiernos locales que podría haber apoyado sus reclamaciones de que sus derechos de propiedad estaban siendo afectados por medidas propuestas. Esta Corte determinó que “la ausencia de entrega de la información en manos de la oficina de registros públicos de Surinam, o la falta de fundamentación de la negativa de la misma,” constituyó una violación tanto del derecho a la información bajo el artículo 13 de la Convención Americana como del derecho a la protección judicial bajo el artículo 25.¹⁴⁶
82. Adicionalmente, esta Corte ha declarado a Estados responsables de violaciones de derechos de propiedad de pueblos Indígenas a través de la explotación indebida de recursos naturales en sus territorios. Por ejemplo, en *Comunidad Indígena Yakyé Axa vs. Paraguay*¹⁴⁷ esta Corte determinó que Paraguay no había protegido los derechos de propiedad ancestrales de la Comunidad Indígena Yakyé Axa, y que Paraguay debería tomar medidas afirmativas para proteger los recursos naturales del territorio reconocido de esa comunidad.

5. La emergencia climática perjudica el derecho a la libre determinación

83. Las amenazas a los derechos humanos pueden intensificarse debido a la ubicación geográfica. Ciertas regiones de las Américas y del Caribe están, y estarán, expuestas a efectos acrecentados de la emergencia climática. Las personas que son miembros de grupos vulnerables y residen en estas regiones sufren, y continuarán sufriendo, formas de vulnerabilidad agudizadas y entrelazadas.
84. En concreto, la emergencia climática presenta un riesgo existencial para los derechos de los que viven en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, incluyendo en la región del Caribe. Esta Corte ha reconocido que “las comunidades costeñas y de islas pequeñas … corren un peligro especial” de tener sus derechos amenazados por la degradación medio ambiental.¹⁴⁸
85. Como ha indicado la Comisión Interamericana, el aumento del nivel del mar y los cambios en los patrones de lluvias amenazan a los residentes de estos Estados con “inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte.”¹⁴⁹ La Comisión también mencionó riesgos particulares para los que viven en América Central, donde la emergencia climática probablemente intensifique riesgos

¹⁴⁶ Caso *Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam*. (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia del 25 de noviembre de 2015. Inter-Am. Ct. H.R. Serie C No. 309, párr. 213-226.

¹⁴⁷ Caso *Comunidad Indígena Yakyé Axa vs. Paraguay*. (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia del 6 de febrero de 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Serie C No. 125.

¹⁴⁸ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 67.

¹⁴⁹ *Resolución 3/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, página 6.

generados por las tormentas tropicales y los huracanes, así como las sequías de la región del Corredor Seco.¹⁵⁰

86. El aumento del nivel del mar crea preocupaciones novedosas sobre el derecho a la libre determinación de estos Estados, especialmente los de baja altitud y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, a los que el aumento del nivel del mar crea un riesgo existencial.¹⁵¹ El aumento del nivel del mar y la inundación de zonas costeras e islas tendrá consecuencias en la soberanía e independencia de esos Estados, el derecho del mar basado en las zonas marítimas que se extienden desde sus territorios y la protección de las personas afectadas por el aumento del nivel del mar.¹⁵²
87. La libre determinación es un derecho fundamental. Está reconocida en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 5 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Incluye el derecho del pueblo de no ser privado de sus propios medios de autosuficiencia.¹⁵³

88. Este derecho está amenazado por la emergencia climática. Como ha indicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Aunque el derecho a la libre determinación es un derecho colectivo del que son titulares los pueblos y no los individuos, su realización es una condición esencial para el disfrute efectivo de los derechos humanos individuales. El cambio climático no solo supone una amenaza para la vida de las personas, sino también para su forma de vida y medios de subsistencia, y para la supervivencia de pueblos enteros.¹⁵⁴

89. El derecho requiere que los Estados promuevan el cumplimiento de la libre determinación, incluyendo para grupos y Estados dentro de sus propios

¹⁵⁰ *Id.* página 7.

¹⁵¹ *Informe del Grupo de Estudio sobre la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional*, Doc. de la ONU A/CN.4/L.972 (15 de julio de 2022), párr. 10.

¹⁵² *Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 70º período de sesiones*, Doc. de la ONU A/73/10 (30 de abril – 1 de junio & 2 de julio – 10 de agosto de 2018), párr. 12.

¹⁵³ Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 12, Art. 1 (Derecho de libre determinación), Derecho de libre determinación (13 de marzo de 1984), párr. 6.

¹⁵⁴ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Preguntas frecuentes sobre los derechos humanos y el cambio climático*, Folleto informativo no. 38 (2021) página 5; https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/FSheet38_FAQ_HR_CC_SP.pdf. Véase también Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos*, Doc. de la ONU A/HRC/10/61 (15 de enero de 2009), párrs. 39-41.

- territorios.¹⁵⁵ Como esta Corte ha reconocido, el derecho a la libre determinación involucra especialmente los derechos de los Pueblos Indígenas.¹⁵⁶
90. La comunidad internacional reconoce que hay una fuerte presunción de la persistencia de los Estados. La conclusión de que el aumento catastrófico del nivel del mar podría llevar a la extinción de algún Estado, en vez de a la persistencia de estos Estados en la medida de lo posible, debería ser desfavorecida.¹⁵⁷
 91. Es esencial la preservación del derecho de libre determinación de las poblaciones de Estados que acaben sumergidos completamente bajo el mar o de otra manera inhabitables debido al aumento del nivel del mar. El mantenimiento de su independencia y la implementación de procesos adicionales para permitir que poblaciones desplazadas y afectadas expresen sus voluntades e identidades será clave para apoyar el derecho de libre determinación de esas poblaciones.¹⁵⁸
 92. El derecho de libre determinación es esencial para el disfrute efectivo de otros derechos humanos. Como es improbable que las comunidades desplazadas puedan trasladarse junto con sus instituciones en funcionamiento, los Estados de acogida deberían tener atención específica para asegurarse de que los derechos de estas comunidades son respetados.¹⁵⁹
 93. Asimismo, el derecho de libre determinación de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo debería ser respetado por todos los Estados. Los Estados deberán evitar acciones que previsiblemente causen violaciones graves de este derecho. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha determinado que “los Estados tienen el deber de actuar, a título individual y solidario, para atajar y evitar las amenazas al derecho a la libre determinación mediante la mitigación del cambio climático.”¹⁶⁰
 94. Por último, la emergencia climática causa el desplazamiento de personas dentro de y entre países. Esta Corte ha reconocido que el derecho de no ser desplazado forzadamente es “particularmente vulnerable[] a afectaciones ambientales.”¹⁶¹ Los efectos de desplazamiento de la emergencia climática han sido reconocidos por la

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam* (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Inter-Am. Ct. H.R. Serie C No. 172, párr. 93.

¹⁵⁷ Véase, por ejemplo, Patrícia Galvão Teles & Juan José Ruda Santolaria, *La elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional: segundo documento temático*, Doc. de la ONU A/CN.4/752, párr. 30.

¹⁵⁸ *Id.* párrafo 226.

¹⁵⁹ *Id.* párrafo 252.

¹⁶⁰ *Preguntas frecuentes sobre los derechos humanos y el cambio climático*, at page 6.

¹⁶¹ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 66. Véase también *Protocolo de San Salvador*, preámbulo; *Opinión Consultiva OC-23/17*, párrs. 47-55; *Declaración de Rio*, principio 1.

Conferencia de las Partes de la CMNUCC.¹⁶² En 2015, la Conferencia de las Partes nombró un equipo de tareas sobre el desplazamiento.¹⁶³

95. Los Estados deberían respetar los derechos tanto de las personas desplazadas internamente como de las personas forzadas a emigrar a través de las fronteras de los Estados. Los Estados deberían garantizar que las personas obligadas a emigrar puedan disfrutar de sus derechos humanos fundamentales durante su viaje y a la llegada a los países de acogida.¹⁶⁴ Estos derechos incluyen “el suministro de alimentos y agua limpia; el acceso a una vivienda adecuada, la atención sanitaria y la seguridad social, la educación y oportunidades de trabajo decente; y el respeto de los principios de no devolución y prohibición de la expulsión colectiva, así como de los derechos a la libertad, la integridad personal y la unidad familiar.”¹⁶⁵

6. La emergencia climática perjudica el derecho a la vivienda, la vida privada y la vida familiar

96. El artículo 11 de la Convención protege el derecho a la vida privada. Esta Corte ha reconocido que el derecho a la vida privada es “particularmente vulnerable[] a afectaciones ambientales.”¹⁶⁶
97. El artículo 11 de la Convención está basado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado que el derecho del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea obligaciones de los Estados en el contexto de la emergencia climática, especialmente cuando las violaciones del derecho son previsibles y graves. En *Billy vs. Australia*, el Comité determinó que extensas construcciones de diques en Australia fueron insuficientes para cumplir con estas

¹⁶² Véase, por ejemplo, CMNUCC, Tercer plan de acción del equipo de tareas sobre el desplazamiento para 2022-2024.

¹⁶³ *Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 21er período de sesiones, celebrado en París del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2015*, Doc. de la ONU FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21 (Aprobación del Acuerdo de París), párr. 49: “Pide también al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia que, de conformidad con sus procedimientos y su mandato, establezca un equipo de tareas que sea un complemento a los órganos y grupos de expertos existentes en el marco de la Convención, incluidos el Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados, así como a las organizaciones y demás expertos competentes que operan al margen de la Convención, aproveche sus trabajos y recabe su participación, según el caso, con el fin de elaborar recomendaciones sobre enfoques integrados que permitan evitar, reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio climático;”

¹⁶⁴ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Declaración Universal de los Derechos Humanos; véase también ACNUDH, *Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales*, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf; ACNUDH, *Mensajes clave sobre los derechos humanos, el cambio climático y la migración*, párr. 1: “Los Estados tienen la obligación afirmativa de adoptar medidas preventivas y correctivas para defender los derechos de los migrantes y hacer frente a las vulneraciones y los abusos de dichos derechos en todas las etapas de la migración.” https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/Key_Messages_HR_CC_Migration.pdf. [Mensajes claves sobre los derechos humanos de ACNUDH].

¹⁶⁵ Mensajes claves sobre los derechos humanos de ACNUDH, párr. 1.

¹⁶⁶ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 66.

obligaciones. Los diques en cuestión no evitarían una gama de violaciones del derecho a la vida privada, incluyendo la reducción del acceso a la comida; las inundaciones de pueblos y lugares de sepultura; la salinización de jardines tradicionales; la reducción de especies nutricional y culturalmente importantes; el blanqueamiento de los corales; y la acidificación de los océanos.¹⁶⁷ Dichos impactos eran tanto previsibles como graves en vista de “su intensidad o duración y los daños a la salud física o mental que pueden occasionar.”¹⁶⁸

98. El artículo 11 coincide estrechamente con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.¹⁶⁹ El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido desde hace mucho tiempo que el artículo 8 está involucrado cuando una persona está directa y gravemente afectada por condiciones medioambientales (como la contaminación del aire o el agua) inseguras o desestabilizadoras.¹⁷⁰ Cada Estado es responsable de los daños causados directamente por ese Estado o por entidades privadas que ese Estado no ha regulado.
99. Los máximos tribunales de Estados Miembros de la Unión Europea también han determinado que las medidas Estatales sobre la emergencia climática podrían violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en *State of the Netherlands vs. Urgenda Foundation*, el Tribunal Supremo de los Países Bajos afirmó que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos requiere que los Estados ricos reduzcan sus emisiones de carbono rápidamente para evitar violaciones del derecho a la vida privada y familiar y a la vivienda causadas por la emergencia climática.¹⁷¹
100. En resumen, el artículo 11 requiere que los Estados protejan a las personas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, de interferencias graves y predecibles con sus vidas privadas. Sin ninguna duda es pertinente para la emergencia climática.

V. OBLIGACIONES ESTATALES EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

101. Nuestro análisis de las obligaciones Estatales se centra principalmente en las obligaciones de los Estados parte de la Convención. Sin embargo, esta Corte ha reconocido con anterioridad que su función consultiva “involucra no sólo a los Estados Partes de la Convención Americana,” sino que una opinión consultiva “también tendrá relevancia jurídica para todos los Estados Miembros de la OEA,

¹⁶⁷ *Billy vs. Australia*, párr. 8.12.

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.

¹⁷⁰ Véase, por ejemplo, *Cordella vs. Italy*, ECtHR App Nos. 54414/13 y 54264/15 (24 de enero de 2019); *Çiçek vs. Turkey*, ECtHR App No. 44837/07 (14 de septiembre de 2007); *Fadeyeva vs. Russia*, ECtHR App. No. 55723/00 (9 de junio de 2005).

¹⁷¹ *Urgenda Foundation vs. State of the Netherlands*, ECLI:NL:HR:2019:2007, sentencia, Tribunal Supremo de los Países Bajos (20 de diciembre de 2019) en 5.6.2, 5.8.

así como para los órganos de la OEA cuya esfera de competencia se refiera al tema de la consulta.”¹⁷² Además, en *Opinión Consultiva OC-23/17*, al evaluar el alcance del artículo 1(1) de la Convención en respuesta a una solicitud de opinión consultiva, esta Corte determinó que no debería limitar su respuesta a los países específicos dado que las obligaciones medioambientales pueden ser “de importancia para todos los Estados del planeta.”¹⁷³ Por consiguiente, aunque dirigimos nuestro análisis a los Estados parte de la Convención, afirmamos respetuosamente que este análisis también es relevante para las obligaciones de todos los Estados Miembros de la OEA sobre la emergencia climática.

a. Principios rectores

102. Antes de analizar las obligaciones sobre derechos humanos de los Estados in el contexto de la emergencia climática, primero evaluamos los principios que son relevantes en la determinación del ámbito y contenido de esas obligaciones. Estos principios son intersectoriales y orientan las obligaciones establecidas en la Convención. La presentación de estos principios se basa en el texto de la Convención, la jurisprudencia de esta Corte, el derecho internacional sobre los derechos humanos, el derecho internacional sobre el medio ambiente y tratados sobre el clima. Este método de interpretación está justificado por los principios de integración sistemática expuestos en la sección IV.d anterior.

1. Cooperación internacional

103. Los desafíos medioambientales globales como la emergencia climática solo se pueden abordar efectivamente a través de la cooperación entre Estados a niveles bilaterales, regionales y globales. La CMNUCC menciona que “la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada.”¹⁷⁴
104. El deber de cooperación incorpora tres obligaciones relacionadas. Primero, los Estados deberían notificar a Estados potencialmente afectados de cualquier daño medio ambiental importante que podría derivar de actividades llevadas a cabo bajo su jurisdicción.¹⁷⁵
105. Segundo, los Estados tienen el deber de consultar y negociar con Estados potencialmente afectados. Esta consulta y negociación debería realizarse de buena

¹⁷² *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 30, citando *Opinión Consultiva OC-18/03*, párr. 60; *Opinión Consultiva OC-22/16*, párr. 25.

¹⁷³ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 35: “Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena.”

¹⁷⁴ UNFCCC, Preamble.

¹⁷⁵ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 187.

fe. Esta Corte ha indicado que la consulta debe “involucrar la voluntad mutua de los Estados de discutir seriamente los riesgos ambientales actuales y potenciales”.¹⁷⁶ Los Estados deberían evitar llevar a cabo actividades propuestas con efectos medioambientales perjudiciales hasta que la consulta y negociación hayan concluido.¹⁷⁷ En el contexto de emisiones de gases de efecto invernadero, el deber de cooperación requiere negociaciones multilaterales continuadas y acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para fortalecer las capacidades técnicas, científicas, financieras y adaptativas. Esa cooperación podría requerir el desarrollo conjunto de iniciativas de mitigación y adaptación.

106. Tercero, los Estados se deben unos a otros el deber de intercambiar información sobre los riesgos de daños transfronterizos.¹⁷⁸ En el contexto de la emergencia climática, esto incluye el deber de compartir la mejor ciencia y tecnología disponible para ayudar a otros países en el desarrollo e implementación de respuestas políticas de mitigación y adaptación.
107. Fundamentalmente, la cooperación internacional es crucial para la mitigación y adaptación del clima. El Proyecto de Pacto Internacional sobre el Derecho al Desarrollo reconoce la función central que la cooperación entre Estados debería desempeñar para asegurar el “disfrute pleno, equitativo y significativo del derecho al desarrollo por todas las personas y todos los pueblos del mundo.”¹⁷⁹ El proyecto del artículo 13, titulado “Deber de cooperar,” establece que:

4. Los Estados partes reconocen su deber de cooperar para crear un orden social e internacional que propicie la realización del derecho al desarrollo mediante, entre otras, las siguientes acciones:

[. . .]

(h) Mejorar las medidas de mitigación y la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos, haciendo frente a los efectos económicos, sociales y ambientales del cambio climático, teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa, la equidad y los principios de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las circunstancias nacionales, y mejorando el acceso a la financiación climática internacional, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad para apoyar las medidas de mitigación y adaptación en

¹⁷⁶ *Id.* párr. 205.

¹⁷⁷ *Id.*

¹⁷⁸ *Id.* párrs. 206-208.

¹⁷⁹ Informe del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, Zamir Akram, Proyecto de pacto internacional sobre el derecho al desarrollo, Doc. de la ONU A/HRC/54/50 (18 de julio de 2023), Art. 1.

los países en desarrollo y menos adelantados, sobre todo aquellos que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.¹⁸⁰

108. El Relator Especial sobre el derecho al desarrollo de las Naciones Unidas también resaltó en un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas la importancia crucial del deber de cooperar de los Estados para hacer realidad el derecho al desarrollo, especialmente al abordar los desafíos múltiples a los que se enfrenta la humanidad, incluyendo el cambio climático.¹⁸¹ Él indicó que “[s]erá necesario reforzar el deber de cooperar y la solidaridad internacional para movilizar los recursos necesarios y ponerlos a disposición de los países en desarrollo y, a su vez, hacer plenamente realidad el derecho al desarrollo en todas las regiones del mundo.”¹⁸²

2. Prevención de daño medioambiental

109. El principio de prevención de daño medioambiental transfronterizo forma parte del derecho internacional consuetudinario.¹⁸³ El principio requiere que cada Estado “use todos los medios a su disposición para evitar actividades llevadas a cabo en su territorio, o en cualquier área bajo su jurisdicción, que causen daños importantes al medio ambiente de otro Estado.”¹⁸⁴ Requiere que los Estados no solo implementen “normas y medidas apropiadas” para prevenir daños importantes transfronterizos, sino también que aseguren la “vigilancia del cumplimiento” de esas medidas,¹⁸⁵ tales como el monitoreo de actividades con probabilidad de causar daño.¹⁸⁶
110. Una parte central del principio es la obligación de realizar la diligencia debida. Los Estados deberían realizar un estudio del impacto ambiental cuando “haya riesgo de que la actividad … propuesta pueda tener un impacto adverso importante en el

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ Surya Deva (Relator Especial sobre el derecho al desarrollo), *Revitalizar el derecho al desarrollo: visión de futuro*, Doc. de la ONU A/HRC/54/27 (4 de agosto de 2023), párr. 21.

¹⁸² *Id.* párr. 58; véase también párr. 81 (“Los Estados, especialmente en el Sur Global, se enfrentan a importantes deficiencias en materia de capacidad – algunas de las cuales están vinculadas a la colonización del pasado y a la continuación del orden neocolonial – para hacer efectivo el derecho al desarrollo. Mientras que algunos de estos déficits están relacionados con el acceso a la financiación y las tecnologías, otros se refieren a cuestiones de buena gobernanza como la transparencia, la corrupción, el estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de los medios de comunicación y la rendición de cuentas. La cooperación y la solidaridad internacionales serán fundamentales para colmar estas lagunas de capacidad.”).

¹⁸³ Véase *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina vs. Uruguay)* sentencia, 2010 ICJ (20 de abril de 2010), párr. 101; *Corfu Channel (United Kingdom vs. Albania)*, sentencia, 1948 ICJ (25 de marzo de 1948).

¹⁸⁴ *Pulp Mills*, 101.

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ *Id.* Un ejemplo reciente de Estados monitoreando actividades con probabilidad de causar daño es la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se centra en la obligatoriedad para determinadas empresas de realizar diligencia debida de derechos humanos y medioambiental. Véase Parlamento Europeo, *Diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad* (aprobada el 1 de junio de 2023).

medio ambiente en un contexto transfronterizo.”¹⁸⁷ Esto demuestra el objetivo más amplio de que los Estados deberían, cuando sea posible, evitar que ocurran daños de manera proactiva, en vez de solucionar el daño de manera retroactiva una vez que ya ha ocurrido.

111. El deber de realizar la diligencia debida incluye elementos procesales y substantivos. Es una obligación de conducta que demanda una atención muy alta. No solo deberían los Estados intentar de buena fe identificar los daños medioambientales y aprobar normas y medidas, sino que los Estados también deberían incorporar un nivel alto de “vigilancia del cumplimiento y de ejercicio del control administrativo correspondiente a operadores públicos y privados, tales como el monitoreo de actividades realizadas por los operadores.”¹⁸⁸ Como la Comisión de Derecho Internacional ha indicado, los Estados no solo deberían formular políticas para evitar daños medioambientales, sino también implementar y hacer cumplir esas políticas.”¹⁸⁹
112. Las obligaciones de prevención de daños aparecen cuando hay “riesgo de causar daño significativo transfronterizo.”¹⁹⁰ Como ya se ha mencionado, de acuerdo con la jurisprudencia sobre derechos humanos en desarrollo, las obligaciones sobre derechos humanos de los Estados se activan cuando un daño significativo es predecible.¹⁹¹ Este criterio de “daño significativo” se cumple cuando la degradación medioambiental amenaza el derecho a la vida.¹⁹² Leídos armoniosamente, los dos criterios requieren que en el contexto del daño medioambiental, los Estados actúen para respetar y asegurar los derechos humanos cuando violaciones de esos derechos son predecibles y cuando hay *riesgo* de daño significativo.
113. Esta Corte ha determinado que el principio de prevención de daños aplica a daños medioambientales puramente nacionales.¹⁹³ Esto es porque “las obligaciones que impone son similares al deber general de prevenir violaciones de derechos humanos.”¹⁹⁴ En Opinión Consultiva OC-23/17, esta Corte presentó una series de obligaciones domésticas originadas por el principio de prevención de daños,

¹⁸⁷ *Id.* 55-56. Véase también Opinión Consultiva OC-23/17, párrs. 124-25.

¹⁸⁸ *Pulp Mills* párr. 197.

¹⁸⁹ Prevención del daño transfronterizo de actividades nocivas (2001) Art. 3.

¹⁹⁰ *Id.* Art. 1.

¹⁹¹ Véase, por ejemplo, *Billy v. Australia*.

¹⁹² Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 140.

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ *Id.* párr. 133.

incluyendo deberes de debida diligencia,¹⁹⁵ legislación,¹⁹⁶ supervisión y monitoreo (incluyendo obligaciones particulares debidas a los Pueblos Indígenas),¹⁹⁷ desarrollo de estudios del impacto ambiental,¹⁹⁸ preparación de planes de emergencia,¹⁹⁹ y mitigación de daños ambientales.²⁰⁰ El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llegado a una conclusión similar.²⁰¹

114. Interpretados armoniosamente, el derecho a la vida de la Convención,²⁰² el principio de prevención de daños y el artículo 1(1) de la jurisprudencia de esta Corte generan obligaciones medioambientales extraterritoriales para los Estados. Esta Corte ha determinado que “el deber estatal de respeto y garantía de los derechos humanos se debe a toda persona que se encuentre en el territorio del Estado o que de cualquier forma sea sometida a su autoridad, responsabilidad o control.”²⁰³ Un Estado está ejerciendo autoridad sobre una persona “cuando la persona se encuentre bajo su control efectivo, sea dentro o fuera de su territorio.”²⁰⁴ Por tanto, los derechos de una persona son violados “si existe una relación de causalidad entre el hecho que se originó en su territorio y la afectación de los derechos humanos de personas fuera de su territorio.”²⁰⁵ Esta conclusión se afirmó en una resolución de la Comisión Interamericana y fue aceptada por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.²⁰⁶

3. Precaución

115. “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio

¹⁹⁵ *Id.* párr. 142.

¹⁹⁶ *Id.* párr. 146.

¹⁹⁷ *Id.* párrs. 152-54.

¹⁹⁸ *Id.* párrs. 162-69.

¹⁹⁹ *Id.* párr. 171.

²⁰⁰ *Id.* párr. 172.

²⁰¹ Véase *Portillo Cáceres y otros vs. Paraguay*, CCPR/C/126/D/2751/2016, comunicación 2751/2016.

²⁰² *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 63.

²⁰³ *Id.* párr. 73 [emphasis added]. Véase también *Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional*, Opinión Consultiva OC-21/14 Inter-Am. Ct. H. R. (19 de Agosto de 2014), párr. 61.

²⁰⁴ *Id.* párr. 81.

²⁰⁵ *Id.* párr. 101.

²⁰⁶ *Resolución 3/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, páginas 5-6. *Sacchi vs. Argentina*, párrs. 9.7-9.12.

ambiente.”²⁰⁷ Este enunciado, incluido en la Declaración de Río, es el núcleo del principio de precaución. El principio de precaución ha sido reconocido por esta Corte.²⁰⁸ También se encuentra en muchos instrumentos medioambientales internacionales,²⁰⁹ incluyendo la CMNUCC, que estipula que:²¹⁰

Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas.

116. Como el principio de prevención de daños, el principio de precaución requiere que los Estados actúen antes de que ocurra el daño medioambiental. Los Estados deberían esforzarse en buena fe para anticiparse a riesgos medioambientales futuros (incluyendo los que se derivan de las emisiones de gases de efecto invernadero) y solucionar esos riesgos incluso ante la incertidumbre.

4. Principio de que el contaminador paga

117. Los deberes de prevención de daños, cooperación y precaución recalcan que los daños medioambientales (incluyendo los daños transfronterizos) deberían ser abordados antes de que ocurran. Cuando esos daños ocurren, el principio de que el contaminador paga requiere que el coste de solucionar esos daños debería ser asumido por el contaminador.
118. El principio de que el contaminador paga ha sido reconocido en la jurisprudencia internacional desde el 1941.²¹¹ Está incluido en el principio 16 de la Declaración de

²⁰⁷ Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Doc. de la ONU A/CONF.151/26 (Vol. I) (12 de agosto de 1992), [Declaración de Río] Principio 15.

²⁰⁸ Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 180.

²⁰⁹ Véase, por ejemplo, Declaración de Río, Principio 15; Declaración de Estocolmo.

²¹⁰ CMNUCC, Art. 3.3.

²¹¹ Tribunal de Arbitraje, *Trail Smelter Arbitration (U.S. vs. Can.)*, 3 U.N. Rep. Int'l Arb. Awards 1905, 1965-66; 1974-78 (1941).

Río, que estipula que “el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación.”²¹²

119. En el contexto de la emergencia climática, el principio de que el contaminador paga es aplicable a la mitigación, el financiamiento de medidas de adaptación climática, y las obligaciones relacionadas con las pérdidas y los daños. Mientras que el principio de que el contaminador paga es aplicable a todos los Estados en el contexto de la emergencia climática, también puede crear obligaciones diferenciadas. Específicamente, su aplicación requiere que los principales emisores pasados y presentes de gases de efecto invernadero proporcionen mayores contribuciones financieras para las obligaciones presentes de mitigación, adaptación, pérdidas y daños. El principio de que el contaminador paga por tanto refuerza los principios de obligaciones diferenciadas analizados con anterioridad.

5. Mejor conocimiento científico disponible

120. Las respuestas estatales a la emergencia climática deberían estar fundamentadas en la mejor ciencia disponible. El derecho a la ciencia requiere que los Estados aprueben medidas de mitigación y adaptación basadas en la mejor evidencia científica disponible.²¹³
121. La ciencia proporciona a la comunidad internacional conocimientos sobre los riesgos y daños que el cambio climático presenta a la salud humana y al medio ambiente, permitiendo el desarrollo de políticas basadas en evidencia para prevenir y solucionar esos daños.²¹⁴ La conexión entre las comunidades legislativas, políticas y científicas es indispensable para avanzar los objetivos de los derechos medioambientales y humanos.²¹⁵
122. El Acuerdo de París reconoce que la respuesta global a la emergencia climática deberá ser realizada basándose en “los mejores conocimientos científicos disponibles.”²¹⁶ Esto depende de que los Estados cumplan con sus obligaciones de cooperación, asegurando que el conocimiento científico y las capacidades técnicas son compartidas.²¹⁷ La obligación de utilizar la mejor ciencia disponible y alinear la respuesta legislativa con la mejor ciencia disponible también está basada en las

²¹² Declaración de Río, Principio 16.

²¹³ Marcos Orellana (Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos), *El derecho a la ciencia en el contexto de las sustancias tóxicas*, Doc. de la ONU A/HRC/48/61 (26 de julio de 2021), párr. 10.

²¹⁴ Véase *Id.* párr. 1.

²¹⁵ *Id.* párr. 2.

²¹⁶ Acuerdo de París, Preámbulo. El CMNUCC y el Acuerdo de París requieren que los Estados utilicen la mejor ciencia disponible para el cálculo de emisiones (CMNUCC art 4(2)(a)); la evaluación de políticas sobre el clima (CMNUCC art 4(2)(d)); el desarrollo de estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Acuerdo de París art. 4(1)); y el desarrollo de planes de adaptación (Acuerdo de París art. 7(5)).

²¹⁷ Véase Declaración de Estocolmo, Principio 20; Declaración de Río, Principio 9; Acuerdo de París, Art. 10; CMNUCC, Art. 4.

leyes de derechos humanos. El derecho humano a disfrutar de los beneficios del progreso científico está protegido por el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho incluye, entre otras cosas, el derecho a “participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”²¹⁸ y a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.”²¹⁹ De manera importante, este derecho requiere que los Estados “respet[en] la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.”²²⁰

123. El sistema Interamericano “es el sistema regional de derechos humanos que protege de manera más firme y cabal el derecho a la ciencia,”²²¹ reconociendo el derecho a la ciencia en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,²²² la Carta de la Organización de los Estados Americanos²²³ y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.²²⁴

6. No regresión

124. El principio de no regresión es la contraparte de la progresividad (analizada más adelante).²²⁵ Los Estados no deberán permitir o realizar acciones que tengan el efecto de disminuir las protecciones jurídicas del medio ambiente o del acceso a la justicia medioambiental.²²⁶ Una vez que un Estado ha promulgado o aceptado una medida de protección medioambiental, no deberá debilitar esa medida. El principio de no regresión asegura que los Estados trabajen hacia normas más estrictas sobre los desafíos medioambientales globales (incluyendo la emergencia climática). Evita una “carrera hacia el abismo” que puede ocurrir si los países compiten para atraer inversiones extranjeras debilitando las leyes de protección medioambiental.
125. El principio de no regresión está ampliamente incluido en tratados internacionales y acuerdos de inversión, con más de 150 Estados actualmente adheridos a un

²¹⁸ DUDH, Art. 27.

²¹⁹ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 15; véase también *Observación General 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*.

²²⁰ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 15(3).

²²¹ A/HRC/48/61 párr. 32.

²²² Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. XIII.

²²³ Carta de la OEA, Art. 38.

²²⁴ Protocolo de San Salvador, Art. 14.

²²⁵ *Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, párr. 32.

²²⁶ Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Principio 12.

principio de no regresión en al menos un acuerdo.²²⁷ Junto con la progresividad, la no regresión es uno de los principios rectores del Acuerdo de Escazú.²²⁸ También aparece en el artículo 4.3 del Acuerdo de París y ha sido aplicado en casos medioambientales por cortes en las Américas.²²⁹ Una corte brasileña recientemente aplicó este principio para anular la decisión del gobierno federal de permitir plantaciones de caña de azúcar en el Amazonas, en contra de una norma adoptada en el 2009.²³⁰ El principio de no regresión está claramente enunciado en el artículo 11(8) de la Constitución de Ecuador, que estipula que “[s]erá inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”²³¹

126. Las medidas regresivas solo son admisibles cuando el Estado ha considerado todas las alternativas disponibles, y cuando las medidas están “debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte”.²³²

7. Igualdad y no discriminación

127. Todos los Estados deben actuar de manera coherente con las obligaciones de igualdad y no discriminación cuando intervengan para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Esta obligación se deriva tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2) como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.2). Al igual que en el caso del principio de no regresión, los Estados deben cumplir con esta obligación independientemente de los recursos de que dispongan. La lista de motivos prohibidos de discriminación que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es exhaustiva²³³ y abarca una amplia gama de características.²³⁴

²²⁷ Andrew D. Mitchel & James Munro, *Un principio de derecho internacional de no regresión de protecciones medioambientales*, 72 ICLQ 35 (2023).

²²⁸ Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) [Acuerdo de Escazú], Art. 3(c).

²²⁹ Tribunal Federal Supremo de Brasil, *PSB et al. vs. Brazil*, sentencia del 1 de julio de 2022.

²³⁰ Séptima Corte Federal, Amazonas, suspendiendo los efectos del Decreto 10.084/2019, Caso No. 1016202-09.2019.4.01.3200.

²³¹ Constitución de Ecuador (2001, rev. 2021).

²³² *Observación general 15 del CESCR*, párr. 19 (aplicación del principio en el contexto del derecho a la salud).

²³³ Estos instrumentos especifican la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición.

²³⁴ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 20, No discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales., U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (2 de Julio, 2009) [*Observación general 20 del CESCR*] debatiendo sobre motivos de discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual e identidad de género, estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social.

128. Los Estados deben evitar discriminación directa e indirecta.²³⁵ Las políticas climáticas de los Estados deben reducir de manera proactiva la discriminación histórica o sistemática, por ejemplo, cerrando las centrales eléctricas de carbón ubicadas en comunidades vulnerables y/o marginadas. Al cumplir con las obligaciones procedimentales, los Estados deben eliminar las barreras que los individuos, los grupos y las comunidades puedan enfrentar para recibir información, participar en la toma de decisiones o buscar recursos. Los Estados también deben velar por que la carga de las actividades de mitigación o adaptación no recaiga indebidamente sobre personas o comunidades en situación de vulnerabilidad. Para ello, es necesario que los Estados examinen de manera proactiva si las actividades pueden ser el resultado de, o contribuyen a, los patrones de discriminación existentes, teniendo en cuenta los mayores obstáculos a la justicia que experimentan esos grupos.²³⁶ Los Estados deben evitar un tratamiento diferenciado indirecto, salvo que dicho tratamiento reúna estrictos requisitos de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.²³⁷
129. Estas obligaciones se aplican a todas las acciones del Estado que tengan por objeto mitigar o adaptarse a la emergencia climática.²³⁸

8. Igualdad intergeneracional

130. El principio de igualdad intergeneracional es reconocido en diversos instrumentos internacionales²³⁹ y es recogido en la jurisprudencia del derecho internacional.²⁴⁰ La igualdad intergeneracional requiere que los Estados actúen como administradores responsables del planeta, protejan los intereses de las generaciones futuras y garanticen que puedan satisfacer sus necesidades ambientales y de desarrollo.²⁴¹

²³⁵ John Knox, *Principios marco sobre derechos humanos y medio ambiente*, U.N. Doc. A/HRC/37/59, 24 de Enero, 2018 [*Principios marco sobre derechos humanos y cambio climático*], párr. 8-9 (Principle 3); *Observación General 26 del Comité de los Derechos del Niño*, párr. 16.

²³⁶ *Principios marco sobre derechos humanos y cambio climático*, en párr. 9 (Principio 3); *Observación General 26 del Comité de los Derechos del Niño*, párr. 14.

²³⁷ *Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático*, párr. 9 (Principio 3).

²³⁸ *Opinión Consultiva OC-23/17*, en párr. 67, citando Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), en para. 42, y Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente, *Informe sobre el clima No. 1*, en párr. 81.

²³⁹ Véase, por ejemplo, *Declaración de Estocolmo*, Principios 1 y 2; *Declaración de Río*, Principio 3; CMNUCC, Art. 3, Principio 1; Declaración de la UNESCO sobre las responsabilidades de la presente Declaración sobre las responsabilidades de la presente generación para con las generaciones futuras (12 de noviembre de 1997); Acuerdo de París, Preámbulo (2015).

²⁴⁰ *Pulp Mills*, Sep. Op. Juez Cançado Trindade, párr. 122; *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.)*. (Sept. 25, 1997), Sep. Op. Judge Weeramantry, ICJ Rep 7, ICJ Rep 88 at 106-108; Observación general No. 15 del CESCR, párr. 28.

²⁴¹ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Estudio analítico sobre la relación entre el cambio climático y el disfrute pleno y efectivo de los derechos del niño*, U.N. Doc. A/HRC/35/13 (4 de mayo de 2017), párr. 35, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/110/91/PDF/G1711091.pdf?OpenElement>.

- 131. Las generaciones futuras incluyen a los niños vivos y a los que nacen constantemente, los cuales tienen derecho al ejercicio de sus derechos humanos.²⁴² Si bien los derechos de los niños son un área bien establecida del derecho internacional de los derechos humanos, aún no existe una definición específica de “generaciones futuras.” No obstante, el principio de igualdad intergeneracional es claramente aplicable cuando se consideran las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos hacia los niños existentes, en relación tanto a daños presentes y futuros.²⁴³
- 132. La igualdad intergeneracional destaca la distribución justa de los bienes y servicios ambientales. La productividad material y los servicios ecosistémicos de la Tierra son finitos. Como lo ilustra *Oposa vs. Factoran*, el caso pionero sobre este principio, el consumo excesivo o la contaminación por parte de una generación puede constituir una violación de la igualdad intergeneracional y de los derechos de los niños y de las generaciones futuras.²⁴⁴
- 133. El principio de igualdad intergeneracional también destaca los derechos colectivos que pueden tener las generaciones futuras.²⁴⁵ Los Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, adoptados el 3 de febrero de 2023, enumeran las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las generaciones futuras, así como la necesidad de rendición de cuentas y de reparaciones plenas y efectivas cuando los Estados hayan incumplido estas obligaciones.²⁴⁶
- 134. Los Estados deben reconocer que las generaciones futuras que aún no estén vivas serán algún día los titulares de los derechos que les confiere la Convención, y que los actos u omisiones de hoy, incluida la falta de protección del medio ambiente, pueden disminuir la capacidad de esos las generaciones futuras para disfrutar de sus derechos.

9. Obligaciones diferenciadas

- 135. Algunos principios—como la prevención y la precaución— deberían ser inmediatamente ejercidos por igual por todos los Estados. Otros principios son diferenciados, lo que significa que dan lugar a diferentes obligaciones contraídas por diferentes Estados, en función de sus recursos disponibles y de sus contribuciones históricas y actuales a la emergencia climática. Las obligaciones

²⁴² *Observación general 26 del Comité de los Derechos del Niño*, párr. 11.

²⁴³ *Sacchi vs. Argentina*, en 10.13.

²⁴⁴ Tribunal Supremo de Filipinas, *Oposa vs. Factoran*, G.R. No. 101083 (30 de Julio, 1993).

²⁴⁵ Véase, por ejemplo, *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 59: "En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un valor universal que se debe tanto a las generaciones presentes como a las futuras."

²⁴⁶ Ver los *Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras* (adoptados el 3 de Febrero de 2023).

diferenciadas se derivan de varios principios de la CMNUCC y el Acuerdo de París.²⁴⁷ Estos principios se analizan a continuación.

(a) Responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades

136. Como se señala en la CMNUCC, “los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad”.²⁴⁸ La responsabilidad de hacer frente a la emergencia climática es compartida por todos los Estados. Sin embargo, los Estados se encuentran en una situación diferente tanto en su *responsabilidad* para occasionar la emergencia climática, así como en su *capacidad* para abordarla. Por lo tanto, la CMNUCC equilibra el “preocupación común” base con un llamamiento a que las obligaciones de los Estados sean “de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas.”²⁴⁹
137. Este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas tiene en cuenta las profundas desigualdades que existen entre los Estados desarrollados y los Estados en desarrollo. Los Estados enriquecidos han contribuido enormemente al volumen de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero responsables de la emergencia climática, beneficiándose a su vez del desarrollo económico asociado. Dicho sin rodeos, “[q]uienes más contribuyeron al problema han cosechado beneficios económicos inmensos y, por lo tanto, sobre ellos recae la mayor responsabilidad de resolverlo.”²⁵⁰ Las cargas de mitigación, así como la dotación de recursos y la financiación de la mitigación del cambio climático, la adaptación, las pérdidas y daños, deben reflejar estas responsabilidades y capacidades históricas y actuales.
138. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas se refleja en las disposiciones operacionales de la CMNUCC y el Acuerdo de París. La CMNUCC diferencia entre países desarrollados (Anexo I) y países en desarrollo (Anexo II), que tienen obligaciones diferentes en relación con sus emisiones de gases de efecto invernadero,²⁵¹ y en relación con el suministro de financiación y tecnología a otros países.²⁵² El Acuerdo de París adopta un enfoque

²⁴⁷ CMNUCC, Arts. 3.1, 3.2; Acuerdo de Paris, Art. 2(2).

²⁴⁸ CMNUCC, Preámbulo.

²⁴⁹ Ver también Rio Declaration, Principio 7 (“En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.”)

²⁵⁰ Relator Especial sobre el Cambio Climático, Reporte Climático No. 2, párr. 26.

²⁵¹ CMNUCC, Arts. 4.1-4.2.

²⁵² UNFCCC, Arts. 4.3, 4.7.

más dinámico.²⁵³ En lugar de hacer referencia a los Anexos bifurcados de la CMNUCC, las obligaciones diferenciadas de los Estados pueden ajustarse con el tiempo, teniendo en cuenta las condiciones contemporáneas dentro de los Estados y entre ellos. El Acuerdo exige que los Estados desarrollados “encabece[n] los esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía,” mientras que los países en desarrollo deberían “seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación,” y “con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía.”²⁵⁴ Esto refleja tanto el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, así como el principio de la realización progresiva.²⁵⁵ Asimismo, el Acuerdo de París sostiene que los Estados desarrollados deben “seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación para el clima.”²⁵⁶

139. El principio es pertinente no sólo a nivel mundial, sino también para los Estados Parte en la Convención. Los diferentes Estados Parte tienen diferentes niveles de responsabilidad (debido a las emisiones históricas y actuales), así como diferentes capacidades actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse a los impactos de la emergencia climática.

(b) La mayor ambición posible y el máximo de recursos disponibles

140. El principio de la mayor ambición posible requiere que *todas* las partes promulguen políticas climáticas ambiciosas. Es una piedra angular del Acuerdo de París, que aplica el principio a la preparación de las contribuciones determinadas a nivel nacional y a la adopción de medidas para alcanzarlas.²⁵⁷ Estas contribuciones determinadas a nivel nacional deben reflejar los compromisos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial muy *por debajo* de los 2 °C y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. No obstante, el principio reconoce que la ambición más alta posible variará de un Estado a otro: lo que es posible en un Estado puede ser diferente de lo que ocurre en otros. En consecuencia, este principio está estrechamente relacionado con otros principios de diferenciación, como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas.

²⁵³ Ver Christina Voigt & Felipe Ferreira, ‘Dynamic Differentiation’: The Principles of CBDR-RC, Progression and Highest Possible Ambition in the Paris Agreement, 5 Transnat'l Env. L. 285 (2016).

²⁵⁴ Acuerdo de París, Art. 4(4).

²⁵⁵ Estos principios se discuten más adelante en la Sección V.b.6.

²⁵⁶ Acuerdo de París, Art. 9(3).

²⁵⁷ Acuerdo de París, Art. 4(3).

141. El principio del máximo de recursos disponibles se deriva del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.²⁵⁸ El principio también está incorporado en el Protocolo de San Salvador.²⁵⁹ El ejercicio de los derechos humanos, incluidos los relacionados con la protección del medio ambiente, a menudo requiere el gasto de recursos estatales. El nivel de recursos disponibles varía considerablemente de un Estado a otro. Sin embargo, los Estados que carecen de recursos para hacer efectivos ciertos derechos deben utilizar el máximo de recursos *disponibles* y trabajar en pro de la realización *progresiva* de esos derechos. Es importante notar que, “hasta el máximo de los recursos de que disponga” incluye “tanto a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que puede poner a su disposición la comunidad internacional por conducto de la cooperación y la asistencia internacionales.”²⁶⁰ Por lo tanto, el concepto está estrechamente relacionado con la obligación de cooperación antes expuesta.

b. Las obligaciones del Estado con relación a cuestiones específicas planteadas en la Solicitud de Opinión Consultiva

142. Varias de las obligaciones examinadas en las Secciones V.a y V.b anteriores se aplican a cuestiones específicas planteadas en la Solicitud de Opinión Consultiva. En aras de la brevedad, los Relatores de las Naciones Unidas no repiten cada una de las obligaciones aplicables en las subsecciones siguientes. En su lugar, los relatores de las Naciones Unidas proporcionan más detalles o contexto, según corresponda, en cada una de las siguientes subsecciones que abordan partes específicas de la Solicitud de Opinión Consultiva.

1. Las obligaciones del Estado se derivan de los deberes de prevención y garantía de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, en relación con la emergencia climática (Parte IV.A de la Solicitud de Opinión Consultiva)

143. Como se analizó en las Secciones IV.e.3 y V.a.2 anteriores, la emergencia climática menoscaba el derecho a un medio ambiente sano, lo que desencadena la obligación de los Estados de aplicar el principio de prevención. Específicamente, los deberes del Estado se contraen cuando existe un riesgo previsible de daño ambiental grave que afecta negativamente al goce efectivo de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano. Estos riesgos son omnipresentes en la emergencia climática. Por lo tanto, dichos riesgos dan lugar a obligaciones de prevención, mitigación, adaptación, cooperación, pérdidas y daños, entre otras. El

²⁵⁸ Cada Estado debe adoptar medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos disponibles, y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.”

²⁵⁹ *Protocolo de San Salvador*, Art. 1.

²⁶⁰ Consejo Económico y Social de la ONU, *An Evaluation of The Obligation to Take Steps to the “Maximum of Available Resources” Under an Optional Protocol to the Covenant*, U.N. Doc. E/C.12/2007/1 (Sept. 21, 2007), párr. 5. Ver también el *Protocolo de San Salvador*, Art. 1, el cual exige a los Estados adoptar medidas “tanto del orden interno como mediante la cooperación de los Estados.”

cumplimiento de estas obligaciones debe basarse en varios de los principios examinados anteriormente, entre ellos la aplicación de los mejores conocimientos disponibles, la prevención y el principio de precaución.

144. La obligación fundamental de los Estados para hacer frente a los riesgos actuales es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera urgente y profunda, de conformidad con los mejores conocimientos científicos disponibles. Esto se refleja en el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece que su “objetivo final” es “lograr ... estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.” La quema de combustibles fósiles y biomasa (73,2%) y la agricultura y la deforestación (18,4%) representan el 91,6% de las emisiones mundiales.²⁶¹ En consecuencia, los Estados, especialmente los grandes emisores históricos y actuales, deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles, poner fin a la deforestación y transformar la agricultura industrial para cumplir con sus obligaciones.
145. Además, las políticas de los Estados para proteger los derechos de la Convención en el contexto de la emergencia climática deben ser *integrales*. Deben abordar todos los sectores económicos y formas de contaminación por gases de efecto invernadero. Al formular políticas, los Estados deben incorporar todas las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Los Estados deben guiarse por la obligación de protegerse contra las amenazas previsibles de daños graves. Como mínimo, los Estados deben armonizar sus políticas y medidas con los mejores conocimientos científicos disponibles, así como con las obligaciones contraídas en virtud del derecho ambiental internacional – incluyendo los que se encuentran en la CMNUCC y el Acuerdo de París. La obligación de prevenir daños se aplica tanto a las actividades gubernamentales como a las actividades de agentes no estatales.²⁶² Por ejemplo, los Estados deben exigir a las empresas que actúen con la debida diligencia en materia de cambio climático; divulgar sus emisiones; limitar sus emisiones a través de la regulación; instalar tecnologías que no emitan; y prohibir grupos de interés contrarios a la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
146. Por último, las normas deben ser vinculantes y aplicables. Las obligaciones de los Estados en virtud del deber de prevención van más allá de las obligaciones procedimentales. Los Estados no sólo deben *formular políticas* encaminadas a reducir los daños transfronterizos e internos, sino también *implementar, monitorear y hacer cumplir* de manera efectiva esas políticas.²⁶³

²⁶¹ Ver Hannah Ritchie and Max Roser, “Emissions by sector,” Our World in Data, <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>.

²⁶² Pulp Mills, párr. 197.

²⁶³ Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (2001) Art. 3.

147. Las formas en que los Estados pueden ejecutar y cumplir sus obligaciones se discuten en la Sección VI infra. Cabe señalar que las obligaciones diferenciadas de los Estados – incluyendo el principio de responsabilidad común pero diferenciada y las capacidades respectivas – significa que la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones debe ser asumida con la mayor urgencia por los Estados industrializados.

2. Las obligaciones del Estado de preservar el derecho a la vida y a la supervivencia en relación con la emergencia climática a la luz de la ciencia y los derechos humanos (Parte IV.B de la Solicitud de Opinión Consultiva)

148. Las amenazas al derecho a la vida son, por definición, “graves.” En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos siempre que sean previsibles amenazas al derecho a la vida.²⁶⁴
149. Como se ha analizado anteriormente en las Secciones IV.e.1-3, la emergencia climática amenaza el derecho a la vida. Esto incluye amenazas a sus condiciones necesarias, como los derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
150. Los Estados deben hacer frente a las amenazas a esos derechos. De conformidad con las políticas que figuran en la Parte VI infra, los Estados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluso mediante la eliminación urgente del uso de combustibles fósiles, y deben preservar y restaurar los sumideros de carbono en la mayor medida posible. Los Estados también deben velar por que las personas y las comunidades dispongan de información y recursos financieros y técnicos adecuados para responder a las amenazas a los derechos humanos. Esta obligación está sujeta al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, así como a otras obligaciones diferenciadas. Sin embargo, algunas obligaciones – incluyendo la obligación de igualdad y no discriminación – deben ser ejecutadas inmediatamente por todos los Estados.²⁶⁵
151. De conformidad con el derecho de acceso a la justicia, los Estados deben velar por que se disponga de foros nacionales e internacionales para responsabilizar a los Estados y a las empresas cuando no cumplan sus obligaciones y responsabilidades. Las políticas y acciones estatales deben alinearse con la mejor ciencia disponible, incluida la información proporcionada por el IPCC. Como parte de sus deberes de cooperación y prevención del daño transfronterizo, los Estados deben compartir y divulgar información precisa y accesible sobre la emergencia climática – sus causas, impactos y contribuciones del Estado – entre ellos y con el público.

²⁶⁴ *Billy v. Australia*.

²⁶⁵ Ver Sección V.a.7 arriba.

3. Las obligaciones de los Estados en relación con los derechos de los niños y las generaciones futuras ante la emergencia climática (Parte IV.C de la Solicitud de Opinión Consultiva)

152. Los niños son particularmente vulnerables a los problemas de salud exacerbados por el cambio climático, incluidas las enfermedades transmitidas por parásitos, la malnutrición, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea y otras enfermedades transmitidas por el agua.²⁶⁶ Se ha estimado que el 88% de la carga mundial de morbilidad asociada al cambio climático recae en niños menores de cinco años.²⁶⁷ Los fenómenos meteorológicos extremos suponen una amenaza única para la salud y el bienestar de los cuerpos y las mentes de los jóvenes. A nivel mundial, más de 500 millones de niños viven en zonas de alto riesgo de inundación; 160 millones viven en zonas de sequía alta o extremadamente alta; y 115 millones están en alto riesgo de ciclones tropicales. Para el 2040, casi 600 millones de niños vivirán en regiones con recursos hídricos extremadamente limitados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que “el cambio climático perjudicará primero a los niños más pobres y vulnerables, con mayor dureza y durante más tiempo.”²⁶⁸
153. La emergencia climática plantea desafíos particulares para el derecho a la salud de los niños, protegido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El impacto de la emergencia climática en los niños y jóvenes es particularmente severo.²⁶⁹ También es dual: como ha observado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los niños son “especialmente afectados por el cambio climático, tanto por la forma en que experimentan sus efectos como por la posibilidad de que el cambio climático les afecte a lo largo de su vida.”²⁷⁰ En otras palabras, los niños y los jóvenes no solo serán los más afectados por la emergencia climática al vivir en un futuro más caluroso y menos estable, sino que también serán más vulnerables a los impactos en la salud física y mental en el presente.²⁷¹
154. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas observó además que: “los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, la inseguridad

²⁶⁶ Consejo de Derechos Humanos, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Analytical study on the relationship between climate change and the full and effective enjoyment of the rights of the child*, U.N. Doc. A/HRC/35/13 (Junio 6-23, 2017).

²⁶⁷ Ying Zhang, et al., *Climate change and disability-adjusted life years*. J Environ Health. (Oct. 2007); 70(3):32-6.

²⁶⁸ UNICEF, *Unless we act now: The impact of climate change on children* (2015).

²⁶⁹ Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 3/2021, III.21; Observaciones generales del CDN 26, párr. 96.

²⁷⁰ *Sacchi v. Argentina*, 12. [enfasis añadido].

²⁷¹ IPCC Grupo de Trabajo II, AR6: *Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Summary for Policymakers*, B.4.4, página 15.

alimentaria, las enfermedades de transmisión vectorial e hídrica, la agudización de la contaminación atmosférica y los daños físicos provocados por fenómenos repentinos o de evolución lenta, afectan de forma desproporcionada a los niños.”²⁷² Además, existe la “relación cada vez más evidente entre los daños ambientales y la salud mental de los niños, por ejemplo en forma de depresión y ecoansiedad.”²⁷³

155. Como se analizó en la Sección V.a.8 supra, que aborda el principio de equidad intergeneracional, las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos de los niños deben ser una prioridad absoluta, lo que requiere que los Estados adopten medidas urgentes, justas, efectivas y positivas.²⁷⁴ Los Estados deben un “acusado deber de diligencia” hacia los niños, que “tienen una probabilidad mucho mayor que los adultos de sufrir daños graves.”²⁷⁵ Los Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial en todas las políticas.²⁷⁶ Mientras que los Estados “tienen discrecionalidad para encontrar un equilibrio razonable entre la determinación de los niveles adecuados de protección del medio ambiente y la consecución de otros objetivos sociales”, los Estados deben, sin embargo, reconocer los graves daños que la emergencia climática produce a los niños, “y por lo tanto, deberían establecer y aplicar normas ambientales para proteger a los niños de repercusiones desproporcionadas y a largo plazo.”²⁷⁷
156. Según el derecho internacional de los derechos humanos, todos los niños tienen derecho a ser escuchados.²⁷⁸ El ejercicio de este derecho mejora la toma de decisiones ambientales.²⁷⁹ Los niños deben participar en la toma de decisiones de los Estados sobre la necesidad de respuestas políticas a la emergencia climática, así como en el diseño y la aplicación de dichas políticas. Los Estados deben determinar las decisiones y políticas que tengan repercusiones particulares en los niños y llevar a cabo un procedimiento más detallado (una evaluación de los efectos en los derechos del niño) para determinar el interés superior del niño.²⁸⁰

²⁷² *Observaciones Generales del CDN* 26, para. 40, citando IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, Summary for Policymakers*, figure SPM.1, los datos muestran efectos desproporcionados, acumulativos y de largo plazo del cambio climático en la población nacida en 2020.

²⁷³ *Observaciones Generales del CDN* 26, párr. 41.

²⁷⁴ *Billy v. Australia; Sacchi v. Argentina*.

²⁷⁵ *Observaciones Generales del CDN* 26, párr. 73.

²⁷⁶ CDN, Art. 3.

²⁷⁷ *Observaciones Generales del CDN* 26, párr. 73.

²⁷⁸ Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art. 12.

²⁷⁹ *Observaciones Generales del CDN* 26, párr. 26.

²⁸⁰ *Id.*

157. Se debe recabar la opinión de los niños de manera proactiva, y se debe prestar apoyo adicional a los niños con discapacidades, los niños pertenecientes a grupos minoritarios y los niños que viven en zonas vulnerables.²⁸¹ Los niños deben contar con mecanismos apropiados para su edad, seguros y accesibles para hacer oír su voz, y se les debe proporcionar una educación significativa y eficaz sobre la emergencia climática y los derechos humanos.²⁸² Los niños tienen derecho a acceder a información precisa y fiable sobre las causas, los efectos y las fuentes reales y potenciales de los daños climáticos, así como sobre las respuestas de los Estados.²⁸³ La difusión de la información debe ser adecuada a la edad y las capacidades de los niños.²⁸⁴ De conformidad con el principio de cooperación, los Estados Parte en la Convención deben facilitar mecanismos regionales e internacionales para la participación de los niños y los jóvenes en la adopción de decisiones.²⁸⁵ Los niños y los jóvenes deben ser incluidos en las delegaciones nacionales en las negociaciones sobre el clima y otros eventos internacionales sobre el clima.
158. Todas las políticas y acciones estatales relativas a la emergencia climática deben cumplir con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los Estados Parte de la Convención.²⁸⁶
159. Los Relatores de las Naciones Unidas respaldan la posición del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha llegado a la conclusión de que una política de mitigación coherente con los derechos del niño debe:
- especificar cómo las políticas nacionales—incluyendo las contribuciones determinadas a nivel nacional—respetan, protegen y cumplen con los derechos de los niños;
 - cumplir los principios de máxima ambición posible y responsabilidades comunes pero diferenciadas, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los niños en la mayor medida posible;
 - aumentar progresivamente la ambición de las medidas de mitigación a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que el plazo para prevenir el cambio climático catastrófico y el daño a los derechos de los niños es corto y requiere una acción urgente;

²⁸¹ *Id.* párr. 26.

²⁸² *Id.* párr. 27.

²⁸³ *Id.* párr. 33.

²⁸⁴ *Id.* párr. 34.

²⁸⁵ *Id.* párr. 28.

²⁸⁶ *Observaciones Generales del CDN* 26, párr. 20, 98.

- evitar retrasar la rápida eliminación de los combustibles fósiles, lo que daría lugar a un aumento de las emisiones acumuladas y, por tanto, a un mayor daño previsible a los derechos de los niños; y
 - evitar la dependencia de tecnologías no probadas y, en su lugar, dar prioridad a las reducciones de emisiones rápidas y efectivas ahora para apoyar el pleno disfrute de los derechos de los niños en el menor tiempo posible y evitar daños irreversibles a la naturaleza.²⁸⁷
160. Las políticas estatales de adaptación también deben ser compatibles con los derechos de los niños. Se debe tener debidamente en cuenta las opiniones de los niños en la planificación de las decisiones de adaptación.²⁸⁸ Las medidas de adaptación deben tener en cuenta tanto las amenazas inminentes como las amenazas a largo plazo a los derechos de los niños.²⁸⁹ Los Estados también deben tener en cuenta sus obligaciones para con los niños a la hora de indemnizar por pérdidas y daños.²⁹⁰
161. Además, los derechos humanos de las generaciones futuras se ven implicados y amenazados por la emergencia climática. Como se refleja en el Acuerdo de París, el calentamiento global de más de 2 °C interferirá drásticamente con los derechos de las generaciones futuras, el calentamiento global de 1,5 °C también provocará un deterioro sustancial, y el calentamiento actual de 1,2 °C ya está causando un daño significativo. Además, el aplazamiento de la acción sobre el cambio climático a una fecha futura agota el “presupuesto” de emisiones de carbono, imponiendo así una carga injusta a las generaciones futuras y menoscabando sus derechos.²⁹¹
162. Ningún instrumento de derechos humanos contiene limitaciones temporales prospectivas a los derechos humanos. Como se reconoce en los Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras del 2023, cuando los Estados no cumplen sus obligaciones de proteger y mantener los recursos naturales y el patrimonio cultural, ambos en peligro por el cambio climático, crean problemas de derechos humanos para las generaciones presentes y futuras.²⁹²
163. Por último, el principio de cooperación internacional es particularmente pertinente para los derechos de los niños. Artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas

²⁸⁷ *Observaciones Generales del CDN* 26.

²⁸⁸ *Id.* párr. 102.

²⁸⁹ *Id.* párr. 103.

²⁹⁰ *Id.* párr. 104-106.

²⁹¹ Ver, e.g., *Neubauer v. Germany* (2020), Decisión del 24 de marzo de 2021.

²⁹² Ver *Los Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras* (adoptado el 3 de febrero de 2023) § 8(b).

sobre los Derechos del Niño requiere un “marco de la cooperación internacional” en el ejercicio de los derechos del niño. Cuando la cooperación conduzca a la transferencia de financiación y tecnología para el clima, dichos programas deben basarse en los derechos, y los Estados deben asignar una parte de la financiación y la asistencia a programas centrados en la infancia.²⁹³ Los Estados deben garantizar que todos los mecanismos de financiación climática respeten y no violen los derechos de los niños, aumentar la coherencia de las políticas entre las obligaciones de los derechos de los niños y otros objetivos (como el desarrollo económico) y fortalecer la demarcación de las funciones de las diversas partes interesadas en la financiación climática, como los gobiernos, las instituciones financieras (incluidos los bancos), las empresas y las comunidades afectadas, especialmente los niños.²⁹⁴

4. Las obligaciones del Estado derivadas de los procedimientos de consulta y procedimientos judiciales por la emergencia climática (Parte IV.D de la Solicitud de Opinión Consultiva)

164. Esta Corte resolvió en la *Opinión Consultiva OC-23/17* que el derecho a un medio ambiente sano incluye derechos procesales tales como: (a) el acceso a la información; b) el derecho a participar en la adopción de decisiones; c) el acceso a la justicia; y d) el derecho a un recurso efectivo.²⁹⁵ Los derechos a la información, a la participación y a los recursos están expresados en la Declaración de Río.²⁹⁶ Estos derechos se desarrollan en el Acuerdo de Escazú, un tratado regional con 24 signatarios y 15 Estados Parte de América Latina y el Caribe.²⁹⁷ La ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú por parte de los Estados Parte contribuye en gran medida al cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención.

(a) Acceso a la información

165. El derecho de acceso a la información está protegido por la Convención, que abarca el derecho a “buscar, recibir y difundir información”.²⁹⁸ La obligación es proactiva. Los Estados deben garantizar el acceso a la información ambiental; negar o condicionar el acceso a dicha información sólo por motivos limitados, racionales y prescritos; y establecer mecanismos de supervisión independientes.²⁹⁹ Esto incluye

²⁹³ CDN, párr. 92.

²⁹⁴ *Id.* párr. 111.

²⁹⁵ *Opinión Consultiva OC-23/17*.

²⁹⁶ *Declaración de Rio*, Principio 10.

²⁹⁷ Los Estados parte incluyen Antigua y Barbados, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Los firmantes incluyen los 15 Estados parte así como Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú.

²⁹⁸ Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13(1) [énfasis añadido]

²⁹⁹ Acuerdo de Escazú, Art. 5.

la obligación de los Estados, reconocida en los tratados multilaterales sobre el clima, de promover y facilitar de manera proactiva la concienciación y la educación sobre la emergencia climática y sus impactos.³⁰⁰

166. Esta Corte ha sido inequívoca en cuanto a que los Estados tienen la obligación, en virtud de la Convención, de proporcionar la información de interés público que obre en su poder. En el caso *Claude-Reyes vs. Chile*, la Corte sostuvo que el artículo 13.1 de la Convención:

ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto información.³⁰¹

167. La “obligación de transparencia activa”³⁰² impone a los Estados la obligación “de brindar información completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva,”³⁰³ lo cual debe ser “información relevante y apropiada sobre el medioambiente . . . incluyendo] información sobre la calidad ambiental, el impacto ambiental en la salud y los factores que lo influencian, además de información sobre la legislación y las políticas y asesoramiento sobre cómo obtener esa información.”³⁰⁴ Esta obligación es aplicable especialmente en casos de emergencia ambiental.³⁰⁵

(b) Participación en la toma de decisiones ambientales

168. El derecho a la participación pública en la adopción de decisiones gubernamentales está protegido por el artículo 23 de la Convención. Las obligaciones específicas relativas a la participación del público en la toma de decisiones medioambientales

³⁰⁰ CMNUCC, Art. 6(a); Acuerdo de Paris, Art. 12; *Principios marco sobre derechos humanos y cambio climático*, párr. 15-19 (Principio 6).

³⁰¹ Caso *Claude Reyes y otros Vs. Chile*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 151, párr. 76-81.

³⁰² *Opinión Consultiva OC-23/17*.

³⁰³ *Id.*

³⁰⁴ *Id.*

³⁰⁵ En el caso de *La Oroya*, Perú violó el derecho de la Comunidad de La Oroya a ser informados sobre el impacto al medio ambiente y a la salud de los actos realizados por un complejo metalúrgico en esa comunidad. Dado que dicha violación será abordada por el fallo de la Corte, los defensores del cambio climático han especulado y asumen que dicha resolución también podría definir potencialmente la obligación del Estado de transparencia activa para incluir requisitos más sólidos y específicos para producir, organizar, actualizar y difundir información ambiental.

pueden consultarse en el CMNUCC³⁰⁶ y el Acuerdo de Escazú.³⁰⁷ La participación pública es crucial para producir políticas climáticas que se basen en una amplia base de conocimientos; identificar y proteger los derechos amenazados; y son sostenibles y robustos.³⁰⁸ La participación pública debe incluir a *todas* las personas afectadas e interesadas, incluidas las más vulnerables. La participación pública efectiva depende de la protección y el cumplimiento de los derechos de expresión, asociación y reunión.

169. El Relator Especial sobre los derechos humanos y el cambio climático ha observado que los Estados a menudo no cumplen sus obligaciones en materia de participación pública.³⁰⁹ También ha observado que existe una “desconexión entre quienes son más vulnerables a los efectos del cambio climático y quienes realmente participan y están representados en los procesos políticos y de toma de decisiones”—incluyendo niños, niñas, jóvenes, Afro-descendientes y Pueblos Indígenas.³¹⁰ En consecuencia, la Relatora Especial ha recomendado que los Estados amplíen los derechos de legitimación en los tribunales nacionales e incluyan a representantes de los jóvenes en los parlamentos nacionales.³¹¹
170. La obligación de participación pública es proactiva. Los gobiernos deben tomar medidas positivas para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, incluidas las decisiones relacionadas con la emergencia climática, como las políticas estatales de mitigación y adaptación. Esto incluye (pero no se limita a) la obligación de consultar ampliamente.
171. Además, la Corte también ha reconocido que los Estados tienen la obligación adicional de garantizar que se consulte a los grupos vulnerables. La Corte sostuvo en el caso *Ximenes Lopes* que los Estados deben dar “especial protección” a “cualquier persona que se encuentre en una condición vulnerable.”³¹²
172. En jurisprudencia posterior, la Corte ha enfatizado repetidamente el requisito de *Saramaka* de que los Estados consulten con los pueblos afectados en las primeras etapas del proceso de desarrollo para que los pueblos indígenas y las comunidades tribales entablen un diálogo interno y participen efectivamente en la toma de decisiones *antes* de que el Estado apruebe o lleve a cabo actividades que puedan

³⁰⁶ CMNUCC, Art. 6(6).

³⁰⁷ Acuerdo de Escazú, Art. 7.

³⁰⁸ *Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Cambio Climático, Reporte Climático No. 1*, párr. 58; *Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático*, párr. 23-26 (Principio 9).

³⁰⁹ *Julio 2022 Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Cambio Climático*, párr. 73.

³¹⁰ *Id.* párr. 75.

³¹¹ *Id.* párr. 97.

³¹² *Ximenes Lopes v. Brazil*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 4 de julio de 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 149, párr. 103.

afectarlos.³¹³ Además, en *Sarayaku*, la Corte también exigió que los Estados celebraran consultas de manera que pudieran ser comprendidas por los grupos vulnerables afectados, incluso en el idioma hablado por la mayoría de los residentes de la comunidad.³¹⁴

173. Las evaluaciones del impacto ambiental y social constituyen un mecanismo a través del cual los grupos y las personas pueden participar en la toma de decisiones relacionadas con el clima, incluidas las decisiones relacionadas con las políticas de mitigación y adaptación de los Estados. Esta Corte ha emitido directrices detalladas sobre cómo deben realizarse las evaluaciones de impacto ambiental y social, señalando que dichas directrices deben aplicarse de manera amplia³¹⁵ “cuando exista un riesgo de daño ambiental significativo, independientemente de que la actividad o el proyecto vaya a ser realizado por un Estado o por particulares.”³¹⁶ En la *Opinión Consultiva OC-23/17*, esta Corte incluyó el “[d]eber de exigir y aprobar estudios de impacto ambiental”³¹⁷ entre las acciones que los Estados deben tomar para “regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, de manera que disminuya cualquier amenaza a los derechos a la vida y a la integridad personal.”³¹⁸ La Corte sostuvo que los Estados deben promulgar leyes o reglamentos nacionales sobre la forma en que deben realizarse las evaluaciones del impacto ambiental, incluidas las medidas específicas que deben adoptarse para garantizar que la evaluación sea justa desde el punto de vista procesal.³¹⁹
174. Los Estados deben permitir que se consideren los riesgos previsibles de daño grave a los derechos de las comunidades potencialmente afectadas como parte de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero o a la degradación de los sumideros naturales de carbono. En 2020, la Suprema Corte de Justicia de México abordó este punto, al determinar que una propuesta regulatoria debe someterse a evaluación científica y participación pública cuando resulte en mayores emisiones de gases de efecto invernadero.³²⁰

³¹³ *Garífuna Punta Piedra Community v. Honduras*, Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de octubre de 2015. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 304, párr. 217, 223.

³¹⁴ *Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 27 de junio de 2012. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 245, párr 161.

³¹⁵ *Id.* párr. 156, 161.

³¹⁶ *Id.* párr. 174. Ver también *Id.*, párr. 160.

³¹⁷ *Opinión Consultiva OC-23/17*.

³¹⁸ *Id.* párr. 149.

³¹⁹ *Id.* párra. 149-150.

³²⁰ Ver Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, Amparo 610/2019, de fecha 15 de enero de 2020; ver también Primer Tribunal Colegiado de Circuito, *Greenpeace Mexico v. Secretaría de Energía y Otros (en las políticas del Sistema Eléctrico*

(c) Acceso a la justicia

175. El artículo 25.1 de la Convención garantiza el derecho de acceso a la justicia. Esta Corte ha sostenido que esta disposición obliga a los Estados a “garantizar un recurso judicial sencillo, rápido y eficaz ante un juez o tribunal competente”³²¹ y que “dicho recurso debe ser adecuado y efectivo.”³²² El derecho protege contra “el ejercicio arbitrario de la autoridad pública”³²³ y el reconocimiento de que “[l]a inexistencia de recursos internos efectivos coloca al individuo en un estado de indefensión”.³²⁴ El derecho de acceso a la justicia con recursos efectivos también está protegido por el artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el Acuerdo de Escazú. Los Estados deben garantizar que las normas restrictivas de legitimación no impidan que las personas, las comunidades o las organizaciones de la sociedad civil presenten demandas climáticas basadas en los derechos.

(d) Derecho a la indemnización y a la tutela judicial efectiva

176. El núcleo del derecho de acceso a la justicia es la provisión de recursos efectivos para las violaciones de los derechos humanos, incluidas las relacionadas con la emergencia climática.³²⁵ Las personas afectadas deben tener acceso a recursos contra las autoridades gubernamentales y las entidades privadas.³²⁶ Para cumplir esta obligación, los Estados deben garantizar el acceso a procedimientos e instituciones que: a) sean imparciales, independientes, asequibles, transparentes y justos; b) examinar oportunamente las reclamaciones; c) disponer de los conocimientos especializados y los recursos necesarios; d) incorporar un derecho de apelación; y e) dictar decisiones vinculantes.³²⁷ Las obligaciones de los Estados asociadas con el derecho de acceso a la justicia incluyen brindar asistencia legal y apoyo a las personas o comunidades afectadas, en particular a aquellas que pueden enfrentar barreras para acceder a la justicia, como niños, jóvenes, mujeres, Pueblos Indígenas, ancianos, personas desplazadas, Afro-descendientes y personas en condiciones de pobreza.

Nacional), Amparo No. 104/2020, (Nov. 17, 2020) (“concluyendo que la implementación de medidas regresivas que discriminan en contra de la energía renovable violan el derecho a un medio ambiente sano e inhiben la participación de la población”).

³²¹ Ver *Caso de López Lone et al. v. Honduras*, Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de octubre de 2015, Inter-Am. Ct. H.R. Series C. No. 302, párr. 245.

³²² *Id.*

³²³ *Case of Claude Reyes v. Chile*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 151, párr. 76-81.

³²⁴ *Id.*

³²⁵ *Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático*, Principio 10.

³²⁶ *Julio 2022 Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Cambio Climático*, párr. 97.

³²⁷ *Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Cambio Climático*, párr. 29 (Principio 10).

177. Esta Corte ha determinado que el derecho a un recurso efectivo se aplica no sólo cuando los Estados violan obligaciones sustantivas, sino también procesales, como el acceso a la información o el derecho a participar en la toma de decisiones ambientales. En *Claude-Reyes*, esta Corte determinó que Chile debía a los demandantes una reparación por no revelar toda la información relevante sobre un proyecto maderero en la Patagonia.³²⁸ La Corte sostuvo que cuando un Estado niega o retiene el acceso a información en poder del Estado, debe garantizar la disponibilidad de “un recurso sencillo, rápido y eficaz que permita determinar si ha habido violación del derecho de quien solicita información y, en su caso, que se ordene al órgano correspondiente la divulgación de dicha información.”³²⁹
178. Se pueden encontrar ejemplos de mecanismos de reparación eficaces en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Parte en la Convención. Por ejemplo, en *Generaciones Futuras vs. Ministerio de Medio Ambiente y otros*, la Corte Suprema de Colombia se puso del lado de 25 jóvenes demandantes de entre 7 y 26 años de edad que habían demandado a varias corporaciones y organismos públicos dentro del Gobierno colombiano para hacer valer sus derechos a un ambiente sano, vida, salud, alimentos y agua. Los demandantes argumentaron que el cambio climático, junto con el fracaso del gobierno a la hora de reducir la deforestación y garantizar el cumplimiento de un objetivo de deforestación neta cero en la Amazonía colombiana para el año 2020³³⁰, amenazaba los derechos fundamentales de los demandantes. En particular, la Corte ordenó al Gobierno colombiano establecer, con la participación activa de los demandantes, las comunidades afectadas, los grupos de investigación científica ambiental y las poblaciones interesadas, el “Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía colombiana,” que incluiría medidas preventivas, obligatorias, estrategias correctivas y pedagógicas para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.³³¹
179. La obligación de proporcionar reparación se aplica tanto dentro de los Estados como entre ellos. Los deberes de los Estados derivados del derecho de acceso a la justicia deben leerse junto con el deber de cooperación de los Estados. Los Estados deben apoyar los marcos jurídicos internacionales que abordan los daños relacionados con el clima y el derecho a la reparación.³³² Entre los ejemplos de marcos de reparación elaborados a través de la cooperación internacional se incluyen la facilitación de instrumentos como los fondos para el cambio climático o los mecanismos de seguros, y la provisión de recursos financieros para la

³²⁸ Caso *Claude Reyes Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Ct. Inter-Am. D. H. Serie C No. 151.

³²⁹ *Id.*

³³⁰ Según lo acordado en el Acuerdo de París y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

³³¹ *Generaciones Futuras v. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible*, República de Colombia Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 (Apr. 5, 2018).

³³² Véase Carta de las Naciones Unidas, Arts. 55–56; PIDESC, Art. 2 (1).

reparación a los países afectados, en particular a aquellos con capacidades limitadas para buscar reparación de forma independiente. Recientemente se ha pedido la creación de un mecanismo mundial para recaudar subvenciones para la reconstrucción de cualquier país en peligro por un desastre climático y una agencia multilateral de préstamos para acelerar la inversión privada en la transición hacia bajas emisiones de carbono.³³³

180. La obligación de proporcionar reparación se aplica tanto dentro de los Estados como entre ellos. Los deberes de los Estados derivados del derecho de acceso a la justicia deben leerse junto con el deber de cooperación de los Estados. Los Estados deben apoyar los marcos jurídicos internacionales que abordan los daños relacionados con el clima y el derecho a la reparación.³³⁴ Entre los ejemplos de marcos de reparación elaborados a través de la cooperación internacional se incluyen la facilitación de instrumentos como los fondos para el cambio climático o los mecanismos de seguros, y la provisión de recursos financieros para la reparación a los países afectados, en particular a aquellos con capacidades limitadas para buscar reparación de forma independiente. Recientemente se ha pedido la creación de un mecanismo mundial para recaudar subvenciones para la reconstrucción de cualquier país en peligro por un desastre climático y una agencia multilateral de préstamos para acelerar la inversión privada en la transición hacia bajas emisiones de carbono.³³⁵

5. Obligaciones estatales relacionadas con la protección de defensores territoriales y ambientales, así como de mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de la emergencia climática (Parte IV.E de la Solicitud de Opinión Consultiva).

181. Si bien la emergencia climática afecta a los derechos de todas las personas a nivel global, amenaza de manera desproporcionada los derechos de individuos y comunidades en situación de vulnerabilidad.³³⁶ Esta Corte ha encontrado que, en el contexto de la emergencia climática, “los Estados están legalmente obligados a

³³³ La Iniciativa Bridgetown 2022 [*The 2022 Bridgetown Initiative*] (23 de septiembre de 2022), <https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/>.

³³⁴ Véase Carta de las Naciones Unidas, Arts. 55–56; PIDESC, Art. 2 (1).

³³⁵ La Iniciativa Bridgetown 2022 [*The 2022 Bridgetown Initiative*] (23 de septiembre de 2022), <https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/>.

³³⁶ Resolución de la Comisión Interamericana No. 3/2021, en III.16: “El cambio climático afecta a todas las personas, pero genera impactos diferenciados respecto del goce efectivo de sus derechos. Los Estados tienen una obligación reforzada de garantizar y proteger los derechos de las personas o grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que son particularmente vulnerables a los daños e impactos adversos del cambio climático porque histórica y sistemáticamente han soportado la mayor carga de desigualdad estructural”. Véase también Grupo de Trabajo II del IPCC, AR6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022 [*IPCC Working Group II, AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*], Capítulo 12, página 1691, señalando que la región de América Latina y el Caribe está “altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático,” y que las existentes “Las profundas desigualdades económicas, étnicas y sociales se ven exacerbadas por el cambio climático.”

enfrentar estas vulnerabilidades con base en el principio de igualdad y no discriminación.”³³⁷

182. Las personas y comunidades marginadas en situación de vulnerabilidad incluyen a los niños y jóvenes, las mujeres,³³⁸ los Pueblos Indígenas, las minorías raciales y étnicas (incluidas las comunidades afrodescendientes), los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, los residentes informales, las personas detenidas, las personas sin hogar, los campesinos, los pescadores, las personas con discapacidad y las personas mayores.³³⁹
183. El reconocimiento efectivo de los grupos vulnerables y marginados es una obligación que se aplica por igual tanto a los Estados industrializados como a los Estados en desarrollo.³⁴⁰ Como se discutió en la Sección V.a.7 anterior, esta “igualdad de trato” es necesaria para garantizar la aplicación uniforme de los más altos estándares de consideración de aquellos que son “particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.”³⁴¹
184. Al reconocer las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas deben incorporar los principios de inclusión, participación significativa e interseccionalidad en la acción

³³⁷ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 67, citando Consejo de Derechos Humanos, *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (15 de enero de 2009), párr. 42, y Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, *Informe Climático No. 1*, párr. 81.

³³⁸ El IPCC ha observado que en la región de América Latina y el Caribe, “[l]as mujeres, particularmente las más pobres, son más vulnerables y se ven afectadas en mayor proporción. A menudo tienen menos capacidad de adaptación, lo que amplía aún más las brechas estructurales de género”. Véase Grupo de Trabajo II del IPCC, *AR6: Impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático 2022 [IPCC Working Group II, AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability]*, página 1692. Véase también la *Resolución 3/2021 de la Comisión Interamericana*, en III.19, observando que “[l]as mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos... debido a los efectos adversos del cambio climático que aumentan todas las desigualdades de género existentes”. Véase además Comité sobre Discriminación Contra la Mujer, Recomendación General No. 37 sobre las dimensiones relacionadas con el género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático.

³³⁹ Véase Ian Fry (Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático), *Proporcionar opciones legales para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas a través de fronteras internacionales debido al cambio climático*, U.N. Doc. A/HRC/53/54 (18 de abril de 2023); Balakrishnan Rajagopal (Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto), *Hacia una transformación justa: la crisis climática y el derecho a la vivienda*, U.N. Doc. A/HRC/52/27 (23 de diciembre de 2022); Saad Alfarargi (Relator Especial sobre el derecho al desarrollo), *Acción climática a nivel nacional [Climate action at the national level]*, U.N. Doc. A/HRC/48/56 (2 de julio de 2021); y Lancet, 2022, 400: 1619-54, *El informe 2022 de The Lancet sobre salud y cambio climático: la salud a merced de los combustibles fósiles [The 2022 report of the Lancet on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels]*, señalando que “las muertes anuales relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años [han aumentado] en un 68% de 2000-04 a 2017-21”. Véanse también A/67/299, A/75/208, A/66/285, A/HRC/49/61 y A/HRC/44/30. Véase también David Boyd y Marcos Orellana, *El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: medio ambiente no tóxico [The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment]*, U.N. Doc. A/HRC/49/53 (12 de enero de 2022).

³⁴⁰ Acuerdo de París, Preámbulo.

³⁴¹ Acuerdo de París, Arts. 7.5 y 7.9.

climática.³⁴² El cambio climático exacerba las desigualdades y la discriminación existentes, afectando a las personas y a las comunidades de manera diferente en función de sus condiciones medioambientales, geográficas y económicas, así como de su género, raza, estatus socioeconómico, edad y otras identidades.³⁴³

185. El principio de interseccionalidad exige que los Estados sean conscientes del hecho de que las personas pueden poseer simultáneamente varios estatus e identidades diferentes. Estas identidades superpuestas pueden agravar la vulnerabilidad de un individuo en particular.³⁴⁴
186. A nivel nacional, esta norma debería guiar las acciones de los Estados a la hora de formular políticas para hacer frente a la amenaza urgente del cambio climático. Por ejemplo, al implementar acciones climáticas, Honduras se ha comprometido a realizar consultas culturalmente sensibles, participativas e inclusivas con las comunidades afectadas, los grupos marginados y las organizaciones de la sociedad civil,³⁴⁵ permitiendo la integración de diversas perspectivas y sistemas de conocimiento en la toma de decisiones.³⁴⁶ Estados como Jamaica, Costa Rica y Bolivia han diseñado políticas y medidas climáticas para proteger y promover los derechos humanos.³⁴⁷ Este enfoque implica dar prioridad a las necesidades y vulnerabilidades de los grupos marginados y desfavorecidos, como los Pueblos

³⁴² El Programa de Trabajo de Lima Mejorado sobre Género y su plan de acción de género, Decisión 3/CP.25 (12 de diciembre de 2019), Preámbulo [*Enhanced Lima work program*].

³⁴³ *Opinión Consultiva OC-23/17*, párr. 67; CMNUCC, art. 4.8; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 16/11, 12 de abril de 2011, A/HRC/RES/16/11, preámbulo; Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible* [Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment], 1 de febrero de 2016, A/HRC/31/52, párr. 81; Consejo de Derechos Humanos, *Informe cartográfico del Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible* [Mapping report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment], John H. Knox, de 30 de diciembre de 2013, A/HRC/25/53 , párrs. 69-78, 81; Programa de trabajo de Lima mejorado, Preámbulo.

³⁴⁴ Véase Informe del Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, *Reforzar el derecho al desarrollo: una visión para el futuro*, A/HRC/54/27, 4 de agosto de 2023, párr. 12.

³⁴⁵ Véase Gobierno de la República de Honduras, Contribución Nacional Determinada de Honduras, página 26: “Honduras reafirma el compromiso de su gobierno de respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos, igualdad de género y equidad intergeneracional, comprometiéndose a asegurar una perspectiva transversal y garantizar que las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y afrohondureños tengan una participación plena y efectiva en la toma de decisiones al momento de implementar acciones climáticas, dada la gran importancia que tienen estos diferentes grupos de personas en el contexto nacional ya que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático.”

³⁴⁶ *Declaración de Río*, Principio 10; *Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador*, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Ct. Inter-Am. Serie C No. 245, párrs. 217 y 222. La Corte afirmó que “los Estados tienen la obligación de garantizar que los pueblos indígenas sean consultados adecuadamente sobre asuntos que afectan o podrían afectar su vida cultural y social [...].”

³⁴⁷ Gobierno de Jamaica, Marco de Políticas de Cambio Climático para Jamaica [*Climate Change Policy Framework for Jamaica*] (julio de 2021), páginas 44-45; Véase Estado Plurinacional de Bolivia, Contribución Nacional Determinada (CND) del Estado Plurinacional de Bolivia, página 4, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC_Bolivia-2021-2030_UNFCCC_en.pdf; Dirección General de Política Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, *Cuestionario en relación con la resolución del consejo de derechos humanos A/HRC/RES/44/7 sobre derechos humanos y cambio climático*, página 3-4, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/RightsOlderPersons/costa-rica-submission.pdf>

Indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los refugiados, entre otros.³⁴⁸

(a) Defensores del clima

187. Los defensores del medio ambiente, del clima y de los derechos humanos están protegidos por una serie de derechos humanos y, sin embargo, se ven sometidos habitualmente a amenazas, acoso, intimidación, violencia y criminalización. Sus derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y participación están protegidos por la Convención y deben ser protegidos por los Estados.³⁴⁹ Estos derechos sólo pueden restringirse en circunstancias limitadas y con una justificación convincente.³⁵⁰
188. En particular, los Estados deben proteger los derechos de los defensores del medio ambiente, la tierra y el clima pertenecientes a grupos vulnerables. Esto incluye a las mujeres, las niñas, los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes. Los Pueblos Indígenas son objeto de ataques desproporcionados por sus acciones, al igual que los defensores del medio ambiente y de la tierra. En 2021, más del 40% de todos los ataques mortales contra defensores del medio ambiente y de la tierra iban dirigidos contra Pueblos Indígenas.³⁵¹
189. Los Estados Parte que han ratificado el Acuerdo de Escazú deben “garantizar de manera proactiva y positiva un entorno seguro y propicio... para que puedan actuar libres de amenazas, restricciones e inseguridad”.³⁵² El Acuerdo exige que los Estados adopten “medidas efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales”,³⁵³ y “adopten medidas apropiadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales.”³⁵⁴ Los Estados deben proteger a los defensores individuales del medio ambiente y de la tierra y perseguir y castigar a sus opositores.

³⁴⁸ Acuerdo de París, Preámbulo; Opinión Consultiva OC-23/17, párr. 67.

³⁴⁹ Véanse Artículos 13, 15, 16 y 23 del Convenio.

³⁵⁰ Cuando lo disponga la ley y cuando sea necesario en una sociedad democrática para proteger los derechos de otros, o para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; y dichas restricciones deben ser estrictamente adaptadas y proporcionadas. Véase *Principios Marco sobre Derechos Humanos y Cambio Climático*, párr. 13 (Principio 5).

³⁵¹ Ali Hines, *Década de desafío: Diez años de informar sobre el activismo territorial y ambiental en todo el mundo [Ten years of reporting land and environmental activism worldwide]*, Global Witness (29 de septiembre de 2022), en 11, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land- y-defensores-ambientales-informe-anual-archivo/>.

³⁵² Acuerdo de Escazú, art. 9(1).

³⁵³ Id. en el Art. 9(2).

³⁵⁴ Id. en el Art. 9(3).

190. Los Estados también deben abstenerse de criminalizar a los activistas climáticos, lo que puede tener un efecto amedrentador no sólo sobre sus libertades de reunión, asociación y expresión —todos derechos protegidos por la Convención— sino también sobre el espacio cívico y el discurso democrático para el público en general.
191. Los Estados deben adoptar y aplicar leyes compatibles con las normas internacionales de derechos humanos; reconocer públicamente la contribución de los defensores del medio ambiente, la tierra y el clima a la sociedad; velar por que su labor no se criminalice ni estigmatice; colaborar con los defensores para elaborar programas eficaces de protección y alerta temprana; impartir formación adecuada a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; garantizar la investigación pronta e imparcial de las amenazas y violaciones y el enjuiciamiento de los presuntos autores; y prever indemnizaciones efectivas.³⁵⁵

(b) Mujeres, niñas y personas con diversidad de género

192. Las cargas derivadas de la emergencia climática no se distribuyen de manera uniforme. Las mujeres, que se enfrentan a estructuras sociales y responsabilidades desiguales, suelen disponer de menos recursos que los hombres. Las diferencias en la propiedad de los bienes del hogar, las mayores responsabilidades familiares, la inestabilidad del acceso a los alimentos, el agua y el combustible, y la mayor exposición a los desastres pueden “socavar la capacidad de las mujeres para lograr la independencia económica, mejorar el capital humano y mantener la salud física y mental y el bienestar.”³⁵⁶
193. Esta carga es más pesada para las mujeres de los Estados menos desarrollados y las que son vulnerables a través de identidades interseccionales.³⁵⁷ La falta de una planificación integral de desastres que tenga en cuenta las cuestiones de género ha llevado a la creación de instalaciones y mecanismos de alerta temprana que ignoran las necesidades de diversos grupos de mujeres, como las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las ancianas y las niñas, así como las personas con diversidad de género.³⁵⁸
194. Además, las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género durante y después de los desastres.³⁵⁹ Por ejemplo, los campamentos provisionales que carecen de seguridad física y de infraestructuras seguras pueden dar lugar a mayores niveles de violencia contra las

³⁵⁵ *Id.* en el párr. 11 (Principio 4).

³⁵⁶ IPCC, *Cambio climático 2022: Mitigación del cambio climático [Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change]* (2022), página 525.

³⁵⁷ *Id.* en la página 526.

³⁵⁸ *Id.*

³⁵⁹ *Id.* en el párr. 5.

mujeres y las niñas.³⁶⁰ Como ha observado la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia (incluida la violencia doméstica y de pareja) tras las catástrofes naturales,³⁶¹ la escasez de alimentos,³⁶² la ruptura de la ley y el orden,³⁶³ y la pérdida de los medios de subsistencia o del uso de la tierra.³⁶⁴ Todas estas situaciones corren un mayor riesgo de materializarse como consecuencia de la emergencia climática.

195. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha observado que las mujeres se ven “particularmente afectadas por los desastres medioambientales, las enfermedades graves e infecciosas y las diversas formas de violencia contra la mujer”.³⁶⁵ Varios órganos de tratados de la ONU, incluido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han observado que la emergencia climática exacerbía la discriminación y las desigualdades preexistentes, incluidas las que sufren las mujeres y las niñas.³⁶⁶ Al reconocer el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a los Estados a adoptar políticas que aborden la igualdad de género.³⁶⁷ Del mismo modo, el preámbulo del Acuerdo de París pide a los Estados parte que consideren específicamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
196. A la luz de estas vulnerabilidades, los Estados tienen obligaciones particulares de proteger, respetar y cumplir los derechos de las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género en el contexto de la emergencia climática. En consonancia con el principio de igualdad y no discriminación, los Estados deben garantizar de forma proactiva que las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género participen activamente en la toma de decisiones relativas al medio ambiente.³⁶⁸ A la hora de planificar la prevención y la actuación en caso de catástrofe debida al cambio climático, debe procurarse no clasificar pasivamente a las mujeres en “grupos vulnerables”,³⁶⁹ sino potenciar su participación plena y efectiva en la prevención de catástrofes. Cuando las mujeres gozan de igualdad democrática y

³⁶⁰ *Id.*

³⁶¹ *Id.* en el párr. 24.

³⁶² *Id.* en el párr. 28.

³⁶³ *Id.* en el párr. 30.

³⁶⁴ *Id.* en el párr. 39.

³⁶⁵ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 37 (2018).

³⁶⁶ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros, *Declaración Conjunta sobre Derechos Humanos y Cambio Climático [Joint Statement on Human Rights and Climate Change]* (16 de septiembre de 2019).

³⁶⁷ Consejo de Derechos Humanos de la ONU Res. 48/13, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13 (18 de octubre de 2021).

³⁶⁸ *Id.* en el párr. 26 (Principio 9).

³⁶⁹ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 37 (2018), párr. 7.

económica, sus votos han tendido a apoyar objetivos medioambientales sostenibles y políticas menos emisoras.³⁷⁰ Las políticas climáticas, por tanto, se ven reforzadas por la inclusión de las mujeres.³⁷¹

197. Los Estados deben identificar las vulnerabilidades climáticas particulares de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso dentro de sus jurisdicciones, aplicando una lente interseccional para identificar las vulnerabilidades agravadas (como las de las mujeres indígenas, las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad). Por ejemplo, cuando las mujeres y las niñas son las principales responsables del suministro de agua doméstico o comunal, los Estados deben garantizar que las mujeres participen activamente en las decisiones relativas a la adaptación del agua; que la asistencia y las políticas estatales tengan en cuenta estas responsabilidades de las mujeres y las niñas; y considerar la posibilidad de que la emergencia climática pueda exacerbar las divisiones del trabajo en función del género.³⁷² Asimismo, los Estados deben considerar cómo la seguridad de las mujeres y las niñas puede verse afectada por las presiones derivadas de la emergencia climática, incluida la escasez de agua.³⁷³
198. Como parte de sus deberes de cooperación, los Estados deben trabajar juntos para garantizar que la financiación climática refleje una presupuestación sensible al género, que los proyectos dirigidos por mujeres reciban una financiación adecuada y que los derechos y medios de vida de las mujeres se tengan en cuenta a la hora de seleccionar proyectos para su financiación.³⁷⁴ Las políticas estatales de mitigación y adaptación deben supervisarse y evaluarse desde una perspectiva de género e incorporar el análisis de riesgos de género.³⁷⁵

(c) Pueblos Indígenas

199. Como se discutió en la Sección IV.e.4 anterior, esta Corte también ha reconocido desde hace mucho tiempo que los derechos humanos de los Pueblos Indígenas son particularmente vulnerables a la degradación ambiental. Además, como se señaló en la Sección IV.e.5 supra, los Pueblos Indígenas poseen el derecho a la libre determinación.³⁷⁶ Esto incluye el derecho al consentimiento libre, previo e

³⁷⁰ IPCC, *Cambio climático 2022 [Climate Change 2022]*, página 527.

³⁷¹ *Id.*

³⁷² *Id.* en el párr. 41(a) (Principio 14); Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, U.N. Doc. A/77/136, (11 de julio de 2022), párr. 35.

³⁷³ *Id.* en los párrs. 26-27.

³⁷⁴ *Id.* en los párrs. 71-72.

³⁷⁵ *Id.* en el párr. 80.

³⁷⁶ Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 93; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 3.

- informado.³⁷⁷ Estos derechos protegidos de propiedad y autodeterminación deben ser protegidos en el contexto de la emergencia climática.
200. Un sistema climático sano y estable es necesario para la protección de los derechos indígenas. En la *Opinión Consultiva OC-23/17*, esta Corte determinó que el “derecho de los Pueblos Indígenas a la propiedad colectiva está vinculado a la protección y al acceso a los recursos que se encuentran en sus territorios, porque esos recursos naturales son necesarios para la supervivencia misma, el desarrollo y la continuidad de su forma de vida.”³⁷⁸ Los Pueblos Indígenas son especialmente vulnerables cuando los procesos de colonización les han privado de la propiedad de sus territorios tradicionales, han destinado estas tierras a las industrias extractivas y no han invertido lo suficiente en su adaptación. Esta Corte ha ordenado a los Estados, como Argentina, que tomen medidas afirmativas para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras, tales como asegurar que tengan título de propiedad sobre sus tierras y eliminar las intrusiones en sus tierras.³⁷⁹
201. Esta Corte ha enfatizado repetidamente que los grupos indígenas potencialmente afectados deben ser consultados de buena fe. Dicha consulta debe tener lugar “en las primeras etapas de un plan de desarrollo o inversión, no sólo cuando surge la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si tal es el caso.”³⁸⁰ Algunos ejemplos son los proyectos de energías renovables a gran escala³⁸¹ y los proyectos de créditos de carbono o de compensación de emisiones de carbono que pueden implicar posibles restricciones a las actividades tradicionales de los indígenas en los bosques protegidos. Además, muchos Estados Parte del Convenio tienen obligaciones relativas al consentimiento libre, previo e informado que se derivan del derecho a la libre determinación consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos de derechos humanos.

(d) Pueblos afrodescendientes

202. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los pueblos afrodescendientes se encuentran entre los más vulnerables a los efectos de la

³⁷⁷ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Arts. 10, 11, 19, 28, 29; Convenio 169 de la OIT, art. 16.

³⁷⁸ *Opinión Consultiva OC-23/17*, citando a *Yakye Axa*, párr. 137; *Sawhoyamaxa*, párrs. 121-22; *Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam*. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 209, párr. 173.

³⁷⁹ Véase, por ejemplo, *Caso Comunidades Indígenas de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina*, Sentencia de 6 de febrero de 2020 (Fondo, Reparaciones y Costas), Ct. Inter-Am. D. H. Serie C No. 400.

³⁸⁰ *Id.*

³⁸¹ *Statnett SF vs. Fosen Vind DA et al.*, Sentencia de la Corte Suprema de Noruega, HR-2021-1975-S (Casos Nos. 20-143891SIV-HRET; 20-143892SIV-HRET; 20-143893SIV-HRET), (11 de octubre de 2021).

emergencia climática.³⁸² Esta vulnerabilidad surge de la desigualdad socioeconómica existente, el racismo estructural y la exposición a la violencia.³⁸³ Los grupos afrodescendientes de entornos rurales, ribereños e insulares corren un riesgo especial, sobre todo cuando dependen de sus tierras para subsistir.³⁸⁴ Es probable que todos estos factores se vean exacerbados por la emergencia climática.

203. Los pueblos afrodescendientes se han enfrentado durante mucho tiempo a una exposición desproporcionada a graves desastres naturales, incluida la contaminación ambiental relacionada con productos químicos tóxicos y residuos. Esta exposición puede equivaler a racismo ambiental - aumenta la exposición de las personas afrodescendientes y da lugar a emergencias sanitarias, crisis humanitarias y desplazamientos forzados.³⁸⁵ Mientras tanto, el racismo estructural bloquea a las personas afrodescendientes fuera de las instituciones y procesos de toma de decisiones, lo que significa que a menudo son excluidos del diseño e implementación de políticas climáticas y ambientales.
204. Esta discriminación puede verse exacerbada en casos de vulnerabilidades cruzadas (como las mujeres y niñas afrodescendientes). Como ha reconocido la Comisión Interamericana, esta discriminación viola las garantías de igualdad y no discriminación de la Convención,³⁸⁶ así como los derechos a la autodeterminación.
205. Como parte de sus obligaciones de igualdad y no discriminación, los Estados deben considerar la posición vulnerable de las personas y comunidades afrodescendientes en el contexto de la emergencia climática. Los Estados deben asegurar proactivamente que las garantías procesales de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia estén disponibles para las comunidades afrodescendientes. Las personas y comunidades afrodescendientes deben participar en todos los niveles de la toma de decisiones relativas a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. En particular, los Estados deben considerar cómo la emergencia climática podría exacerbar las formas existentes de discriminación, incluidas las barreras a los servicios gubernamentales. Los Estados

³⁸² Véase, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *La situación de los afrodescendientes en las Américas [The Situation of People of African Descent in the Americas]*, OEA/Ser.L/V/II. Doc 62 (5 de diciembre de 2011).

³⁸³ Organización de Estados Americanos [*States Must Step Up Their Efforts to Eradicate Historical Patterns of Environmental Racism*] (21 de marzo de 2022), https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/media_center/PReleases/2022/055.asp.

³⁸⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos y REDESCA, *Derechos económicos, sociales y ambientales de las personas afrodescendientes [Economic, Social and Environmental Rights of Persons of African Descent]*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 109 (16 de marzo de 2021), párr. 193.

³⁸⁵ Organización de Estados Americanos, *Los Estados deben intensificar sus esfuerzos para erradicar patrones históricos de racismo ambiental [States Must Step Up Their Efforts to Eradicate Historical Patterns of Environmental Racism]*.

³⁸⁶ *Id.* en el párr. 12.

también deben regular las actividades empresariales para cumplir con las garantías de igualdad y no discriminación.³⁸⁷

206. Como parte de sus obligaciones de prevención y diligencia debida, los Estados deben identificar los riesgos particulares que plantean a dichas comunidades, y trabajar junto a ellas para desarrollar medidas de adaptación apropiadas. Del mismo modo, los Estados deben garantizar que los proyectos de mitigación propuestos no menoscaben los derechos de las comunidades afrodescendientes,³⁸⁸ y deben velar por el cumplimiento de los derechos a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados.³⁸⁹

6. Las obligaciones y responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática (Parte IV.F de la Solicitud de Opinión Consultiva)

207. Como se discutió en la Sección V.b.9(a) anterior, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, que está consagrado en la CMNUCC y el Acuerdo de París, reconoce que todos los Estados comparten la responsabilidad de abordar el cambio climático, pero el alcance de sus deberes puede variar en función de factores como la riqueza, las emisiones históricas, la capacidad económica, el conocimiento científico, la capacidad técnica y las necesidades de desarrollo.
208. El deber de cooperación también requiere que los Estados proporcionen asistencia científica, técnica y financiera a los Estados en desarrollo para ayudar a abordar la desigualdad fundamental que impide a los Estados más afectados responder eficazmente a las amenazas del cambio climático³⁹⁰ y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.³⁹¹
209. La cooperación interestatal implica compartir información, mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como proporcionar asistencia técnica y financiera para mejorar la capacidad de los países y comunidades vulnerables para hacer frente a los desafíos relacionados con el clima. Los países desarrollados tienen la

³⁸⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos y REDESCA, *Derechos económicos, sociales y ambientales de las personas afrodescendientes [Economic, Social and Environmental Rights of Persons of African Descent]*, OEA/Ser.II/V/II, Doc. 109 (16 de marzo de 2021), párr. 238.

³⁸⁸ *Id.* en el párr. 217.

³⁸⁹ *Id.* en el párr. 217.

³⁹⁰ Declaración escrita de la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional, Caso ITLOS No. 31 (16 de junio de 2023), página 95.

³⁹¹ CMNUCC, art. 3.4; Acuerdo de París, Arts. 6, 7.7; Protocolo de Kyoto, artículos 6 y 12; véase también Declaración escrita de la República Federativa de Brasil, Caso ITLOS n.º 31 (16 de junio de 2023), página 17.

responsabilidad de proporcionar recursos financieros³⁹² y transferencia de tecnología para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo de la región.³⁹³

210. La mayoría de los Estados Parte de la Convención son países en desarrollo.³⁹⁴ Por lo tanto, es vital que los Estados Miembros industrializados de la OEA reconozcan las obligaciones de cooperación que tienen hacia los Estados Miembros en desarrollo de la OEA.
211. Además, los artículos 4.8 y 4.9 de la CMNUCC destacan que se deben deberes específicos de cooperación a los pequeños Estados Insulares en Desarrollo, así como a los Países Menos Desarrollados.³⁹⁵ En concreto, “las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades específicas y las situaciones especiales de los países menos adelantados en su actuación con respecto a la financiación y la transferencia de tecnología”. Un ejemplo tangible es que muchos Países Menos Adelantados cuentan con extraordinarios recursos de energías renovables, pero no han podido desarrollarlos por falta de recursos financieros, normativos y técnicos. Los Estados ricos e históricamente emisores deberían hacer más para ayudar a los Países Menos Desarrollados a superar estas barreras.
212. La cooperación interestatal también debería dar prioridad a las medidas de adaptación y creación de resiliencia. Dada la vulnerabilidad de las zonas costeras y las islas, los Estados deberían colaborar en el desarrollo y la aplicación de estrategias para proteger las infraestructuras, los ecosistemas y los medios de subsistencia de los impactos del cambio climático en estas zonas desproporcionadamente afectadas. Esto puede implicar la investigación conjunta y el intercambio de conocimientos sobre la gestión de las zonas costeras, la agricultura resistente al clima, la reducción del riesgo de catástrofes y los sistemas de alerta temprana. Esto también requerirá la transferencia de recursos financieros y tecnológicos.³⁹⁶

³⁹² La asignación de préstamos climáticos y otros instrumentos distintos de las subvenciones a los Países Menos Desarrollados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) crea graves riesgos insostenibles de carga de deuda. Los Estados deben considerar que la mayoría de los países vulnerables al clima no tienen el espacio fiscal para adoptar nueva deuda (véase la declaración de Barbados “La mayoría de los países vulnerables al clima no tienen el espacio fiscal para adoptar nueva deuda”. *La Iniciativa Bridgetown 2022* (23 de septiembre de 2002); véase también Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, *Informe sobre la Financiación para el Desarrollo Sostenible 2022 [Financing for Sustainable Development Report 2022]*, página xiii, fsdr_2022.pdf (un.org)). Dado que el financiamiento climático tiene una influencia directa sobre las medidas de adaptación adoptadas por los Estados que necesitan apoyo financiero (véanse las declaraciones de Argentina sobre las acciones de adaptación, unfccc.int/resource/docs/natc/argnc3s.pdf), los proveedores de financiamiento climático deberían considerar brindar todos los servicios de adaptación. financiación en forma de donaciones, en particular para los PMA y los PEID.

³⁹³ Acuerdo de París, Arts. 9 y 10; *Declaración de Río*, Principio 9; *Declaración de Estocolmo*, Principio 20.

³⁹⁴ Por ejemplo, ningún Estado parte de la Convención figuraba en el Anexo B del Protocolo de Kyoto, que mantenía una distinción estricta entre las obligaciones de los países “desarrollados” y “en desarrollo.”

³⁹⁵ Entre los Estados Parte de la Convención, esto incluye a Haití.

³⁹⁶ CMNUCC, art. 4.1(e).

213. En consonancia con el principio de “quien contamina paga”, los Estados deben garantizar la disponibilidad de mecanismos nacionales y regionales para que las personas y las comunidades puedan reclamar reparación contra los gobiernos de los Estados -así como contra los agentes privados- por los daños causados por sus actos y omisiones en relación con la emergencia climática. Los mecanismos deben ofrecer a las víctimas de daños relacionados con el clima la oportunidad de establecer un vínculo causal entre los actos y omisiones de los Estados y los actores privados, y los daños experimentados por los individuos y las comunidades. Estos mecanismos deben basarse en los principios de la mejor ciencia disponible, el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo. Los mecanismos también deberían tener en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas.

VI. LOS ESTADOS DEBEN CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA SATISFACER SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

214. Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones de 2022 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las políticas públicas actuales sitúan al mundo en la senda de un aumento de la temperatura de 2,8 °C para finales de este siglo.³⁹⁷ Para cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos humanos ante los claros y graves desafíos que plantea la emergencia climática, los Estados deben aplicar políticas más ambiciosas para combatir el cambio climático actual y prevenir el futuro, así como para mitigar sus efectos nocivos. Para ello, los Estados deben considerar la aplicación de las medidas expuestas en esta Sección VI. Las medidas concretas que los Estados adopten en última instancia, y la forma en que las apliquen, dependerán de sus circunstancias particulares, basándose en los principios generales expuestos en la Sección V, incluidas las obligaciones diferenciadas expuestas en la Sección V.a.9.

a. Los Estados deben eliminar progresivamente la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)

215. Para limitar el calentamiento global a 1,5°C, los Estados deben eliminar rápidamente la quema de combustibles fósiles, lo que incluye el carbón, el petróleo y el gas natural, y deben sustituirlos por formas de energía renovables. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a los Estados a “dejar el petróleo, el carbón y el gas bajo tierra, que es donde deben estar”, y a canalizar las inversiones hacia las energías renovables.³⁹⁸ En la actualidad, el sector

³⁹⁷ *Informe sobre la brecha de emisiones 2022: La ventana de cierre: la crisis climática exige una transformación rápida de las sociedades* [Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate Crisis Calls for Rapid Transformation of Societies], Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, página 35, <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>.

³⁹⁸ Guterres pide eliminar gradualmente los combustibles fósiles para evitar la “catástrofe” climática [Guterres Calls For Phasing Out Fossil Fuels to Avoid Climate ‘Catastrophe’], Noticias ONU (15 de junio de 2023), <https://news.un.org/en/story/2023/06/1137747>.

energético es la fuente de cerca de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los combustibles fósiles representan casi cuatro quintas partes de nuestro suministro total de energía.³⁹⁹

216. Las políticas exitosas de transición energética requieren el compromiso y el respeto de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Los Estados deberían considerar la propuesta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, de que los procesos de transición energética justa deberían capturar el “triple dividendo” de (a) entornos más limpios; b) empleos decentes; y c) un mejor acceso a bienes y servicios asequibles.⁴⁰⁰ Los derechos laborales y sindicales también deben considerarse al diseñar e implementar políticas de transición energética, entre otros factores.⁴⁰¹
217. La Agencia Internacional de Energía estima que la transición a una economía global que produzca emisiones netas de gases de efecto invernadero cero dará como resultado enormes nuevas oportunidades de empleo, incluidos 14 millones de nuevos empleos para 2030 en el sector de la energía limpia, con una pérdida de solo 5 millones de empleos en el sector de los combustibles fósiles.⁴⁰² Sin embargo, la pérdida de empleos en el sector de los combustibles fósiles requerirá medidas para mitigar las dificultades asociadas, incluida la recapacitación de los trabajadores, la localización de nuevos empleos en energías renovables en lugares donde se pierden empleos relacionados con los combustibles fósiles y, potencialmente, la prestación de ayuda directa a las regiones más afectadas.
218. Al implementar medidas para eliminar gradualmente la quema de combustibles fósiles y emprender la transición energética, los Estados también deben ser conscientes de las obligaciones que puedan tener en virtud de tratados de inversión bilaterales o multilaterales con respecto a las inversiones realizadas por inversores extranjeros en estos sectores. Las medidas deben implementarse de manera consistente con los requisitos de estos tratados para evitar que los Estados enfrenten demandas entre inversores y Estados presentadas en virtud de estos tratados de inversión que podrían detener o frustrar el progreso de esos Estados en su transición energética. El Relator Especial sobre el Medio Ambiente ha identificado acciones

³⁹⁹ *Emisiones Netas Cero al 2050: Una Hoja de Ruta para el Sector Energético Global [Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector]*, Agencia Internacional de Energía, [“Net Zero by 2050”], página 13.

⁴⁰⁰ Olivier De Schutter, Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, *Extrema pobreza y derechos humanos [Extreme poverty and human rights]*, U.N. Doc. A/75/181/Rev.1 (7 de octubre de 2020).

⁴⁰¹ María Antonia Tigre, et al., *Litigios de transición justa en América Latina: una categorización inicial de casos de litigios climáticos en medio de la transición energética [Just Transition Litigation in Latin America: An Initial Categorization of Climate Litigation Cases Amid the Energy Transition]*, Centro Sabin de la Facultad de Derecho de Columbia para la Ley de Cambio Climático [Columbia Law School Sabin Center for Climate Change Law] (enero de 2023), citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , Resolución 3/2021 Emergencia Climática: Alcance de las Obligaciones Interamericanas de Derechos Humanos (31 de diciembre de 2021), párr. 48.

⁴⁰² *Emisiones Netas Cero al 2050: Una Hoja de Ruta para el Sector Energético Global [Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector]*, página 17.

específicas que los Estados podrían tomar para evitar demandas futuras en el marco del proceso de solución de controversias entre inversionistas y Estados y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.⁴⁰³ De manera similar, el Relator Especial sobre el derecho al desarrollo ha identificado formas en que los Estados pueden reformar los tratados de inversión existentes o promulgar nuevos tratados de inversión que apoyen el desarrollo sostenible. Tales reformas podrían incluir limitar el alcance de la jurisdicción de un tribunal arbitral constituido conforme a los tratados de inversión aplicables para decidir disputas relativas a los derechos humanos y el medio ambiente.⁴⁰⁴

1. Los Estados deberían evitar nuevas inversiones en combustibles fósiles

219. Ya en 2012, la Agencia Internacional de Energía estimó que dos tercios de las reservas probadas de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) no deberían quemarse si queremos limitar el calentamiento a 2°C.⁴⁰⁵ Un estudio similar publicado en 2015 concluyó que el 82% de las reservas conocidas de carbón, el 49 por ciento de las reservas de gas y el 33% de las reservas de petróleo no pueden quemarse si queremos evitar un cambio climático peligroso de más de 2°C.⁴⁰⁶ En 2016, la Agencia Internacional de Energía observó que “[l]a conclusión inevitable es que existe una necesidad urgente de reducciones radicales inmediatas en las emisiones de CO₂ del sector energético si queremos que haya alguna posibilidad de alcanzar el objetivo de 1,5°C”.⁴⁰⁷
220. A pesar de estas advertencias, la Agencia Internacional de Energía estima que se espera que la inversión global en el suministro de nuevos combustibles fósiles aumente más del seis por ciento en 2023, alcanzando los 950 mil millones de dólares.⁴⁰⁸ Más de la mitad de ese total –500 mil millones de dólares– es atribuible a la extracción de petróleo y gas.⁴⁰⁹
221. Los Estados deberían evitar nuevas inversiones en combustibles fósiles si quieren reducir la proporción del suministro total de energía derivada de combustibles

⁴⁰³ David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, *Pagar a los contaminadores: las consecuencias catastróficas de la solución de controversias entre inversores y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos* [Paying polluters: the catastrophic consequences of investor-State dispute settlement for climate and environment action and human rights], A/76/168 (13 de julio de 2023).

⁴⁰⁴ Véase Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, *Papel de las empresas en la realización del derecho al desarrollo* [Role of business in realizing the right to Development], U.N. Doc. A/78/160, (12 de julio de 2023), párrs. 83-85.

⁴⁰⁵ Agencia Internacional de Energía, *World Energy Outlook 2012*.

⁴⁰⁶ Christophe McGlade y Paul Ekins, “La distribución geográfica de los combustibles fósiles no utilizados al limitar el calentamiento global a 2°C” [The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C], *Nature*, vol. 517 (enero de 2015).

⁴⁰⁷ Agencia Internacional de Energía, *World Energy Outlook 2016*, página 76.

⁴⁰⁸ Agencia Internacional de Energía, *World Energy Investment 2023*, página 13.

⁴⁰⁹ *Id.*

fósiles. El alcance de dicha política podría incluir evitar la exploración y explotación de nuevos proyectos de combustibles fósiles o gas natural; optar por no construir nueva infraestructura de combustibles fósiles, como nuevos oleoductos; y no apoyar nuevos proyectos de exportación de combustibles fósiles.⁴¹⁰ La construcción de nueva infraestructura de combustibles fósiles compromete a los Estados a depender de los combustibles fósiles y a las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas.⁴¹¹ Las inversiones en nuevas actividades relacionadas con los combustibles fósiles exacerbaban la emergencia climática mundial y los Estados deberían evitarlas en la mayor medida posible.

2. Los Estados deben evitar nuevos subsidios a los combustibles fósiles y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles existentes

222. Los Estados deberían evitar nuevos subsidios a los combustibles fósiles. También deberían eliminar gradualmente los subsidios existentes, tomando en consideración acciones específicas para mitigar los efectos potencialmente adversos en los hogares de bajos ingresos.
223. Según el Fondo Monetario Internacional, los subsidios a los combustibles fósiles “tienen consecuencias fiscales considerables (que conducen a impuestos/endeudamiento más elevados o a un menor gasto), promueven la asignación ineficiente de los recursos de una economía (obstaculizando el crecimiento), fomentan la contaminación (contribuyendo al cambio climático y a las muertes prematuras por contaminación atmosférica local) y no están bien dirigidos a los pobres (beneficiando principalmente a los hogares de mayores ingresos).”⁴¹² A nivel mundial, los subsidios a los combustibles fósiles ascendieron a aproximadamente 7 billones de dólares en 2022, compuestos de 1,3 billones de dólares en subsidios explícitos y 5,7 billones de dólares en subsidios indirectos (es decir, externalidades ambientales y de salud causadas por la quema de combustibles fósiles).⁴¹³
224. Todos los miembros del G20 se han comprometido a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, pero claramente muchos no han cumplido este compromiso.⁴¹⁴

⁴¹⁰ Cleo Verkuyl, et. al, *Alinear la producción de combustibles fósiles con el Acuerdo de París: Perspectivas para el Diálogo Talanoa de la CMNUCC [Aligning fossil fuel production with the Paris Agreement: Insights for the UNFCCC Talanoa Dialogue]*, Instituto Ambiental de Estocolmo (marzo de 2018), página 2; Frank McDonald, *Dos tercios del sector energético tendrán que quedar sin desarrollar [Two-thirds of energy sector will have to be left undeveloped, Bonn conference told]*, dijo en la conferencia de Bonn, The Irish Times (12 de junio de 2013), <http://www.irishtimes.com/news/world/europe/two-thirds-del-sector-energetico-tendra-que-dejar-sin-desarrollar-la-conferencia-de-bonn-dijo-1.1425009>.

⁴¹¹ PNUMA, *Informe sobre la brecha de emisiones 2022 [Emissions Gap Report 2022]* (27 de octubre de 2022), página 41.

⁴¹² Véase Fondo Monetario Internacional, *Subsidios a los Combustibles Fósiles [Fossil Fuel Subsidies]*, <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies>.

⁴¹³ *Id.*

⁴¹⁴ *Id.* en la página 42 (citando a Falk, Gaffney et al. 2020; CAT 2022b; Clarke et al. 2022).

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible identificó al menos 53 reformas gubernamentales de políticas de subsidios implementadas entre 2015 y 2020, pero muchos subsidios siguen vigentes.⁴¹⁵ Las reformas tributarias y de subsidios pueden resultar particularmente beneficiosas si los ingresos tributarios adicionales se reinvierten en el cumplimiento de los compromisos climáticos de los estados.⁴¹⁶ La reforma de los subsidios basada en los derechos garantizará que se tengan en cuenta y protejan los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad y marginación.

3. Los Estados deberían eliminar gradualmente la extracción y el uso del carbón

218. Los Estados deberían eliminar progresivamente la extracción y el uso de carbón lo más rápido posible.⁴¹⁷ La electricidad alimentada con carbón es la mayor fuente mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, un importante contribuyente a las emisiones de mercurio a la atmósfera⁴¹⁸ y una importante fuente de cenizas tóxicas.⁴¹⁹
219. Varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas recomendaron en una declaración conjunta que los Estados deberían (a) dejar de construir inmediatamente nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón; (b) exigir que las centrales eléctricas de carbón existentes se cierren lo antes posible, y a más tardar en 2030 en los países de ingresos altos, 2040 en los países de ingresos medianos altos y 2050 en todos los demás; c) poner fin inmediatamente a todas las subvenciones para todas las acciones relacionadas con las centrales eléctricas alimentadas con carbón y la extracción de carbón térmico; y (d) poner fin

⁴¹⁵ Lourdes Sanchez, Peter Wooders y Ronja Bechauf, *53 formas de reformar los subsidios y los precios al consumo de combustibles fósiles [53 ways to reform fossil fuel consumer subsidies and pricing]*. Iniciativa Global de Subsidios, Instituto Internaciona para el Desarrollo Sostenible (19 de agosto de 2020), <https://www.iisd.org/articles/deep-dive/53-ways-reform-fossil-fuel-consumer-subsidies-and-pricing>.

⁴¹⁶ Philipp M. Richter, Roman Mendelevitch y Frank Jotzo, *Los impuestos al carbón como política climática del lado de la oferta: ¿una justificación para los grandes exportadores? [Coal taxes as supply-side climate policy: a rationale for major exporters?]* Cambio Climático (2018); Laura Merrill, *Financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles: oportunidades en el sudeste asiático, India y China [Financing the Sustainable Development Goals through Fossil Fuel Subsidy Reform: Opportunities in Southeast Asia, India and China]*. Instituto Internaciona para el Desarrollo Sostenible (2014).

⁴¹⁷ “Declaración conjunta de expertos en derechos humanos de la ONU: Acelerar el fin de la era del carbón para proteger los derechos humanos” [“Joint Statement by UN human rights experts – Accelerate the end of the coal era to protect human rights.”] (29 de octubre de 2021), disponible en https://www.ohchr.org/en/statements/2021/11/declaracion-conjunta-expertos-en-derechos-humanos-accelerate-end-coal-era-protect-human?LangID=E&NewsID=27740#_edn1 [Declaración conjunta], citando *Las Implicaciones del Acuerdo de París para el Uso del Carbón en el Sector Energético [Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power Sector]*, Climate Analytics (noviembre de 2016); Dan Welsby, James Price, Steve Pye y Paul Ekins, *Combustibles fósiles inexistentes en un mundo con una temperatura de 1,5°C [Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world.]*. Nature 597, 230–234 (8 de septiembre de 2021), <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03821-8>.

⁴¹⁸ Declaración Conjunta, citando a la Evaluación global del mercurio de 2018 [*2018 Global Mercury Assessment*], PNUMA (4 de marzo de 2018).

⁴¹⁹ Declaración Conjunta.

inmediatamente a todo financiamiento de exportaciones para todas las acciones relacionadas con centrales eléctricas alimentadas con carbón y extracción de carbón térmico, con la única excepción de tecnologías de reducción de la contaminación que no prolongan la vida útil de una central eléctrica.⁴²⁰

220. La mayoría de los Estados reconocen la urgente necesidad de poner fin a la dependencia del carbón, incluidos los Estados sudamericanos. En la COP26, Ecuador y Chile, junto con más de 40 Estados más, firmaron la “Declaración de Transición Global del Carbón a Energía Limpia”, comprometiéndose a evitar nuevas inversiones en carbón y abandonar la generación de energía a partir de carbón lo antes posible.⁴²¹ Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay se encuentran entre los muchos Estados signatarios de la Powering Past Coal Alliance (PPCA), que se compromete a evitar nuevas inversiones en carbón y abandonar la generación de energía con carbón.⁴²²
221. Chile es un ejemplo de la posibilidad de eliminar rápidamente la electricidad alimentada con carbón. Hace cinco años, en Chile estaban en funcionamiento 28 centrales eléctricas a carbón. A mediados de 2023 ya se habían cerrado 8. Chile planea cesar las operaciones de todas las centrales eléctricas de carbón restantes para 2040⁴²³ y está trabajando en una hoja de ruta para hacerlo para 2030.⁴²⁴
222. Las estrategias de eliminación progresiva del carbón deben tomar en consideración los derechos humanos. Los Estados deben permitir que los empleados y trabajadores afectados por las políticas de transición justa participen en el proceso de eliminación. En algunos casos, las comunidades pueden requerir una transición más rápida. En Colombia, por ejemplo, las comunidades indígenas Wayuu trataron de acelerar la eliminación progresiva del carbón iniciando una demanda para anular un permiso medioambiental concedido para ampliar una mina de carbón.⁴²⁵

⁴²⁰ Declaración Conjunta.

⁴²¹ “Declaración de transición global del carbón a la energía limpia” [“Global Coal to Clean Power Transition Statement”], Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el Reino Unido 2021, (4 de noviembre de 2021), disponible en https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230313120149/https://ukcop26.org/_declaración-de-transición-global-del-carbón-a-energía-limpia/.

⁴²² “PPCA Declaration”, Powering Past Coal Alliance, https://poweringpastcoal.org/wp-content/uploads/PPCA-Declaration_Text-1.pdf.

⁴²³ Véase Prohibe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, Boletín 13196-12, Leg. 367 (9 de enero de 2020) véase también Energy Partnership Chile-Alemania, Eliminación del Carbón en Chile [*Coal Phase-out in Chile*].

⁴²⁴ Véase Prohibe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica, Boletín 13196-12, Leg. 367 (9 de enero de 2020) véase también Energy Partnership Chile-Alemania, Eliminación del carbón en Chile. Véase Chile prepara hoja de ruta para deshacerse del carbón hacia 2030 [*Chile prepares roadmap to ditching coal by 2030*], Renewables Now, <https://renewablesnow.com/news/chile-prepares-roadmap-to-ditching-coal-by-2030-830363/>

⁴²⁵ Consejo de Tribunales Administrativos del Estado de Colombia, *Comunidades Indígenas Wayúu y otros v. Ministerio de Ambiente y otros por permiso ambiental para la Mina Cerrejón*, 11001-0324-000-2019-00107-00, presentado en 2019.

4. Los Estados deben reducir y eliminar progresivamente la producción actual de petróleo y gas

223. Para cumplir el objetivo de reducir el calentamiento global a 1.5C, los Estados también deben reducir la producción actual de petróleo y gas, que representa aproximadamente el 15% de las emisiones relacionadas con energía a nivel mundial, sumando un total de 5,100 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.⁴²⁶ Para alcanzar ese objetivo, los países más ricos deben tomar la iniciativa en la eliminación progresiva de la producción de petróleo y gas.⁴²⁷ Esto refleja el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. La Agencia Internacional de Energía calcula que se necesitaría una inversión inicial de US\$600,000 millones para reducir a la mitad la intensidad de las emisiones de las operaciones de petróleo y gas en todo el mundo para 2030, lo que supone menos de dos terceras partes de la cantidad que se gastará en nuevas explotaciones de petróleo y gas sólo en 2023.⁴²⁸

5. Los Estados deben reducir las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta

224. Los Estados deben reducir las emisiones de metano, carbono negro y otros contaminantes climáticos de vida corta resultantes de la extracción, transportación y quema de combustibles fósiles, incluyendo mediante la adopción de tecnologías de reducción que sean rentables, y abordando las emisiones que provienen de la agricultura, la industria del petróleo y el gas, el transporte y la cocina y calefacción.
225. La rápida reducción de las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta es fundamental para el esfuerzo mundial contra el cambio climático.⁴²⁹ Las investigaciones estiman que el metano tiene un potencial de calentamiento global alrededor de 30 veces superior al del CO₂.⁴³⁰ Además, el carbono negro tiene un

⁴²⁶ *Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions: A World Energy Outlook Special Report on the Oil and Gas Industry and COP 28*, Agencia Internacional de Energía (Junio 2023), <https://www.iea.org/reports/emissions-from-oil-and-gas-operations-in-net-zero-transitions>.

⁴²⁷ Greg Mutitt, *Countries Must Phase Out Oil and Gas Production – and Quickly: But How Fast is Fast Enough?*, Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable (Mar. 23, 2022), <https://www.iisd.org/articles/analysis/phase-out-oil-gas-production>.

⁴²⁸ *Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions: A World Energy Outlook Special Report on the Oil and Gas Industry and COP 28*, Agencia Internacional de Energía (Junio 2023).

⁴²⁹ *Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022*, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Oct. 27, 2022), citando Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 2021 and IPCC 2022. Ver también Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, *Advances in Climate Change Research*, Volumen 13, Edición 4, Agosto 2022, páginas 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>.

⁴³⁰ “The Gas Industry in Latin America and the Caribbean,” Project on Organization, Development, Education and Research, (Dic. 2022), https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Gas-2022_EN.pdf. [PODER].

impacto sobre el calentamiento global hasta 1,500 veces mayor que el CO₂ por unidad de masa.⁴³¹

226. Los Estados del Continente Americano deben actualizar las contribuciones determinadas a nivel nacional para incluir la reducción de emisiones de metano, carbono negro y otros contaminantes climáticos de vida corta. Por ejemplo, México y Costa Rica han integrado los contaminantes climáticos de vida corta en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. México tiene el objetivo de reducir las emisiones de carbono negro al menos en un 51% para 2030⁴³², mientras que Costa Rica busca reducir dichas emisiones al menos en un 20% para 2030.⁴³³
227. Los Estados han demostrado voluntad para cooperar a nivel internacional para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta mediante la firma de acuerdos y compromisos internacionales como la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal,⁴³⁴ que aborda la eliminación progresiva de los hidrofluorocarbonos, y el Compromiso Mundial del Metano, firmado por más de 100 países, entre ellos Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.⁴³⁵ Los participantes que se adhirieron al Compromiso Mundial del Metano acordaron tomar medidas voluntarias para contribuir a un esfuerzo colectivo para reducir las emisiones mundiales de metano para el año 2030 al menos 30% con respecto a los niveles de 2020, lo que podría eliminar más de 0,2°C de calentamiento para el año 2050.⁴³⁶
228. La Agencia Internacional de Energía propuso que podrían adoptarse tecnologías de reducción rentables para reducir las emisiones de metano, como la sustitución de los dispositivos existentes, la instalación de nuevos dispositivos y la detección y reparación de fugas para abordar el escape y explosiones de las instalaciones de

⁴³¹ “Black Carbon,” Coalición por el Clima y Aire Limpio, <https://www.ccacoalition.org/short-lived-climate-pollutants/black-carbon>.

⁴³² Ver *Progress on Climate Action in Latin America: Nationally Determined Contributions as of 2019*, Euroclima+ Thematic Studies Serie 13, <https://www.euroclima.org/images/Destacados/2020/Estudio-Avances-INGLES-20-5-2020.pdf>.

⁴³³ Ver Secretaría de la Coalición por el Clima y Aire Limpio, “Sustainability leader Costa Rica Makes Short-Lived Climate Pollutants Key to Decarbonization” (Nov. 4, 2021), <https://www.ccacoalition.org/news/sustainability-leader-costa-rica-makes-short-lived-climate-pollutants-key-decarbonization>.

⁴³⁴ Ver Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (Oct. 15, 2016), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en. [la Enmienda de Kigali]. Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela han ratificado la Enmienda de Kigali, mientras que la República Dominicana, El Salvador, México y Paraguay han aceptado la Enmienda de Kigali.

⁴³⁵ Global Methane Pledge, <https://www.globalmethanepledge.org/>.

⁴³⁶ *Id.*

producción de petróleo y gas.⁴³⁷ La eliminación de llamaradas rutinarias y la captura y utilización del gas asociado reducirían significativamente las emisiones de carbono negro.⁴³⁸ Colombia introdujo un plan de acción para reducir el metano a través de su Estrategia Nacional de Mitigación de Contaminantes Climáticos de Vida Corta. Además, Ecuador y Perú se han comprometido a reducir a cero la quema rutinaria para 2030.⁴³⁹ En 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos sostuvo que Ecuador violaba el derecho a un medio ambiente sano al permitir la quema de gas, violando también los compromisos internacionales de Ecuador.⁴⁴⁰ La Corte ordenó a Ecuador que procediera a la eliminación progresiva de todas las quemadas de gas antes de la fecha límite de diciembre de 2030.⁴⁴¹

229. Una de las formas más eficaces de abordar las emisiones de carbono negro en el sector del transporte es regular las emisiones diésel de los vehículos de carretera y todoterreno. Una normativa eficaz podría requerir hacer obligatorio los filtros de partículas y la adopción de tecnologías libres de hollín, como los vehículos eléctricos y Euro VI.⁴⁴² Por ejemplo, para afrontar parcialmente las emisiones del sector del transporte, Argentina anunció en 2022 su Ley de Electromovilidad, que prohíbe la venta de vehículos con motor de combustión interna a partir de 2041 y crea un plan de apoyo a la electromovilidad.⁴⁴³
230. Para hacer frente a la quema residencial de combustibles sólidos para cocinar y para la calefacción, que es el segundo sector más importante de emisiones de carbono negro en América del Sur,⁴⁴⁴ se recomienda a los Estados que establezcan programas nacionales o regionales para que los hogares lleven a cabo la transición

⁴³⁷ Methane Tracker, Agencia Internacional de Energía, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker#iea-total-sources>.

⁴³⁸ Sun, Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volumen 13, Edición 4, Agosto 2022, páginas 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06>.

⁴³⁹ Methane Tracker, International Energy Agency, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker#iea-total-sources>.

⁴⁴⁰ Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, *Herrera Carrion et al. v. Ministry of the Environment et al. (Caso Mecheros)* (2020).

⁴⁴¹ *Id.*

⁴⁴² Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volumen 13, Edición 4, Agosto 2022, páginas 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>

⁴⁴³ “Law project for the Promotion of Sustainable Mobility,” Agencia Internacional de Energía (actualizado en Mar. 10, 2022).

⁴⁴⁴ Ver *Integrated Assessment of Short-lived Climate Pollutants in Latin America and the Caribbean*, Climate & Clean Air Coalition (2018), <https://www.ccacoalition.org/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-pollutants-latin-america-and-caribbean>.

hacia métodos de cocción y calefacción más limpios, dando prioridad a los subsidios dirigidos a hogares de bajos ingresos.⁴⁴⁵

b. Los Estados deben aumentar la producción de energías renovables

231. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la producción y el uso de energía son responsables de dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y, por lo tanto, la transformación del sector energético hacia un sector basado en energías renovables debe estar en el centro de los esfuerzos para hacer frente al cambio climático.⁴⁴⁶ La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluyó que el aumento de la inversión en energías renovables y el acceso equitativo a las mismas contribuye a los esfuerzos de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos de prevenir y mitigar los efectos adversos del cambio climático.⁴⁴⁷ Esto se consigue fomentando el crecimiento económico, contribuyendo a los medios de subsistencia y a las oportunidades de trabajo digno, mejorando la salud y el bienestar de la población y mejorando el nivel de vida de las personas que viven en condiciones de pobreza dando mayor acceso y precios más accesibles a las fuentes de energía renovables.⁴⁴⁸
232. Se calcula que para el año 2050 la electricidad representará casi el 50% del consumo total de energía y se espera que casi el 90% de dicha generación de electricidad proceda de fuentes renovables, con la eólica y la solar contribuyendo conjuntamente casi el 70% de la generación de electricidad.⁴⁴⁹ En 2022, Sudamérica generó el 63% de su electricidad a partir de fuentes limpias, cuya cifra es superior a la del promedio mundial de 39%. Uruguay y Chile tienen los porcentajes más altos de energía eólica y solar.⁴⁵⁰ La participación en la producción de electricidad a partir de energías limpias en 2021/2022 de varios países parte de la Convención, incluyendo Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

⁴⁴⁵ Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volumen 13, Edición 4, Agosto 2022, páginas 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>. Ver también “Black Carbon,” Climate & Clean Air Coalition, <https://www.ccacoalition.org/short-lived-climate-pollutants/black-carbon>.

⁴⁴⁶ *Renewable Energy and the Right to Development: Realizing Human Rights for Sustainable Development*, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/KMEnergy-EN.pdf>.

⁴⁴⁷ *Id.*

⁴⁴⁸ *Id.*

⁴⁴⁹ Agencia Internacional de Energía, *Net Zero by 2050* (May 2021), páginas 18-19.

⁴⁵⁰ “Latin America and Caribbean: Clean power replacing emissions-intensive fossil fuels,” Ember (actualizado en Mayo 2023), <https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/latin-america-and-caribbean/>. Ver también “Wind and solar overtake coal in Chile,” Ember (Oct. 25, 2022), <https://ember-climate.org/insights/research/wind-and-solar-overtake-coal-in-chile/>

estaba por encima del promedio a nivel mundial.⁴⁵¹ América del Sur ha sido también “especial en cuanto a ser la única región que en los últimos siete años aumentó la energía limpia lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda creciente de electricidad y reducir la generación de energía a partir de combustibles fósiles.”⁴⁵²

233. Sin embargo, es necesario hacer más. Para cumplir los objetivos de producción de energía renovable, los Estados deben seguir eliminando los obstáculos a la expansión de las energías renovables de forma que todos los miembros de la sociedad puedan participar y beneficiarse de forma inclusiva. El Secretario General de la ONU esbozó tres acciones críticas para transformar los sistemas energéticos y acelerar el cambio hacia las energías renovables: (a) las políticas gubernamentales deben cambiar los subsidios de los combustibles fósiles a las energías renovables; (b) las inversiones privadas y públicas en energías renovables deben triplicarse hasta alcanzar al menos \$4 billones de dólares al año; y (c) los Estados deben asegurar, ampliar y diversificar el suministro de componentes críticos y materias primas para las tecnologías de energías renovables. Cabe destacar que el coste de los proyectos de energías renovables ya no es un obstáculo económico importante, puesto que tecnologías como la eólica y la solar son, en la mayoría de los casos, más baratas que el carbón y otros combustibles fósiles.⁴⁵³
234. Las tecnologías de energías renovables también deberían tratarse como bienes públicos mundiales esenciales y de libre acceso. En relación con el derecho a la ciencia, los Estados deberían esforzarse por eliminar los obstáculos al intercambio de conocimientos y a la transferencia de tecnología, incluyendo las limitaciones en materia de propiedad intelectual.⁴⁵⁴ Entre dichas transferencias tecnológicas, el conocimiento en torno a los métodos de almacenamiento en baterías reviste una importancia cada vez mayor. En 2022, la Organización de las Naciones Unidas instó a los Estados a crear una coalición mundial en materia de almacenamiento en baterías para acelerar su innovación y despliegue.⁴⁵⁵
235. Los Estados deben crear marcos y reformar las estructuras burocráticas para igualar las condiciones de las energías renovables. Esto ayudará a garantizar que los proyectos de energías renovables no se vean obstaculizados por la burocracia, los permisos y las dificultades para acceder a las conexiones a la red. Por ejemplo, la

⁴⁵¹ *Id.*

⁴⁵² Małgorzata Wiatros-Motyka, “Global Electricity Review 2023,” Ember (Abr. 12, 2023), <https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2023/#chapter-3-the-big-picture-close-to-a-tipping-point-where-clean-sources-meet-all-demand-growth>.

⁴⁵³ Mensaje en vídeo del Secretario General de las Naciones Unidas con motivo de la presentación del Informe sobre el Estado del Clima Mundial 2021 de la Organización Meteorológica Mundial (Mayo 18, 2022).

⁴⁵⁴ Mensaje en vídeo del Secretario General de las Naciones Unidas con motivo de la presentación del Informe sobre el Estado del Clima Mundial 2021 de la Organización Meteorológica Mundial (Mayo 18, 2022).

⁴⁵⁵ *Id.*

rápida transformación de los sistemas eléctricos exige que los gobiernos establezcan nuevas regulaciones de mercado para el acceso y la conexión a la red, así como para su suministro.⁴⁵⁶ Dichas regulaciones deberían, entre otras cosas, promover el despacho de una mayor proporción de energías renovables, en comparación con los combustibles fósiles.⁴⁵⁷

c. Los Estados deben gestionar la transición energética de forma responsable, teniendo en cuenta los derechos humanos en la explotación de minerales críticos para dicha transición

236. Ciertos minerales, que se han denominado "minerales de transición", serán esenciales para la transición energética.⁴⁵⁸ Los Estados deben asegurar, ampliar y diversificar el suministro de componentes críticos y materias primas para las tecnologías de energías renovables. En comparación con los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles, las tecnologías de energías limpias -incluidas las turbinas eólicas, las redes de electricidad y los vehículos eléctricos- requieren más metales como litio, molibdeno, cobalto, cobre, níquel, manganeso y zinc.⁴⁵⁹ Sin embargo, los Estados deben garantizar que la explotación y producción de estos minerales de transición proteja y respete los derechos humanos de las comunidades afectadas.
237. América del Sur representa el 40% de la producción mundial de cobre, encabezada por Chile (27%), Perú (10%) y México (3%).⁴⁶⁰ La región también suministra el 35% del litio mundial, con Chile (26%) y Argentina (6%) a la cabeza. Bolivia y México también cuentan con importantes recursos de litio.⁴⁶¹ Además, América del Sur también tiene un importante potencial en grafito, níquel, manganeso y elementos inusuales de la tierra.⁴⁶²

⁴⁵⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, *Emissions Gap Report 2022* (Oct. 27, 2022), página 40 (citando Falk, Gaffney et al. 2022).

⁴⁵⁷ Ver *Id. Ver* también “Power system digitalisation is crucial for clean energy transitions and security in developing markets, but investment is lagging”, Agencia Internacional de Energía, (Junio 6, 2023), <https://www.iea.org/news/power-system-digitalisation-is-crucial-for-clean-energy-transitions-and-security-in-developing-markets-but-investment-is-lagging>.

⁴⁵⁸ Ver Marcos Orellana (Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos), *The toxic impacts of some proposed climate change solutions*, U.N. Doc. A/HRC/54/25 (Julio 13, 2023).

⁴⁵⁹ “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions,” Agencia Internacional de Energía (Mar. 2022), <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf>. [IEA: Role of Critical Minerals]

⁴⁶⁰ “Latin America’s opportunity in critical minerals for the clean energy transition”, Agencia Internacional de Energía (Abr. 7, 2023), <https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>

⁴⁶¹ *Id. Ver* “Top ten biggest lithium mines in the world,” Mining Technology (Ago. 30, 2019), <https://www.mining-technology.com/features/top-ten-biggest-lithium-mines/>.

⁴⁶² “Latin America’s opportunity in critical minerals for the clean energy transition”, Agencia Internacional de Energía (Abr. 7, 2023), <https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>

238. Las Américas son, y seguirán siendo, una región importante en la extracción y procesamiento de minerales críticos para la transición hacia energías limpias. Sin embargo, los Estados deben legislar y hacer cumplir altos estándares ambientales, sociales y de gobierno, maximizar los beneficios públicos y asegurar beneficios tangibles para las comunidades locales.⁴⁶³ Si no se gestiona correctamente, el desarrollo de los minerales podría acarrear consecuencias negativas, como (a) emisiones significativas de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades de minería y procesamiento; (b) impactos medioambientales negativos como la pérdida de biodiversidad, el agotamiento y la contaminación del agua, la contaminación relacionada con los residuos y la contaminación atmosférica; (c) catástrofes masivas como los recientes derrumbes de presas de residuos en Brasil; (d) el impacto social derivado de la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos, las muertes y lesiones de trabajadores y la población; y (e) abusos contra los derechos humanos, como el trabajo infantil, el trato desigual a mujeres y niñas, y los efectos devastadores sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.⁴⁶⁴
239. Además, la energía limpia debería utilizarse en el aprovechamiento sostenible de los minerales. El cambio de combustibles, la electricidad baja en emisiones de carbono y la inversión en eficiencia energética pueden reducir significativamente la huella de emisiones de la producción de minerales a corto plazo.⁴⁶⁵ Según la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones derivadas del desarrollo de los minerales no anulan las ventajas climáticas de las energías limpias;⁴⁶⁶ sin embargo, el consumo mixto de electricidad y el avance de la futura descarbonización tendrán un impacto significativo en el perfil de emisiones de la producción de minerales.⁴⁶⁷
240. Los Estados centrados en el desarrollo de minerales de transición deben garantizar que se respeten y protejan los derechos humanos de las poblaciones afectadas. Los pueblos indígenas se encuentran entre los más afectados por las actividades de extracción, incluso en América del Sur. Según las Naciones Unidas:

Se calcula que más del 50 por ciento de los recursos minerales que quedan en el mundo y que son el blanco de las empresas mineras se encuentran en tierras comunitarias reclamadas por los pueblos indígenas. En el caso de los recursos de cobre y uranio, estas estimaciones aumentan hasta el 70 por ciento. Se prevé que la demanda de litio, el nuevo "oro blanco", se multiplique por diez en la próxima década, y este aumento de la demanda está

⁴⁶³ *Id.*

⁴⁶⁴ IEA: Role of Critical Minerals.

⁴⁶⁵ *Id.* páginas 201-207.

⁴⁶⁶ *Id.* página 194.

⁴⁶⁷ *Id.* página 200.

desencadenando una nueva oleada de invasiones de territorios indígenas por parte de las industrias extractivas en Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia y Argentina, donde se encuentra el 60 por ciento de los recursos mundiales de litio. Entre los afectados por la minería del litio se encuentra la comunidad Pai-Ote del pueblo Colla, en el sector Cordillera de la Región de Atacama, en el norte de Chile, que se ha manifestado para protestar contra el profundo impacto de dicha minería en sus reservas de agua y en sus condiciones de vida, y cuyos representantes han sido criminalizados y amenazados por manifestar su oposición.⁴⁶⁸

241. Los Estados deben garantizar que la extracción de minerales de transición no afecte los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado, con respecto a la explotación de minerales críticos dentro de sus territorios.

d. **Los Estados deben evitar la dependencia desmedida de las tecnologías de eliminación del carbono y garantizar el respeto de los derechos humanos en la aplicación de dichas tecnologías**

1. **Las Tecnologías de Bioenergía, Captura y Almacenamiento de Carbono y Captura Directa de Aire plantean preocupaciones en materia de derechos humanos**

242. Los métodos de eliminación de carbono incluyen tanto procesos naturales (como la forestación y la gestión del suelo agrícola) como métodos artificiales (como la captura directa en el aire) y opciones híbridas (como la bioenergía combinada con la captura y el almacenamiento de carbono y la eliminación de carbono en los océanos).⁴⁶⁹ La eliminación del carbono puede desempeñar un papel importante en los esfuerzos mundiales de descarbonización al reducir las emisiones en industrias especialmente difíciles de descarbonizar⁴⁷⁰ (como las industrias siderúrgica, cementera y química),⁴⁷¹ produciendo electricidad e hidrógeno bajos en carbono y eliminando de la atmósfera el dióxido de carbono existente.⁴⁷²

⁴⁶⁸ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, *State of the World's Indigenous Peoples*, Volumen 5 (2021), <https://social.desa.un.org/sites/default/files/publications/2023-03/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples-Vol-V-Final%20%282%29.pdf>.

⁴⁶⁹ World Resources Institute, *Carbon Removal*.

⁴⁷⁰ Esin Serin, *What is carbon capture, usage and storage (CCUS) and what role can it play in tackling climate change?*, London School of Economics and Political Science Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Mar. 13, 2023).

⁴⁷¹ Samantha Gross, *The challenge of decarbonizing heavy industry*, Brookings (Junio 2021), <https://www.brookings.edu/articles/the-challenge-of-decarbonizing-heavy-industry/>.

⁴⁷² Esin Serin, *What is carbon capture, usage and storage (CCUS) and what role can it play in tackling climate change?*, London School of Economics and Political Science Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Mar. 13, 2023).

243. Dos de las tecnologías de eliminación de carbono más destacadas son la Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono y la Captura Directa de Aire. La Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono implica la captura y almacenamiento permanente de dióxido de carbono procedente de procesos que generan energía a partir de biomasa.⁴⁷³ La Captura Directa de Aire implica la extracción directa de dióxido de carbono del aire, en contraste con la captura de carbono, que captura el dióxido de carbono en el punto de emisión.⁴⁷⁴ Esta tecnología extrae el dióxido de carbono del aire creando reacciones químicas que reaccionan selectivamente con el dióxido de carbono y lo atrapan, dejando pasar otras partículas del aire.⁴⁷⁵ El dióxido de carbono capturado se almacena bajo tierra o se utiliza en la fabricación de productos.⁴⁷⁶
244. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático han identificado varias formas en que estas tecnologías limitan el desarrollo sostenible y plantean peligros para la vida humana y el medio ambiente.⁴⁷⁷ Las tecnologías de eliminación del carbono conllevan riesgos significativos para la salud en los procesos de captura y transporte.⁴⁷⁸ Las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono requieren un gran consumo de agua y energía, y dejan secuelas en forma de residuos, contaminación y productos químicos..⁴⁷⁹ Las comunidades locales -incluidos los Pueblos Indígenas, los pescadores y otros pueblos de las zonas rurales- se enfrentan a los riesgos más graves de exposición a las repercusiones negativas de estas tecnologías.⁴⁸⁰
245. La bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono podría afectar al derecho a la alimentación. Para operar a escala, este enfoque requeriría desviar grandes extensiones de tierra y volúmenes de agua de la producción de alimentos hacia el cultivo de biomasa.⁴⁸¹ Se basa en el cultivo de biomasa primaria o secundaria para generar combustible.⁴⁸² La biomasa primaria incluye maíz, trigo, soja, pasto varilla

⁴⁷³ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Actividades de Remoción bajo el mecanismo del Artículo 6.4, página 61, sección 7.7.

⁴⁷⁴ Agencia Internacional de Energía, *Direct Air Capture: A key technology for net zero*, Abril 2022, página 3.

⁴⁷⁵ *Id.*

⁴⁷⁶ *Id.* at page 46.

⁴⁷⁷ Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, *Impact of New Technologies Intended for Climate Protection on the Enjoyment of Human Rights*, U.N. Doc. A/HRC/54/47 (Ago. 10, 2023). párrafo 19.

⁴⁷⁸ *Id.*

⁴⁷⁹ Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, *Impact of New Technologies Intended for Climate Protection on the Enjoyment of Human Rights*, U.N. Doc. A/HRC/54/47 (Ago. 10, 2023) párrafo 16.

⁴⁸⁰ *Id.* párrafo 18.

⁴⁸¹ Philipp Günther y Felix Ekardt, *Human Rights and Large-Scale Carbon Dioxide Removal: Potential Limits to BECCS and DACCS Deployment*, Land (2022), <https://doi.org/10.3390/land11122153>, página 3.

⁴⁸² *Id.*

y sauce, mientras que la biomasa secundaria incluye biomasa de origen no alimentario.⁴⁸³

246. Suponiendo que la biomasa primaria siga siendo la fuente de biocombustibles, la aplicación generalizada de esta tecnología probablemente afectaría al suministro de alimentos y vulneraría el derecho a la alimentación de determinadas comunidades.⁴⁸⁴ Los estudios proyectan que para limitar el calentamiento global a 1,5°C, se estima que sería necesario dedicar entre 380 y 700 millones de hectáreas de tierra a cultivos para biocombustibles, lo que se traduce en la conversión del 7% al 25% de la tierra de uso agrícola del mundo y del 25% al 46% de la tierra de cultivo arable y permanente para el año 2100.⁴⁸⁵ Estas conversiones del uso de la tierra crearían una mayor inseguridad alimentaria y provocarían un aumento de los precios de los alimentos.⁴⁸⁶
247. La tecnología de Captura Directa de Aire podría afectar al derecho al agua. Los sistemas de Captura Directa de Aire tienen distintos grados de necesidades de agua. Los sistemas de Captura Directa de Aire con solventes requieren de 1 a 7 toneladas de agua para capturar una tonelada de dióxido de carbono, mientras que ciertos sistemas basados en sorbentes requieren 1,6 toneladas de agua por tonelada de dióxido de carbono capturado.⁴⁸⁷ El uso generalizado de estas tecnologías provocaría probablemente un aumento de la demanda y de la competencia por el suministro de agua dulce, así como una subida del precio del agua.⁴⁸⁸ Actualmente se espera que el precio del agua aumente entre 20% y 30% de aquí al 2050, y el aumento del precio del agua afectará de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables del Sur Global.⁴⁸⁹ La bioenergía y la tecnología de captura y almacenamiento de carbono también requerirían grandes cantidades de fertilizantes, lo que probablemente empeoraría la contaminación del agua y, por tanto, afectaría a la disponibilidad de agua limpia.⁴⁹⁰
248. El uso a gran escala de estas tecnologías también puede vulnerar el derecho a un medio ambiente sano. La producción de biomasa también puede conducir a la deforestación, que se analiza con más detalle en la Sección VI.e. La producción de biomasa también puede conducir a importantes emisiones de gases de efecto

⁴⁸³ *Id.*

⁴⁸⁴ *Id.* página 4.

⁴⁸⁵ *Id.* página 9.

⁴⁸⁶ *Id.*

⁴⁸⁷ Katie Lebling, Haley Leslie-Bole, Zach Byrum, y Liz Bridgwater, *6 Things to Know About Direct Air Capture*, World Resources Institute (Mayo 2, 2022), <https://www.wri.org/insights/direct-air-capture-resource-considerations-and-costs-carbon-removal>.

⁴⁸⁸ *Id.* at page 10.

⁴⁸⁹ *Id.*

⁴⁹⁰ *Id.*

invernadero y a la contaminación atmosférica, que repercuten en los esfuerzos por crear un medio ambiente más sano. La Suprema Corte de Hawaii concluyó recientemente que la concesión de un permiso a una central eléctrica de biomasa violaría el derecho a un medio ambiente limpio y sano (derecho protegido por la constitución de dicho estado) debido al volumen de emisiones de gases de efecto invernadero producidas. Las promesas del peticionario de compensar esas emisiones fueron desestimadas al considerarse especulativas e inadecuadas.⁴⁹¹

249. La gran extensión de terreno que requiere la producción de biomasa también agravará la pérdida de biodiversidad.⁴⁹² La captura de dióxido de carbono, su transporte a través de tuberías y su almacenamiento durante períodos de tiempo indeterminados aumenta los riesgos de fuga, lo que tendría efectos perjudiciales para la crisis climática, los ecosistemas y la biodiversidad.⁴⁹³
250. La gran extensión de terreno que requiere la producción de biomasa también agravará la pérdida de biodiversidad.⁴⁹⁴ La captura de dióxido de carbono, su transporte a través de tuberías y su almacenamiento durante períodos de tiempo indeterminados aumenta los riesgos de fuga, lo que tendría efectos perjudiciales para la crisis climática, los ecosistemas y la biodiversidad.⁴⁹⁵

2. Los Estados deben preservar y restaurar los ecosistemas naturales que mitigan el carbono

251. Los Estados deben preservar y restaurar sus ecosistemas naturales de mitigación del carbono, los cuales absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Los tribunales han hecho cumplir las obligaciones de los Estados de preservar tales recursos. Un tribunal de Colombia, por ejemplo, falló en contra del Gobierno colombiano en un caso en el que el Gobierno no estaba preservando los páramos o sumideros naturales de carbono. La Corte Constitucional de Colombia estimó que las medidas del gobierno que permitían la actividad minera en los páramos violaban el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.⁴⁹⁶ La Corte Suprema de México dictaminó de forma similar que el Estado debe

⁴⁹¹ Suprema Corte del Estado de Hawaii, *In the matter of Hawai'i Electric Light Company*, SCOT—22—0000418, Decisión de 13 Mar. 2023.

⁴⁹² *Id.* página 11.

⁴⁹³ *Id.*

⁴⁹⁴ *Id.* página 11.

⁴⁹⁵ *Id.*

⁴⁹⁶ Decisión C-298/16 de Junio 8, 2016, Corte Constitucional de Colombia, <http://climatecasechart.com/non-us-case/decision-c-298-16-of-june-8-2016/>.

proteger los ecosistemas de manglar, otro sumidero natural de carbono, para cumplir el derecho a un medio ambiente sano.⁴⁹⁷

3. Los Estados deben garantizar la protección de los derechos humanos en cualquier implementación de programas de mercados de carbono, incluidos los créditos forestales

252. Los mercados de carbono están destinados a facilitar el cumplimiento obligatorio o voluntario de los regímenes de reducción de emisiones de carbono. Estos regímenes permiten la compra y venta de créditos ambientales que buscan representar una reducción, evitamiento, almacenamiento o captura de emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden utilizarse para compensar emisiones en otro lugar.⁴⁹⁸ Los Estados deben asegurarse de que las posibles reducciones de emisiones a través de los mercados de carbono no se produzcan a expensas de los derechos humanos. Proyectos anteriores de compensación de emisiones en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto⁴⁹⁹ han estado relacionados con abusos de los derechos humanos, incluidos traslados forzados y asesinatos de activistas medioambientales.⁵⁰⁰ Algunos proyectos de compensación de carbono violaron los derechos de los pueblos indígenas al desplazarlos de su territorio de manera forzosa.⁵⁰¹
253. Además de los abusos contra los derechos humanos, estudios científicos recientes han revelado graves problemas en relación con la legitimidad de ciertos créditos de carbono.⁵⁰² Hay informes que indican que la industria de los créditos de carbono se caracteriza por afirmaciones exageradas, una supervisión deficiente, informes

⁴⁹⁷ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Amparo 307/2016, (Nov. 14, 2018).

⁴⁹⁸ Megan Stubbs, Katie Hoover, y Jonathan L. Ramsuer, *Agriculture and Forestry Offsets in Carbon Markets: Background and Selected Issues*, Congressional Research Service, Doc. No. R46956, (Nov. 3, 2021), Background and Selected Issues, page 2.

⁴⁹⁹ Tal y como se establece en el artículo 12 del Protocolo de Kioto, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio permite a un Estado comprometido con un determinado objetivo de reducción o limitación de emisiones poner en marcha un proyecto de reducción de emisiones en países en desarrollo, que puede obtener un crédito de reducción de emisiones comercializable, equivalente a una tonelada de dióxido de carbono. Este crédito puede aplicarse al cumplimiento del compromiso de ese país en virtud del Protocolo de Kioto. *Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*, Art. 12.; *The Clean Development Mechanism*, United Nations Climate Change, [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism#:~:text=The%20Clean%20Development%20Mechanism%20\(CDM,reduction%20project%20in%20developing%20countries](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism#:~:text=The%20Clean%20Development%20Mechanism%20(CDM,reduction%20project%20in%20developing%20countries).

⁵⁰⁰ Human Rights Watch, *COP28: Carbon Market Rules Should Protect Rights* (Mar. 7, 2023), <https://www.hrw.org/news/2023/03/07/cop28-carbon-market-rules-should-protect-rights#:~:text=Some%20were%20also%20linked%20to,to%20be%20fraudulent%20and%20exploitative>.

⁵⁰¹ Human Rights Watch, *COP27: Governments Should Reject Weak Carbon Market Rules* (Nov. 14, 2022), <https://www.hrw.org/news/2022/11/14/cop27-governments-should-reject-weak-carbon-market-rules>.

⁵⁰² Thales A. P. West, et al., *Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation*, Science (Ago. 25, 2023), doi: 10.1126/science.adc3535.

inexactos y una sobreacreditación generalizada.⁵⁰³ Según ciertas investigaciones, los responsables de la toma de decisiones que utilizan créditos de carbono se benefician económicamente del exceso de créditos.⁵⁰⁴ Adicionalmente, las comunidades vulnerables suelen quedar excluidas de las consultas críticas y los esfuerzos por informar a las poblaciones afectadas son poco entusiastas, lo que da lugar a graves violaciones de los derechos humanos.⁵⁰⁵

254. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas razonables para prevenir esos daños previsibles, ya sean causados por agentes privados o públicos.⁵⁰⁶ En cumplimiento de su deber de prevenir los daños previsibles, los Estados tienen la obligación de evaluar los riesgos e impactos de los mercados de carbono.⁵⁰⁷ Dado los abusos anteriores de derechos humanos relacionados con los proyectos de compensación de carbono, los Estados pueden razonablemente prever que pueden producirse daños potenciales en futuros proyectos de compensación, y tienen la obligación de evaluar si pueden producirse tales impactos adversos y tomar medidas para prevenirlos.

e. **Los Estados deben reducir y acabar con la deforestación**

255. La deforestación, que es la conversión de tierras anteriormente forestales a otro uso permanente, es una de las actividades humanas con mayor impacto adverso sobre el clima de la Tierra.⁵⁰⁸ La deforestación, junto con la agricultura y los cambios en el uso de la tierra, constituye el 24% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.⁵⁰⁹ La deforestación también contribuye a la pérdida de biodiversidad, pérdidas económicas, problemas de salud humana e impactos medioambientales perjudiciales.⁵¹⁰
256. La agricultura es responsable de casi el 88,1% de la deforestación mundial, mientras que el desarrollo urbano y de infraestructuras representa alrededor del

⁵⁰³ Nina Lakhani, *Revealed: Top Carbon Offset Projects May Not Cut Planet-Heating Emissions*, The Guardian (Sept. 19, 2023), <https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions-greenhouse-gases>;

⁵⁰⁴ Barbara Haya et. al, *Quality Assessment of REDD+ Carbon Credit Projects, Executive Summary*, Goldman School of Public Policy (Sept. 15, 2023) página 2, <https://gspp.berkeley.edu/research-and-impact/centers/cepp/projects/berkeley-carbon-trading-project/redd#media-coverage>.

⁵⁰⁵ *Id.* página 6.

⁵⁰⁶ Comunicación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a la 21^a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, *Understanding Human Rights and Climate Change*.

⁵⁰⁷ Center for Int'l Env't Law, *Rights, Carbon, Caution: Upholding Human Rights under Article 6 of the Paris Agreement* (2021), <https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2021/02/Rights-Carbon-Caution.pdf>, page 10.

⁵⁰⁸ David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment), *Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, U.N. Doc. A/74/161 (Julio 15, 2019).

⁵⁰⁹ *Id.*

⁵¹⁰ Clare Balboni, Aaron Berman, Robin Burgess, Benjamin A. Olken, *The Economics of Tropical Deforestation* (Sept. 1, 2022).

6,1%, y el 5,8% restante se atribuye a otras causas.⁵¹¹ El pastoreo es el principal motor de la deforestación en las Américas, causando casi tres cuartas partes de la deforestación en América del Sur y cerca de la mitad de la deforestación en América del Norte y Centroamérica.⁵¹²

257. En *Generaciones Futuras v. el Ministerio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Otros*, la Corte Suprema de Colombia determinó que la deforestación de la porción colombiana de la selva del Amazonas constitúa una violación del derecho a un medio ambiente sano y de otros derechos humanos. La Corte declaró que la deforestación del Amazonas supone una amenaza “inminente y grave” para las generaciones presentes y futuras debido a su impacto en el cambio climático.⁵¹³
258. Mientras que acabar con la deforestación es la mejor manera de detener esta forma de emisión de gases de efecto invernadero, los Estados también deberían considerar la aplicación de medidas destinadas a restaurar las tierras ya degradadas, convirtiendo dichas tierras en bosques secundarios.⁵¹⁴
259. Mientras que acabar con la deforestación es la mejor manera de detener esta forma de emisión de gases de efecto invernadero, los Estados también deberían considerar la aplicación de medidas destinadas a restaurar las tierras ya degradadas, convirtiendo dichas tierras en bosques secundarios.⁵¹⁵

El objetivo de no dejar a nadie atrás no solo debe incluir a las personas sino también a las plantas y los animales, sin los cuales las personas no pueden sobrevivir. Dado que el derecho al desarrollo no es una licencia para destruir el planeta o socavar la capacidad de las generaciones futuras de hacer realidad sus legítimas aspiraciones de desarrollo, habría que poner freno a la idea de un crecimiento económico infinito y centrarse más en garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos existentes respetando los límites planetarios.⁵¹⁶

f. Los Estados deben aumentar sus niveles de financiamiento climático

260. Como se ha comentado en la Sección III, el nivel actual de los fondos destinados al clima es insuficiente para prevenir, frenar o responder a las consecuencias globales

⁵¹¹ FRA 2020 Remote Sensing Survey, FAO Forestry Paper 186, FAO (2022)

⁵¹² *Id.*

⁵¹³ Suprema Corte de Colombia, *Demand Generaciones Futuras v. Minambiente*, Decisión de Abr. 5, 2018.

⁵¹⁴ Tik Root, “Tropical forests can recover from deforestation very fast, new study finds,” The Washington Post (Dic. 9, 2021).

⁵¹⁵ Tik Root, “Tropical forests can recover from deforestation very fast, new study finds,” The Washington Post (Dic. 9, 2021).

⁵¹⁶ Ver Surya Deva (Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo), *Reinvigorating the right to development: A vision for the future*, U.N. Doc. A/HRC/54/27 (Ago. 4, 2023), Sección V.F.

de la emergencia climática.⁵¹⁷ Según el Fondo Monetario Internacional, se necesitan \$5 billones de dólares en inversiones anuales para 2030 en todo el mundo para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales 2 billones de dólares deben invertirse en mercados emergentes y economías en desarrollo.⁵¹⁸ Al igual que en otros lugares, la financiación de la lucha contra el cambio climático sigue siendo insuficiente en todo el Continente Americano. En América del Norte, la financiación anual para hacer frente al cambio climático representa entre una sexta y una tercera parte de la cantidad que se requiere.⁵¹⁹ La situación es más grave en América del Sur y el Caribe, donde el monto de financiamiento destinado a la lucha contra el cambio climático es mucho menor, representando sólo entre una octava y una cuarta parte de la cantidad que se requiere.⁵²⁰ Los miembros industrializados de la OEA deberían aumentar su apoyo financiero a las acciones climáticas de los miembros en vías de desarrollo de la OEA, especialmente los Estados menos desarrollados y los Pequeños Estados Insulares en Vías de Desarrollo.

261. De conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, los Estados deben dedicar el máximo de recursos disponibles al cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito. En el contexto de la emergencia climática, esto significa asignar el máximo de recursos financieros, materiales y humanos disponibles para la transición a las energías renovables, el transporte limpio y la agricultura agroecológica; detener e invertir la deforestación y el deterioro del suelo; y aumentar la capacidad de adaptación, especialmente en las comunidades vulnerables y marginadas.
262. El financiamiento de las estrategias e iniciativas de mitigación y adaptación ha aumentado en todo el mundo, pero sigue estando por debajo de las necesidades mundiales actuales. Por ejemplo, el financiamiento de los países industrializados hacia los países en vías de desarrollo nunca ha alcanzado el compromiso de \$100,000 millones de dólares anuales asumido inicialmente en la COP15 de la CMNUCC en Copenhague en 2009 y reiterado en el Acuerdo de París.⁵²¹ El Informe de las Naciones Unidas sobre la Brecha de Adaptación de 2022 reveló que, en 2020, los países industrializados sólo se comprometieron a aportar un financiamiento combinado para mitigación y adaptación de \$83,300 millones de

⁵¹⁷ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, página 1963.

⁵¹⁸ “IMF says private sector needs to shoulder most of climate investment burden.” Reuters (Octubre 2, 2023), <https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/imf-says-private-sector-needs-shoulder-most-climate-investment-burden-2023-10-02/#:~:text=Of%20the%20%245%20trillion%20in,about%2080%25%20of%20these%20investments>.

⁵¹⁹ *Emissions Gap Report 2022*, UNEP (Oct. 27, 2022), página xxvii.

⁵²⁰ *Id.* página xxvii.

⁵²¹ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, páginas 28-29.

dólares.⁵²² Para limitar el calentamiento a 1,5 °C o 2 °C, la inversión anual media necesaria para el periodo comprendido entre 2020 y 2030 es aproximadamente de tres a seis veces superior a los niveles actuales.⁵²³ Las Naciones Unidas estiman que la cifra anual necesaria para el financiamiento de actividades de adaptación sólo para los países en vías de desarrollo podría oscilar entre \$215,000 y \$387,000 millones de dólares.⁵²⁴ Estas estadísticas revelan la disparidad entre los niveles actuales de financiación para la lucha contra el cambio climático y lo que necesitan los países para mitigar y adaptarse a los retos relacionados con el cambio climático.

263. En la Sección 1(c) del Artículo 2 del Acuerdo de París, los Estados reconocieron la necesidad de un financiamiento transformador para la lucha contra el cambio climático. Esta disposición tiene como objetivo fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, incluso a través de “situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.”⁵²⁵
264. De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo de París y sus obligaciones en materia de derechos humanos, los Estados tienen el deber de abstenerse de dirigir flujos de financiación hacia cualquier política o acción que sea incompatible con una estrategia de bajas emisiones y/o un desarrollo resiliente al clima.⁵²⁶ Por lo tanto, los Estados deben adoptar políticas y presupuestos acordes con la obligación de asignar adecuadamente sus presupuestos nacionales para mitigar y reducir las emisiones de efecto invernadero, restaurar los sumideros naturales de carbono y emprender acciones de adaptación adecuadas para proteger a las comunidades vulnerables.
265. La sección 2 del artículo 2 del Acuerdo de París también prevé una aplicación que refleje “la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.”⁵²⁷ Por lo tanto, los Estados deben enmarcar sus obligaciones en función de las circunstancias nacionales y las necesidades presupuestarias, y asignar financiación pública en sus presupuestos cuando no se disponga de financiación privada. En *PSB et al. v. Brazil (sobre el Fondo Climático)*, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que el poder ejecutivo tiene el deber constitucional de ejecutar y asignar fondos para mitigar el cambio climático,

⁵²² Paul Watkiss, Georgia Savvidou, Pieter Pauw, y Dipesh Chapagain, “Chapter 3: Global progress on adaptation financing in developing countries,” en *Adaptation Gap Report 2022*, UNEP, página 18.

⁵²³ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, página 29.

⁵²⁴ *Adaptation Gap Report 2023*, UNEP (Nov. 2, 2023), <https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2023>.

⁵²⁵ Acuerdo de París, Art. 2.

⁵²⁶ *Id.*

⁵²⁷ *Id.*

basándose, entre otras cosas, en el derecho constitucional a un medio ambiente sano y en los compromisos de Brasil conforme al Acuerdo de París.⁵²⁸

1. Los Estados deben ser proactivos al superar los obstáculos que impiden una financiación adecuada

266. La brecha en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático se debe principalmente a cuatro factores: (a) la no aplicación del principio de “quien contamina paga”; (b) la no movilización del máximo de recursos disponibles; (c) la carga insostenible de la deuda para muchos Estados de bajos recursos, pequeños Estados insulares en vías de desarrollo y otros Estados vulnerables al clima; y (d) la falta de acceso a capital a tasas accesibles para proyectos de mitigación y adaptación. Para superar estos retos, los Estados deben ser más proactivos a la hora de superar las barreras sistémicas del actual sistema financiero internacional. El Secretario General de la ONU ha pedido a los Estados que se replanteen la financiación de la lucha contra el cambio climático exigiendo acciones más decisivas y directas.⁵²⁹ Este llamado a la acción se ha materializado en múltiples iniciativas internacionales, como la “Iniciativa Bridgetown 2.0”, que busca reformar el sistema financiero internacional.⁵³⁰
267. La Iniciativa Bridgetown 2.0 destaca seis áreas de acción clave para adoptar medidas concretas de apoyo a todos los Estados en vías de desarrollo, entre ellas: (a) proporcionar apoyo de liquidez de al menos \$100,000 millones de dólares de derechos especiales de desembolso no utilizados a través del FMI y los bancos multilaterales de desarrollo; (b) restablecer la sostenibilidad de la deuda mediante la reestructuración de la deuda soberana con tipos de interés bajos a largo plazo; (c) aumentar los préstamos oficiales para el desarrollo del sector hasta alcanzar los \$500,000 millones de dólares anuales de estímulo a la inversión en swaps de desarrollo sostenible (que se analizan más adelante); (d) movilizar más de \$1,5 billones de dólares al año de inversión privada en la transformación verde; (e) modificar la gobernanza y la administración de las instituciones financieras internacionales para que su gestión y supervisión sean más equitativas e inclusivas; y (f) crear un sistema de comercio internacional que apoye las energías verdes y las transformaciones que se requieren.⁵³¹

⁵²⁸ Suprema Corte de Brasil, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brasil*, ADPF 708, (Julio 1, 2022)

⁵²⁹ Masayoshi Suga, *With clock ticking for the SDGs, UN Chief and Barbados Prime Minister call for urgent action to transform broken global financial system*, UN (Abr. 26, 2023), <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2023/04/press-release-with-clock-ticking-for-the-sdgs-un-chief-and-barbados-prime-minister-call-for-urgent-action-to-transform-broken-global-financial-system/>.

⁵³⁰ *Id.*

⁵³¹ Relaciones Públicas, *Bridgetown Initiative 2.0 Highlights Six Key Action Areas*, Servicio de Información del Gobierno de Barbados, <https://gisbarbados.gov.bb/blog/bridgetown-initiative-2-0-highlights-six-key-action-areas/>.

2. Los Estados deben considerar poner un precio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero

273. La fijación de precio del carbono es un mecanismo conforme al cual los costos externos de las emisiones de gases de efecto invernadero (i.e. daños a la cosecha, costos de salud como consecuencia de las sequías y olas de calor y pérdida de propiedades causada por la elevación del nivel del mar e inundaciones) están conectados a la fuente.⁵³² La fuente entonces pagará por unidad de contaminación climática emitida.⁵³³ La fijación de precio del carbono cambiará la carga de pagar por contaminación de gases de efecto invernadero del público a los contaminadores, forzando a estos últimos a optar por modificar sus actividades o continuar emitiendo gases y pagando el precio. La fijación de precio del carbono ha sido diseñada de diferentes formas, sin embargo, para ser más efectiva, deberá ser implementada a manera de que se prevean incrementos en el tiempo a efecto de cambiar el comportamiento del emisor. Los fondos que se generen de la fijación del precio del carbono podrían ser utilizados para cerrar la brecha del financiamiento del carbono que se mencionó anteriormente.
274. En la actualidad, únicamente se les ha fijado un precio a una cuarta parte de las emisiones de carbono en el mundo. El Fondo Monetario Internacional ha propuesto expandir esta cobertura mediante la implementación de un acuerdo que fije un precio mínimo internacional del carbono, el cual haría que los Estados pagaran un precio mínimo entre US\$25 - US\$75 por tonelada de carbono en función de su nivel de desarrollo económico.⁵³⁴ Un precio internacional del carbono ayudaría a acelerar la descarbonización.
275. Las industrias de aviación comercial y de transporte marítimo internacional son las mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, estas industrias liberan billones de toneladas de CO₂ al año.⁵³⁵ Se prevé que las emisiones de estas industrias continúen aumentando en las siguientes décadas. Asimismo, las emisiones de CO₂ de estas industrias en gran medida no se encuentran reguladas y no están sujetas a mecanismos de tarificación de carbono.⁵³⁶
276. Para hacer frente a las emisiones de gas de efecto invernadero de estas industrias, los Estados deberán aplicar el principio de quien contamina paga y establecer impuestos por contaminación de carbono que puedan ser redistribuidos a los

⁵³² "What is Carbon Pricing?", Carbon Pricing Dashboard", The World Bank, <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/what-carbon-pricing>.

⁵³³ *Id.*

⁵³⁴ Jean Chateau, Florence Jaumotte, y Gregor Schwerhoff, "Por qué los países deben colaborar en los precios del carbono?," Fondo Monetario Internacional (19 de mayo de 2022), <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/05/19/blog-why-countries-must-cooperate-on-carbon-prices>

⁵³⁵ Ver *Maritime Shipping*, The International Council on Clean Transportation, <https://theicct.org/sector/maritime-shipping/>; ver también *Tracking Aviation*, International Energy Agency, <https://www.iea.org/energy-system/transport/aviation>.

⁵³⁶ *Id.*

Estados de bajo ingreso, Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y otros Estados vulnerables al clima.⁵³⁷ Se han propuesto múltiples modelos de impuesto, como por ejemplo un impuesto de \$100 por tonelada de CO₂ emitido por la transportación marítima y \$25 por pasajero de transporte aéreo.⁵³⁸

3. Los Estados deben considerar participar en esquemas colaborativos, incluyendo los canjes de deuda por acción climática

277. Los Estados deben hacer una colaboración internacional para explorar inversiones bilaterales y multilaterales así como estructuras de capital que sean benéficas para el ambiente, derechos humanos y todas las partes que participen. La mayoría de los Estados menos desarrollados no han podido invertir de manera adecuada en la recuperación, acción climática y desarrollo sostenible debido a limitaciones de capital y cargas de endeudamiento insostenible. Algunos deben obtener recursos de los mercados de capitales internacionales a tasas de interés mucho más altas que los Estados industrializados.⁵³⁹
278. Sin embargo, ciertas estructuras de inversión pueden ayudar a los Estados a obtener financiamiento climático. Un ejemplo son los canjes por desarrollo sostenible, los cuales podrían redireccionar los pagos de servicio de la deuda hacia inversiones en desarrollo sostenible y acción climática. Los canjes de deuda por acción climática podrían estructurarse para permitir que los países acreedores destinen el valor de la deuda perdonada para el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Por ejemplo, Bolivia y Conservation International firmaron el primer convenio para el canje de deuda por naturaleza en 1987, en virtud del cual Conservation International adquirió EUA\$650.000 de la deuda soberana de Bolivia en el mercado secundario a un precio descontado a cambio de que Bolivia asumiera el compromiso de destinar 3,7 millones de hectáreas para crear tres áreas de conservación como zonas de amortiguación.⁵⁴⁰ Sin embargo, los Estados deberían siempre cerciorarse que los canjes de deuda por acción climática y de deuda por naturaleza incluyan salvaguardias para garantizar la protección de derechos humanos, sean desarrollados consultando a las comunidades que pudieran verse afectadas, respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y que las personas cuyos derechos hayan sido presuntamente afectados tengan acceso a la justicia mediante mecanismos de reparación eficaces.

⁵³⁷ *Id.* en página 4.

⁵³⁸ *Id.* en página 50.

⁵³⁹ *United Nations Secretary-General's SDG Stimulus to Deliver Agenda 2030*, UN (Feb. 2023).

⁵⁴⁰ J. P. Resort, *Debt-for-nature swaps: a decade of experience and new directions for the future*, FAO.

- g. Los Estados deben implementar supervisión y programas de educación para crear conciencia sobre la emergencia climática**
- 279. Para promover la alfabetización climática y, por lo tanto, promover la participación de la comunidad y el compromiso político, los Estados deben, si aquellos sistemas de educación incluyesen educación sobre el cambio climático basado en la ciencia, contratar educadores y abordar los aspectos éticos, políticos, culturales y económicos del cambio climático.⁵⁴¹ Por ejemplo, la República Dominicana adoptó la Ley sobre la Educación y la Comunicación Ambiental, cuyo objetivo es incorporar la educación climática en todos los niveles del sistema educativo del país.⁵⁴² El objetivo que el país estableció es entrenar a 200 maestros en educación climática para 2024 e integrar por completo la educación climática a las instituciones de formación para la docencia para el 2030.⁵⁴³
- 280. De igual manera, Colombia adoptó la Política Nacional de Cambio Climático en 2017, la cual describe las formas de hacer frente a la difusión de información sobre la educación, capacitación y conciencia pública, ciencia y tecnología y administración, planeación y financiamiento del cambio climático.⁵⁴⁴ El objetivo que establece dicha política es aumentar la alfabetización climática en el sistema educativo del país.⁵⁴⁵ Colombia además creó los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental los cuales se encargan de implementar las políticas nacionales en materia ambiental y sobre educación climática conforme a los lineamientos locales de cada región.⁵⁴⁶

VII. PÉRDIDAS Y DAÑOS

- 281. Las “pérdidas y daños”, son el tercer pilar indispensable para la acción climática y se refiere tanto al daño económico como al no económico que resulta de la emergencia climática. Los daños económicos incluyen impactos medibles como son el daño a la infraestructura, gastos para reconstruir, el incremento de los gastos de salud y las pérdidas agrícolas. Los daños no económicos se refieren a los impactos negativos del cambio climático que son difíciles pero no imposibles de fijar un valor en dólares, como lo son el trauma por haber vivido eventos climáticos

⁵⁴¹ Climate Literacy is the Key to Reversing Climate Change, Earth Day (Apr. 19, 2023), [https://www.earthday.org/climate-literacy-is-the-key-to-reversing-climate-change/#:~:text=The%20Education%20International%20Manifesto%20on,science%2C%20\(3\)%20addressing%20the](https://www.earthday.org/climate-literacy-is-the-key-to-reversing-climate-change/#:~:text=The%20Education%20International%20Manifesto%20on,science%2C%20(3)%20addressing%20the).

⁵⁴² Climate Change Laws of the World, Dominican Republic, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, <https://climate-laws.org/geographies/dominican-republic>.

⁵⁴³ Christina Kwuak, *The Climate Change Education Ambition Report Card*, Education International Research (Sept. 28, 2021), <https://www.ei-ie.org/en/item/25344:the-climate-change-education-ambition-report-card>, page 45.

⁵⁴⁴ Getting every school climate-ready: How countries are integrating climate change issues in education, UNESCO (2021), unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379591/PDF/379591eng.pdf.multi.

⁵⁴⁵ *Id.*

⁵⁴⁶ *Id.*

traumáticos, la pérdida de tradiciones y comunidad, los impactos en los derechos culturales y el desalojo.

282. Las pérdidas y daños incluyen tanto efectos inesperados de fenómenos meteorológicos extremos incluyendo huracanes, tifones, ondas de calor e incendios forestales, así como fenómenos meteorológicos de evolución lenta como el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura de la tierra, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, las sequías y la desertificación.
283. El IPCC reconoce que la posibilidad de exceder los límites de adaptación aumenta a medida que la dimensión y el paso del cambio climático se acelera. Cuando los esfuerzos de prevención, mitigación y adaptación no son exitosos o son imposibles de implementar, se vuelve necesario afrontar las pérdidas y daños *post facto*.
284. Los países firmantes del Acuerdo de Paris reconocen “*la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático*”⁵⁴⁷. Asimismo, los acuerdos de COP27 reconocen la importancia de afrontar las pérdidas y los daños relacionados con el cambio climático mediante el acuerdo por parte de los Estados de establecer un fondo de daños y pérdidas para comunidades vulnerables impactadas por el cambio climático.
285. Además de cumplir con sus obligaciones para hacer frente a las pérdidas y daños conforme a los acuerdos internacionales ambientales y climáticos, los Estados deben adherirse al derecho internacional en materia de derechos humanos al afrontar las pérdidas y daños relacionadas con el cambio climático. Las pérdidas y daños causadas por el cambio climático impactan fundamentalmente los derechos reconocidos en el derecho internacional en materia de derecho humano – incluyendo, *inter alia*, los derechos a la vida, alimentos, agua, salud, bienestar, cultura y a un ambiente limpio, sano y sustentable.
286. Las comunidades e individuos con más necesidad de contar con protecciones internacionales para derechos humanos también tienden a ser los más vulnerables a pérdidas y daños causados por el cambio climático. Afrontar de manera efectiva las pérdidas y daños causados por o relacionados con la emergencia climática requiere de una estrategia basada en derechos humanos.
287. Los Estados deben actuar con urgencia para poner en funcionamiento el Fondo de Pérdidas y Daños (acordado en el COP27) y proporcionar la cantidad de recursos necesarios, la cual se estima ser entre \$290,000 y \$580,000 millones anuales.⁵⁴⁸ La mayor parte de los fondos deberán provenir de los Estados que actual e

⁵⁴⁷ Acuerdo de Paris, Art. 8.

⁵⁴⁸ Anil Markandya & Mikel González-Eguino (2018): *Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A Critical Review*. In: Mechler R., Bouwer, L., Schinko, T., Surminski, S. Linnerooth-Bayer, J. (eds): *Loss and damage from climate change. Concepts, methods and policy options*. Springer, pages 343-362.

históricamente han sido los Estados con emisiones altas, con base en el principio del que contamina paga.

288. En el diseño y operación del Fondo, los Estados deben incorporar en sus esfuerzos los principios en materia de derechos humanos de manera proactiva para garantizar que los mecanismos de reparación sean justos y eficaces. Los esfuerzos de los Estados para obtener resarcimiento y reparación por las pérdidas y daños, deben incorporar y respetar en todo momento los derechos humanos fundamentales, incluyendo la no discriminación y acceso a medios de reparación efectiva.
289. El Fondo no solo debe destinarse a remediar injusticias pasadas que sufrieron los Estados vulnerables y su población, sino que debe también adoptar una postura hacia futuro que busque fortalecer las comunidades locales para hacer frente a los daños ambientales inevitables y, al mismo tiempo, previniendo la repetición de los daños. Según se señala en los Principios Maastricht de 2023, los Estados deben establecer programas nacionales e internacionales de reparación de los derechos humanos de las futuras generaciones que incluyan los principios de restitución, compensación y satisfacción.⁵⁴⁹ Cuando la restitución no sea posible, las víctimas deben recibir compensación ya sea monetaria o en especie. Finalmente, la satisfacción de las reparaciones de las generaciones futuras incluye la divulgación pública y absoluta de las causas y condiciones que dieron pie a las violaciones, mecanismos para proporcionar a las víctimas una explicación de los hechos veraz y detalles de la violación, así como sanciones administrativas y judiciales contra los responsables de dichas violaciones.
290. Los fondos y las obligaciones de pérdidas y daños están enfocados principalmente en crear un marco prospectivo para hacer frente a los daños actuales y futuros causados por la emergencia climática. La existencia de dicho marco no debe utilizarse como base para excluir el derecho a ser restituido por el daño causado como consecuencia de acciones y omisiones de los Estados en el pasado. El derecho al acceso a la justicia, incluyendo los derechos a los medios de reparación, son elementos fundamentales del derecho a un ambiente saludable.

VIII. CONCLUSIÓN

291. El respeto, protección y observancia de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente limpio, saludable y sustentable (incluyendo, *inter alia*, el derecho a un ambiente seguro, ecosistemas y diversidad saludable y a un ambiente no tóxico), puede ser un catalizador crucial para estimular los cambios urgentes, sistémicos y transformativos necesarios para alcanzar un futuro sustentable. Los derechos humanos empoderan a la población y promueven la rendición de cuentas mediante la imposición de obligaciones de cumplimiento forzoso a los gobiernos para implementar acciones efectivas para hacer frente a la crisis del planeta.

⁵⁴⁹ Ver Los Principios de Maastricht sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras (adoptados el 3 de febrero de 2023).

292. En vista de la emergencia climática que la humanidad enfrenta, cada molécula de gas con efecto invernadero cuenta. No hay emisiones marginales o insignificantes. No hay tiempo que perder. Conforme a la afirmación del IPCC, “Cada parte del calentamiento importa, cada año importa, cada decisión importa.”⁵⁵⁰

⁵⁵⁰ IPCC, *Global Warming of 1.5°C*, Foreword at (vi).

Presentado respetuosamente:

Marcos Orellana.

DR Boyd

Deva

Marcos Orellana

David Boyd

Surya Deva

Relator Especial sobre Relator Especial sobre Relator Especial sobre el
Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos y Medio Derecho al Desarrollo
Derechos Humanos Ambiente

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Advisory Opinion on Climate Emergency and Human Rights

Amicus brief submitted by the UN Special Rapporteurs on Toxics and Human Rights (Marcos Orellana), Human Rights and the Environment (David Boyd), and the Right to Development (Surya Deva)

22 November 2023

TABLE OF CONTENTS

I.	EXECUTIVE SUMMARY	1
II.	EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS OF THE UN RAPPORTEURS	4
a.	Admissibility of the submission of the UN Rapporteurs	5
b.	The UN Rapporteurs are independent experts on the connections between the climate emergency and human rights.....	5
1.	Dr. Marcos Orellana: UN Special Rapporteur on Toxics & Human Rights	5
2.	Dr. David Boyd: UN Special Rapporteur on Human Rights & the Environment.....	6
3.	Mr. Surya Deva: UN Special Rapporteur on the Right to Development.....	6
III.	THE ANTHROPOGENIC RELEASE OF GREENHOUSE GASES HAS CREATED A CLIMATE EMERGENCY WHICH THREATENS PROTECTED RIGHTS	7
a.	The climate emergency is a global phenomenon that poses an existential threat to humankind	7
b.	The climate emergency adversely impacts the Americas and the Caribbean.....	9
c.	The climate emergency will worsen	10
IV.	THE CLIMATE EMERGENCY IMPAIRS HUMAN RIGHTS	12
a.	The major organs of the Inter-American human rights system have recognized that the climate emergency imperils Convention rights.....	13
b.	UN human rights bodies have recognized that the climate emergency impairs human rights.....	14
c.	International environmental laws recognize that the climate emergency impairs human rights.....	16
d.	Interpretation of the Convention should be guided by the principle of systemic integration	17
e.	Protected rights impaired by the climate emergency	18
1.	The climate emergency impairs the right to life, including its necessary conditions	19

2.	The climate emergency impairs the rights to health, food, water, and sanitation	21
3.	The climate emergency impairs the right to a healthy environment.....	23
4.	The climate emergency impairs the rights of Indigenous Peoples, including their right to property	25
5.	The climate emergency impairs the right to self-determination	27
6.	The climate emergency impairs the right to home, privacy, and family life	30
V.	STATE OBLIGATIONS IN THE CONTEXT OF THE CLIMATE EMERGENCY	31
a.	Governing principles.....	31
1.	International cooperation	32
2.	Prevention of environmental harm.....	33
3.	Precaution	36
4.	Polluter pays principle	36
5.	Best available scientific knowledge.....	37
6.	Non-regression.....	38
7.	Equality and non-discrimination.....	39
8.	Intergenerational equity	40
9.	Differentiated obligations	41
(a)	Common but differentiated responsibilities and respective capabilities	41
(b)	Highest possible ambition and maximum available resources	43
b.	State obligations with regard to specific issues raised in the Advisory Opinion Request.....	43
1.	State obligations are derived from the duties of prevention and the guarantee of human rights, including the right to a healthy environment, in relation to the climate emergency (Part IV.A of the Advisory Opinion Request)	44

2.	State obligations to preserve the right to life and survival in relation to the climate emergency in light of science and human rights (Part IV.B of the Advisory Opinion Request)	45
3.	The obligations of States in relation to the rights of children and future generations in light of the climate emergency (Part IV.C of the Advisory Opinion Request)	46
4.	State obligations arising from consultation procedures and judicial proceedings owing to the climate emergency (Part IV.D of the Advisory Opinion Request)	50
(a)	Access to information	50
(b)	Participation in environmental decision-making	51
(c)	Access to justice.....	53
(d)	Right to redress and effective remedy	53
5.	State obligations related to the protection of territorial and environmental defenders, as well as women, Indigenous Peoples, and Afro-descendant communities in the context of the climate emergency (Part IV.E of the Advisory Opinion Request).....	55
(a)	Climate defenders	57
(b)	Women, girls, and gender-diverse persons	59
(c)	Indigenous Peoples	61
(d)	Afro-descendant peoples.....	62
6.	The common but differentiated human rights obligations and responsibilities of States in the context of the climate emergency (Part IV.F of the Advisory Opinion Request).....	63
VI.	STATES SHOULD CONSIDER IMPLEMENTING THE FOLLOWING MEASURES TO SATISFY THEIR HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS REGARDING THE CLIMATE EMERGENCY	65
a.	States should phase out the burning of fossil fuels (coal, oil, and natural gas).....	65
1.	States should avoid new investments in fossil fuels	67
2.	States should avoid new fossil fuel subsidies and phase out existing fossil fuel subsidies	68

3.	States should phase out coal extraction and use	68
4.	States should reduce and phase out existing oil and gas production	70
5.	States should reduce emissions from methane and other short-lived climate pollutants	70
b.	States should increase renewable energy production.....	72
c.	States should manage the energy transition responsibly, accounting for human rights in the exploitation of minerals critical to the energy transition	74
d.	States should avoid overreliance on carbon removal technologies, and ensure that human rights are respected in the application of such technologies	76
1.	Bioenergy, Carbon Capture and Storage and Direct Air Capture technologies raise human rights concerns.....	76
2.	States should preserve and restore natural carbon mitigation ecosystems	79
3.	States should ensure the protection of human rights in any implementation of carbon markets program, including forestry credits...	80
e.	States should reduce and end deforestation	81
f.	States should increase their levels of climate financing	82
1.	States should be proactive in overcoming the barriers to adequate financing	84
2.	States should consider putting a price on greenhouse gas emissions	85
3.	States should consider participating in collaborative schemes, including debt-for-climate swaps.....	86
g.	States should implement oversight and education programs to promote awareness of the climate emergency.....	86
VII.	LOSS AND DAMAGE.....	87
VIII.	CONCLUSION.....	89
	LEGAL REPRESENTATIVES FOR SUBMITTING PARTIES	91

I. EXECUTIVE SUMMARY

1. The UN Special Rapporteurs on Toxics and Human Rights (Marcos Orellana), Human Rights and the Environment (David Boyd), and the Right to Development (Surya Deva) (together, the “**UN Rapporteurs**”) submit this *amicus* brief to the Inter-American Court of Human Rights (the “**Court**”) in the proceedings concerning the Advisory Opinion Request made by Chile and Colombia regarding obligations of States under the American Convention on Human Rights and international law in the face of the climate emergency (the “**Advisory Opinion Request**”).
2. As set out in Section II, the UN Rapporteurs are uniquely qualified to advise the Court on the issues raised in the Advisory Opinion Request. The UN Rapporteurs have written extensively about the climate emergency and other environmental challenges, emphasizing their connection with human rights.¹ The UN Rapporteurs respectfully request that the Court accept this *amicus* submission into the case record.
3. The Intergovernmental Panel on Climate Change (the “**IPCC**”) has been unequivocal that the climate emergency threatens all regions of the world. As discussed in Section III, the climate emergency impacts the Americas and the Caribbean in critical ways. The best available scientific evidence indicates that the existential threat posed to humankind by the climate emergency will only increase and worsen unless urgent, ambitious, and effective interventions are made by governments all over the world that cooperate and coordinate their efforts together.
4. The American Convention on Human Rights (the “**Convention**”), and international human rights law more generally, requires States to respect, protect, and fulfill the human rights of potentially affected individuals and communities as they prevent, mitigate, adapt to, and remedy the effects of the climate emergency. As discussed in Section IV, major organs of the Inter-American human rights system have already found that the climate emergency threatens and imperils Convention rights. Additionally, United Nations human rights bodies such as the Human Rights Council, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Human

¹ See, e.g., Marcos Orellana (Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes), *The toxic impacts of some proposed climate change solutions*, U.N. Doc. A/HRC/54/25 (July 13, 2023); David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment) and Marcos Orellana (Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes), *The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment*, U.N. Doc. A/HRC/49/53 (Jan. 12, 2022); David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment), *Human rights and the global water crisis; water pollution, water scarcity and water-related disasters*, U.N. Doc. A/HRC/46/28 (Jan. 19, 2021); David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment), *Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: A Safe Climate*, U.N. Doc. A/74/161 (July 15, 2019); Surya Deva (Special Rapporteur on the right to development), *Reinvigorating the right to development: A vision for the future*, U.N. Doc. A/HRC/54/27 (Aug. 4, 2023,) and *Role of business in realizing the right to development*, U.N. Doc. A/78/160 (July 12, 2023).

Rights Committee, and the Committee on the Rights of the Child have recognized the adverse impact of the climate emergency on human rights.

5. As discussed in Section IV.e, the climate emergency is already preventing the full enjoyment of a range of human rights for certain individuals, communities, and populations, including, *inter alia*, the rights to: life; health, food, and water sanitation; a clean, healthy, and sustainable environment; self-determination of vulnerable populations, in particular Small Island Developing States; home, privacy, and family life; and development. Additionally, the best available science makes clear that certain populations and/or States will disproportionately experience the adverse impacts of the climate emergency on the enjoyment of human rights and that these adverse impacts will only worsen over time.
6. Fundamentally, States should respond to such harms, regardless of the magnitude of their contributions to the climate emergency. States should reduce ongoing greenhouse gas emissions. Additionally, some States may be responsible for loss and damage caused by historic and ongoing emissions.
7. Certain governing principles apply to identify the scope of States' obligations and the manner in which States should fulfill those obligations. Section V.a discusses these applicable governing principles, such as:
 - (i) international cooperation among States, which includes notification, consultation, and exchange of information regarding foreseeable risk of serious harm to human rights resulting from greenhouse gas emissions;
 - (ii) prevention of harm and, relatedly, application of the precautionary principle to activities that may result in greenhouse gas emissions;
 - (iii) the polluter pays principle, whereby the party responsible for the harm should bear the cost of addressing the harm caused;
 - (iv) application of non-regression, which prohibits States from allowing or pursuing actions that roll back climate actions or have the net effect of diminishing the legal protection of the environment;
 - (v) equality and non-discrimination in the respect, protection, and fulfillment of human rights; and
 - (vi) use of the best available scientific knowledge in the application of State action.
8. The scope of certain State obligations will be informed by each State's available resources and historic and ongoing contributions to the climate emergency. Applicable principles regarding these differentiated responsibilities of States include: common but differentiated responsibilities and respective capabilities; highest possible ambition; maximum available resources; and progressive realization of climate action goals.

9. The rights discussed in Section IV and the principles governing State obligations regarding the foreseeable risk of serious harm to those rights discussed in Section V answer the questions raised in the Advisory Opinion Request. Section V.b provides supplementary responses to some of the specific questions raised in Parts IV.A through IV.F of the Advisory Opinion Request. Specifically, States should:
- (i) ensure that all laws, policies, and actions are consistent with Convention rights and the duty to prevent harm. Such duties extend beyond notification and include comprehensive duties of implementation and enforcement.
 - (ii) act consistently with their obligations concerning the right to life, including the duty to protect, respect and fulfill the right and its necessary conditions where there is a foreseeable risk that the right may be threatened. Such actions should be consistent with the best available science concerning the climate emergency, including its causes and impacts.
 - (iii) act consistently with the principles of intergenerational equity and differentiated obligations owed toward children and young people.
 - (iv) respect, protect, and fulfill procedural rights concerning access to information; participation in environmental decision-making; and access to justice and redress.
 - (v) respect, protect, and fulfill the rights of territorial, environmental, and climate defenders, adopting an intersectional approach which recognizes the particular vulnerabilities of children, women, Indigenous Peoples, rural populations, and Afro-descendent communities.
 - (vi) pursue international and regional cooperation and assistance, consistent with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.
10. Section VI identifies the specific measures that States should consider implementing to fulfill their human rights obligations in the context of the climate emergency. Specifically, States should:
- (i) phase out the burning of fossil fuels in line with the just transition principle;
 - (ii) increase renewable energy production in a responsible manner;
 - (iii) secure the supply of minerals critical to the energy transition in a manner that protects and respects human rights of potentially affected communities;
 - (iv) avoid over-reliance on carbon removal technologies, and ensure that human rights of potentially affected communities are respected in the application of such technologies;

- (v) ensure the protection of human rights in any implementation of carbon markets programs and forestry credits;
 - (vi) preserve their natural carbon mitigation systems;
 - (vii) reduce and end deforestation;
 - (viii) increase their levels of climate financing, including climate adaptation financing, and sharing of green technologies; and
 - (ix) promote awareness and education about the climate emergency.
11. Finally, States should address both economic and non-economic harms arising from or relating to the climate emergency, including harms to the human rights of affected individuals and communities. Section VII addresses the obligations of States under international law to remedy such harms.
 12. The UN Rapporteurs have focused this submission primarily on the State obligations owed by State parties to the Convention. However, this Court has provided comprehensive opinions on critical issues that impair human rights, including *Advisory Opinion OC-23/17*, which recognized the connection between the climate emergency and the right to a healthy environment. Indeed, in *Advisory Opinion OC-23/17*, this Court observed that in considering the scope of Article 1(1) of the Convention when responding to a request for an advisory opinion, the Court should not limit its response to specific countries; rather, environmental obligations may be “important for all the States of the planet.”²
 13. The Advisory Opinion Request raises important questions about the role of Convention rights in informing the obligations of States to fight the existential threat to humankind posed by the climate emergency. The UN Rapporteurs respectfully make this submission with the objective of assisting the Court as it discharges the monumental task that lies before it. The UN Rapporteurs have directed their analysis to the obligations of State parties to the Convention where appropriate, while also addressing the obligations of OAS Member States in responding to the climate emergency.

II. EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS OF THE UN RAPPORTEURS

14. UN Special Rapporteurs are part of the special procedures system of the UN Human Rights Council. They are independent experts from across the world appointed by the UN Human Rights Council to contribute to the promotion and realization of human rights in areas related to their professional expertise. UN Special Rapporteurs undertake country visits, act on cases of reported violations and

² *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 35 :“This Court has indicated that, owing to the general interest of its advisory opinions, their scope should not be restricted to specific States. The questions raised in the request go beyond the interests of the States parties to the Cartagena Convention and are important for all the States of the planet. Therefore, the Court considers that it should not limit its [sic] response to the scope of application of the Cartagena Convention.”

infringements through communications with implicated States and businesses, and contribute to the development of international human rights standards. They work closely with the Office of the High Commissioner for Human Rights and report annually to both the UN Human Rights Council and the UN General Assembly.

a. Admissibility of the submission of the UN Rapporteurs

15. The UN Rapporteurs qualify as *amici* to make this submission under the Court’s Rules of Procedures. Article 2(3) of the Court’s Rules of Procedures, as amended in 2009, defines *amicus curiae* as:

the person or institution who is unrelated to the case and to the proceeding and submits to the Court reasoned arguments on the facts contained in the presentation of the case or legal considerations on the subject-matter of the proceeding by means of a document or an argument presented at a hearing [. . .].³

16. The UN Rapporteurs satisfy these requirements to qualify as *amici*. They are independent of the parties who made the Advisory Opinion Request. UN Rapporteurs are qualified and independent experts. Additionally, as discussed immediately below in Section II.b, they are experts on human rights issues, including the relationship between the climate emergency and human rights.

b. The UN Rapporteurs are independent experts on the connections between the climate emergency and human rights

1. Dr. Marcos Orellana: UN Special Rapporteur on Toxics & Human Rights

17. The UN Human Rights Commission established a mandate to examine the human rights implications of exposure to hazardous substances and toxic wastes in 1995. The UN Human Rights Council expanded the mandate in 2011 to include the whole life cycle of hazardous products from manufacturing to final disposal, establishing a Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes (“**Special Rapporteur on Toxics & Human Rights**”). The mandate includes examining emissions of hazardous substances from all sources; reporting on the adverse consequences of unlawful management and disposal of hazardous wastes and substances; and studying the connections of science and policy as regards the risks to human rights posed by the lifecycle of hazardous substances and wastes.
18. Dr. Marcos Orellana has worked as a legal advisor to various UN agencies, governments, and non-governmental organizations, including to the Presidency of the 25th Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (“**UNFCCC**”), and as climate negotiator representing the eight-

³ Article 2(3) of the Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights.

nation Independent Association of Latin America and the Caribbean in the negotiations of the Paris Agreement. Dr. Orellana began his term as the Special Rapporteur on Toxics & Human Rights in August 2020 and was reappointed in 2023 for a second three-year term.

2. Dr. David Boyd: UN Special Rapporteur on Human Rights & the Environment

19. The UN Human Rights Council created the mandate on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment in 2011. The mandate was formalized as a Special Rapporteur in 2015 (“**Special Rapporteur on the Environment**”). The mandate includes studying the human rights obligations related to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment; promoting good practices in rights-based approaches to environmental policymaking; and advancing the recognition and implementation of the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
20. Dr. David Boyd is a professor at the University of British Columbia in Canada, jointly appointed in the Institute for Resources, Environment and Sustainability and the School of Public Policy and Global Affairs. Dr. Boyd has submitted amicus briefs to more than a dozen national, regional, and international courts and tribunals, including the Supreme Courts of Brazil and Norway, the Constitutional Court of Ecuador, the European Court of Human Rights, the Inter-American Court of Human Rights, and the UN Human Rights Committee. Dr. Boyd began his term as the Special Rapporteur on the Environment in August 2018 and was reappointed in 2021 for a second three-year term.

3. Mr. Surya Deva: UN Special Rapporteur on the Right to Development

21. The UN General Assembly proclaimed the right to development in 1986. To advance the promotion and fulfillment of the right, the Human Rights Council created the mandate of the Special Rapporteur on the right to development in 2016 (“**Special Rapporteur on the Right to Development**”). The Special Rapporteur on the Right to Development is charged with promoting peoples’ right to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development. The Special Rapporteur engages with UN Member States and pertinent stakeholders and reports to the UN Human Rights Council and the UN General Assembly. The Rapporteur also assists in bringing awareness to and implementing the right to development in the work of UN bodies, financial institutions, and international development projects.
22. Mr. Surya Deva is a Professor at the Macquarie Law School and Director of the Centre for Environmental Law at Macquarie University, Australia. He has published extensively in the field of business and human rights and sustainable development. Mr. Deva has advised UN agencies, governments, national human rights institutions, multinational corporations, trade unions, and civil society organizations on issues related to his expertise. He served as a member of the UN

Working Group on Business and Human Rights between May 1, 2016 and April 30, 2022. Mr. Deva took up the role of the UN Special Rapporteur on the Right to Development on May 1, 2023.

III. THE ANTHROPOGENIC RELEASE OF GREENHOUSE GASES HAS CREATED A CLIMATE EMERGENCY WHICH THREATENS PROTECTED RIGHTS

23. The existing impacts of the climate emergency demonstrate that global surface temperature being at 1.2°C higher on average than pre-industrial levels already is having a major adverse impact on certain populations and preventing vulnerable communities from enjoying the full range of their human rights. The UN Rapporteurs are of the view that the commitments in the Paris Agreement to hold the increase in the global average temperature “to well below 2°C and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels” are not safe and sufficient. Rather, humanity should aim to bring the increase in the global average temperature down to 1.0°C, as this was the outer boundary of the stable range experienced by humanity during the Holocene.⁴
 - a. **The climate emergency is a global phenomenon that poses an existential threat to humankind**
24. The climate emergency threatens all regions of the world. Global surface temperature was on average 1.59°C higher over land and 0.88°C higher over the ocean during the period between 2011 and 2020 than between 1850 and 1900.⁵ Human-caused climate change is already affecting weather patterns and creating climate extremes across the globe.⁶ Changes in the atmosphere, ocean, cryosphere, and biosphere are widespread and accelerating. Observed changes in climate extremes, particularly heatwaves, heavy precipitation, wildfires, droughts, and cyclones, have increased in frequency since the IPCC AR5, which was finalized in 2014.⁷
25. The climate emergency affects many aspects of human wellbeing. Approximately 3.3 to 3.6 billion people live in environments that are highly vulnerable to climate change.⁸ Climate change has caused substantial damage to, and increasingly irreversible losses in, terrestrial, freshwater, cryosphere, and marine ecosystems.⁹

⁴ See Darrell Kaufman et al., *Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach*, Sci. Data 7, 201 (2020), <https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7>.

⁵ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, para. A.1.1.

⁶ *Id.* at para. A.2.

⁷ *Id.* at para. A.2.1.

⁸ *Id.* at para. A.2.2.

⁹ *Id.* at para. A.2.3.

26. The climate emergency has slowed gains from agricultural productivity over the past 50 years and reversed progress in reducing malnutrition.¹⁰ Roughly half of the world's population now experiences severe water scarcity for at least part of the year due to climatic and non-climatic drivers.¹¹ Globally, increases in extreme heat have led to human mortality and morbidity.¹² In urban areas, climate change has caused adverse impacts on health, livelihoods, and infrastructure.¹³
27. The climate emergency has resulted in the world's oceans absorbing more than 90% of the additional energy trapped by the greenhouse effect and an estimated 30% of the anthropogenic carbon dioxide from the atmosphere.¹⁴ This absorption has heated, deoxygenated, and acidified the world's oceans.¹⁵ Rising sea levels endanger coastal communities with floods, salinization, storm surges, and erosion.¹⁶ Sea-level rise threatens the very existence of many communities, particularly in low-lying and Small Island Developing States.¹⁷
28. Scientists are increasingly concerned about tipping points in the Earth's climate system, which, if crossed, could cause catastrophic disruption to ecosystems, economies, and societies.¹⁸ There is a risk that even if anthropogenic greenhouse gas emissions are reduced in the future, the long-term effects of past and existing emissions will continue to cause harm in the future. For example, scientists have warned that deforestation is pushing the Amazon towards potentially irreversible change from forest to savannah.¹⁹
29. The uncertainties and dangers associated with tipping points highlight the importance of the precautionary principle and the urgency of immediate steps to decarbonize the global economy, stop deforestation, and transform agriculture.

¹⁰ *Id* at para. A.2.5.

¹¹ *Id.* at para. A.2.4.

¹² *Id.* at para. A.2.5.

¹³ *Id.* at para. A.2.6.

¹⁴ Ian Fry, Marcos Orellana & David Boyd, *Amicus brief submitted to the International Tribunal for the Law of the Sea by the UN Special Rapporteurs*, May 30, 2023, [ITLOS brief], page 8; IPCC, *Report of Working Group I (Physical Science basis), AR6: Summary for Policymakers*, para. A.4.2; IPCC Working Group II, *AR5: Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, page 1658.

¹⁵ ITLOS brief, page 8.

¹⁶ ITLOS brief, pages 8-9; IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, Summary for Policymakers*, page 5, paras. B.3.1, B.7.2.

¹⁷ Special Rapporteur Dr. Boyd has observed first-hand such relocations caused by climate change, such as in Fiji, during a mission in 2018. A/HRC/43/53/Add.1.

¹⁸ Will Steffen et al., *Trajectories of the Earth System in the Anthropocene* (Aug. 2018).

¹⁹ T.E. Lovejoy & C. Nobre, *Amazon Tipping Point: Last Chance for Action*, *Science Advances*, Vol. 5, no. 12, eaba2949.

- b. The climate emergency adversely impacts the Americas and the Caribbean**
30. The climate emergency adversely impacts the Americas and the Caribbean in many ways. The increased frequency of climate-extreme events has acutely affected communities in Central and South America, as well as the Caribbean islands, and has especially affected Indigenous Peoples, small-scale food producers, and low-income households.²⁰ Central American States consistently are ranked among those most at risk of being impacted by extreme climate events—particularly those States situated in the “Dry Corridor,” a tropical dry forest region in the Pacific Coast.²¹ Small-island states in the Caribbean are also disproportionately affected.²² Large-scale, climate-driven changes in the Amazon rainforest affect Brazil, Colombia, Ecuador, and Peru. Chile is suffering from a megadrought that has made water scarcity a national crisis.²³
31. The climate emergency impacts agricultural production, food security, and water security in the Americas and the Caribbean. Climate change results in more frequent and/or longer droughts and decreases in rainfall, resulting in reduced yields for key crops.²⁴ Coupled with a high population growth rate, the reduction of agricultural productivity exposes more people to food insecurity and malnutrition.²⁵ The changes and general decline in seasonal water availability result in greater water insecurity.²⁶
32. The Americas are increasingly threatened by climate-induced disasters, including floods, landslides, epidemics, and the resultant strain on public service systems. Climate change brings more frequent and severe storms, heavy precipitation events, and the thawing of permafrost and glaciers.²⁷ More people, especially low-income and marginalized populations, are threatened by the increase in floods and landslides and their disruption of critical infrastructure and service systems.²⁸ Higher temperatures enlarge the geographic range of disease-carrying vectors.²⁹ With poor sanitation conditions in many parts of the Americas, the incidence of

²⁰ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, para. A.2.

²¹ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, page 1699.

²² IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, para. A.2.5.

²³ John Bartlett, ‘Consequences will be dire’: Chile’s water crisis is reaching breaking point, *Guardian* (June 1, 2022), <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/01/chiles-water-crisis-megadrought-reaching-breaking-point>.

²⁴ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, page 1722.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.*

- vector-borne diseases, such as malaria, dengue, Zika, and leishmaniasis will rise, further burdening the economic and healthcare sectors.³⁰
33. The climate emergency also endangers the region's critical ecological systems. More frequent and persistent droughts, combined with anthropogenic forest degradation and deforestation are reducing the Amazon's capacity to absorb and sequester carbon as well as decreasing the myriad forest products and ecosystem services upon which Indigenous Peoples and local communities depend.³¹ The increase in the regional seawater CO₂ levels leads to ocean acidification and coral bleaching, degrading and possibly killing the Mesoamerican coral reef, which is the second largest reef in the world and a vital habitat and food source for many marine species.³² The rising sea levels cause coastal flooding and erosion, harming coastal populations and damaging infrastructure.³³
- c. **The climate emergency will worsen**
34. The climate emergency will intensify with further increases in global temperature. According to the IPCC, global heating will worsen because of increased cumulative CO₂ emissions "in nearly all considered scenarios and modelled pathways."³⁴ Even under the IPCC's very low greenhouse gas emission scenario, global warming is "more likely than not" to reach 1.5°C before 2040.³⁵ Indeed, some sources suggest that the 1.5°C threshold may be surpassed well before 2040.³⁶ The upward trend of global warming is expected to further intensify the global water cycle, resulting in very wet and very dry weather and other extreme events, such as wildfires.³⁷ Further warming could subject every region to more frequent heatwaves and droughts.³⁸ The oceans are heating up at an even faster pace.³⁹ Past emissions have committed the global ocean to future heating at a level of two to eight times what has been experienced over the last 50 years.⁴⁰

³⁰ *Id.* at 1723.

³¹ *Id.*

³² *Id.*

³³ *Id.*

³⁴ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, para. B.1.

³⁵ *Id.* at para. B.1.

³⁶ *As 1.5 Degrees Looms, Scientists See Growing Risk of Runaway Warming, Urgent Need to Slash Emissions*, Yale Env't 360 (Mar. 15, 2023), <https://e360.yale.edu/digest/1.5-degrees-climate-change-tipping-points-2030>.

³⁷ *Id.* at para. B.1.3.

³⁸ *Id.* at para. B.1.4.

³⁹ Cheng, L.J. et al., 2023: Another year of record heat for the oceans, *Adv. Atmos. Sci.*, 40(6), 963-9974.

⁴⁰ IPCC Working Group I, *AR5: Climate Change 2014 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, para. B.5.1.

- 35. Near-term actions limiting global warming to around 1.5°C by 2040, combined with major investments in adaptation, could substantially reduce the loss and damage caused by the climate emergency.⁴¹ However, substantial loss and damage has already occurred and will inevitably continue in the near term.⁴² The level of risk to the climate, ecosystem, and human life that global warming of 1.5°C poses will partially depend on concurrent near-term trends in the level of climate adaptation.⁴³
- 36. Despite escalating climate risks and the pressing need to adapt, the current state of climate mitigation and adaptation actions is grossly insufficient. There have been some meaningful actions: laws and policies on mitigation and adaptation have progressed,⁴⁴ and the growth rate of greenhouse gas emissions over the past decade has slowed compared to the previous decade.⁴⁵ Most State parties to the Paris Agreement have submitted new or updated nationally determined contributions with more ambitious emission reduction goals.⁴⁶ Full implementation of all-new or unconditional, nationally determined contributions could lead to a modest reduction in annual CO₂ emissions by 2030.⁴⁷ Given the track record of most States since 1992, however, full implementation of commitments is highly unlikely. Additionally, the mitigation and adaptation efforts of Central and South American States are hampered by many obstacles, including institutional instability, weak governance structures, inadequate access to climate finance and green technologies, inequality, and poverty.⁴⁸
- 37. The human rights of individuals and communities are impaired as they suffer through droughts (especially in the Amazon, Andes, and Dry Corridor regions);⁴⁹ loss of wetlands;⁵⁰ glacial retreat (resulting in soil erosion and loss of access to

⁴¹ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, para. B.3.

⁴² *Id.* at para. B.3.

⁴³ *Id.* at para. B.3.

⁴⁴ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, paras. A.3, A.4.

⁴⁵ *Emissions Gap Report 2022*, UNEP (Oct. 27, 2022), page 5.

⁴⁶ *Id.* at page 12.

⁴⁷ *Id.* at page 13.

⁴⁸ *Id.* at page 1963.

⁴⁹ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, at 12.3-12.4.

⁵⁰ *Id.* at 12.3, 12.5.2.

water);⁵¹ wildfires;⁵² and transmission of vector-borne diseases.⁵³ The IPCC has observed that the climate emergency will “convert existing risks in the region into severe key risks,” including food insecurity; floods and landslides; water insecurity; vector-borne disease epidemics; changes to the Amazon and coral reef ecosystems; and risks to coastal communities.⁵⁴

38. Reining in the climate emergency requires States to implement further ambitious measures and policies to curb anthropogenic climate change, reduce total greenhouse gas emissions and enhance carbon sinks. As discussed in Section VI, the path forward requires systemic changes, including reforming existing energy infrastructure in favor of green and renewable energies, initiating and scaling up zero-carbon technological advances, supporting zero-carbon industrial processes, and planning infrastructure to reduce travel demand.⁵⁵ State action is crucial to implementing such changes and States must require businesses to decarbonize their operations as a matter of urgency.

IV. THE CLIMATE EMERGENCY IMPAIRS HUMAN RIGHTS

39. As discussed in Section III, the climate emergency impairs the full range of human rights. States should proactively respect, protect, and fulfill human rights in the context of the climate emergency. These obligations are owed to individuals and communities within the jurisdiction of a specific State. They are also owed to individuals and communities outside the State where (1) there is a causal link between the acts or omissions of the State in question and the negative impact on those individuals and communities outside that State’s territory; and (2) the State of origin exercises effective control over the sources of the emissions in question.⁵⁶ Where States fail to safeguard rights of individuals and communities both inside and outside their territories against foreseeable climate-related threats of serious harm, they should provide an appropriate remedy.⁵⁷

⁵¹ *Id.* at 12.3.2, 12.3.7.

⁵² *Id.* at 12.2, 12.3 (noting, at 1691, that “[o]n average, people in the [Central and South America] region were more exposed to high fire danger between 1 and 26 additional days depending on the sub-region for the years 2017-2020 compared to 2001-2004”).

⁵³ *Id.* at 12.3 (noting, at 1691, that “[t]he reproduction potential for the transmission of dengue increased between 17% and 80% for the period 1950-1954 to 2016-2021, depending on the sub-region, as a result of changes in temperature and precipitation”).

⁵⁴ *Id.* at page 1692.

⁵⁵ *Id.* page 16; UNEP, *Emissions Gap Report 2022* (Oct. 27, 2022), pages 39, 45, 48.

⁵⁶ On the extraterritorial obligations of State parties to the Convention, see The Environment and Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17, Inter-Am. Ct. H.R. (Nov. 15, 2017), at 32-44. [*Advisory Opinion OC-23/17*]

⁵⁷ *Billy v. Australia*, (2019) CCPR/C/135/D/3624/2019, Views adopted by the Committee under article 5(4) of the Optional Protocol concerning communication No. 3624/2019 (Sept. 22, 2022), para. 8.9. [*Billy v. Australia*]

40. These obligations arise independently of whether a State has significantly contributed to the climate emergency through its greenhouse gas emissions.⁵⁸ As part of their human rights obligations, States should reduce their greenhouse gas emissions, although the degree of urgency with which they should act depends in part on their historical emissions and status as low-income or developing States, pursuant to the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.⁵⁹ States that are current or historical large emitters owe additional obligations, including larger and faster reductions in greenhouse gas emissions, substantial contributions to climate finance to assist climate vulnerable States with mitigation and adaptation, guarantees of non-repetition, and compensation for loss and damage, because their actions have disproportionately contributed to harm suffered as a result of the climate emergency.
- a. **The major organs of the Inter-American human rights system have recognized that the climate emergency imperils Convention rights**
41. In 2008, the Organization of American States first recognized that the adverse effects of climate change negatively impact the enjoyment of human rights.⁶⁰ The Secretariat of the Organization of American States subsequently catalogued the threats posed by the climate emergency to the rights to life, liberty, and economic rights.⁶¹ The Secretariat identified threats to the rights of persons in Caribbean Small Island Developing States, as well as particular threats posed to the rights of displaced persons in the Caribbean and Central America.⁶² The Secretariat emphasized that all State responses to the climate emergency should be guided by human rights obligations.⁶³
42. In 2021, the Inter-American Commission on Human Rights, together with the Commission's Special Rapporteur for Economic, Social, Cultural and Environmental Rights, adopted the resolution *Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations*.⁶⁴ In this resolution, the Inter-American Commission recognized that “[t]he nexus between climate change and human

⁵⁸ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, U.N. Doc. A/HRC/31/52 (Feb. 1, 2016), para. 37 [Special Rapporteur on the Environment Climate Report No. I], citing *Budayeva v. Russia*, (2008) App. No. 15339/02, para. 138.

⁵⁹ See Section V.b.6, below discussing the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities of States.

⁶⁰ Resolution on Human Rights and Climate Change in the Americas adopted at the fourth plenary session held on June 3, 2008, AG/RES. 2429 (XXXVIIIO/08).

⁶¹ OAS General Secretariat, *Climate Change: Life Democracy Freedom Justice Equality* (2022), at 8.

⁶² *Id.* at 26-27, 29-30.

⁶³ *Id.* at 7-8.

⁶⁴ *Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations*, Inter-American Commission Resolution No. 3/2021, adopted Dec. 31, 2021. [Inter-American Commission Resolution No. 3/2021].

rights is increasingly evident.”⁶⁵ It further noted “the existence of a directly proportional relationship between the increase in greenhouse gas emissions . . . and the frequency and intensity of meteorological changes, which implies the amplification of risks to societies, people and natural systems.”⁶⁶ The resolution likewise emphasized that “climate change is one of the greatest threats to the full enjoyment and exercise of the human rights of present and future generations, to the health of ecosystems, and all species that inhabit the planet.”⁶⁷

b. UN human rights bodies have recognized that the climate emergency impairs human rights

43. Since 2008, the UN Human Rights Council has adopted several resolutions recognizing that the climate emergency threatens the enjoyment of human rights, particularly for the world’s most vulnerable populations. Together with other UN Special Rapporteurs, the Special Rapporteur on the Environment and the Special Rapporteur on Climate Change have detailed the specific impacts of the climate emergency on a range of protected rights.⁶⁸
44. Human rights treaty bodies consistently have affirmed that States owe obligations to prevent and remedy foreseeable threats of serious harm resulting from the

⁶⁵ *Id.* at 4.

⁶⁶ *Id.* at 4.

⁶⁷ *Id.* at 8.

⁶⁸ See, e.g., *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 1*; David Boyd, Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: A safe climate, U.N. Doc. A/74/161 (July 15, 2019) [*Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*]; Ian Fry, Promotion and protection of human rights in the context of climate change, U.N. Doc. A/77/226 (July 26, 2022) [*July 2022 Report of the Special Rapporteur on Climate Change*]; see also Pedro Arrojo Agudo (Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation), *Special thematic report on climate change and the human rights to water and sanitation* (Jan. and Mar. 2022); Clement Nyaletsossi Voule (Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly and association), *Exercise of the rights to freedom of peaceful assembly and of association as an essential to advancing climate justice*, U.N. Doc. A/76/222 (July 23, 2021), at para. 90(g); Saad Alfarargi (Special Rapporteur on the right to development), *Climate action at the national level*, U.N. Doc. A/HRC/48/56 (July 2, 2021); Philip Alston (Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), *Climate change and poverty*, U.N. Doc. A/HRC/41/39 (July 17, 2019); Balakrishnan Rajagopal (Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context), *Towards a just transformation: climate crisis and the right to housing*, U.N. Doc. A/HRC/52/28 (Dec. 23, 2022); Raquel Rolnik (Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context), *The right to adequate housing*, U.N. Doc. A/65/255 (Aug. 6, 2009); Hilal Ever (Special Rapporteur on the right to food), *Right to food*, U.N. Doc. A/70/287 (Aug. 5, 2015); Cecilia Jimenez-Damary (Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons), *Protection of and assistance to internally displaced persons*, U.N. Doc. A/66/285 (Aug. 9, 2011); Ian Fry, *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change*, U.N. Doc. A/HRC/53/34 (Apr. 18, 2023); Karima Bennoune (Special Rapporteur on the field of cultural rights), *Field of cultural rights*, U.N. Doc. A/75/298 (Aug. 10, 2020); Reem Alsalem (Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences), *Violence against women and girls in the context of the climate crisis, including environmental degradation and disaster risk management and response*, U.N. Doc. A/77/135 (July 11, 2022); Siobhan Mullally (Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children), *Addressing the gender dimensions of trafficking in persons in the context of climate change, displacement and disaster risk reduction*, U.N. Doc. A/77/170 (July 15, 2022); François Crépeau (Special Rapporteur on the human rights of migrants), *Human rights of migrants*, A/67/299 (Aug. 13, 2022); Victoria Tauli-Corpuz, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples), *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples*, U.N. Doc. A/HRC/36/46 (Nov. 1, 2017); Victoria Tauli-Corpuz, *Regional consultation on the rights of indigenous peoples in Asia*, U.N. Doc. A/HRC/45/34/Add.3 (Sept. 4, 2020).

climate emergency.⁶⁹ State responses should address both the failure to take measures to prevent foreseeable harm as well as the failure to regulate ongoing activities contributing to such harm.⁷⁰ The UN Committee on the Rights of the Child identified obligations related to mitigation, adaptation, loss and damage, business and climate change, and climate finance.⁷¹ The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights warned States that they should mobilize maximum available resources to prevent foreseeable human rights violations resulting from the climate emergency.⁷² Failure to do so amounts to a violation of States' obligations to respect, protect, and fulfill human rights.⁷³

45. The UN Human Rights Committee identified the climate emergency as "among the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life."⁷⁴ In *Billy v. Australia*, the Committee considered a communication brought by Indigenous residents of Australia's Torres Strait Islands, alleging that Australia had violated the complainants' rights by failing to protect them adequately from the worst effects of the climate emergency.⁷⁵ The Committee found that Australia had breached its obligations to protect the complainants against foreseeable risks of serious harm, amounting to violations of their rights to private and family life and culture. In *Sacchi v. Argentina*, the UN Committee on the Rights of the Child observed that States may owe obligations under the UN Convention on the Rights of the Child where they fail to protect children's rights from threats that are both serious and foreseeable.⁷⁶

⁶⁹ See UN Human Rights Committee, General Comment No. 36 (right to life), U.N. Doc. CCPR/C/GC/36 (Sept. 3, 2019), para. 62 [*Human Rights Committee General Comment 36*]; *Billy v. Australia*, para. 8.12 (observing that Australia's failure to implement adaptation measures adequate to counter rising sea levels amounted to a failure to protect against "foreseeable and serious violations of private and family life and the home"); para. 8.14 (finding that complainants' right to culture was violated where impacts "could have reasonably been foreseen by the State party"); *Sacchi v. Argentina*, CRC/C/88/D/104/2019 (2022) [*Sacchi v. Argentina*], para. 10.6 ("[f]ailure to take measures to prevent foreseeable human rights harm caused by climate change or to regulate activities contributing to such harms could constitute a violation of the States' human rights obligations").

⁷⁰ See *Sacchi v. Argentina*, at para. 10.6; The Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Committee on the Rights of the Child, and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Joint Statement on Human Rights and Climate Change*, U.N. Doc. HR1/2019/1 (May 14, 2020), para. 1.

⁷¹ General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment with a special focus on climate change, U.N. Doc. CRC/C/GC/26, [*CRC Committee General Comment 26*] paras. 95-115.

⁷² Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Climate change and the International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*, U.N. Doc. E/C/12/2018/1* (Oct. 8, 2018).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *General Comment No. 36*, para. 62.

⁷⁵ *Billy v. Australia*.

⁷⁶ *Sacchi v. Argentina*.

c. International environmental laws recognize that the climate emergency impairs human rights

46. The extensive human rights impacts of environmental degradation have been recognized since the Stockholm Declaration of 1972, which is one of the founding documents of international environmental law.⁷⁷ The relation between human rights, the environment, and development is further elaborated in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development and the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. The Rio Declaration on Environment and Development reaffirmed that human beings “are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature” and that “environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”⁷⁸ Both the Rio Declaration on Environment and Development and the Vienna Declaration and Programme of Action make clear that the “right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.”⁷⁹

47. The Preamble of the Paris Agreement provides that State parties:

should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, persons with disabilities, and people in vulnerable situations.⁸⁰

48. This provision has two dimensions. First, States should consider human rights as a reason to act (on mitigation, adaptation, and loss and damage) in response to the climate emergency. Second, States should ensure that all actions are consistent with their human rights obligations, especially in relation to populations put in situations of vulnerability or marginalization.
49. Apex courts in several State parties to the Convention have recognized that failure to take effective measures in response to the climate emergency may violate domestic human rights obligations.⁸¹ There is a close link between international human rights obligations, international climate obligations, and domestic and regional rights guarantees. The Supreme Federal Court of Brazil, for example,

⁷⁷ Stockholm Declaration, U.N. Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, June 16, 1972; UNGA Res. 2994/XXVII, 2995/XXVII and 2996 XXII (Dec. 15 1972) [*Stockholm Declaration*], Principle 1: “Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being.”

⁷⁸ Report of the United Nations Conference on Environment and Development 1992, Principles 1 and 4.

⁷⁹ Rio Declaration, Principle 3.

⁸⁰ Paris Agreement, Preamble.

⁸¹ See, e.g., Supreme Court of Brazil, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brasil*, ADPF 708, (July 1, 2022); *Generaciones Futuras v. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible*, República de Colombia Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 (Apr. 5, 2018).

- recently confirmed that the Paris Agreement is a human rights treaty with supreme status in domestic law.⁸²
50. This Court extensively discussed the interrelationship between human rights and the environment in its *Advisory Opinion OC-23/17*, opining that “the adverse effects of climate change affect the real enjoyment of human rights.”⁸³
- d. **Interpretation of the Convention should be guided by the principle of systemic integration**
51. In its *Advisory Opinion OC-23/17*, this Court affirmed an approach of “systemic integration” and “harmonious interpretation” between different bodies of relevant law.⁸⁴ In adopting this approach, this Court confirmed that it “must take international law on environmental protection into consideration when defining the meaning and scope of the obligations assumed by States under the American Convention, in particular, when specifying measures States must take.”⁸⁵ This includes binding international treaties, non-binding instruments, and relevant jurisprudence.⁸⁶
52. Article 29 of the Convention sets forth that the Convention shall not be interpreted as “[r]estricting the enjoyment or exercise of any right or freedom recognized by . . . the laws of any State Party or by another convention to which one of the said states is a party,” as “precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality,” nor as “[e]xcluding or limiting the effect that the American Declaration of the Rights and Duties of Man and other international acts of the same nature may have. . .”⁸⁷ Reference to international environmental and human rights instruments is thus relevant and, indeed, necessary to properly interpreting and applying the Convention’s text.
53. When harmonizing and integrating these regimes, this Court is guided by the *pro persona* principle, which favors the interpretation that offers more protection to the individual.⁸⁸ In *Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism*, this Court recognized the *pro persona* principle to forbid external restriction on rights found in the American Convention of Human

⁸² Supreme Court of Brazil, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brasil*, ADPF 708, (July 1, 2022).

⁸³ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 47; see also discussion of the climate emergency at paras. 54, 96.

⁸⁴ *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 44.

⁸⁵ *Id.* at para. 44.

⁸⁶ *Id.* at para. 44.

⁸⁷ American Convention on Human Rights, Art. 29(b)-(d).

⁸⁸ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 42.

Rights.⁸⁹ We owe much of our understanding of this principle to the late Judge Antônio Cançado Trindade, who elaborated on it in his tenure on the judicial bench of both this Court and the International Court of Justice.⁹⁰

54. The approach of systemic integration is consistent with Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Article 31(3)(c) requires that courts and tribunals, when interpreting international treaties, consider “any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.” The corpus of relevant rules includes not only treaties, but also general principles and rules of customary international law,⁹¹ such as harm prevention, precaution, non-regression, and the application of best available science.

e. **Protected rights impaired by the climate emergency**

55. The climate emergency impacts the full spectrum of rights. As the Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change has observed:⁹²

Throughout the world, the rights of people are being denied as a consequence of climate change. This includes a denial of the rights to, *inter alia*, life, health, food, development, self-determination, water and sanitation, work, adequate housing and freedom from violence, sexual exploitation, trafficking and slavery.

56. Many UN Special Rapporteurs have documented how the climate emergency violates and further threatens this full range of human rights.⁹³ For the sake of brevity, we focus on the set of rights most relevant to the Court in answering the Advisory Opinion Request. This set includes rights protected by the American Convention, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (which have been ratified by all Convention parties). Our approach should not be interpreted to

⁸⁹ IACtHR, “Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights)”, Advisory Opinion (Nov. 13, 1985) at para. 52.

⁹⁰ See *Application of the ICSFT and CERD (Ukraine v. Russian Federation)*, Sep. Op. Cançado Trindade (Nov. 8, 2019), at para. 70 (“Human rights conventions... go beyond the outdated inter-State outlook, ascribing a central position to the individual victims, rather than to their States.”).

⁹¹ For examples of international courts and tribunals drawing on general principles and customary international law, see *Oil Platforms (Iran v. U.S.)*, Preliminary Objections, 1996 I.C.J. 803 (Dec. 12), ¶ 41; *Prosecutor v. Anto Furundžija*, Case No IT-95-17/1-A, Judgment (Declaration of Judge Patrick Robinson), ¶ 283 (Int’l Crim. Trib. fFFor Former Yugoslavia July 21, 2000); *Pope & Talbot Inc v. Government of Canada*, Award in Respect of Damages by Arbitral Tribunal, 2002 Arbitrator Tribunal, at 4, ¶ 8 (May 31); *United States – Import prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (Shrimp-Turtle Case)*, AB-1998-4, Report of the Appellate Body (12 Oct. 1998), ¶ 158; *Al-Adsani v. United Kingdom*, 34 Eur. Ct. H.R. 11 (2002).

⁹² See Ian Fry (Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change), *Promotion and protection of human rights in the context of climate change*, U.N. Doc. A/77/226 (July 26, 2022), at para. 88.

⁹³ See generally the reports identified at note 68 *supra*.

mean that these are the only, or most important, rights affected by the climate emergency. Human rights are indivisible, interdependent, and interrelated.

1. The climate emergency impairs the right to life, including its necessary conditions

57. Article 4(1) of the Convention provides that “[e]very person has the right to have his or her life respected.” In its *Advisory Opinion OC-23/17*, this Court identified the right to life as “particularly vulnerable to environmental impact.”⁹⁴
58. The right to life occupies a central place in this Court’s jurisprudence. This Court has recognized that “the realization of other rights depends on its protection,”⁹⁵ and that “[a]ccordingly, States are obliged to ensure the creation of the necessary conditions for the full enjoyment and exercise of this right.”⁹⁶ This includes both negative obligations (to refrain from depriving individuals of the right to life), as well as positive obligations to regulate and protect its citizens against the acts of third parties, including businesses.⁹⁷ States should “regulate, supervise or monitor” third parties and private actors.⁹⁸ States breach this duty where they know (or should know) of a real and imminent danger to the life of specific individuals or groups; where they fail to take necessary measures to prevent or avoid that danger; and where there is a causal link between environmental degradation and the impact on the right to life.⁹⁹
59. The UN Special Rapporteur on the Environment reported to the UN Human Rights Council that:¹⁰⁰

Climate change has many direct and indirect effects on the full enjoyment of the right to life. Climate-related deaths are caused by extreme weather events, heat waves, floods, droughts, wildfires, water-borne and vector-borne diseases, malnutrition and air pollution. Globally, at least 150,000 premature deaths annually have been linked to climate change. ... The World Health Organization (WHO) estimates that by 2030 some 250,000 climate-related deaths each year will be caused by heat stress, malaria, diarrhea and

⁹⁴ *Advisory Opinion OC-23/17*, above note 56, para. 65.

⁹⁵ *Id.* at para. 108; see also *Case of the “Street Children” (Villagrán Moreals et al.) v. Guatemala. Merits*. Judgment of November 19, 1999. Series C No. 63, para. 144; *Ortiz Hernández et al. v. Venezuela. Merits, reparations and costs*. Judgment of August 22, 2017. Series C No. 338, para. 100.

⁹⁶ *Id.* at para. 109.

⁹⁷ *Id.* at paras. 118-19.

⁹⁸ *Id.* at paras. 118.19.

⁹⁹ *Id.* at para. 120.

¹⁰⁰ *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*, at para. 29. [footnotes omitted].

malnutrition alone. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights concluded that, “at its most extreme, climate change kills.”

60. This Court has identified several conditions necessary to the exercise of the right to life. These conditions include access to (and quality of) water, food, health, and an adequate standard of environmental protection.¹⁰¹ These necessary conditions are themselves protected rights. As discussed below, all these conditions are threatened by the climate emergency. This Court has found that States must “refrain from practices or activities which deny or restrict access, in equal conditions, to the requisites of a dignified life”; and must not “unlawfully pollute the environment in a way that has a negative impact on the conditions that permit a dignified life.”¹⁰²
61. Article 4 of the Convention corresponds to Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The UN Human Rights Committee has reached many of the same conclusions on the content of the right to life as those reached by this Court in *Advisory Opinion OC-23/17*. It held that this right “concerns the entitlement of individuals to be free from acts and omissions that are intended or may be expected to cause their unnatural or premature death, as well as to enjoy a life with dignity.”¹⁰³ The Committee continued, “The obligation of States to respect and ensure the right to life extends to reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life. States parties may be in violation of article 6 even if such threats and situations do not result in loss of life.”¹⁰⁴ States therefore have a “duty to take positive measures,” including obligations of due diligence before the right is threatened.¹⁰⁵ Similar conclusions have been reached by the UN Committee on the Rights of the Child.¹⁰⁶
62. In *Billy v. Australia*, the UN Human Rights Committee applied these principles in the context of the climate emergency. Specifically, the Committee considered whether Australia’s failure to protect complainants from rising sea levels amounted to a violation of Australia’s Article 6 obligations. The Committee concluded that on the facts of the case, Australia had not violated the complainants’ right to life. This was because the devastating impact of rising sea levels had not yet exposed the complainants “to a situation of physical endangerment or extreme precarity that

¹⁰¹ *Id.* at paras. 109-11; *see also Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, reparations and costs.* Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, paras. 163-67; *Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, reparations and costs.* Judgment of March 29, 2006. Series C No. 146, paras. 156-78.

¹⁰² *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2* at para. 117.

¹⁰³ *General Comment 36*, at para. 2.

¹⁰⁴ *General Comment 36*, at para. 7.

¹⁰⁵ *General Comment 36*, at para. 21.

¹⁰⁶ *CRC Committee General Comment 26*, at paras. 20-25.

could threaten their right to life, including their right to live in dignity.”¹⁰⁷ Nevertheless, the Committee observed that over the next 10 to 15 years, if States do not take active mitigation and adaptation measures, “the effects of climate change may expose individuals to a violation of their rights under article 6.”¹⁰⁸ Such a violation is particularly likely where an entire country, such as a Small Island Developing State, is at risk of being submerged.¹⁰⁹ Although the Human Rights Committee in *Billy v. Australia* did not find a violation of the right to life, the Committee’s reasoning clearly indicated that the climate emergency could violate the right to life.

2. The climate emergency impairs the rights to health, food, water, and sanitation

63. This Court has found that the rights to health, food, water, and sanitation are all “conditions required for a decent life,” and are thus protected under Article 4 of the Convention.¹¹⁰ Furthermore, under Article 26 of the Convention, States have an obligation to pursue the goals of the Charter of the Organization of American States, including food and nutrition, through progressive realization.¹¹¹ Rights to food and health are also protected under the San Salvador Protocol, ratified by 16 State parties to the Convention.¹¹² These rights, in turn, depend on the maintenance of a clean, healthy and sustainable environment.¹¹³ While these rights may be realized progressively, they also contain a minimum core of immediate obligations.¹¹⁴ This includes obligations of equality and non-discrimination.
64. The climate emergency implicates all four rights.
65. First, realization of the right to health depends on an enabling natural environment, including a safe climate system.¹¹⁵ This relationship is reflected in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which requires States, as part

¹⁰⁷ *Billy v. Australia*, at para. 8.6. *But see Billy v. Australia*, Annex III (Arif Bulkan, Marcia V. J. Kran and Vasilka Sancin (partially dissenting)) (“Despite multiple requests and knowledge of the ongoing impacts on the lives of the authors, the State party did not undertake adaptation measures in a timely manner. Consequently, we would find that the State party violated the authors’ right to life under article 6 of the Covenant in addition to the violations found by the majority.”)

¹⁰⁸ *Id.* at para. 8.7.

¹⁰⁹ *Id.* at para. 8.7.

¹¹⁰ *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 109; *see also Yakyé Axa*, at para. 167; *Sawhoyamaxa*, at paras. 156-78.

¹¹¹ Charter of the Organization of American States (Feb. 27, 1967), Art. 34(j).

¹¹² Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights: Protocol of San Salvador [San Salvador Protocol], Arts. 10 and 12.

¹¹³ *Advisory Opinion OC-23/17*, paras. 66, 110-11; *see also CESCR General Comment 12*, paras. 7-8; CESCR, General Comment No. 15 (the right to water), U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (Jan. 20, 2003) [*CESCR General Comment 15*], paras. 10-12.

¹¹⁴ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 111.

¹¹⁵ *Id.* at para. 66.

- of their obligation to protect the right to health, to take measures for “the improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene.”¹¹⁶
66. As the Special Rapporteur on the Environment has reported to the UN Human Rights Council, the climate emergency threatens the right to health in many ways:¹¹⁷

The adverse health impacts of climate change include not only premature deaths but also increased incidences of respiratory disease, cardiovascular disease, malnutrition, stunting, wasting, allergies, heat stroke, injuries, water-borne and vector-borne diseases and mental illness. Dengue fever is the most rapidly spreading vector-borne disease, with a thirtyfold increase in global incidence that is largely attributable to climate change. Hundreds of millions of people are exposed to extreme weather events annually, resulting in injuries, illnesses and mental health impacts. Climate change also erodes many of the key social and environmental determinants of health, including access to adequate food and water, clean air, culture and livelihoods. Health is also affected by climate-related displacement, migration and reduced access to health-care services.

67. Second, the right to food is protected by Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Under that Covenant, States should take positive measures to safeguard individuals’ access to food and nutrition.¹¹⁸ Various UN treaty bodies have recognized the environmental dimension of the right to food since at least 1997.¹¹⁹ More recently, the Human Rights Council recognized that the climate emergency threatens the right to food.¹²⁰
68. The UN Special Rapporteur on the Environment has summarized the impact of the climate emergency on the right to food in the following terms:¹²¹

Food production, food security and the right to food are affected by shifting precipitation patterns, higher temperatures, extreme weather events, changing sea ice conditions, droughts, floods, algal blooms and salinization. Changes in climate are already undermining the production of major crops, such as wheat, rice and maize. Without adaptation, or where adaptations fall short, this is

¹¹⁶ ICESCR, Art. 12(2)(b).

¹¹⁷ *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*, paras. 31-32 [footnotes omitted].

¹¹⁸ CESCR General Comment 12, at para. 6.

¹¹⁹ CESCR, *Concluding Observations on the Russian Federation*, U.N. Doc. E/C.12/Add.13 (May 20, 1997), paras. 24, 38.

¹²⁰ Human Rights Council, *Resolution adopted by the Human Rights Council on 21 March 2019*, U.N. Doc. A/HRC/RES/40/7 (Mar. 21, 2019).

¹²¹ *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*, paras. 33-36.

expected to worsen as temperatures increase and become more extreme. In the oceans, temperature changes, bleaching of coral reefs and ocean acidification are affecting fisheries. Climate change also exacerbates drivers of food insecurity and malnutrition, such as conflict and poverty.

69. Third, this Court has recognized the rights to water and sanitation as being “particularly vulnerable to environmental impact.”¹²² This includes threats arising from changing patterns of precipitation, droughts, floods, deglaciation, temperature rise, sea-level rise, as well as threats to groundwater aquifers, wetlands, and riparian ecosystems.¹²³ Referring specifically to South and Central America, the United Nations Independent Expert on safe drinking water and sanitation has observed “the vulnerability of a high proportion of the population in a general context of increasing of rivers and aquifers, deforestation and growing risks of droughts and floods.”¹²⁴ The UN Special Rapporteur on the Environment has observed:¹²⁵

Climate change is affecting precipitation patterns across the world, with some dry areas receiving less precipitation and wet areas receiving more frequent and intense precipitation. The four key elements of the right to water and sanitation are threatened: availability, accessibility, acceptability and quality. The Intergovernmental Panel on Climate Change warned of particularly high vulnerability to water stress in small island developing States and parts of Africa, Asia and Latin America. Climate Change has already contributed to a water crisis in the Plurinational State of Bolivia, where glaciers are receding and water rationing has been required in major cities. ... The right to sanitation may be threatened when water is increasingly scarce, and when floods, intense precipitation or other extreme weather events damage infrastructure or impair access. The rise in extreme weather events owing to climate change increases the risk of water-borne diseases, including typhoid fever and cholera.

3. The climate emergency impairs the right to a healthy environment

70. This Court has recognized an autonomous right to a healthy environment. The right is expressly recognized in Article 11 of the San Salvador Protocol, and Article 26 of the Convention has served as conduit for the Court’s enforcement of this right under the system of individual petitions to the Court. The Court’s approach to

¹²² *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 66; see also CESCR General Comment 15, paras. 10-12.

¹²³ Pedro Arrojo Agudo, *Special thematic report on climate change and the human rights to water and sanitation by the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation* (January 2022).

¹²⁴ *Id.* at para. 57.

¹²⁵ *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*, paras. 38-39.

developing this right is consistent with the approach to systemic integration as well as the recognition of the indivisibility and interdependence of all human rights.¹²⁶

71. At the international level, the right to a clean, healthy, and sustainable environment (“**right to a healthy environment**”) has been recognized by resolutions of both the Human Rights Council and General Assembly.¹²⁷ No State voted against either resolution.
72. The right to a healthy environment is widely recognized across many domestic and international legal orders. Article 24 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights recognizes the right of all peoples to a “general satisfactory environment favourable to their development.”¹²⁸ The right is also recognized in the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,¹²⁹ the ASEAN Human Rights Declaration,¹³⁰ and the Arab Charter on Human Rights.¹³¹ The right is recognized in the constitutions, legislation, judicial decisions, or treaty obligations of at least 161 UN Member States.¹³²
73. As this Court has recognized, the right has “both individual and also collective connotations.”¹³³ Moreover, the right benefits not only humans, but also components of the natural environment “as legal interests in themselves, even in the absence of the certainty or evidence of a risk to individuals.”¹³⁴
74. As discussed in Section V.b.4 below, the right also encompasses three procedural elements in the environmental context: (a) the right to information; (b) the right to participate in decision-making; and (c) access to justice and effective remedies.
75. The substantive elements of the right to a healthy environment include a safe climate, clean air, safe and sufficient water, adequate sanitation, healthy and

¹²⁶ *Id.* at para. 57.

¹²⁷ Human Rights Council, “The human right to a clean, healthy and sustainable environment”, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13 (Oct. 18, 2021); General Assembly, “The human right to a clean, healthy and sustainable environment”, U.N. Doc. A/76/300 (July 28, 2022).

¹²⁸ African Charter on Human and Peoples’ Rights, Art. 24.

¹²⁹ American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Art. 19.

¹³⁰ ASEAN Human Rights Declaration, Art. 28(f).

¹³¹ Arab Charter on Human Rights, Art. 38.

¹³² David Boyd, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, U.N. Doc. A/HRC/43/53 (Jan. 8, 2019). Nations recognizing the right in law since 2020 include Antigua and Barbuda, Belize, Canada, Grenada, and Saint Lucia. See also the recent recognition by the CRC Committee General Comment 26.

¹³³ *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 59.

¹³⁴ *Id.* at para. 62.

sustainably produced food, non-toxic environments, in which to live, work, study, and play, and healthy biodiversity and ecosystems.¹³⁵

76. All of these elements rely on a stable climate system. Failure to take adequate mitigation and adaptation measures may constitute a violation of the right to a healthy environment.¹³⁶ This conclusion is supported by case law from domestic courts and the Commission on Human Rights of the Philippines.¹³⁷

4. The climate emergency impairs the rights of Indigenous Peoples, including their right to property

77. As discussed extensively in Section III above, the climate emergency threatens all regions of the world, but disproportionately impacts certain communities and populations who live in areas that are more susceptible to the impacts of climate change. The Advisory Opinion Request expressly requests the Court to articulate the obligations of States towards communities and populations that are especially vulnerable to the impacts of climate change, such as children (Section IV.C) and Indigenous Peoples (Section IV.E). Much of this Court’s jurisprudence on the rights of Indigenous Peoples and other populations derives from the right to Indigenous and tribal property. This Section lays out the relevant jurisprudence of the Court. Section V below discusses the specific obligations owed by States to populations and communities rendered vulnerable in the face of the climate emergency.
78. This Court has long recognized that the human rights of Indigenous Peoples are particularly vulnerable to environmental degradation. These threats give rise to heightened obligations, including “positive measures to ensure that members of these peoples have access to a dignified life – which includes the protection of their close relationship with the land – and to their life project, in both its individual and collective dimension.”¹³⁸ As this Court has explained, the vulnerability of Indigenous communities derives not only from the “special spiritual and cultural relationship with their ancestral territories, but also due to their economic

¹³⁵ David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment), *Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: A Safe Climate*, U.N. Doc. A/74/161 (July 15, 2019); see also Advisory Opinion OC-23/17, at para. 60.

¹³⁶ *Id.* at para. 44.

¹³⁷ See e.g. Supreme Court of Colombia, *Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente*, Decision of Apr. 5, 2018; High Court at Lahore, *Leghari v. Federation of Pakistan*, W.P. No. 25501/201, Decision of Apr. 4, 2015; Supreme Court of Brazil, *PSB et al. v. Brazil*, Decision of July 1, 2022; Commission on Human Rights of the Philippines, *National Inquiry on Climate Change Report*, Case No. CHR-NI-2016-0001 (May 2022); *Held v Montana*, No. CV 22-137, 2023 WL 1997864 (D. Mont. Aug. 14, 2023); Supreme Court of the State of Hawai’i, *In the matter of Hawai’i Electric Light Company*, SCOT—22—0000418, Decision of 13 Mar. 2023.

¹³⁸ Advisory Opinion OC-23/17, para. 48, citing *Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, reparations and costs*. Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, para. 163; *Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname. Merits, reparations and costs*. Judgment of November 25, 2015. Series C No. 309, para 181.

dependence on environmental resources.”¹³⁹ Additionally, in 2020, this Court ruled that Indigenous Peoples’ right to a healthy environment had been violated by the unregulated activities of settlers (who were raising cattle and installing fencing) that “had an impact on the traditional ways of obtaining food of the Indigenous communities.” The Court ordered Argentina, which knew about these activities, to formalize the titles of the Indigenous Peoples to their land promptly; to remove the livestock and fences; and facilitate access of the Indigenous Peoples to nutritious and culturally acceptable food.¹⁴⁰

79. Indigenous Peoples are entitled to the respect, protection, and fulfillment of the full range of their Convention rights. This collective or communal dimension of Convention rights of Indigenous Peoples was recognized by this Court in *Awas Tingni v. Nicaragua*, where the Court found that the right to property protects the ancestral lands of Indigenous Peoples.¹⁴¹ This Court in *Saramaka* and other cases has further elaborated on the property rights of Indigenous and Tribal Peoples over their lands, territories and natural resources, including safeguards to ensure their survival, such as the right to free and prior informed consent.¹⁴²
80. This Court repeatedly has emphasized that potentially affected Indigenous groups must be consulted in good faith. In *Saramaka*, the Court held that States must act to assure and protect the rights of Indigenous and Tribal peoples to participate effectively in consultation processes. Effective participation requires States to ensure that affected peoples “are [made] aware of possible risks, including environmental and health risks, in order that the proposed [activity] is accepted knowingly and voluntarily.”¹⁴³ States must also “actively consult with the community according to their customs and traditions,”¹⁴⁴ and, in doing so, “take account of the people’s traditional methods of decision-making.”¹⁴⁵
81. Similarly, *Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname* concerned the efforts of the Kaliña and Lokono Peoples to obtain information from the local governments that could have supported their claims that their property rights to their lands were being impacted by proposed measures. This Court held that “the failure to hand over information in Suriname’s public records, and the failure to justify the refusal to

¹³⁹ *Advisory Opinion OC-23/17*, n. 121.

¹⁴⁰ *Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina*, Judgment of February 6, 2020 (Merits, reparations and costs), Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 400, para. 248.

¹⁴¹ *Case of the Mayagna (Sumon) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, Merits, reparations and costs, IACtHR Series C No 79, [2001] IACtHR 9, IHRL 1462 (IACtHR 2001), (Aug. 31 2001).

¹⁴² *Saramaka People v. Suriname*, Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of Nov. 28, 2007. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 172, para. 92.

¹⁴³ *Id.*

¹⁴⁴ *Id.*

¹⁴⁵ *Id.*

- provide it” constituted a violation of both the right to information under Article 13 of the American Convention, as well as the right to judicial protection under Article 25.¹⁴⁶
82. Additionally, this Court has found States liable for violating the property rights of Indigenous peoples through improper exploitation of natural resources in their territories. For example, in *Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*,¹⁴⁷ this Court held that Paraguay had not safeguarded the ancestral property rights of the Yakye Axa Indigenous Community, and that Paraguay should take positive measures to protect the natural resources of the community’s recognized territory.

5. The climate emergency impairs the right to self-determination

83. Threats to human rights can be intensified because of geographic location. Certain regions of the Americas and the Caribbean are, and will be, exposed to heightened effects of the climate emergency. Individuals who are members of vulnerable groups *and* reside in these regions experience, and will continue to experience, intensified and intersecting forms of vulnerability.
84. In particular, the climate emergency poses an existential threat to the rights of those living in Small Island Developing States, including those in the Caribbean region. This Court has acknowledged that “coastal and small island communities … run a special risk” of having their rights threatened through environmental degradation.¹⁴⁸
85. As the Inter-American Commission has noted, rising sea levels and changes in rainfall patterns threaten residents of these States with “food insecurity, forced migration, disease and death.”¹⁴⁹ The Commission has also noted particular risks to those living in Central America, where the climate emergency is likely to intensify risks arising from tropical storms and hurricanes, as well as droughts in the Dry Corridor region.¹⁵⁰
86. Rising sea levels create novel concerns about these States’ right to self-determination, particularly low-lying and Small Island Developing States, to whom sea-level rise poses an existential threat.¹⁵¹ Sea-level rise and the inundation of coastal areas and islands will have consequences to those States’ sovereignty and

¹⁴⁶ *Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname. Merits, reparations and costs.* Judgment of November 25, 2015. Series C No. 309, paras. 213-226.

¹⁴⁷ *Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, reparations and costs.* Judgment of Feb. 6, 2006. Series C No. 125.

¹⁴⁸ *Id.* at para. 67.

¹⁴⁹ *Inter-American Commission Resolution 3/2021*, at page 6.

¹⁵⁰ *Id.* at page 7.

¹⁵¹ *Report of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*, U.N. Doc. A/CN.4/L.972 (July 15, 2022), para. 10.

statehood, the law of the sea based on maritime zones extending from their territories, and the protection of persons affected by sea-level rise.¹⁵²

87. Self-determination is a fundamental right. It is recognized in Article 1 of the United Nations Charter, as well as Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and Article 5 of the Declaration on the Right to Development. It includes the right of a people not to be deprived of its own means of self-subsistence.¹⁵³
88. This right is threatened by the climate emergency. As the Office of the High Commissioner for Human Rights has observed:

While the right to self-determination is a collective right held by peoples rather than individuals, its realization is an essential condition for the enjoyment of individual human rights. Climate change not only poses a threat to the lives of individuals but also to their ways of life and livelihoods, and to the survival of entire peoples.¹⁵⁴

89. The right requires States to promote the realization of self-determination, including for groups and States within their own territories.¹⁵⁵ As this Court has recognized, the right to self-determination especially implicates the rights of Indigenous Peoples.¹⁵⁶
90. The international community recognizes that there is a strong presumption of the persistence of States. The conclusion that catastrophic sea-level rise could lead to the extinction of any State, rather than these States' persistence where possible, should be disfavored.¹⁵⁷
91. It is essential to preserve the right to self-determination of those populations whose States become completely submerged by the sea or otherwise uninhabitable due to

¹⁵² Report of the International Law Commission: Seventieth Session, U.N. Doc. A/73/10 (Apr. 30 – June 1 & July 2 – Aug. 10, 2018), para. 12.

¹⁵³ Human Rights Committee, General Comment No. 12, Art. 1 (Right to Self-determination), The Right to Self-Determination of Peoples (Mar. 13, 1984), para. 6.

¹⁵⁴ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change*, Fact Sheet 38 (2021) at 5, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdf; see also Human Rights Council, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), paras. 39-41.

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ *Case of the Saramaka People v. Suriname. Preliminary objections, merits, reparations and costs.* Judgment of November 28, 2007. Series C No. 172, para. 93.

¹⁵⁷ See, e.g., Patrícia Galvão Teles & Juan José Ruda Santolaria, *Sea-level rise in relation to international law: Second Issues Paper*, U. N. Doc. A/CN.4/752, para. 30.

- sea-level rise. Maintaining statehood and implementing additional processes to enable displaced and affected populations to express their will and their identities will be key to supporting these populations' right to self-determination.¹⁵⁸
92. The right to self-determination is essential for the effective enjoyment of other human rights. As displaced communities are unlikely to be able to relocate entirely together with the same functioning institutions, host States should take special care to ensure that these communities' rights are respected.¹⁵⁹
 93. Additionally, the right to self-determination of Small Island Developing States should be respected by all States. States should avoid actions that will foreseeably cause serious infringements of this right. The Office of the High Commissioner for Human Rights therefore concluded that "States have a duty to take action, individually and jointly, to address and avert threats to the right to self-determination by mitigating climate change."¹⁶⁰
 94. Finally, the climate emergency causes the displacement of people within and between countries. This Court has recognized that the right to not be forcibly displaced is "particularly vulnerable to environmental impact."¹⁶¹ The displacement effects of the climate emergency have been recognized by the UNFCCC Conference of Parties.¹⁶² In 2015, the Conference of Parties appointed a Task Force on Displacement.¹⁶³
 95. States should respect the rights both of internally displaced persons, as well as those forced to migrate across State boundaries. States should guarantee that individuals forced to migrate can enjoy their fundamental human rights throughout their journey and upon arrival in host countries.¹⁶⁴ These rights include "the provision of

¹⁵⁸ *Id.* at para. 226.

¹⁵⁹ *Id.* at para. 252.

¹⁶⁰ *Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change*, at page 6.

¹⁶¹ *Advisory Opinion OC-23/17*, para 66; *see also San Salvador Protocol*, Preamble; *Advisory Opinion OC-23/17*, paras. 47-55; *Rio Declaration*, Principle 1.

¹⁶² *See, e.g.*, UNFCCC, Third rolling plan of action of the task force on displacement for 2022-2024.

¹⁶³ *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015*, U.N. Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, Decision 1/CP.21 (Adoption of the Paris Agreement), para 49: "Also requests the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism to establish, according to its procedures and mandate, a task force to complement, draw upon the work of and involve, as appropriate, existing bodies and expert groups under the Convention including the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert Group, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Convention, to develop recommendations for integrated approaches to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change;"

¹⁶⁴ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Universal Declaration of Human Rights; *see also OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders*,

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf; OHCHR, *OHCHR's Key Messages on Human Rights, Climate Change and Migration*, para 1: "States have affirmative

food and clean water; access to adequate housing, health care and social security, education, and decent work opportunities; and safeguarding the principles of non-refoulement and the prohibition of collective expulsion, as well as the rights to liberty, personal integrity and family unity.”¹⁶⁵

6. The climate emergency impairs the right to home, privacy, and family life

96. Article 11 of the Convention protects the right to private life. This Court has recognized the right to private life as one which is “particularly vulnerable to environmental impact.”¹⁶⁶
97. Article 11 of the Convention is based on Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights. The UN Human Rights Committee has found that the right in Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights gives rise to State obligations in the context of the climate emergency, particularly when violations of the right are foreseeable and serious. In *Billy v. Australia*, the Committee found that extensive seawall construction by Australia was insufficient to discharge these obligations. The seawalls at issue would not prevent a range of violations of the right to private life, including reduced access to food; inundation of villages and burial sites; salinization of traditional gardens; decline of nutritionally and culturally important species; coral bleaching; and ocean acidification.¹⁶⁷ Such impacts were both foreseeable and serious, in light of “their intensity or duration and the physical or mental health harm they can cause.”¹⁶⁸
98. Article 11 corresponds closely to Article 8 of the European Convention on Human Rights.¹⁶⁹ The European Court of Human Rights has long recognized that Article 8 is engaged where a person is directly and seriously affected by unsafe or disruptive environmental conditions (such as air or water pollution).¹⁷⁰ States have a responsibility for damage caused directly by the State, or by private entities that the State has failed to regulate.

obligations to take preventative and remedial actions to uphold the rights of migrants and address violations and abuse at all stages of migration.”

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/Key_Messages_HR_CC_Migration.pdf [OHCHR’s Key Messages on Human Rights].

¹⁶⁵ OHCHR’s Key Messages on Human Rights, para 1.

¹⁶⁶ *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 66.

¹⁶⁷ *Billy v. Australia*, at para. 8.12.

¹⁶⁸ *Id.* at para. 8.12.

¹⁶⁹ “Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.”

¹⁷⁰ See, e.g., *Cordella v. Italy*, ECtHR App Nos. 54414/13 and 54264/15 (Jan. 24, 2019); *Çiçek v. Turkey*, ECtHR App No. 44837/07 (Sept. 14, 2007); *Fadeyeva v. Russia*, ECtHR App. No. 55723/00 (June 9, 2005).

99. Apex courts in Member States of the European Union have also held that State measures regarding the climate emergency might violate Article 8 of the European Convention on Human Rights. For example, in *State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, the Supreme Court of the Netherlands affirmed that Article 8 of the European Convention on Human Rights requires wealthy States to reduce their carbon emissions rapidly to prevent violations of the right to private and family life and the home caused by the climate emergency.¹⁷¹
100. In sum, Article 11 requires States to protect individuals who are within their jurisdiction, or under their control, from serious and foreseeable interferences with their private lives. It is undoubtedly engaged in the climate emergency.

V. STATE OBLIGATIONS IN THE CONTEXT OF THE CLIMATE EMERGENCY

101. Our analysis of State obligations focuses primarily on those owed by State parties to the Convention. Nevertheless, this Court has previously recognized its advisory function “encompasses not only the State Parties to the American Convention,” but that an advisory opinion “also has legal relevance for all OAS Member States, as well as for the OAS organs whose sphere of competence relates to the matter that is the subject of the request.”¹⁷² Furthermore, in *Advisory Opinion OC-23/17*, when assessing the scope of Article 1(1) of the Convention in response to a request for an advisory opinion, this Court determined that it should not limit its response to specific countries on the basis that environmental obligations may be “important for all the States of the planet.”¹⁷³ Accordingly, while we direct our analysis to Convention State parties, we respectfully submit that this analysis is also relevant to the obligations of OAS Member States in regard to the climate emergency.

a. Governing principles

102. Before reviewing the human rights obligations owed by States in the context of the climate emergency, we first discuss the principles that are relevant to assessing the scope and content of those obligations. These principles are cross-cutting and inform the obligations established in the Convention. In setting out these principles, we draw on the Convention’s text, this Court’s jurisprudence, international human rights law, international environmental law, and climate treaties. Such an interpretive approach is justified by the principle of systemic integration, set out in Section IV.d above.

¹⁷¹ *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, ECLI:NL:HR:2019:2007, Judgment, Supreme Court of the Netherlands (Dec. 20, 2019) at 5.6.2, 5.8.

¹⁷² *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 30, citing *Advisory Opinion OC-18/03*, para. 60; *Advisory Opinion OC-22/16*, para. 25.

¹⁷³ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 35: “This Court has indicated that, owing to the general interest of its advisory opinions, their scope should not be restricted to specific States. The questions raised in the request go beyond the interests of the States parties to the Cartagena Convention and are important for all the States of the planet. Therefore, the Court considers that it should not limit its [sic] response to the scope of application of the Cartagena Convention.”

1. International cooperation

103. Global environmental challenges such as the climate emergency can only be addressed effectively through cooperation between States at the bilateral, regional and global levels. The UNFCCC notes that “the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate response.”¹⁷⁴
104. The duty of cooperation incorporates three interrelated obligations. First, States should notify potentially affected States of any significant environmental damage that might result from activity within a State’s jurisdiction.¹⁷⁵
105. Second, States owe a duty to consult and negotiate with potentially affected States. Such consultation and negotiation activities should be performed in good faith. This Court has observed that consultation “involves the mutual willingness of the States concerned to enter into a genuine discussion of actual and potential environmental risks.”¹⁷⁶ States should refrain from carrying out any proposed environmentally-harmful activities until consultation and negotiation have concluded.¹⁷⁷ In the context of greenhouse gas emissions, the duty of cooperation requires ongoing multilateral negotiations and agreements to reduce greenhouse gas emissions and to strengthen technical, scientific, financial and adaptive capacities. Such cooperation might require joint development of mitigation and adaptation initiatives.
106. Third, States owe one another a duty to exchange information concerning risks of transboundary harm.¹⁷⁸ In the context of the climate emergency, this includes a duty to share best available science and technology to assist other countries in developing and implementing their mitigation and adaptation policy responses.
107. Ultimately, international cooperation is central to climate mitigation and adaptation. The Draft International Covenant on the Right to Development recognizes the central role that cooperation among States should play to ensure the “full, equal and meaningful enjoyment of the right to development by every individual and all peoples everywhere.”¹⁷⁹ Draft article 13, titled, “Duty to cooperate,” provides that:

¹⁷⁴ UNFCCC, Preamble.

¹⁷⁵ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 187.

¹⁷⁶ *Id.* at para. 205.

¹⁷⁷ *Id.* at para. 205.

¹⁷⁸ *Id.* at paras. 206-208.

¹⁷⁹ Report by the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development, Zamir Akram, *Draft international covenant on the right to development*, U.N. Doc. A/HRC/54/50 (July 18, 2023), Art. 1.

4. State Parties recognize their duty to cooperate to create a social and international order conducive to the realization of the right to development by, inter alia:

[. . .]

(h) Enhancing mitigation actions and adaptive capacity, strengthening resilience and response and reducing vulnerability to climate change and extreme weather events, addressing the economic, social and environmental impacts of climate change, taking into account the imperatives of a just transition, equity and the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of national circumstances, and enhancing access to international climate finance, technology transfer and capacity-building to support mitigation and adaptation efforts in developing and least developed countries, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.¹⁸⁰

108. The UN Special Rapporteur on the Right to Development also emphasized in a report to the UN General Assembly the central importance of States' duty to cooperate to realize the right to development, especially when addressing the many challenges facing humanity, including climate change.¹⁸¹ He observed that “[s]trengthening the duty to cooperate and international solidarity will be necessary to mobilize and make available necessary resources to developing countries and in turn realize fully the right to development in all world regions.”¹⁸²

2. Prevention of environmental harm

109. The principle of prevention of transboundary environmental harm forms part of customary international law.¹⁸³ The principle requires each State to “use all the means at its disposal in order to avoid activities which take place in its territory, or in any area under its jurisdiction, causing significant damage to the environment of another State.”¹⁸⁴ It requires States not only to implement “appropriate rules and

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ Surya Deva (Special Rapporteur on the right to development), *Reinvigorating the right to development: A vision for the future*, U.N. Doc. A/HRC/54/27 (Aug. 4, 2023), para. 21.

¹⁸² *Id.* at para. 58; *see also* para. 81 (“States, especially in the global South, face significant capacity deficits – some of which are linked to past colonization and the continuing neocolonial order – in realizing the right to development. While some of these deficits relate to access to finance and technologies, others relate to good governance issues such as transparency, corruption, the rule of law, judicial independence, free media and accountability. International cooperation and solidarity will be critical to fill these capacity gaps.”).

¹⁸³ See *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)* Judgment, 2010 ICJ (Apr. 20, 2010), para. 101; *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)*, Judgment, 1948 ICJ (Mar. 25, 1948).

¹⁸⁴ *Pulp Mills*, at para. 101.

measures” to prevent significant transboundary harm, but also to ensure “vigilance in the enforcement” of those measures,¹⁸⁵ such as by monitoring activities likely to cause harm.¹⁸⁶

110. At the core of the principle is the obligation of due diligence. States should perform an environmental impact assessment wherever “there is a risk that the proposed … activity may have significant adverse impact on the environment in a transboundary context.”¹⁸⁷ This reflects a broader aim that States should, wherever possible, proactively prevent harm from occurring, rather than retrospectively addressing harm after it has taken place.
111. The duty of due diligence incorporates both procedural and substantive elements. It is an obligation of conduct which demands a high level of care. Not only should States make good faith efforts to identify environmental harm and adopt rules and measures, but States should also incorporate a high degree of “vigilance in their enforcement and the exercise of administrative control applicable to public and private operators, such as the monitoring of activities undertaken by such operators.”¹⁸⁸ As the International Law Commission has observed, States should not only formulate policies to avoid environmental harm, but also implement and enforce those policies.¹⁸⁹
112. Harm prevention obligations are triggered wherever there is a “risk of causing significant transboundary harm.”¹⁹⁰ As already noted, under developing human rights jurisprudence, States’ human rights obligations are engaged where serious harm is foreseeable.¹⁹¹ This standard of “serious harm” is met wherever environmental degradation threatens the right to life.¹⁹² Read harmoniously, the two regimes require that in the context of environmental harm, States take action to respect and ensure human rights when violations of such rights are foreseeable *and* where there is a *risk* of significant harm.

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ *Id.* A recent example of States monitoring activities likely to cause harm is the European Parliament’s adoption of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, which focuses on mandatory human rights and environmental due diligence for certain companies. See European Parliament, *Corporate Sustainability Due Diligence* (adopted on June 1, 2023).

¹⁸⁷ *Id.* at 55-56; see also *Advisory Opinion OC-23/17*, at paras. 124-25.

¹⁸⁸ *Pulp Mills* at para. 197.

¹⁸⁹ Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (2001) Art. 3.

¹⁹⁰ *Id.* at Art. 1.

¹⁹¹ See, e.g., *Billy v. Australia*.

¹⁹² *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 140.

113. This Court has found that the harm prevention principle applies to purely domestic environmental harm.¹⁹³ This is because “the obligations that it imposes are similar to the general duty to prevent human rights violations.”¹⁹⁴ In Advisory Opinion OC-23/17, this Court set out a range of domestic obligations flowing from the harm prevention principle, including duties of due diligence,¹⁹⁵ regulation,¹⁹⁶ supervision and monitoring (including particular duties owed to Indigenous Peoples),¹⁹⁷ carrying out environmental impact assessments,¹⁹⁸ preparing contingency plans,¹⁹⁹ and mitigating environmental damage.²⁰⁰ The UN Human Rights Committee reached a similar conclusion.²⁰¹
114. Interpreted harmoniously, the Convention right to life,²⁰² the harm prevention principle, and this Court’s Article 1(1) jurisprudence generate extraterritorial environmental obligations on States. This Court has found that “the State obligation to respect and to ensure human rights applies to every person who is within the State’s territory *or* who is in any way subject to its authority, responsibility or control.”²⁰³ A State “is exercising authority over that person when that person is under its effective control, either within or outside its territory.”²⁰⁴ Therefore, a person’s rights are violated “if there is a causal link between the act that originated in its territory and the infringement of the human right outside its territory.”²⁰⁵ This conclusion has been affirmed by a resolution of the Inter-American Commission, and was embraced by the UN Committee on the Rights of the Child.²⁰⁶

¹⁹³ *Id.* at para. 140.

¹⁹⁴ *Id.* at para. 133.

¹⁹⁵ *Id.* at para. 142.

¹⁹⁶ *Id.* at para. 146.

¹⁹⁷ *Id.* at paras. 152-54.

¹⁹⁸ *Id.* at paras. 162-69.

¹⁹⁹ *Id.* at para. 171.

²⁰⁰ *Id.* at para. 172.

²⁰¹ See *Portillo Cáceres and Others v. Paraguay*, CCPR/C/126/D/2751/2016, Communication 2751/2016.

²⁰² *Id.* at para. 63.

²⁰³ *Id.* at para. 73 [emphasis added]; see also *Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection*, Advisory Opinion OC-21/14 Inter-Am. Ct. H. R. (Aug. 19, 2014), para. 61.

²⁰⁴ *Id.* at para. 81.

²⁰⁵ *Id.* at para. 101.

²⁰⁶ *Inter-American Commission Resolution 3/2021*, at pages 5-6. *Sacchi v. Argentina*, paras. 9.7-9.12.

3. Precaution

115. “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”²⁰⁷ This formulation, contained in the Rio Declaration, is the core of the precautionary principle. The precautionary principle has been recognized by this Court.²⁰⁸ It is also found in many international environmental instruments,²⁰⁹ including the UNFCCC, which provides that:²¹⁰

The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested parties.

116. Like the harm prevention principle, the precautionary principle requires States to act before environmental harm occurs. States should make good faith efforts to anticipate future environmental risks (including those derived from greenhouse gas emissions) and address such risks even in the face of uncertainty.

4. Polluter pays principle

117. Duties of harm prevention, cooperation and precaution all emphasize that environmental harms (including transboundary harms) should be addressed before they occur. Where such harms do occur, the polluter pays principle requires that the cost of addressing such harms should be borne by the polluter.
118. The polluter pays principle has been recognized in international jurisprudence since 1941.²¹¹ It is reflected in Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and

²⁰⁷ *Rio Declaration on Environment and Development*, U.N. Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I) (Aug. 12, 1992), [Rio Declaration] at Principle 15.

²⁰⁸ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 180.

²⁰⁹ See, e.g., *Rio Declaration*, at Principle 15; *Stockholm Declaration*.

²¹⁰ UNFCCC, Art. 3.3.

²¹¹ Arbitral Trib., *Trail Smelter Arbitration (U.S. v. Can.)*, 3 U.N. Rep. Int'l Arb. Awards 1905, 1965-66; 1974-78 (1941).

Development, which provides that “the polluter should, in principle, bear the cost of pollution.”²¹²

119. In the context of the climate emergency, the polluter pays principle applies to mitigation, the financing of climate adaptation measures, and obligations related to loss and damage. While the polluter pays principle applies to all States in the context of the climate emergency, it may also give rise to differentiated obligations. Specifically, its application requires major historic and current emitters of greenhouse gases to provide greater financial contributions to ongoing mitigation, adaptation and loss and damage obligations. The polluter pays principle thus reinforces the principles of differentiated obligations discussed above.

5. Best available scientific knowledge

120. State responses to the climate emergency should be informed by the best available science. The right to science requires that States adopt mitigation and adaptation measures on the basis of the best available scientific evidence.²¹³
121. Science provides the international community with knowledge about the risks and harms posed to human health and the environment by climate change, enabling the development of evidence-based policies to prevent and address those harms.²¹⁴ Connecting the regulatory, policy-making, and scientific communities is indispensable to advancing environmental and human rights goals.²¹⁵
122. The Paris Agreement recognizes that the global response to the climate emergency should be undertaken on the basis of “the best available scientific knowledge.”²¹⁶ This in turn depends on States fulfilling their obligations of cooperation, ensuring the sharing of scientific knowledge and technical capacity.²¹⁷ The obligation to utilize best available science and align the regulatory response with such best available science also derives from human rights law. The human right to enjoy the benefits of scientific progress is protected by Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. This right includes, among

²¹² *Rio Declaration*, at Principle 14.

²¹³ Marcos Orellana (Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes), *Right to science in the context of toxic substances*, U.N. Doc. A/HRC/48/61 (July 26, 2021), para. 10.

²¹⁴ *See id.* at para. 1.

²¹⁵ *Id.* at para. 2.

²¹⁶ Paris Agreement, Preamble. The UNFCCC and Paris Agreement both require States to utilize best available science in their calculation of emissions (UNFCCC art 4(2)(a)); assessing climate policies (UNFCCC, Art. 4(2)(d)); developing strategies to reduce greenhouse gas emissions (Paris Agreement, Art. 4(1)); developing strategies to reduce greenhouse gas emissions (Paris Agreement, Art. 4(1)); and developing adaptation plans (Paris Agreement, Art. 7(5)).

²¹⁷ See *Stockholm Declaration*, Principle 20; *Rio Declaration*, Principle 9; Paris Agreement, Art. 10; UNFCCC, Art. 4.

- other things, the right to “share in scientific advancement and its benefits”²¹⁸ and to “enjoy the benefits of scientific progress and its applications.”²¹⁹ Importantly, this right requires States to “respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.”²²⁰
123. The Inter-American system “provides the most robust and comprehensive protection of the right to science among the regional human rights systems,”²²¹ recognizing the right to science in the American Declaration of the Rights and Duties of Man,²²² the Charter of the Organization of American States,²²³ and the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.²²⁴

6. Non-regression

124. The principle of non-regression is the counterpart of progressive realization (discussed below).²²⁵ States should not allow or pursue actions that have the effect of diminishing the legal protection of the environment or of access to environmental justice.²²⁶ Once a State has enacted or accepted a measure of environmental protection, it should not weaken that measure. The non-regression principle ensures that States work toward stronger standards on global environmental challenges (including the climate emergency). It avoids a “race to the bottom” that may occur where countries compete to attract foreign investment by weakening domestic environmental protection laws.
125. The principle of non-regression is widespread in international treaties and investment agreements, with over 150 States now subscribing to a non-regression clause in at least one agreement.²²⁷ Together with progressive realization, non-regression is one of the guiding principles of the Escazú Agreement.²²⁸ It is also

²¹⁸ UDHR, Art. 27.

²¹⁹ ICESCR, Art. 15; *see also* CESCR General Comment 25.

²²⁰ ICESCR, Art. 15(3).

²²¹ A/HRC/48/61 at para. 32.

²²² ADHR, Art. XIII.

²²³ OAS Charter, Art. 38.

²²⁴ San Salvador Protocol, Art. 14.

²²⁵ CESCR General Comment 15, para. 32.

²²⁶ IUCN World Declaration, Principle 12.

²²⁷ Andrew D. Mitchel & James Munro, *An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections*, 72 ICLQ 35 (2023).

²²⁸ Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement) [Escazú Agreement], Art. 3(c).

reflected in Article 4.3 of the Paris Agreement and has been applied in environmental cases by courts in the Americas.²²⁹ A Brazilian court recently applied this principle to overturn a decision of the federal government to allow sugarcane plantations in the Amazon, contrary to a rule enacted in 2009.²³⁰ The non-regression principle is clearly articulated in Article 11(8) of the Constitution of Ecuador, which provides, “[a]ny deed or omission of a regressive nature that diminishes, undermines or annuls without justification the exercise of rights shall be deemed unconstitutional.”²³¹

126. Regressive measures are permissible only where the State has considered all available alternatives, and where the measures are “duly justified by reference to the totality of the rights provided for in the Covenant in the context of the full use of the State party’s maximum available resources.”²³²

7. Equality and non-discrimination

127. All States, when acting to respect, protect, and fulfill human rights, should act consistently with obligations of equality and non-discrimination. This obligation follows from both the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 2), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Article 2(2)). As with the principle of non-regression, States should comply with this obligation regardless of their available resources. The list of prohibited grounds of discrimination in the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is non-exhaustive²³³ and extends to a wide range of characteristics.²³⁴
128. States should avoid both direct and indirect discrimination.²³⁵ States’ climate policies should proactively reduce historical or systemic discrimination, for example by closing coal-fired power plants located in vulnerable and/or marginalized communities. When fulfilling procedural obligations, States should remove barriers that individuals, groups, and communities might face in receiving information, participating in decision-making, or seeking remedies. States should also ensure that the burdens of mitigation or adaptation activities do not fall unduly

²²⁹ Supreme Court of Brazil, *PSB et al. v. Brazil*, Decision of July 1, 2022

²³⁰ Seventh Federal Court, Amazonas, suspending the effects of Decree 10.084/2019, Case No. 1016202-09.2019.4.01.3200.

²³¹ Constitution of Ecuador (2001, rev. 2021).

²³² CESCR General Comment 15, para. 19 (applying the principle in the context of the right to health).

²³³ These instruments specify race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

²³⁴ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights, U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (July 2, 2009) [CESCR General Comment 20] discussing grounds of disability, age, nationality, marital and family status, sexual orientation and gender identity, health status, place of residence, and economic and social situation.

²³⁵ John Knox, *Framework Principles on Human Rights and the Environment*, U.N. Doc. A/HRC/37/59, Jan. 24, 2018 [Framework Principles on Human Rights and Climate Change], paras. 8-9 (Principle 3); CRC Committee General Comment 26, para. 16.

on persons or communities in vulnerable situations. This requires that States proactively consider whether activities might result from, or contribute to, existing patterns of discrimination, taking into account the heightened barriers to justice that such groups experience.²³⁶ States should avoid indirect differential treatment, unless such treatment meets strict requirements of legitimacy, necessity, and proportionality.²³⁷

129. These obligations apply to all State actions that are intended to mitigate or adapt to the climate emergency.²³⁸

8. Intergenerational equity

130. The principle of intergenerational equity is recognized in many international instruments²³⁹ and is reflected in international law jurisprudence.²⁴⁰ Intergenerational equity requires States to act as responsible stewards of the planet, protect the interests of future generations, and ensure that they will be able to meet their development and environmental needs.²⁴¹
131. Future generations include living children and those constantly arriving, both of whom are entitled to the realization of their human rights.²⁴² While children's rights are a well-established area of international human rights law, there is as yet no specific definition of "future generations." The principle of intergenerational equity is clearly applicable, however, when considering the human rights obligations that States owe toward existing children, in relation to both present *and* future harms.²⁴³
132. Intergenerational equity draws attention to the fair distribution of environmental goods and services. The Earth's material productivity and ecosystem services are

²³⁶ *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, at para. 9 (Principle 3); *CRC Committee General Comment 26*, para. 14.

²³⁷ *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, at para. 9 (Principle 3).

²³⁸ *Advisory Opinion OC-23/17*, at para. 67, citing Human Rights Council, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), at para. 42, and *UN Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 1*, at para. 81.

²³⁹ See, e.g., *Stockholm Declaration*, Principles 1 and 2; *Rio Declaration*, Principle 3; UNFCCC, Art. 3, Principle 1; UNESCO Declaration on the Responsibilities of the Present Declaration on the Responsibilities of the Present Generation towards future Generations (Nov. 12, 1997); Paris Agreement, Preamble (2015).

²⁴⁰ *Pulp Mills*, Sep. Op. Judge Cançado Trindade, para. 122; *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hung. v. Slovk.)*, (Sept. 25, 1997), Sep. Op. Judge Weeramantry, ICJ Rep 7, ICJ Rep 88 at 106-108; CESCR General Comment 15, para. 28.

²⁴¹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Analytical Study on the Relationship Between Climate Change and the Full and Effective Enjoyment of the Rights of the Child*, U.N. Doc. A/HRC/35/13 (May 4, 2017), para. 35, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/110/91/PDF/G1711091.pdf?OpenElement>.

²⁴² *CRC Committee General Comment 26*, para. 11.

²⁴³ *Sacchi v. Argentina*, at 10.13.

finite. Excessive consumption or pollution by one generation may amount to a violation of intergenerational equity and of the rights of children and future generations, as illustrated by *Oposa v. Factoran*, the pioneering case on this principle.²⁴⁴

133. The principle of intergenerational equity also calls attention to the collective rights that future generations may hold.²⁴⁵ The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations, adopted on February 3, 2023, lists the obligations of States to respect, protect, and fulfil the human rights of future generations, and the need for accountability and the provision of full and effective reparations where States have breached these obligations.²⁴⁶
134. States should recognize that future generations not yet alive will one day be the holders of rights under the Convention, and that the acts or omissions of today, including a failure to protect the environment, may diminish the ability of those future rights-holders to enjoy their rights.

9. Differentiated obligations

135. Some principles—such as prevention and precaution—should be immediately realized equally by all States. Other principles are differentiated, which means they give rise to different obligations owed by different States, depending on their available resources and historic and ongoing contributions to the climate emergency. Differentiated obligations arise from several principles in the UNFCCC and Paris Agreement.²⁴⁷ These principles are discussed below.

(a) Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

136. As noted in the UNFCCC, “change in the Earth’s climate and its adverse effects are a common concern of humankind.”²⁴⁸ The responsibility for addressing the climate emergency is shared by all States. Nevertheless, States are differently situated in both their *responsibility* for producing the climate emergency, as well as their *capability* to address it. Thus, the UNFCCC balances the “common concern” baseline with a call for States’ obligations to be “in accordance with common but

²⁴⁴ Supreme Court of the Philippines, *Oposa v Factoran*, G.R. No. 101083 (July 30, 1993).

²⁴⁵ See, e.g., *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 59: “In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal value that is owed to both present and future generations.”

²⁴⁶ See *Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations* (adopted on Feb. 3, 2023).

²⁴⁷ UNFCCC, Arts. 3.1, 3.2; Paris Agreement, Art. 2(2).

²⁴⁸ UNFCCC, Preamble.

- differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and economic conditions.”²⁴⁹
137. This principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities takes into account the deep inequalities that exist between developed and developing States. Wealthy States have vastly contributed to the volume of global greenhouse gas emissions responsible for the climate emergency, while benefitting from associated economic development. Put bluntly, “[t]he main contributors to the problem have reaped immense economic benefits and thus have the greatest responsibility to solve the problem.”²⁵⁰ Mitigation burdens, as well as the resourcing and financing of climate mitigation, adaptation and loss and damages, must, should reflect these historic and ongoing responsibilities and capabilities.
138. The principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities is reflected in the operational provisions of the UNFCCC and Paris Agreement. The UNFCCC differentiates between developed (Annex I) and developing (Annex II) countries, which have different obligations concerning their greenhouse gas emissions,²⁵¹ and regarding the provision of finance and technology to other countries.²⁵² The Paris Agreement takes a more dynamic approach.²⁵³ Rather than referencing the bifurcated UNFCCC Annexes, the differentiated obligations of States can be adjusted over time, reflecting contemporary conditions within and among States. The Agreement requires that developed States “take[e] the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets,” while developing countries should “continue enhancing their mitigation efforts,” and “move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets.”²⁵⁴ This reflects both the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities and the principle of progressive realization.²⁵⁵ The Paris Agreement likewise maintains that developed States should “take the lead in mobilizing climate finance.”²⁵⁶

²⁴⁹ See also *Rio Declaration*, at Principle 7 (“In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”).

²⁵⁰ *Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 2*, at para. 26.

²⁵¹ UNFCCC, Arts. 4.1-4.2.

²⁵² UNFCCC, Arts. 4.3, 4.7.

²⁵³ See Christina Voigt & Felipe Ferreira, ‘Dynamic Differentiation’: The Principles of CBDR-RC, Progression and Highest Possible Ambition in the Paris Agreement, 5 Transnat'l Env. L. 285 (2016).

²⁵⁴ Paris Agreement, Art. 4(4).

²⁵⁵ These principles are discussed below in Section V.b.6.

²⁵⁶ Paris Agreement, Art. 9(3).

139. The principle is relevant not just globally, but to State parties to the Convention. Different State parties have different levels of responsibility (owing to historic and ongoing emissions), as well as different ongoing capacities to reduce greenhouse gas emissions or adapt to the impacts of the climate emergency.

(b) Highest possible ambition and maximum available resources

140. The principle of highest possible ambition requires that *all* parties enact ambitious climate policies. It is a cornerstone of the Paris Agreement, which applies the principle to preparing nationally determined contributions and taking measures to achieve them.²⁵⁷ Such nationally determined contributions should reflect the commitments of the Paris Agreement to keep the increase in global temperature to *well below 2°C*, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C. Nevertheless, the principle acknowledges that the highest possible ambition will vary between States: what is possible in one State may be different from that in other States. Accordingly, this principle is closely related to other principles of differentiation, such as the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.
141. The principle of maximum available resources derives from Article 2(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.²⁵⁸ It is also incorporated in the San Salvador Protocol.²⁵⁹ The realization of human rights, including those related to environmental protection, often requires expenditure of State resources. The level of available resources varies dramatically between States. However, States which lack resources to realize certain rights should still use the maximum of resources *available* to them, and work towards the *progressive* realization of those rights. Importantly, “maximum available resources” includes “both the resources existing within a state as well as those available from the international community through international cooperation and assistance.”²⁶⁰ The concept is thus closely related to the obligation of cooperation set out above.

b. State obligations with regard to specific issues raised in the Advisory Opinion Request

142. Several of the obligations discussed in Sections V.a and V.b above apply to specific issues raised in the Request for Advisory Opinion. For the sake of brevity, the UN Rapporteurs do not repeat each applicable obligation in the sub-sections below. Instead, the UN Rapporteurs provide more detail or context as applicable in each

²⁵⁷ Paris Agreement, Art. 4(3).

²⁵⁸ Each State must take actions “to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all available means.”

²⁵⁹ *San Salvador Protocol*, Art. 1.

²⁶⁰ UN Economic and Social Council, *An Evaluation of The Obligation to Take Steps to the “Maximum of Available Resources” Under an Optional Protocol to the Covenant*, U.N. Doc. E/C.12/2007/1 (Sept. 21, 2007), para. 5; see also *San Salvador Protocol*, Art. 1, which requires States to adopt measures “both domestically and through cooperation among states.”

of the following sub-sections that address specific parts of the Advisory Opinion Request.

1. State obligations are derived from the duties of prevention and the guarantee of human rights, including the right to a healthy environment, in relation to the climate emergency (Part IV.A of the Advisory Opinion Request)

143. As discussed in Sections IV.e.3 and V.a.2 above, the climate emergency impairs the right to a healthy environment, triggering the obligations of States to apply the prevention principle. Specifically, State duties are engaged where there exists a foreseeable risk of serious environmental harm that adversely affects the effective enjoyment of human rights, including the right to a healthy environment. Such risks are pervasive in the climate emergency. Such risks therefore give rise to obligations of prevention, mitigation, adaptation, cooperation, and loss and damage, among others. The fulfillment of these obligations should be informed by several of the principles discussed above, including the application of the best available knowledge, prevention, and the precautionary principle.
144. The fundamental obligation of States to address current risks is to reduce greenhouse gas emissions urgently and deeply, in line with the best available science. This is reflected in Article 2 of the UNFCCC, which provides that its “ultimate objective” is to “achieve … stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.” Burning fossil fuels and biomass (73.2 percent) and agriculture and deforestation (18.4 percent) account for 91.6 percent of global emissions.²⁶¹ Accordingly, States, especially historic and current high emitters, should phase out fossil fuels, end deforestation and transform industrial agriculture in order to fulfill their obligations.
145. Additionally, State policies to protect Convention rights in the context of the climate emergency should be *comprehensive*. They should address all economic sectors and forms of greenhouse gas pollution. When formulating policies, States should incorporate all necessary measures to meet their Convention obligations to respect, protect, and fulfill human rights. States should be guided by the obligation to protect against foreseeable threats of serious harm. At minimum, States should align their policies and measures with the best available science, as well as obligations under international environmental law – including those found in the UNFCCC and Paris Agreement. The obligation to prevent harm applies both to government activities, as well as the activities of non-State actors.²⁶² For example, States should require business to conduct climate change due diligence; disclose

²⁶¹ See Hannah Ritchie and Max Roser, “Emissions by sector,” Our World in Data, <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>.

²⁶² Pulp Mills, at para. 197.

- their emissions; limit their emissions through regulation; install non-emitting technologies; and prohibit lobbying against phasing out of fossil fuels.
146. Finally, rules should be binding and enforceable. States' obligations under the duty of prevention extend beyond procedural obligations. States should not only *formulate policies* aimed at reducing transboundary and domestic harm, but also *implement, monitor*, and effectively *enforce* those policies.²⁶³
147. Ways in which States may execute and fulfill their obligations are discussed in Section VI below. It should be noted that the differentiated obligations of States – including the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities – means that the responsibility for fulfilling obligations should be most urgently met by industrialized States.
- 2. State obligations to preserve the right to life and survival in relation to the climate emergency in light of science and human rights (Part IV.B of the Advisory Opinion Request)**
148. Threats to the right to life are, by definition, “serious.” Accordingly, States owe obligations to respect and ensure human rights wherever threats to the right to life are foreseeable.²⁶⁴
149. As discussed above in Sections IV.e.1-3 above, the climate emergency threatens the right to life. This includes threats to its necessary conditions, such as the rights to health, food, water, and sanitation, and to a clean, healthy, and sustainable environment.
150. States should address threats to such rights. In line with the policies set out in Part VI below, States should reduce their greenhouse gas emissions, including by urgently phasing out the use of fossil fuels, and should preserve and restore carbon sinks to the greatest extent possible. States should also ensure that individuals and communities have adequate information and financial and technical resources to respond to threats to human rights. This obligation is subject to the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, as well as other differentiated obligations. Nevertheless, some obligations – including the obligation of equality and non-discrimination – should be immediately realized by all States.²⁶⁵
151. Consistent with the right of access to justice, States should ensure that domestic and international forums are available to hold States and businesses responsible where they fail to meet their obligations and responsibilities. State policies and actions should align with the best available science, including information provided

²⁶³ Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (2001) Art. 3.

²⁶⁴ *Billy v. Australia*.

²⁶⁵ See Section V.a.7 above.

by the IPCC. As part of their duties of cooperation and prevention of transboundary harm, States should share and disclose accurate and accessible information about the climate emergency – its causes, impacts, and State contributions – with one another and the public.

3. The obligations of States in relation to the rights of children and future generations in light of the climate emergency (Part IV.C of the Advisory Opinion Request)

152. Children are particularly vulnerable to health problems exacerbated by climate change, including vector-borne diseases, malnutrition, acute respiratory infections, diarrhea, and other water-borne illnesses.²⁶⁶ It has been estimated that 88% of the global disease burden associated with climate change is borne by children under the age of five.²⁶⁷ Extreme weather events pose unique threats to the health and well-being of young bodies and minds. Globally, over 500 million children live in extremely high-risk flood zones; 160 million live in high or extremely high drought severity zones; and 115 million are at high risk from tropical cyclones. By 2040, almost 600 million children will live in regions with extremely limited water resources. The United Nations Children’s Fund warns that “climate change will harm the poorest and most vulnerable children first, hardest and longest.”²⁶⁸
153. The climate emergency poses particular challenges to children’s right to health, protected under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and by Article 24 of the UN Convention on the Rights of the Child. The impact of the climate emergency on children and youth is particularly stark.²⁶⁹ It is also twofold: as the UN Committee on the Rights of the Child has observed, children are “particularly impacted by the effects of climate change, both in terms of the manner in which they experience such effects as well as the potential of climate change to affect them throughout their lifetime.”²⁷⁰ In other words, not only will children and young people bear the brunt of the climate emergency by living in a hotter and less stable future, but they are also more vulnerable to both physical and mental health impacts in the present.²⁷¹
154. The UN Committee on the Rights of the Child additionally observed that “the effects of climate change, including water scarcity, food insecurity, vector-borne

²⁶⁶ Human Rights Council, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Analytical study on the relationship between climate change and the full and effective enjoyment of the rights of the child*, U.N. Doc. A/HRC/35/13 (June 6-23, 2017).

²⁶⁷ Ying Zhang, et al., *Climate change and disability-adjusted life years*. J Environ Health. (Oct. 2007); 70(3):32-6.

²⁶⁸ UNICEF, *Unless we act now: The impact of climate change on children* (2015).

²⁶⁹ Inter-American Commission Resolution 3/2021, at III.21; CRC Committee General Comment 26, para. 96.

²⁷⁰ *Sacchi v. Argentina*, at 12. [emphasis added]

²⁷¹ IPCC Working Group II, AR6: *Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability: Summary for Policymakers*, B.4.4, page 15.

and waterborne diseases, the intensification of air pollution and physical trauma linked to both sudden- and slow-onset events, are disproportionately borne by children.”²⁷² There is also a “clear emerging link between environmental harm and children’s mental health, such as depression and eco-anxiety.”²⁷³

155. As discussed in Section V.a.8 above, which addresses the principle of intergenerational equity, States’ obligations to respect, protect, and fulfill children’s rights should be a top priority, requiring States to take urgent, just, effective, and positive measures.²⁷⁴ States owe a “heightened duty of care” toward children, who “are far more likely than adults to suffer serious harm.”²⁷⁵ States should take the best interests of children into account as a primary consideration in all policies.²⁷⁶ While States “retain discretion in arriving at a reasonable balance between determining the appropriate levels of environmental protection and achieving other social goals,” States should nevertheless acknowledge the serious harms that the climate emergency produces for children, “and therefore set and enforce environmental standards that protect children from such disproportionate and long-term effects.”²⁷⁷
156. Under international human rights law, all children have the right to be heard.²⁷⁸ The realization of this right improves environmental decision-making.²⁷⁹ Children should be involved in States’ decision-making concerning the need for policy responses to the climate emergency, as well as the design and implementation of such policies. States should identify decisions and policies with particular impacts on children and conduct a more detailed procedure (a child rights impact assessment) to determine children’s best interests.²⁸⁰
157. Children’s views should be proactively sought, with additional support given to children with disabilities, children belonging to minority groups, and children living in vulnerable areas.²⁸¹ Children should be provided with age-appropriate, safe and accessible mechanisms to make their voices heard, and should be provided with

²⁷² CRC Committee General Comment 26, para. 40, citing IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, Summary for Policymakers*, figure SPM.1, The data show the disproportionate, cumulative and long-term effects of climate change on people born in 2020.

²⁷³ CRC Committee General Comment 26, para. 41.

²⁷⁴ *Billy v. Australia; Sacchi v. Argentina*.

²⁷⁵ CRC Committee General Comment 26, para. 73.

²⁷⁶ UNCRC, Art. 3.

²⁷⁷ CRC Committee General Comment 26, para. 73.

²⁷⁸ UNCRC, Art. 12.

²⁷⁹ CRC Committee General Comment 26, para 26.

²⁸⁰ *Id.*

²⁸¹ *Id.* at para. 26.

meaningful and effective education concerning the climate emergency and human rights.²⁸² Children have the right to access accurate and reliable information concerning the causes, effects, and actual and potential sources of climate harm, as well as State responses.²⁸³ Dissemination of information should be appropriate to children's age and capacities.²⁸⁴ In line with the principle of cooperation, States parties to the Convention should facilitate regional and international mechanisms for child and youth participation in decision-making.²⁸⁵ Children and youth should be included in national delegations at climate negotiations and other international climate events.

158. All State policies and actions concerning the climate emergency should comply with the UN Convention on the Rights of the Child, which has been ratified by all State parties to the Convention.²⁸⁶
159. The UN Rapporteurs endorse the position of the UN Committee on the Rights of the Child, which has found that a child-rights consistent mitigation policy should:
 - specify how national policies—including nationally determined contributions—respect, protect and fulfill children's rights;
 - meet the principles of highest possible ambition and common but differentiated responsibilities, while protecting children's rights to the maximum possible extent;
 - progressively increase the ambition of mitigation action over time, keeping in mind that the time frame for preventing catastrophic climate change and harm to children's rights is short and requires urgent action;
 - avoid delaying a rapid phase out of fossil fuels, which would result in higher cumulative emissions and thereby greater foreseeable harm to children's rights; and
 - avoid reliance on unproven technologies, and instead prioritize rapid and effective emissions reductions now in order to support children's full enjoyment of their rights in the shortest possible period of time and to avoid irreversible damage to nature.²⁸⁷

²⁸² *Id.* at para. 27.

²⁸³ *Id.* at para. 33.

²⁸⁴ *Id.* at para. 34.

²⁸⁵ *Id.* at para. 28.

²⁸⁶ CRC Committee General Comment 26, paras. 20, 98.

²⁸⁷ CRC Committee General Comment 26.

- 160. State adaptation policies also should be consistent with children’s rights. Due weight should be given to the views of children in planning adaptation decisions.²⁸⁸ Adaptation measures should consider both imminent and long-term threats to the rights of children.²⁸⁹ States should also consider their obligations to children when compensating for loss and damage.²⁹⁰
- 161. Additionally, the human rights of future generations are implicated and threatened by the climate emergency. As reflected in the Paris Agreement, global heating of more than 2°C will drastically interfere with the rights of future generations, global heating of 1.5°C will also lead to substantial impairment, and current heating of 1.2°C is already causing significant harm. Furthermore, the deferral of action on climate change to a future date depletes the “budget” of carbon emissions, thus imposing an unfair burden on, and impairing the rights of, future generations.²⁹¹
- 162. No human rights instrument contains forward-looking temporal limitations on human rights. As recognized in the 2023 Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations, where States fail in their obligations to protect and sustain natural resources and cultural heritage, both imperiled by climate change, they create human rights concerns for present and future generations.²⁹²
- 163. Finally, the principle of international cooperation is particularly relevant to the rights of children. Article 4 of the UN Convention on the Rights of the Child requires a “framework of international co-operation” in the realization of children’s rights. Where cooperation leads to the transfer of climate finance and technology, such programs should be rights-based, and States should allocate a portion of finance and assistance to child-focused programs.²⁹³ States should ensure that any climate finance mechanisms uphold and do not violate children’s rights, increase policy coherence between children’s rights obligations and other objectives (such as economic development), and strengthen the demarcation of roles of various stakeholders in climate finance, such as Governments, financial institutions (including banks), businesses, and affected communities – especially children.²⁹⁴

²⁸⁸ *Id.* para. 102.

²⁸⁹ *Id.* para. 103.

²⁹⁰ *Id.* paras. 104-106.

²⁹¹ See, e.g., *Neubauer v. Germany* (2020), Decision of March 24, 2021.

²⁹² See *Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations* (adopted on Feb. 3, 2023) at § 8(b).

²⁹³ UNCRC, para. 92.

²⁹⁴ *Id.* para. 111.

4. State obligations arising from consultation procedures and judicial proceedings owing to the climate emergency (Part IV.D of the Advisory Opinion Request)

164. This Court ruled in *Advisory Opinion OC-23/17* that the right to a healthy environment includes procedural rights such as (a) access to information; (b) the right to participate in decision-making; (c) access to justice; and (d) the right to an effective remedy.²⁹⁵ The rights to information, participation and remedies are expressed in the Rio Declaration.²⁹⁶ These rights are further elaborated in the Escazú Agreement, a regional treaty with 24 signatories and 15 State parties across Latin America and the Caribbean.²⁹⁷ State parties' ratification and implementation of the Escazú Agreement strongly contribute to the realization of their Convention obligations.

(a) Access to information

165. The right of access to information is protected by the Convention, which encompasses a right to "seek, receive, and impart information."²⁹⁸ The obligation is proactive. States should ensure the accessibility of environmental information; refuse or make conditional access to such information only on narrow, rational, and prescribed grounds; and establish independent oversight mechanisms.²⁹⁹ This includes an obligation on States—recognized in multilateral climate treaties—to proactively promote and facilitate awareness and education on the climate emergency and its impacts.³⁰⁰

166. This Court has been unequivocal that States have an obligation under the Convention to provide information of public interest that it holds. In *Claude-Reyes v. Chile*, the Court held that Article 13(1) of the Convention:

protects the right of the individual to receive such information and the positive obligation of the State to provide it, so that the individual may have access to such information or receive an answer that includes a justification when, for any reason permitted by the

²⁹⁵ *Advisory Opinion OC-23/17*.

²⁹⁶ *Rio Declaration*, Principle 10.

²⁹⁷ State parties include Antigua and Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Ecuador, Grenada, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, and Uruguay. Signatories include the 15 State parties as well as Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Guatemala, Haiti, Jamaica, Paraguay, and Peru.

²⁹⁸ American Convention on Human Rights, Art. 13(1) [emphasis added].

²⁹⁹ Escazú Agreement, Art. 5.

³⁰⁰ UNFCCC, Art. 6(a); Paris Agreement, Art. 12; *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, paras. 15-19 (Principle 6).

Convention, the State is allowed to restrict access to the information in a specific case.³⁰¹

167. The “obligation of active transparency”³⁰² requires States “to provide accurate, updated, understandable information in a timely and proactive manner,”³⁰³ which should be “relevant and necessary information on the environment . . . includ[ing] information on environmental quality, environmental impact on health and the factors that influence this, and also information on legislation and policies, as well as assistance on how to obtain such information.”³⁰⁴ This obligation is applicable especially in cases of environmental emergency.³⁰⁵

(b) Participation in environmental decision-making

168. The right of public participation in governmental decision-making is protected by Article 23 of the Convention. Specific obligations concerning public participation in environmental decision-making can be found in the UNFCCC³⁰⁶ and the Escazú Agreement.³⁰⁷ Public participation is crucial in producing climate policies that draw on a wide knowledge base; identify and protect threatened rights; and are sustainable and robust.³⁰⁸ Public participation should include *all* affected and interested individuals, including those who are most vulnerable. Effective public participation depends on the protection and fulfillment of rights to expression, association, and assembly.
169. The Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change has observed that States frequently fall short of their obligations concerning public participation.³⁰⁹ He has also observed that there is a “disconnect between those who are most vulnerable to climate change impacts and those who actually participate and are represented in political and decision-making processes”—including children,

³⁰¹ *Case of Claude Reyes v. Chile*, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of Sept. 19, 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 151, paras. 76-81.

³⁰² *Advisory Opinion OC-23/17*.

³⁰³ *Id.*

³⁰⁴ *Id.*

³⁰⁵ In the case of *La Oroya*, Peru violated the La Oroya community’s right to information about the environmental and health impacts of the metallurgical complex. As such violation will be addressed by the Court’s judgement, climate change advocates have speculated and assume that such resolution could also potentially define the States’ obligation of active transparency to include stronger and more specific requirements to produce, organize, update, and disseminate environmental information.

³⁰⁶ UNFCCC, Art. 6(6).

³⁰⁷ Escazú Agreement, Art. 7.

³⁰⁸ *Special Rapporteur on Human Rights and the Environment*, *Climate Report No. 1*, at para. 58; *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, paras. 23-26 (Principle 9).

³⁰⁹ *July 2022 Report of the Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change*, at para. 73.

young people, Afro-descendants, and Indigenous Peoples.³¹⁰ The Special Rapporteur has accordingly recommended that States expand rights of standing in domestic courts and include youth representatives in national parliaments.³¹¹

170. The obligation of public participation is a proactive one. Governments should take positive steps to involve citizens in decision-making, including decisions related to the climate emergency, such as State mitigation and adaptation policies. This includes (but is not limited to) an obligation to consult widely.
171. Furthermore, the Court has also recognized that States have an additional obligation to ensure that vulnerable groups are consulted. The Court held in *Ximenes Lopes* that States should provide “special protection” to “any person who is in a vulnerable condition.”³¹²
172. In subsequent jurisprudence, the Court has repeatedly emphasized *Saramaka*’s requirement that States should consult with affected peoples early in the process of development in order for Indigenous Peoples and Tribal communities to engage in internal dialogue and effectively participate in decision-making *before* the State approves or carries out activities potentially affecting them.³¹³ Moreover, in *Sarayaku*, the Court also required that States undertake consultations in a manner that can be understood by the affected vulnerable groups, including in the language spoken by the majority of community residents.³¹⁴
173. Environmental and social impact assessments constitute one mechanism through which groups and individuals can participate in climate-related decision-making, including decisions related to States’ mitigation and adaptation policies. This Court has issued detailed guidelines for how environmental and social impact assessments should be performed, noting that such guidelines should apply broadly³¹⁵ “when there is a risk of significant environmental harm, regardless of whether the activity or project will be carried out by a State or by private persons.”³¹⁶ In *Advisory Opinion OC-23/17*, this Court included the “[d]uty to require and approve environmental impact assessments”³¹⁷ among the actions that States must take to

³¹⁰ *Id.* at para. 75.

³¹¹ *Id.* at para. 97.

³¹² *Ximenes Lopes v. Brazil*, Merits, Reparations and Costs, Judgment of July 4, 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 149, para. 103.

³¹³ *Garifuna Punta Piedra Community v. Honduras*, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of Oct.5, 2015. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 304, paras. 217, 223.

³¹⁴ *Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador*, Merits and Reparations. Judgment of June 27, 2012. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 245, para 161.

³¹⁵ *Id.* at paras. 156, 161.

³¹⁶ *Id.* at para. 174; *see also id.*, at para. 160.

³¹⁷ *Advisory Opinion OC-23/17*.

“regulate activities that could cause significant environmental damage in a way that reduces any threat to the rights to life and to personal integrity.”³¹⁸ The Court held that States must enact domestic laws or regulations regarding how environmental impact assessments should be performed, including the specific steps that must be taken to ensure that the assessment is procedurally fair.³¹⁹

174. States should allow for consideration of foreseeable risks of serious harm to the rights of potentially affected communities as part of the environmental impact assessment for projects that contribute to the emission of greenhouse gases or the degradation of natural carbon sinks. In 2020, the Supreme Court of Mexico addressed this point, finding that a regulatory proposal must undergo scientific assessment and public participation when it would result in higher greenhouse gas emissions.³²⁰

(c) Access to justice

175. Article 25(1) of the Convention guarantees the right to access to justice. This Court has held that this provision obligates States to “ensure a simple, prompt and effective judicial remedy before a competent judge or court”³²¹ and that “this remedy must be adequate and effective.”³²² The right protects against “the arbitrary exercise of public authority”³²³ and the recognition that “[t]he inexistence of effective domestic recourses places the individual in a state of defenselessness.”³²⁴ The right of access to justice with effective remedies is also protected under Article 2(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights and by the Escazú Agreement. States should ensure that restrictive standing rules do not prevent individuals, communities or civil society organizations from bringing rights-based climate lawsuits.

(d) Right to redress and effective remedy

³¹⁸ *Id.* at para. 149.

³¹⁹ *Id.* at paras. 149-150.

³²⁰ See Second Chamber of the Supreme Court of Mexico, Amparo 610/2019, 15 Jan. 2020; *see also* Mexico First Circuit Collegiate Tribunal, *Greenpeace Mexico v. Ministry of Energy and Others (on the National Electric System Policies)*, Amparo No. 104/2020, (Nov. 17, 2020) (“finding that regressive policies discriminating against renewable energy violated the right to a healthy environment and failed to engage public participation”).

³²¹ See *Case of López Lone et al. v. Honduras*, Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, Judgment of Oct. 5, 2015, Inter-Am. Ct. H.R. Series C. No. 302, para 245.

³²² *Id.*

³²³ *Case of Claude Reyes v. Chile*, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of Sept. 19, 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 151, paras. 76-81.

³²⁴ *Id.*

176. The core of the right of access to justice is the provision of effective remedies for violations of human rights, including those related to the climate emergency.³²⁵ Affected individuals should have access to remedies against government authorities and private entities.³²⁶ To meet this obligation, States should ensure access to procedures and institutions that: (a) are impartial, independent, affordable, transparent and fair; (b) review claims in a timely manner; (c) have necessary expertise and resources; (d) incorporate a right of appeal; and (e) issue binding decisions.³²⁷ State obligations associated with the right of access to justice include providing legal aid and support to affected individuals or communities, particularly those who may face barriers to accessing justice, such as children, youth, women, Indigenous Peoples, the elderly, displaced persons, Afro-descendants, and those in conditions of poverty.
177. This Court has found that the right to an effective remedy applies not only where States violate substantive obligations, but also procedural ones, such as access to information or the right to participate in environmental decision-making. In *Claude-Reyes*, this Court found that Chile owed complainants a remedy for failing to disclose all relevant information concerning a logging project in Patagonia.³²⁸ The Court held that when a State refuses or withholds access to State-held information, it must ensure the availability of “a simple, prompt and effective recourse that permits determining whether there has been a violation of the right of the person requesting information and, if applicable, that the corresponding body is ordered to disclose that information.”³²⁹
178. Examples of effective redress mechanisms can be found in the domestic legal orders of States parties to the Convention. For example, in *Future Generations v. Ministry of the Environment and Others*, the Supreme Court of Colombia sided with 25 youth plaintiffs between the ages of 7 and 26 years who had sued several corporations and public bodies within the Colombian government to enforce their rights to a healthy environment, life, health, food, and water. The plaintiffs argued that climate change, along with the government’s failure to reduce deforestation and ensure compliance with a target for zero-net deforestation in the Colombian Amazon by the year 2020,³³⁰ threatened plaintiffs’ fundamental rights. The Court notably ordered the Colombian government to establish, with the active participation of the plaintiffs, affected communities, scientific environmental research groups, and interested populations, the “Intergenerational Pact for the Life

³²⁵ *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, Principle 10.

³²⁶ *July 2022 Report of the Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change*, at para. 97.

³²⁷ *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, para. 29 (Principle 10).

³²⁸ *Case of Claude Reyes v. Chile*, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of Sept. 19, 2006. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 151.

³²⁹ *Id.*

³³⁰ As agreed under the Paris Agreement and the National Development Plan 2014-2018.

- of the Colombian Amazon,” which would include preventative, mandatory, corrective, and pedagogical strategies for the implementation of climate change adaptation measures.³³¹
179. The obligation to provide redress applies both within and across States. States’ duties arising from the right of access to justice should be read together with States’ duty of cooperation. States should support international legal frameworks that address climate-related damage and the right to redress.³³² Examples of redress frameworks produced through international cooperation include facilitation of instruments such as climate change funds or insurance mechanisms, and providing financial resources for redress to affected countries, particularly those with limited capacities to seek redress independently. There have been recent calls for the creation of a global mechanism to raise reconstruction grants for any country imperiled by a climate disaster and a multilateral lending agency to accelerate private investment in the low carbon transition.³³³
180. State redress obligations include those related to loss and damage. States should cooperate to ensure that the recently agreed-upon global Loss and Damage Fund is swiftly operationalized and funded from a wide range of sources, primarily wealthy and historically high emitting States. To safeguard the right to redress, the Fund should be independent, capitalized, supported by a coordination mechanism, and capable of distributing funds directly to climate-affected communities.

5. State obligations related to the protection of territorial and environmental defenders, as well as women, Indigenous Peoples, and Afro-descendant communities in the context of the climate emergency (Part IV.E of the Advisory Opinion Request)

181. While the climate emergency impairs the rights of all people globally, it disproportionately threatens the rights of individuals and communities in vulnerable situations.³³⁴ This Court has found that in the context of the climate

³³¹ *Generaciones Futuras v. Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible*, República de Colombia Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 (Apr. 5, 2018).

³³² See Charter of the United Nations, Arts. 55–56; ICESCR, Art. 2 (1).

³³³ *The 2022 Bridgetown Initiative* (Sept. 23, 2022), <https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/>.

³³⁴ Inter-American Commission Resolution No. 3/2021, at III.16 (“Climate change affects all people, but it generates differentiated impacts with respect to the effective enjoyment of their rights. States have a reinforced obligation to guarantee and protect the rights of individuals or groups who are in situations of vulnerability or who are particularly vulnerable to the damage and adverse impacts of climate change because they have historically and systematically borne the greatest burden of structural inequality.”); see also IPCC Working Group II, AR6: *Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, Chapter 12, page 1691, noting that the Latin American & Caribbean region is “highly exposed, vulnerable and strongly impacted by climate change,” and that existing “[p]rofound economic, ethnic and social inequalities are exacerbated by climate change.”

- emergency, “States are legally obliged to confront these vulnerabilities based on the principle of equality and non-discrimination.”³³⁵
182. Marginalized persons and communities in vulnerable situations include children and youth, women,³³⁶ Indigenous Peoples, racial and ethnic minorities (including Afro-descendent communities), migrants, refugees, internally displaced persons, informal settlers, persons in detention, persons in situations of homelessness, peasants, fisherfolk, persons with disabilities, and older persons.³³⁷
183. Effective recognition of vulnerable and marginalized groups is an obligation that applies equally to both industrialized and developing States.³³⁸ As discussed in Section V.a.7 above, this “equality of treatment” is necessary to ensure the uniform application of the highest standards of consideration of those that are “particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.”³³⁹
184. In recognizing the needs of people in vulnerable situations, States, international organizations, and businesses should incorporate principles of inclusion, meaningful participation, and intersectionality into climate action.³⁴⁰ Climate change exacerbates existing inequalities and discrimination, impacting individuals and communities differently based on their environmental, geographical, and

³³⁵ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 67, citing Human Rights Council, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009), para. 42, and *UN Special Rapporteur on the Environment, Climate Report No. 1*, para. 81.

³³⁶ The IPCC has observed that in the Latin America and Caribbean region, “[w]omen, particularly the poorest, are most vulnerable and are impacted in greater proportion. Often they have less capacity to adapt, further widening structural gender gaps.” See IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, page 1692; *see also Inter-American Commission Resolution 3/2021*, at III.19, observing that “[w]omen and girls face greater risks ... due to the adverse effects of climate change that increase all existing gender inequalities.” See further Committee on Discrimination Against Women, General Recommendation No. 37 on gender related dimensions of disaster risk reduction in the context of Climate Change.

³³⁷ See Ian Fry (Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change), *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change*, U.N. Doc. A/HRC/53/54 (Apr. 18, 2023); Balakrishnan Rajagopal (Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context), *Towards and just transformation: climate crisis and the right to housing*, U.N. Doc. A/HRC/52/27 (Dec. 23, 2022); Saad Alfarargi (Special Rapporteur on the right to development), *Climate action at the national level*, U.N. Doc. A/HRC/48/56 (July 2, 2021); and Lancet, 2022, 400: 1619-54, *The 2022 report of the Lancet on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels*, noting that “annual heat-related deaths in people older than 65 years [have increased] by 68% from 2000-04 to 2017-21.”; *see also* A/67/299, A/75/208, A/66/285, A/HRC/49/61, and A/HRC/44/30; *see also* David Boyd & Marcos Orellana, *The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment*, U.N. Doc. A/HRC/49/53 (Jan. 12, 2022).

³³⁸ Paris Agreement, Preamble.

³³⁹ Paris Agreement, Arts. 7.5 and 7.9.

³⁴⁰ The Enhanced Lima Work Programme on Gender and its gender action plan, Decision 3/CP.25 (Dec. 12, 2019), Preamble [Enhanced Lima work program].

economic conditions, as well as their gender, race, socio-economic status, age, and other identities.³⁴¹

185. The principle of intersectionality requires that States be cognizant of the fact that individuals may simultaneously possess several different statuses and identities. These overlapping identities may compound a particular individual's vulnerability.³⁴²
186. At the domestic level, this standard should guide States' actions when formulating policies to address the urgent threat of climate change. For example, when implementing climate actions, Honduras has committed to culturally sensitive, participatory, and inclusive consultation of affected communities, marginalized groups, and civil society organizations,³⁴³ allowing for the integration of diverse perspectives and knowledge systems in decision making.³⁴⁴ States such as Jamaica, Costa Rica, and Bolivia have designed climate policies and measures to protect and promote human rights.³⁴⁵ This approach involves prioritizing the needs and vulnerabilities of marginalized and disadvantaged groups, including Indigenous Peoples, Afro-descendent communities, women, children, older persons, persons with disabilities, and refugees, among others.³⁴⁶

(a) Climate defenders

187. Environmental, climate, and human rights defenders are protected by a range of human rights yet are routinely subjected to threats, harassment, intimidation,

³⁴¹ *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 67; UNFCCC, Art. 4.8; Human Rights Council, Resolution 16/11, April 12, 2011, A/HRC/RES/16/11, preamble; Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, February 1, 2016, A/HRC/31/52, para. 81; Human Rights Council, *Mapping report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, John H. Knox, of December 30, 2013, A/HRC/25/53, paras. 69-78, 81; Enhanced Lima work program, Preamble.

³⁴² See Report of the Special Rapporteur on the right to development, *Reinvigorating the right to development: a vision for the future*, A/HRC/54/27, 4 August 2023, para. 12.

³⁴³ See Government of the Republic of Honduras, *National Determined Contribution of Honduras*, page 26: "Honduras reaffirms the commitment of its government to respect, promote and take into consideration their respective obligations with respect to human rights, gender equality and intergenerational equity, committing to ensure a transversal perspective and guarantee that women, youth, indigenous peoples and Afro-Honduran people have full and effective participation in decision-making when implementing climate actions, given the great importance of these different groups of people in the national context as they are highly vulnerable to the impacts of climate change."

³⁴⁴ *Rio Declaration*, Principle 10; *Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador*, Merits and Reparations. Judgment of June 27, 2012. Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 245, paras. 217 and 222. The Court stated that "States have an obligation to ensure that indigenous peoples are properly consulted on matters that affect or could affect their cultural and social life [...]."

³⁴⁵ Government of Jamaica, Climate Change Policy Framework for Jamaica (July 2021), pages 44-45; See Plurinational State of Bolivia, *National Determined Contribution (NDC) of the Plurinational State of Bolivia*, page 4, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC_Bolivia-2021-2030_UNFCCC_en.pdf; Dirección General de Política Exterior Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, *Cuestionario en relación con la resolución del consejo de derechos humanos A/HRC/RES/44/7 sobre derechos humanos y cambio climático*, page 3-4, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/RightsOlderPersons/costa-rica-submission.pdf>.

³⁴⁶ Paris Agreement, Preamble; *Advisory Opinion OC-23/17*, para. 67.

violence and criminalization. Their rights to freedom of expression, assembly, association, and participation are protected by the Convention and must be protected by States.³⁴⁷ These rights may be restricted only in narrow circumstances and with compelling justification.³⁴⁸

188. In particular, States should protect the rights of environmental, land and climate defenders belonging to vulnerable groups. This includes women, girls, Indigenous Peoples, and Afro-descendant communities. Indigenous Peoples are disproportionately targeted for their actions, as are environmental and land defenders. In 2021, over 40% of all fatal attacks against environmental and land defenders targeted Indigenous Peoples.³⁴⁹
189. State parties that have ratified the Escazú Agreement should proactively and positively “guarantee a safe and enabling environment … so that they are able to act free from threat, restriction and insecurity.”³⁵⁰ The Agreement requires that States take “effective measures to recognize, protect and promote *all* the rights of human rights defenders in environmental matters,”³⁵¹ and “take appropriate, effective and timely measures to prevent, investigate and punish attacks, threats or intimidation that human rights defenders in environmental matters may suffer.”³⁵² States should protect individual environmental and land defenders and prosecute and punish their antagonists.
190. States should also refrain from criminalizing climate activists, which may have a chilling effect not only on their freedoms of assembly, association, and expression—all rights protected under the Convention—but also on civic space and democratic discourse for the broader public.
191. States should adopt and implement laws consistent with international human rights standards; publicly recognize the contributions of environmental, land and climate defenders to society; ensure their work is not criminalized or stigmatized; work with defenders to develop effective programs for protection and early warning; provide appropriate training for law enforcement officials; ensure the prompt and

³⁴⁷ See Articles 13, 15, 16 and 23 of the Convention.

³⁴⁸ Where provided by law, and where necessary in a democratic society to protect the rights of others, or to protect national security, public order, or public health or morals; and such restrictions must be narrowly tailored and proportionate. See *Framework Principles on Human Rights and Climate Change*, para. 13 (Principle 5).

³⁴⁹ Ali Hines, *Decade of defiance: Ten years of reporting land and environmental activism worldwide*, Global Witness (Sept. 29, 2022), at 11, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land-and-environmental-defenders-annual-report-archive/>.

³⁵⁰ Escazú Agreement, Art. 9(1).

³⁵¹ *Id.* at Art. 9(2).

³⁵² *Id.* at Art. 9(3).

impartial investigation of threats and violations and the prosecution of alleged perpetrators; and provide for effective compensation.³⁵³

(b) Women, girls, and gender-diverse persons

192. The burdens arising from the climate emergency are not distributed evenly. Women, faced with unequal social structures and responsibilities, generally have fewer available resources than men. Differences in ownership of household assets, greater familial responsibilities, unstable food, water and fuel access, and heightened disaster exposure can “undermine women’s ability to achieve economic independence, enhance human capital, and maintain physical and mental health and well-being.”³⁵⁴
193. This burden is heavier for women in less-developed States and those who are vulnerable across intersectional identities.³⁵⁵ Lack of comprehensive gender-responsive disaster planning has led to the creation of facilities and early warning mechanisms that ignore the needs of diverse groups of women, such as Indigenous women, women with disabilities, elders and girls, as well as gender-diverse persons.³⁵⁶
194. Furthermore, women, girls, and gender-diverse persons face a higher risk of gender-based violence during and following disasters.³⁵⁷ For example, temporary camps that lack physical security and safe infrastructure can lead to increased levels of violence against women and girls.³⁵⁸ As the UN Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls has observed, women and girls are at a heightened risk of violence (including domestic and intimate partner violence) following natural disasters,³⁵⁹ food shortages,³⁶⁰ breakdown in law and order,³⁶¹ and loss of livelihood or land use.³⁶² All these situations are at a heightened risk of realization as a result of the climate emergency.

³⁵³ *Id.* at para. 11 (Principle 4).

³⁵⁴ IPCC, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change* (2022), page 525.

³⁵⁵ *Id.* at page 526.

³⁵⁶ *Id.*

³⁵⁷ *Id.* at para. 5.

³⁵⁸ *Id.*

³⁵⁹ *Id.* at para. 24.

³⁶⁰ *Id.* at para. 28.

³⁶¹ *Id.* at para. 30.

³⁶² *Id.* at para. 39.

195. The UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women has observed that women are “particularly affected by environmental disasters, serious and infectious diseases and various forms of violence against women.”³⁶³ Several UN treaty bodies, including the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, have observed that the climate emergency exacerbates discrimination and pre-existing inequalities, including those experienced by women and girls.³⁶⁴ In recognizing the right to a clean, healthy and sustainable environment, the UN Human Rights Council called on States to adopt policies addressing gender equality.³⁶⁵ Likewise, the Paris Agreement preamble calls on State parties to specifically consider gender equality and women’s empowerment.
196. In light of these vulnerabilities, States have particular obligations to protect, respect and fulfil the rights of women, girls and gender-diverse persons in the context of the climate emergency. In line with the principle of equality and non-discrimination, States should proactively ensure that women, girls and gender-diverse persons are active participants in environmental decision-making.³⁶⁶ In planning for climate change disaster prevention and action, care should be taken not to categorize women passively into “vulnerable groups,”³⁶⁷ but to enhance their full and effective participation in disaster prevention. When women have democratic and economic equity, their votes have tended to support sustainable environmental goals and less high-emission policies.³⁶⁸ Climate policies, therefore, are strengthened by the inclusion of women.³⁶⁹
197. States should identify the particular climate vulnerabilities of women, girls and gender-diverse persons within their jurisdictions, applying an intersectional lens to identify compounding vulnerabilities (such as those of Indigenous women, older women, and women with disabilities). For example, where women and girls are primarily responsible for the provision of household or communal water, States should ensure that women are active participants in decisions concerning water adaptation; that State assistance and policies take these responsibilities of women and girls into account; and consider the possibility that the climate emergency may exacerbate gendered divisions of labor.³⁷⁰ States should likewise consider how the

³⁶³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 37 (2018).

³⁶⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women and others, *Joint Statement on Human Rights and Climate Change* (Sept. 16, 2019).

³⁶⁵ UN Human Rights Council Res. 48/13, U.N. Doc. A/HRC/RES/48/13 (Oct. 18, 2021).

³⁶⁶ *Id.* at para. 26 (Principle 9).

³⁶⁷ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 37 (2018), at para. 7.

³⁶⁸ IPCC, *Climate Change 2022*, page 527.

³⁶⁹ *Id.*

³⁷⁰ *Id.* at para. 41(a) (Principle 14); Reem Alsalem, Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, U.N. Doc. A/77/136, (July 11, 2022), para. 35.

safety of women and girls may be affected by pressures resulting from the climate emergency, including water scarcity.³⁷¹

198. As part of their duties of cooperation, States should work together to ensure that climate financing reflects gender-responsive budgeting, that women-led projects are adequately financed, and that women's rights and livelihoods are taken into account when selecting projects for funding.³⁷² State mitigation and adaptation policies should be monitored and evaluated through a gender-based lens and incorporate gender risk analysis.³⁷³

(c) Indigenous Peoples

199. As discussed in Section IV.e.4 above, this Court also has long recognized that the human rights of Indigenous Peoples are particularly vulnerable to environmental degradation. Furthermore, as noted in Section IV.e.5 above, Indigenous Peoples possess the right to self-determination.³⁷⁴ This includes the right to free, prior and informed consent.³⁷⁵ These protected property and self-determination rights should be protected in the context of the climate emergency.
200. A healthy and stable climate system is necessary for the protection of Indigenous rights. In *Advisory Opinion OC-23/17*, this Court found that Indigenous "peoples' right to collective ownership is linked to the protection of, and access to, the resources to be found in their territories, because those natural resources are necessary to the very survival, development and continuity of their way of life."³⁷⁶ Indigenous Peoples are particularly vulnerable where processes of colonization have deprived them of ownership of their traditional territories, targeted these lands for extractive industries, and failed to provide adequate investment in adaptation. This Court has ordered States, such as Argentina, to take affirmative steps to protect the rights of Indigenous Peoples to their lands, such as ensuring they have title to their lands and removing intrusions to their lands.³⁷⁷
201. This Court repeatedly has emphasized that potentially affected Indigenous groups must be consulted in good faith. Such consultation must take place "at the early stages of a development or investment plan, not only when the need arises to obtain

³⁷¹ *Id.* at paras. 26-27.

³⁷² *Id.* at paras. 71-72.

³⁷³ *Id.* at para. 80.

³⁷⁴ *Case of the Saramaka People v. Suriname. Preliminary objections, merits, reparations and costs.* Judgment of November 28, 2007. Series C No. 172, para. 93; United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Art. 3.

³⁷⁵ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Arts. 10, 11, 19, 28, 29; ILO Convention 169, Art. 16.

³⁷⁶ *Advisory Opinion OC-23/17*, citing *Yakye Axa*, para. 137; *Sawhoyamaxa*, paras. 121-22; *Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname*. Merits and Reparations. Judgment of Nov. 25, 2015. Series C No. 209, para. 173.

³⁷⁷ See, e.g., *Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina*, Judgment of February 6, 2020 (Merits, reparations and costs), Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 400.

approval from the community, if such is the case.”³⁷⁸ Examples include large-scale renewable energy projects³⁷⁹ and carbon credit or carbon offset projects that may involve potential restrictions on traditional Indigenous activities in protected forests. Furthermore, many State parties to the Convention owe obligations concerning free, prior, and informed consent which derive from the right of self-determination enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, among other human rights instruments.

(d) Afro-descendant peoples

202. The Inter-American Commission on Human Rights has recognized that Afro-Descendant peoples are among the most vulnerable to the effects of the climate emergency.³⁸⁰ This vulnerability arises from existing socioeconomic inequality, structural racism, and exposure to violence.³⁸¹ Afro-Descendent groups in rural, riparian and island settings are at particular risk, particular when they rely on their lands for subsistence.³⁸² All these factors are likely to be exacerbated by the climate emergency.
203. Afro-Descendant Peoples have long faced disproportionate exposure to severe natural disasters, including environmental pollution linked to toxic chemicals and wastes. This exposure can amount to environmental racism - increases the exposure of Afro-descendant individuals and result in health emergencies, humanitarian crises, and forced displacement.³⁸³ Meanwhile, structural racism locks Afro-Descendant persons out of decision-making institutions and processes, meaning they are often excluded from the design and implementation of climate and environmental policies.
204. This discrimination can be exacerbated in cases of intersecting vulnerabilities (such as Afro-Descendant women and girls). As the Inter-American Commission has

³⁷⁸ *Id.*

³⁷⁹ *Statnett SF v. Fosen Vind DA et al.*, Judgment of the Supreme Court of Norway, HR-2021-1975-S (Case Nos. 20-143891SIV-HRET; 20-143892SIV-HRET; 20-143893SIV-HRET), (Oct. 11, 2021).

³⁸⁰ See, e.g., Inter-American Commission on Human Rights, *The Situation of People of African Descent in the Americas*, OEA/Ser.L/V/II. Doc 62 (Dec. 5, 2011).

³⁸¹ Organization of American States, *States Must Step Up Their Efforts to Eradicate Historical Patterns of Environmental Racism*, (Mar. 21, 2022), https://www.oas.org/en/IACtHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2022/055.asp.

³⁸² Inter-American Commission on Human Rights and REDESCA, *Economic, Social and Environmental Rights of Persons of African Descent*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 109 (Mar. 16, 2021), para. 193.

³⁸³ Organization of American States, *States Must Step Up Their Efforts to Eradicate Historical Patterns of Environmental Racism*, (Mar. 21, 2022).

- recognized, this discrimination violates Convention guarantees of equality and non-discrimination,³⁸⁴ as well as rights to self-determination.
205. As part of their obligations of equality and non-discrimination, States should consider the vulnerable position of Afro-Descendant individuals and communities in the context of the climate emergency. States should proactively ensure that procedural guarantees of access to information, public participation, and access to justice are available to Afro-Descendant communities. Afro-Descendant individuals and communities should be involved at all levels of decision-making concerning climate mitigation and adaptation. In particular, States should consider how the climate emergency might exacerbate existing forms of discrimination, including barriers to government services. States should also regulate business activities so as to fulfill guarantees of equality and non-discrimination.³⁸⁵
206. As part of their prevention and due diligence obligations, States should identify particular risks posed to such communities, and work alongside communities to develop appropriate adaptation measures. Similarly, States should ensure that proposed mitigation projects do not undermine the rights of Afro-Descendant communities,³⁸⁶ and must ensure that rights to free, prior and informed consultation and consent are fulfilled.³⁸⁷

6. The common but differentiated human rights obligations and responsibilities of States in the context of the climate emergency (Part IV.F of the Advisory Opinion Request)

207. As discussed in Section V.b.9(a) above, the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, which is enshrined in the UNFCCC and the Paris Agreement, recognizes that all States share a responsibility to address climate change, but the extent of their duties may vary based on factors such as wealth, historical emissions, economic capacity, scientific knowledge, technical capability, and development needs.
208. The duty of cooperation also requires that States provide scientific, technical, and financial assistance to developing States to help address the fundamental inequity

³⁸⁴ *Id.* at para. 12.

³⁸⁵ Inter-American Commission on Human Rights and REDESCA, *Economic, Social and Environmental Rights of Persons of African Descent*, OEA/Ser.II/V/II, Doc. 109 (Mar. 16, 2021), para. 238.

³⁸⁶ *Id.* at para. 217.

³⁸⁷ *Id.* at para. 217.

that prevents the most affected States from responding effectively to climate change threats³⁸⁸ and from achieving sustainable development goals.³⁸⁹

209. Inter-State cooperation entails sharing information, best practices, and lessons learned, as well as providing technical and financial assistance to enhance the capacity of vulnerable countries and communities to address climate-related challenges. Developed countries have a responsibility to provide financial resources³⁹⁰ and technology transfer to support the mitigation and adaptation efforts of developing countries in the region.³⁹¹
210. Most State parties to the Convention are developing countries.³⁹² It is therefore vital that industrialized OAS Member States recognize obligations of cooperation owed toward developing OAS Members.
211. Furthermore, Articles 4.8 and 4.9 of the UNFCCC emphasize that specific duties of cooperation are owed to Small Island Developing States, as well as Least Developed Countries.³⁹³ In particular, “Parties shall take full account of the specific needs and special situations of the least developed countries in their action with regard to funding and transfer of technology.” A tangible example is that many Least Developed Countries have outstanding renewable energy resources but have been unable to develop these resources because of a lack of financial, regulatory and technical resources. Wealthy, historically high-emitting States should do more to assist Least Developed Countries to overcome these barriers.
212. Inter-state cooperation should also prioritize adaptation and resilience-building measures. Given the vulnerability of coastal areas and islands, States should collaborate to develop and implement strategies to protect infrastructure, ecosystems, and livelihoods from the impacts of climate change in these disproportionately affected areas. This may involve joint research and sharing expertise on coastal zone management, climate-resilient agriculture, disaster risk

³⁸⁸ Written Statement of the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law, ITLOS Case No. 31 (June 16, 2023), page 95.

³⁸⁹ UNFCCC, Art. 3.4; Paris Agreement, Arts. 6, 7.7; Kyoto Protocol, Articles 6 and 12; *see also* Written Statement of the Federative Republic of Brazil, ITLOS Case No. 31 (Jun. 16, 2023), page 17.

³⁹⁰ The allocation of climate loans and other non-grant instruments to Least Developed Countries (LDC) and Small Island Developing States (SIDS) creates serious unsustainable debt burden risks. States should consider that most climate-vulnerable countries do not have the fiscal space to adopt new debt (*see* Barbados statement “Most climate-vulnerable countries do not have the fiscal space to adopt new debt.” *The 2022 Bridgetown Initiative* (Sept. 23, 2002); *see also* UN Task Force on Financing for Development, *Financing for Sustainable Development Report 2022*, page xiii, fsdr_2022.pdf (un.org)). Given that climate financing has a direct influence over adaptation measures taken by States in need of financial support (*see* Argentina statements regarding adaptation actions, unfccc.int/resource/docs/natc/argnc3s.pdf), climate finance providers should consider delivering all adaptation finance as grants, particularly for LDCs and SIDS.

³⁹¹ Paris Agreement, Arts. 9 and 10; *Rio Declaration*, Principle 9; *Stockholm Declaration*, Principle 20.

³⁹² For example, no Convention State parties were listed in Annex B of the Kyoto Protocol, which maintained a strict distinction between the obligations of “developed” and “developing” countries.

³⁹³ Among Convention State parties, this includes Haiti.

reduction, and early warning systems. This will also require the transfer of financial and technological resources.³⁹⁴

213. In line with the polluter pays principle, States should ensure that domestic and regional mechanisms are available for individuals and communities to seek redress against State governments – as well as private actors – for damage caused by their acts and omissions in relation to the climate emergency. Mechanisms should offer an opportunity for victims of climate-related harm to establish a causal link between the acts and omissions of States and private actors, and harms experienced by individuals and communities. Such mechanisms should be based on the principles of best available science, access to justice, and the right to an effective remedy. Mechanisms should also take into account the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities.

VI. STATES SHOULD CONSIDER IMPLEMENTING THE FOLLOWING MEASURES TO SATISFY THEIR HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS REGARDING THE CLIMATE EMERGENCY

214. According to the 2022 Emissions Gap Report published by the United Nations Environment Programme, current public policies put the world on track for a temperature increase of 2.8°C by the end of this century.³⁹⁵ To meet their obligations to protect human rights in the face of the clear and grave challenges posed by the climate emergency, States should implement more ambitious policies to combat current, and prevent future, climate change and to mitigate its deleterious effects. To that end, States should consider implementing the measures set forth in this Section VI. The specific actions that individual States ultimately adopt, and the manner in which they implement those actions, will depend on their unique circumstances, building on the general principles discussed in Section V above, including the differentiated obligations set forth in Section V.a.9.

a. States should phase out the burning of fossil fuels (coal, oil, and natural gas)

215. To limit global warming to 1.5°C, States should rapidly phase out the burning of fossil fuels, which includes coal, oil, and natural gas, and should replace them with renewable forms of energy. UN Secretary General Antonio Guterres has urged States “to leave oil, coal and gas in the ground where they belong” and to funnel investments towards renewables.³⁹⁶ The energy sector is the source of around three-

³⁹⁴ UNFCCC, Art. 4.1(e)

³⁹⁵ *Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate Crisis Calls for Rapid Transformation of Societies*, United Nations Environment Programme, page 35, <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>.

³⁹⁶ Guterres Calls For Phasing Out Fossil Fuels to Avoid Climate ‘Catastrophe’, UN News (June 15, 2023), <https://news.un.org/en/story/2023/06/1137747>.

quarters of greenhouse gas emissions today, while fossil fuels make up almost four-fifths of our total energy supply.³⁹⁷

216. Successful energy transition policies require commitment to and respect of States' human rights obligations. States should consider the proposal of the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Olivier De Schutter, that just energy transition processes should capture the "triple dividend" of (a) cleaner environments; (b) decent jobs; and (c) improved access to affordable goods and services.³⁹⁸ Labor and trade union rights should also be considered when designing and implementing energy transition policies, among other factors.³⁹⁹
217. The International Energy Agency estimates that transitioning to global economy that produces net-zero greenhouse gas emissions will result in tremendous new employment opportunities, including 14 million new jobs by 2030 in the clean energy sector, with a loss of only 5 million jobs in the fossil fuel sector.⁴⁰⁰ Nevertheless, the loss of fossil fuel sector jobs will require measures to mitigate associated hardships, including worker retraining, locating new renewable energy jobs in locations where fossil fuel jobs are lost and potentially providing direct aid to the most affected regions.
218. When implementing measures to phase out the burning of fossil fuels and undergo the energy transition, States also should be cognizant of obligations they may owe under bilateral or multilateral investment treaties regarding investments made by foreign investors in these sectors. The measures should be implemented in a manner consistent with the requirements of these treaties to avoid States facing investor-state claims brought under these investment treaties that could halt or thwart progress by those States in their energy transition. The Special Rapporteur on the Environment has identified specific actions State could take to avoid future claims under the investor-State dispute settlement process and fulfill their human rights obligations.⁴⁰¹ Similarly, the Special Rapporteur on the Right to Development has identified ways in which States may reform existing investment treaties or promulgate new investment treaties that support sustainable development. Such reforms could include limiting the scope of jurisdiction of an arbitral tribunal

³⁹⁷ *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*, International Energy Agency, ["Net Zero by 2050"], page 13.

³⁹⁸ Olivier De Schutter, Special rapporteur on extreme poverty and human rights, *Extreme poverty and human rights*, U.N. Doc. A/75/181/Rev.1 (Oct. 7, 2020).

³⁹⁹ Maria Antonia Tigre, et al., *Just Transition Litigation in Latin America: An Initial Categorization of Climate Litigation Cases Amid the Energy Transition*, Columbia Law School Sabin Center for Climate Change Law (Jan. 2023), citing Inter-American Commission of Human Rights, Resolution 3/2021 Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations (Dec. 31, 2021), para. 48.

⁴⁰⁰ *Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*, page 17.

⁴⁰¹ David Boyd, Special Rapporteur on human rights and the environment, *Paying polluters: the catastrophic consequences of investor-State dispute settlement for climate and environment action and human rights*, A/76/168 (July 13, 2023).

constituted under applicable investment treaties to decide disputes concerning human rights and the environment.⁴⁰²

1. States should avoid new investments in fossil fuels

219. As long ago as 2012, the International Energy Agency estimated that two-thirds of proven fossil fuel reserves (oil, gas and coal) should not be burned if we are to limit warming to 2°C.⁴⁰³ A similar study published in 2015 concluded that 82 per cent of known coal reserves, 49 per cent of gas reserves and 33 per cent of oil reserves cannot be burned if we are to avoid dangerous climate change of more than 2°C.⁴⁰⁴ In 2016, the International Energy Agency observed that “[t]he unavoidable conclusion is that there is an urgent need for immediate radical reductions in energy sector CO₂ emissions if there is to be any chance of achieving the 1.5°C goal.”⁴⁰⁵
220. These admonitions notwithstanding, the International Energy Agency estimates that global investment in new fossil fuel supply is expected to rise by more than six percent in 2023, reaching US\$950 billion.⁴⁰⁶ More than half of that total – US\$500 billion – is attributable to the extraction of oil and gas.⁴⁰⁷
221. States should avoid new investments in fossil fuels if they are to decrease the portion of total energy supply derived from fossil fuels. The scope of such a policy could include avoiding exploration and exploitation of new fossil fuel or natural gas projects; choosing not to build new fossil fuel infrastructure, such as new pipelines; and not supporting new fossil fuel export projects.⁴⁰⁸ Building new fossil fuel infrastructure commits States to fossil fuel dependency and greenhouse gas emissions for decades to come.⁴⁰⁹ Investments in new fossil fuel activities exacerbate the global climate emergency and should be avoided by States to the fullest extent possible.

⁴⁰² See Surya Deva, Special Rapporteur on the right to development, *Role of business in realizing the right to development*, U.N. Doc. A/78/160, (July 12, 2023), paras. 83-85.

⁴⁰³ International Energy Agency, *World Energy Outlook 2012*.

⁴⁰⁴ Christophe McGlade and Paul Ekins, “The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C”, *Nature*, Vol. 517 (January 2015).

⁴⁰⁵ International Energy Agency, *World Energy Outlook 2016*, page 76.

⁴⁰⁶ International Energy Agency, *World Energy Investment 2023*, page 13.

⁴⁰⁷ *Id.*

⁴⁰⁸ Cleo Verkuijl, et. al, *Aligning fossil fuel production with the Paris Agreement: Insights for the UNFCCC Talanoa Dialogue*, Stockholm Environmental Institute (March 2018), page 2; Frank McDonald, *Two-thirds of energy sector will have to be left undeveloped, Bonn conference told*, The Irish Times (June 12, 2013), <http://www.irishtimes.com/news/world/europe/two-thirds-of-energy-sector-will-have-to-be-left-undeveloped-bonn-conference-told-1.1425009>.

⁴⁰⁹ UNEP, *Emissions Gap Report 2022* (Oct. 27, 2022), page 41.

2. States should avoid new fossil fuel subsidies and phase out existing fossil fuel subsidies

222. States should avoid new fossil fuel subsidies. They should also phase out existing subsidies, taking into consideration specific actions to mitigate the potentially adverse effects on low-income households.
223. According to the International Monetary Fund, fossil fuel subsidies “have sizable fiscal consequences (leading to higher taxes/borrowing or lower spending), promote inefficient allocation of an economy’s resources (hindering growth), encourage pollution (contributing to climate change and premature deaths from local air pollution), and are not well targeted at the poor (mostly benefiting higher income households).”⁴¹⁰ Globally, fossil fuel subsidies totaled approximately US\$7 trillion in 2022, composed of \$1.3 trillion in explicit subsidies and \$5.7 trillion in indirect subsidies (i.e. health and environmental externalities caused by the combustion of fossil fuels).⁴¹¹
224. All G20 members have pledged to remove fossil fuel subsidies, but clearly many have not fulfilled this commitment.⁴¹² The International Institute for Sustainable Development identified at least 53 governmental reforms of subsidy policies implemented between 2015 and 2020, but many subsidies remain in place.⁴¹³ Subsidy and tax reforms may prove particularly beneficial if added tax revenues are reinvested toward meeting states’ climate commitments.⁴¹⁴ Rights-based subsidy reform will ensure that the rights of people in situations of vulnerability and marginalization are taken into consideration and protected.

3. States should phase out coal extraction and use

225. States should phase out their extraction and use of coal as quickly as possible.⁴¹⁵ Coal-fired electricity is the largest source of global greenhouse gas emissions, a

⁴¹⁰ See International Monetary Fund, *Fossil Fuel Subsidies*, <https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies>.

⁴¹¹ *Id.*

⁴¹² *Id.* at page 42 (citing Falk, Gaffney et al. 2020; CAT 2022b; Clarke et al. 2022).

⁴¹³ Lourdes Sanchez, Peter Wooders, and Ronja Bechauf, *53 ways to reform fossil fuel consumer subsidies and pricing*. Global Subsidies Initiative, International Institute for Sustainable Development (Aug. 19, 2020), <https://www.iisd.org/articles/deep-dive/53-ways-reform-fossil-fuel-consumer-subsidies-and-pricing>.

⁴¹⁴ Philipp M. Richter, Roman Mendelevitch, and Frank Jotzo, *Coal taxes as supply-side climate policy: a rationale for major exporters?* Climatic Change (2018); Laura Merrill, *Financing the Sustainable Development Goals through Fossil Fuel Subsidy Reform: Opportunities in Southeast Asia, India and China*. International Institute for Sustainable Development (2014).

⁴¹⁵ “Joint Statement by UN human rights experts – Accelerate the end of the coal era to protect human rights,” (Oct. 29, 2021), available at https://www.ohchr.org/en/statements/2021/11/joint-statement-un-human-rights-experts-accelerate-end-coal-era-protect-human?LangID=E&NewsID=27740#_edn1 [Joint Statement], citing *Implications of the Paris Agreement for Coal Use in the Power Sector*, Climate Analytics (Nov. 2016); Dan Welsby, James Price, Steve Pye, and Paul Ekins, *Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world*. Nature 597, 230–234 (Sept. 8, 2021), <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03821-8>.

significant contributor of mercury emissions to the atmosphere,⁴¹⁶ and a major source of toxic ash.⁴¹⁷

226. Several UN human rights experts recommended in a joint statement that States should (a) immediately stop building new coal-fired power plants; (b) require existing coal-fired power plants to be shut down as soon as possible, and no later than 2030 in high-income nations, 2040 in upper middle-income nations, and 2050 everywhere else; (c) immediately terminate all subsidies for all actions related to coal-fired power plants and mining of thermal coal; and (d) immediately terminate all export financing for all actions related to coal-fired power plants and mining of thermal coal, with the sole exception of pollution abatement technologies that do not prolong the life of a power plant.⁴¹⁸
227. Most States recognize the urgent need to terminate coal dependency, including South American States. At COP26, Ecuador and Chile, along with over 40 other States, signed on to the “Global Coal to Clean Power Transition Statement,” pledging to avoid new investment in coal and to transition away from coal power generation as soon as possible.⁴¹⁹ Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Peru, and Uruguay are among the many States who are signatories to the Powering Past Coal Alliance (PPCA), which is committed to avoiding new investment in coal and transitioning away from coal power generation.⁴²⁰
228. Chile exemplifies the possibility of rapidly phasing out coal-fired electricity. Five years ago, 28 coal-fired power plants were in operation in Chile. By mid-2023, 8 had already been shut down. Chile plans to cease operations of all remaining coal-fired power plants by 2040,⁴²¹ and is working on a roadmap to do so by 2030.⁴²²
229. Strategies for phasing out coal must give due consideration to human rights. States must allow for those employees and workers affected by just transition policies to participate in the phase-out process. In certain cases, communities may call for a

⁴¹⁶ Joint Statement, citing *2018 Global Mercury Assessment*, UNEP (Mar. 4, 2018).

⁴¹⁷ Joint Statement.

⁴¹⁸ Joint Statement.

⁴¹⁹ “Global Coal to Clean Power Transition Statement,” UN Climate Change Conference UK 2021, (Nov. 4, 2021), available at <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230313120149/https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/>.

⁴²⁰ “PPCA Declaration,” Powering Past Coal Alliance, https://poweringpastcoal.org/wp-content/uploads/PPCA-Declaration_Text-1.pdf.

⁴²¹ See *Prohibe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica*, Boletín 13196-12, Leg. 367 (Jan. 9, 2020); see also Energy Partnership Chile-Alemania, *Coal Phase-out in Chile*.

⁴²² See *Prohibe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar de la fecha que indica*, Boletín 13196-12, Leg. 367 (Jan. 9, 2020); see also Energy Partnership Chile-Alemania, *Coal Phase-out in Chile*. See *Chile prepares roadmap to ditching coal by 2030*, Renewables Now, <https://renewablesnow.com/news/chile-prepares-roadmap-to-ditching-coal-by-2030-830363/>

faster transition. In Colombia, for example, the Wayuu Indigenous communities sought to speed up the phase-out of coal by initiating a lawsuit to annul an environmental permit granted to expand a coal mine.⁴²³

4. States should reduce and phase out existing oil and gas production

230. To meet the goal of reducing global warming to 1.5C, States should also reduce current oil and gas production, which accounts for approximately 15 percent of energy-related emissions globally, totaling 5.1 billion tons of greenhouse gas emissions.⁴²⁴ To meet that goal, the richest countries must take the lead in phasing out oil and gas production.⁴²⁵ This reflects the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. The International Energy Agency estimates that an upfront investment of US\$600 billion would be required to halve the emissions intensity of oil and gas operations globally by 2030, which is less than two-thirds the amount that will be spent on new oil and gas development in 2023 alone.⁴²⁶

5. States should reduce emissions from methane and other short-lived climate pollutants

231. States should reduce emissions from methane, black carbon and other short-lived climate pollutants resulting from the extraction, transportation and burning of fossil fuels, including through adopting cost-effective abatement technologies, and addressing emissions from agriculture, the oil and gas industry, transportation, and cooking and heating.
232. Rapid reduction in emission of short-lived climate pollutants is critical to the global effort against climate change.⁴²⁷ Research estimates that methane has a global

⁴²³ Colombia Council of State Administrative Tribunals, *Wayúu Indigenous communities and others vs. Ministry of Environment and others for environmental permit for the Cerrejón Mine*, 11001-0324-000-2019-00107-00, filed in 2019.

⁴²⁴ *Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions: A World Energy Outlook Special Report on the Oil and Gas Industry and COP 28*, International Energy Agency (June 2023), [https://www.iea.org/reports/emissions-from-oil-and-gas-operations-in-netzero-transitions](https://www.iea.org/reports/emissions-from-oil-and-gas-operations-in-net-zero-transitions).

⁴²⁵ Greg Muttitt, *Countries Must Phase Out Oil and Gas Production – and Quickly: But How Fast is Fast Enough?*, International Institute of Sustainable Development (Mar. 23, 2022), <https://www.iisd.org/articles/analysis/phase-out-oil-gas-production>.

⁴²⁶ *Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions: A World Energy Outlook Special Report on the Oil and Gas Industry and COP 28*, International Energy Agency (June 2023)..

⁴²⁷ *Emissions Gap Report 2022*, UNEP (Oct. 27, 2022), citing IPCC 2021 and IPCC 2022; see also Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volume 13, Issue 4, August 2022, pages 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>.

- warming potential around 30 times that of CO₂.⁴²⁸ In addition, black carbon has a global warming impact up to 1,500 times stronger than CO₂ per unit of mass.⁴²⁹
233. States in the Americas should update their nationally determined contributions to include reduction of emissions of methane, black carbon and other short-lived climate pollutants. For example, Mexico and Costa Rica have integrated short-lived climate pollutants into their nationally determined contributions, with the former aiming to reduce black carbon emissions by at least 51% by 2030,⁴³⁰ and the latter aiming to do so by 2030.⁴³¹
234. States have demonstrated their willingness to cooperate internationally to reduce short-lived climate pollutant emissions by entering into international agreements and commitments such as the Kigali Amendment to the Montreal Protocol,⁴³² which addresses hydrofluorocarbon phasedowns, and the Global Methane Pledge, which was signed by over 100 countries, including Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, and Uruguay.⁴³³ The participants joining the Global Methane Pledge agreed to take voluntary actions to contribute to a collective effort to reduce global methane emissions at least 30% from 2020 levels by 2030, which could eliminate over 0.2°C warming by 2050.⁴³⁴
235. The International Energy Agency proposed that cost-effective abatement technologies could be adopted to reduce methane emissions, such as replacement of existing devices, installation of new devices, and leak detection and repair to address venting and flaring from oil and gas production facilities.⁴³⁵ Eliminating routine flaring and capturing and utilizing associated gas would significantly reduce

⁴²⁸ “The Gas Industry in Latin America and the Caribbean,” Project on Organization, Development, Education and Research, (Dec. 2022), https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/12/Informe-Gas-2022_EN.pdf. [PODER].

⁴²⁹ “Black Carbon,” Climate & Clean Air Coalition, <https://www.ccacoalition.org/short-lived-climate-pollutants/black-carbon>.

⁴³⁰ See *Progress on Climate Action in Latin America: Nationally Determined Contributions as of 2019*, Euroclima+ Thematic Studies Series 13, <https://www.euroclima.org/images/Destacados/2020/Estudio-Avances-INGLES-20-5-2020.pdf>.

⁴³¹ See CCAC secretariat, “Sustainability leader Costa Rica Makes Short-Lived Climate Pollutants Key to Decarbonization” (Nov. 4, 2021), <https://www.ccacoalition.org/news/sustainability-leader-costa-rica-makes-short-lived-climate-pollutants-key-decarbonization>.

⁴³² See Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Oct. 15, 2016), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en. [Kigali Amendment]. Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay, and Venezuela have ratified the Kigali Amendment, while Dominican Republic, El Salvador, Mexico, and Paraguay have accepted the Kigali Amendment.

⁴³³ Global Methane Pledge, <https://www.globalmethanepledge.org/>.

⁴³⁴ *Id.*

⁴³⁵ *Methane Tracker*, International Energy Agency, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker#iea-total-sources>.

black carbon emissions.⁴³⁶ Colombia introduced an action plan to reduce methane through its National Strategy for Mitigation of Short-Lived Climate Pollutants. Moreover, Ecuador and Peru have committed to zero routine flaring by 2030.⁴³⁷ In 2021, the Provincial Court of Justice of Sucumbíos held that Ecuador violated the right to a healthy environment by allowing gas flaring, also violating Ecuador's international commitments.⁴³⁸ The Court ordered Ecuador to proceed with progressive elimination of all gas flares by the deadline of December 2030.⁴³⁹

236. One of the most effective ways to address black carbon emissions in the transportation sector is to regulate diesel emissions from on-road and off-road vehicles. Effective regulations could require mandating particulate filters and adopting soot-free technologies, such as electric and Euro VI vehicles.⁴⁴⁰ For example, to partially address emissions from the transportation sector, Argentina announced its Electromobility Law in 2022 which bans sales of internal combustion engine vehicles from 2041 onwards and creates a support scheme for electromobility.⁴⁴¹
237. To address residential burning of solid fuels for cooking and heating, which is the second most significant sector for black carbon emissions in South America,⁴⁴² States are encouraged to establish national or regional programs to transition homes to cleaner cooking and heating methods, prioritizing subsidies for low-income households.⁴⁴³

b. States should increase renewable energy production

238. According to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, energy production and use account for two-thirds of the world's greenhouse gas emissions

⁴³⁶ Sun, Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volume 13, Issue 4, August 2022, pages 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06>.

⁴³⁷ *Methane Tracker*, International Energy Agency, <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker#iea-total-sources>.

⁴³⁸ Ecuador Provincial Court of Justice of Sucumbíos, *Herrera Carrion et al. v. Ministry of the Environment et al. (Caso Mecheros)* (2020).

⁴³⁹ *Id.*

⁴⁴⁰ Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volume 13, Issue 4, August 2022, pages 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>

⁴⁴¹ "Law project for the Promotion of Sustainable Mobility," International Energy Agency (updated Mar. 10, 2022).

⁴⁴² See *Integrated Assessment of Short-lived Climate Pollutants in Latin America and the Caribbean*, Climate & Clean Air Coalition (2018), <https://www.ccacoalition.org/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-pollutants-latin-america-and-caribbean>.

⁴⁴³ Xiaopu Sun, et al., *Fast action on short-lived climate pollutants and nature-based solutions to help countries meet carbon neutrality goals*, Advances in Climate Change Research, Volume 13, Issue 4, August 2022, pages 564-577, <https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.06.003>; see also "Black Carbon," Climate & Clean Air Coalition, <https://www.ccacoalition.org/short-lived-climate-pollutants/black-carbon>.

and therefore transformation of the energy sector into one based on renewable energy should be at the heart of efforts to address climate change.⁴⁴⁴ The Office of the High Commissioner for Human Rights found that increasing investment in, and equitable access to, renewable energy supports State efforts to meet their human rights obligations to prevent and mitigate the adverse impacts of climate change.⁴⁴⁵ This is done by developing and fostering economic growth, contributing to livelihoods and decent work opportunities, improving human health and welfare, and advancing standards of living for people living in poverty through increased access and affordability of renewable energy sources.⁴⁴⁶

239. It is estimated that, by 2050, electricity will account for almost 50% of total energy consumption and almost 90% of such electricity generation is expected to come from renewable sources, with wind and solar together contributing nearly 70% of electricity generation.⁴⁴⁷ South America generated 63% of its electricity from clean sources in 2022, which is higher than the global average of 39%. Uruguay and Chile have the highest shares of wind- and solar-powered energy.⁴⁴⁸ The share of electricity production from clean energy in 2021/2022 of several parties to the Convention, including Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela was above the global average.⁴⁴⁹ South America is also “unique in being the only region over the last seven years that increased clean power fast enough to meet rising electricity demand and to reduce fossil generation.”⁴⁵⁰
240. However, more must be done. To meet renewable energy production targets, States should continue to remove barriers to the expansion of renewables in a manner that allows all members of society to participate and benefit inclusively. The UN Secretary-General outlined three critical actions to transform energy systems and speed up the shift to renewable energy: (a) government policies should shift subsidies away from fossil fuels and towards renewable energy; (b) private and public investments in renewable energy should triple to at least US\$4 trillion dollars a year; and (c) States should secure, scale up and diversify the supply of critical components and raw materials for renewable energy technologies. Of note, the cost

⁴⁴⁴ *Renewable Energy and the Right to Development: Realizing Human Rights for Sustainable Development*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/KMEnergy-EN.pdf>.

⁴⁴⁵ *Id.*

⁴⁴⁶ *Id.*

⁴⁴⁷ International Energy Agency, *Net Zero by 2050* (May 2021), at pages 18-19.

⁴⁴⁸ “Latin America and Caribbean: Clean power replacing emissions-intensive fossil fuels,” Ember (updated May 2023), <https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/latin-america-and-caribbean/>; see also “Wind and solar overtake coal in Chile,” Ember (Oct. 25, 2022), <https://ember-climate.org/insights/research/wind-and-solar-overtake-coal-in-chile/>.

⁴⁴⁹ *Id.*

⁴⁵⁰ Małgorzata Wiatros-Motyka, “Global Electricity Review 2023,” Ember (Apr. 12, 2023), <https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2023/#chapter-3-the-big-picture-close-to-a-tipping-point-where-clean-sources-meet-all-demand-growth>.

of renewable projects is no longer a significant economic barrier, since technologies such as wind and solar are, in most cases, cheaper than coal and other fossil fuels.⁴⁵¹

241. Renewable energy technologies should also be treated as essential and freely available global public goods. In connection with the right to science, States should work to remove obstacles to knowledge sharing and technological transfer, including intellectual property constraints.⁴⁵² Among such technology transfers, knowledge surrounding battery storage methods is of increased importance. In 2022, the United Nations called on States to create a global coalition on battery storage to fast-track innovation and deployment.⁴⁵³
 242. States should build frameworks and reform bureaucracies to level the playing field for renewables. Doing so will help ensure that renewable projects are not held up by red tape, permits and difficulties accessing grid connections. For example, rapid transformation of power systems requires that governments set new market rules for grid access, connection, and dispatch.⁴⁵⁴ Such regulations should, among other things, promote the dispatchment of a higher share of renewables, as compared to fossil fuels.⁴⁵⁵
- c. **States should manage the energy transition responsibly, accounting for human rights in the exploitation of minerals critical to the energy transition**
243. Certain minerals, which have been termed “critical minerals,” will be essential to the energy transition.⁴⁵⁶ States should secure, scale-up, and diversify the supply of critical components and raw materials for renewable energy technologies. Compared to fossil fuel-based energy systems, clean energy technologies—including wind turbines, electricity networks, and electric vehicles—require more metals like lithium, molybdenum, cobalt, copper, nickel, manganese, and zinc.⁴⁵⁷

⁴⁵¹ UN Secretary-General’s video message on the launch of the World Meteorological Organization’s State of the Global Climate 2021 Report (May 18, 2022).

⁴⁵² UN Secretary-General’s video message on the launch of the World Meteorological Organization’s State of the Global Climate 2021 Report (May 18, 2022).

⁴⁵³ *Id.*

⁴⁵⁴ UNEP, *Emissions Gap Report 2022* (Oct. 27, 2022), page 40 (citing Falk, Gaffney et al. 2022).

⁴⁵⁵ See *id.*; see also “Power system digitalisation is crucial for clean energy transitions and security in developing markets, but investment is lagging,” International Energy Agency, (June 6, 2023), <https://www.iea.org/news/power-system-digitalisation-is-crucial-for-clean-energy-transitions-and-security-in-developing-markets-but-investment-is-lagging>.

⁴⁵⁶ See Marcos Orellana (Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes), *The toxic impacts of some proposed climate change solutions*, U.N. Doc. A/HRC/54/25 (July 13, 2023).

⁴⁵⁷ “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions,” International Energy Agency (Mar. 2022), <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf>. [IEA: Role of Critical Minerals].

However, States should ensure that the exploitation and production of these critical minerals protects and respects human rights of affected communities.

244. South America accounts for 40% of global production of copper, led by Chile (27%), Peru (10%), and Mexico (3%).⁴⁵⁸ The region also supplies 35% of the world's lithium, led by Chile (26%) and Argentina (6%). Bolivia and Mexico also have substantial lithium resources.⁴⁵⁹ In addition, South America also has significant potential in graphite, nickel, manganese, and rare earth elements.⁴⁶⁰
245. The Americas are, and will continue to be, an important region in the extraction and processing of critical minerals for the clean energy transition. However, States should legislate and enforce high environmental, social and governance standards, maximize public returns, and ensure tangible benefits for local communities.⁴⁶¹ If poorly managed, mineral development could lead to negative consequences, including (a) significant GHG emissions from mining and processing activities; (b) negative environmental impacts such as biodiversity loss, water depletion and pollution, waste-related contamination and air pollution; (c) massive disasters such as recent tailings dam collapses in Brazil; and (d) social impact from corruption and misuse of government resources, fatalities and injuries to workers and members of the public; and (e) human rights abuses, including child labor, unequal impact on women and girls, and devastating impacts on the right to a clean, healthy and sustainable environment.⁴⁶²
246. Additionally, clean energy should be used in sustainable mineral development. Fuel switching, low-carbon electricity and investment in energy efficiency can significantly reduce the emissions footprint of mineral production in the near term.⁴⁶³ According to the International Energy Agency, emissions from minerals development do not negate the climate advantages of clean energy;⁴⁶⁴ however, electricity mix and the pace of future decarbonization will have a significant impact on the emissions profile of mineral production.⁴⁶⁵

⁴⁵⁸ “Latin America’s opportunity in critical minerals for the clean energy transition”, International Energy Agency (Apr. 7, 2023), <https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>.

⁴⁵⁹ *Id.* See “Top ten biggest lithium mines in the world,” Mining Technology (Aug. 30, 2019), <https://www.mining-technology.com/features/top-ten-biggest-lithium-mines/>.

⁴⁶⁰ “Latin America’s opportunity in critical minerals for the clean energy transition”, International Energy Agency (Apr. 7, 2023), <https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>

⁴⁶¹ *Id.*

⁴⁶² IEA: Role of Critical Minerals.

⁴⁶³ *Id.* at pages 201-207.

⁴⁶⁴ *Id.* at page 194.

⁴⁶⁵ *Id.* at page 200.

247. States focusing on the development of critical minerals should ensure that the human rights of affected populations are respected and protected. Indigenous Peoples are among the most affected by extractive activities, including in South America. According to the United Nations:

It is estimated that over 50 per cent of the world's remaining mineral resources targeted by mining companies are in customary lands claimed by indigenous peoples. For copper and uranium resources these estimates increase to 70 per cent. The demand for lithium, the new "white gold", is expected to increase tenfold in the next decade, and this surge in demand is triggering a new wave of extractive industry encroachment into indigenous territories in Chile, the Plurinational State of Bolivia and Argentina, where 60 per cent of the world's lithium resources are located. Among those affected by lithium mining are the Pai-Ote community of the Colla people in the Cordillera sector of the Atacama Region in northern Chile, who have mobilized to protest against the profound impact of such mining on their water supplies and livelihoods, and whose representatives have been criminalized and threatened for voicing their opposition.⁴⁶⁶

248. States should ensure that the mining of critical minerals does not impact the rights of Indigenous Peoples, including free, prior, and informed consent, with regard to the exploitation of critical minerals within their territories.

d. States should avoid overreliance on carbon removal technologies, and ensure that human rights are respected in the application of such technologies

1. Bioenergy, Carbon Capture and Storage and Direct Air Capture technologies raise human rights concerns

249. Carbon removal methods include both natural processes (such as afforestation and agricultural soil management), man-made methods (such as direct air capture), and hybrid options (such as bioenergy combined with carbon capture and storage and ocean-based carbon removal).⁴⁶⁷ Carbon removal may play a significant role in global decarbonization efforts by reducing emissions in industries that are particularly difficult to decarbonize⁴⁶⁸ (such as the steel, cement, and chemical

⁴⁶⁶ United Nations Department of Economic and Social Affairs, *State of the World's Indigenous Peoples*, 5th Volume (2021), <https://social.desa.un.org/sites/default/files/publications/2023-03/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples-Vol-V-Final%20%282%29.pdf>.

⁴⁶⁷ World Resources Institute, *Carbon Removal*.

⁴⁶⁸ Esin Serin, *What is carbon capture, usage and storage (CCUS) and what role can it play in tackling climate change?*, London School of Economics and Political Science Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Mar. 13, 2023).

- industries),⁴⁶⁹ producing low-carbon electricity and hydrogen, and removing existing carbon dioxide from the atmosphere.⁴⁷⁰
250. Two of the most prominent carbon removal technologies are Bioenergy with Carbon Capture and Storage and Direct Air Capture. Bioenergy with Carbon Capture and Storage involves the capture and permanent storage of carbon dioxide from processes that generate biomass energy.⁴⁷¹ Direct Air Capture involves the direct extraction of carbon dioxide from the air, in contrast with carbon capture, which captures carbon dioxide at the point of emissions.⁴⁷² This technology extracts carbon dioxide from the air by creating chemical reactions that selectively react with and trap carbon dioxide, while allowing other air particles to pass.⁴⁷³ The captured carbon dioxide is then stored underground or used in products.⁴⁷⁴
251. The UN Human Rights Council and the Intergovernmental Panel on Climate Change have identified several ways that these technologies constrain sustainable development and pose dangers to human life and the environment.⁴⁷⁵ Carbon removal technologies pose significant health risks in the capture and transport processes.⁴⁷⁶ Carbon dioxide removal technologies require heavy reliance on water and energy consumption, and leave waste, pollution, and chemical footprints.⁴⁷⁷ Local communities—including Indigenous Peoples, fisherfolk, and other peoples in rural areas – face the most serious risks of exposure to these technologies’ negative externalities.⁴⁷⁸
252. Bioenergy with Carbon Capture and Storage could impact the right to food. To operate at scale, this approach would require large swaths of land and volumes of water to be diverted from food production to growing biomass.⁴⁷⁹ It relies on

⁴⁶⁹ Samantha Gross, *The challenge of decarbonizing heavy industry*, Brookings (June 2021), <https://www.brookings.edu/articles/the-challenge-of-decarbonizing-heavy-industry/>.

⁴⁷⁰ Esin Serin, *What is carbon capture, usage and storage (CCUS) and what role can it play in tackling climate change?*, London School of Economics and Political Science Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (Mar. 13, 2023).

⁴⁷¹ U.N. Framework Convention on Climate Change, Removal Activities under the Article 6.4 mechanism, page 61, section 7.7.

⁴⁷² International Energy Agency, *Direct Air Capture: A key technology for net zero*, April 2022, page 3.

⁴⁷³ *Id.*

⁴⁷⁴ *Id.* at page 46.

⁴⁷⁵ Human Rights Council Advisory Committee, *Impact of New Technologies Intended for Climate Protection on the Enjoyment of Human Rights*, U.N. Doc. A/HRC/54/47 (Aug. 10, 2023). at para. 19.

⁴⁷⁶ *Id.*

⁴⁷⁷ Human Rights Council Advisory Committee, *Impact of New Technologies Intended for Climate Protection on the Enjoyment of Human Rights*, U.N. Doc. A/HRC/54/47 (Aug. 10, 2023) at para. 16.

⁴⁷⁸ *Id.* at para. 18.

⁴⁷⁹ Philipp Günther and Felix Ekardt, *Human Rights and Large-Scale Carbon Dioxide Removal: Potential Limits to BECCS and DACCS Deployment*, Land (2022), <https://doi.org/10.3390/land11122153>, page 3.

growing primary or secondary biomass to generate fuel.⁴⁸⁰ Primary biomass includes maize, wheat, soy, switchgrass and willow, while secondary biomass includes non-food biomass.⁴⁸¹

253. Assuming that primary biomass continues to be the source of biofuels, the widespread application of this technology likely would affect the food supply and infringe upon the right to food for certain communities.⁴⁸² Studies project that to limit global warming to 1.5°C, an estimated 380 to 700 million hectares of land area would need to be devoted to biofuel crops, which translates into the conversion of 7% to 25% of the world's agricultural land and 25% to 46% of arable and permanent cropland by 2100.⁴⁸³ Such conversions of land use would create greater food insecurity and would cause food prices to increase.⁴⁸⁴
254. Direct Air Capture technology could impact the right to water. Direct Air Capture systems have varying degrees of water requirements. Solvent Direct Air Capture systems require 1 to 7 tons of water to capture a ton of carbon dioxide, while certain sorbent systems require 1.6 tons of water per ton of carbon dioxide captured.⁴⁸⁵ Widespread use of these technologies would likely result in increased demand and competition for freshwater supply and rising water prices.⁴⁸⁶ The price of water is already expected to increase by 20-30% by 2050, and rising water prices will disproportionately affect vulnerable populations in the Global South.⁴⁸⁷ Bioenergy and carbon capture and storage technology would also require large amounts of fertilizer, which would also likely worsen water pollution and thus impact the availability of clean water.⁴⁸⁸
255. Large-scale use of these technologies may also infringe the right to a healthy environment. Biomass production can also lead to deforestation, discussed in more detail in Section VI.e. Biomass production can also lead to significant greenhouse gas emissions and air pollution, which impact efforts to create a healthier environment. The Supreme Court of Hawaii recently concluded that granting a permit to a proposed biomass power plant would violate the right to a clean and

⁴⁸⁰ *Id.*

⁴⁸¹ *Id.*

⁴⁸² *Id.* at page 4.

⁴⁸³ *Id.* at page 9.

⁴⁸⁴ *Id.*

⁴⁸⁵ Katie Lebling, Haley Leslie-Bole, Zach Byrum, and Liz Bridgwater, *6 Things to Know About Direct Air Capture*, World Resources Institute (May 2, 2022), <https://www.wri.org/insights/direct-air-capture-resource-considerations-and-costs-carbon-removal>.

⁴⁸⁶ *Id.* at page 10.

⁴⁸⁷ *Id.*

⁴⁸⁸ *Id.*

- healthy environment (protected by the state constitution) because of the volume of greenhouse gas emissions produced. The applicant's promises to offset these emissions were dismissed as speculative and inadequate.⁴⁸⁹
256. The large area of land that biomass production requires will also exacerbate biodiversity loss.⁴⁹⁰ The capture of carbon dioxide, its transportation through pipelines and its storage for unspecified periods of time raises the risks of leakage, which would have detrimental impacts on the climate crisis, ecosystems, and biodiversity.⁴⁹¹
257. Finally, the largest market for captured carbon dioxide is enhanced oil recovery, which uses captured carbon dioxide to produce more oil from depleted wells, thereby producing more greenhouse gas emissions.⁴⁹² States should address the connection between Direct Air Capture and fossil fuel production in order to prevent increased emissions and a slower energy transition.⁴⁹³ Otherwise, there is a serious risk that more carbon dioxide emissions would be produced than would be captured.⁴⁹⁴ States should also refrain from subsidizing enhanced oil recovery.

2. States should preserve and restore natural carbon mitigation ecosystems

258. States should preserve and restore their natural carbon mitigation ecosystems, which absorb carbon dioxide from the atmosphere. Courts have enforced state obligations to preserve such resources. A court in Colombia, for example, ruled against the Colombian Government in a case where the government was not preserving *páramos* or natural carbon sinks. Colombia's Constitutional Court found that the government's measures that permitted mining activity in *los páramos* violated the right to a healthy environment for both present and future generations.⁴⁹⁵ The Supreme Court of Mexico similarly ruled that the State must protect mangrove ecosystems, another natural carbon sink, in order to fulfill the right to a healthy environment.⁴⁹⁶

⁴⁸⁹ Supreme Court of the State of Hawai'i, *In the matter of Hawai'i Electric Light Company*, SCOT—22—0000418, Decision of 13 Mar. 2023.

⁴⁹⁰ *Id.* at page 11.

⁴⁹¹ *Id.*

⁴⁹² *Id.*

⁴⁹³ *Id.*

⁴⁹⁴ *Id.*

⁴⁹⁵ Decision C-298/16 of June 8, 2016, Colombia Constitutional Court, <http://climatecasechart.com/non-us-case/decision-c-298-16-of-june-8-2016/>.

⁴⁹⁶ First Chamber of the Supreme Court of Mexico, Amparo 307/2016, (Nov. 14, 2018).

3. States should ensure the protection of human rights in any implementation of carbon markets program, including forestry credits

259. Carbon markets are intended to facilitate mandatory or voluntary compliance with carbon emission reduction regimes. These regimes allow for the buying and selling of environmental credits that are intended to represent a reduction, avoidance, storage, or capture of greenhouse gas emissions, which may be used to offset emissions in another location.⁴⁹⁷ States should ensure that potential emissions reductions through carbon markets do not come at the expense of human rights. Previous offsetting projects under the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol⁴⁹⁸ have been linked to human rights abuses, including forced relocations and killing of environmental activists.⁴⁹⁹ Some carbon offsetting projects violated the rights of Indigenous Peoples by forcibly displacing them from their land.⁵⁰⁰
260. In addition to human rights abuses, recent scientific studies have revealed grave problems regarding the legitimacy of certain carbon credits.⁵⁰¹ Reports indicate that the carbon credit industry is marked by exaggerated claims, weak oversight, inaccurate reporting, and widespread over-crediting.⁵⁰² Research has shown that decision-makers utilizing carbon credits benefit financially from over-crediting.⁵⁰³ In addition, vulnerable communities are often left out of critical consultations and efforts to inform affected peoples are half-hearted, resulting in extensive human rights violations.⁵⁰⁴

⁴⁹⁷ Megan Stubbs, Katie Hoover, and Jonathan L. Ramsuer, *Agriculture and Forestry Offsets in Carbon Markets: Background and Selected Issues*, Congressional Research Service, Doc. No. R46956, (Nov. 3, 2021), Background and Selected Issues, page 2.

⁴⁹⁸ As set forth in Article 12 of the Kyoto Protocol, the Clean Development Mechanism allows a State with a commitment to a certain emissions reduction or limitation target to implement an emissions reduction project in developing countries, which can earn a saleable emission reduction credit, equal to one tonne of carbon dioxide. This credit can then be applied toward meeting that country's commitment under the Kyoto Protocol. *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Art. 12.; *The Clean Development Mechanism*, United Nations Climate Change, [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism#:~:text=The%20Clean%20Development%20Mechanism%20\(CDM,reduction%20project%20in%20developing%20countries](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/mechanisms-under-the-kyoto-protocol/the-clean-development-mechanism#:~:text=The%20Clean%20Development%20Mechanism%20(CDM,reduction%20project%20in%20developing%20countries).

⁴⁹⁹ Human Rights Watch, *COP28: Carbon Market Rules Should Protect Rights* (Mar. 7, 2023), <https://www.hrw.org/news/2023/03/07/cop28-carbon-market-rules-should-protect-rights#:~:text=Some%20were%20also%20linked%20to,to%20be%20fraudulent%20and%20exploitative>.

⁵⁰⁰ Human Rights Watch, *COP27: Governments Should Reject Weak Carbon Market Rules* (Nov. 14, 2022), <https://www.hrw.org/news/2022/11/14/cop27-governments-should-reject-weak-carbon-market-rules>.

⁵⁰¹ Thales A. P. West, et al., *Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation*, Science (Aug. 25, 2023), doi: 10.1126/science.adc3535.

⁵⁰² Nina Lakhani, *Revealed: Top Carbon Offset Projects May Not Cut Planet-Heating Emissions*, The Guardian (Sept. 19, 2023), <https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions-greenhouse-gases>;

⁵⁰³ Barbara Haya et. al, *Quality Assessment of REDD+ Carbon Credit Projects, Executive Summary*, Goldman School of Public Policy (Sept. 15, 2023) at page 2, <https://gspp.berkeley.edu/research-and-impact/centers/cepp/projects/berkeley-carbon-trading-project/redd#media-coverage>.

⁵⁰⁴ *Id.* at page 6.

261. States have an obligation to take reasonable measures to prevent such foreseeable harms, whether committed by private or public actors.⁵⁰⁵ In furtherance of their duty to prevent foreseeable harms, States have an obligation to assess the risks and impacts of carbon markets.⁵⁰⁶ Given previous human rights abuses related to carbon offsetting projects, States can reasonably foresee that potential harm may occur in future offsetting projects, and they have an obligation to assess whether such adverse impacts may occur and take steps to prevent them.

e. **States should reduce and end deforestation**

262. Deforestation, which is the conversion of previously forested land into another permanent use, is one of the human activities with the largest adverse impacts on the Earth's climate.⁵⁰⁷ Deforestation, along with agriculture and changes in land use, constitutes 24% of global greenhouse gas emissions.⁵⁰⁸ Deforestation also contributes to loss of biodiversity, economic losses, human health issues, and detrimental environmental impacts.⁵⁰⁹
263. Agriculture accounts for almost 88.1% of the world's deforestation, while urban and infrastructure development accounts for about 6.1% and the remaining 5.8% is attributed to other causes.⁵¹⁰ Livestock grazing is the main driver of deforestation in the Americas, causing almost three quarters of deforestation in South America and about half of deforestation in North and Central America.⁵¹¹
264. In *Future Generations v. Ministry of the Environment and Other*, the Supreme Court of Colombia found that deforestation of the Colombian portion of the Amazon rainforest was a violation of the right to a healthy environment and other human rights. The Court stated that deforestation in the Amazon poses an “imminent and serious” threat to present and future generations due to its impact on climate change.⁵¹²

⁵⁰⁵ Submission of the Office of the High Commissioner for Human Rights to the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, *Understanding Human Rights and Climate Change*.

⁵⁰⁶ Center for Int'l Env't Law, *Rights, Carbon, Caution: Upholding Human Rights under Article 6 of the Paris Agreement* (2021), <https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2021/02/Rights-Carbon-Caution.pdf>, page 10.

⁵⁰⁷ David Boyd (Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment), *Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, U.N. Doc. A/74/161 (July 15, 2019).

⁵⁰⁸ *Id.*

⁵⁰⁹ Clare Balboni, Aaron Berman, Robin Burgess, Benjamin A. Olken, *The Economics of Tropical Deforestation* (Sept. 1, 2022).

⁵¹⁰ FRA 2020 Remote Sensing Survey, FAO Forestry Paper 186, FAO (2022)

⁵¹¹ *Id.*

⁵¹² Supreme Court of Colombia, *Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente*, Decision of Apr. 5, 2018.

265. While ending deforestation is the best way to stop this form of greenhouse gas emissions, States should also consider implementing measures aimed at restoring already degraded land, converting such lands into secondary forests.⁵¹³
266. The recommendation that States should move reduce and ultimately end deforestation focuses on a planet-centered model of development, rather than the current system in which nature and the environment are ignored. The Special Rapporteur on the Right to Development has proposed that States should move towards a model of planet-centered, participatory development that does not focus only on humans, but nature, the environment, and all species:

The goal of leaving no one behind should include not merely people but also plants and animals because, without these organisms, people cannot survive. As the right to development is not a license to destroy the planet or undermine the ability of future generations to realize their economic development aspirations, brakes should be applied to the idea of infinite economic growth and more focus should be placed on ensuring the fair and equitable distribution of existing resources by respecting the planetary boundaries.⁵¹⁴

f. States should increase their levels of climate financing

267. As discussed in Section III, the current level of climate financing is insufficient to prevent, curb or respond to the global consequences of the climate emergency.⁵¹⁵ According to the International Monetary Fund, US\$5 trillion in annual investments are needed globally by 2030 to meet greenhouse gas emission reduction goals, with US\$ 2 trillion of that needed to be spent in emerging markets and developing economies.⁵¹⁶ As it is elsewhere, climate financing remains insufficient throughout the Americas. In North America, annual climate financing accounts for a sixth to a third of the amount needed.⁵¹⁷ The situation is graver in South America and the Caribbean, where the amount of climate financing is much lower, accounting for only an eighth to a quarter of the financing needed.⁵¹⁸ Industrialized members of the OAS should enhance their financial support for the climate actions of developing

⁵¹³ Tik Root, “Tropical forests can recover from deforestation very fast, new study finds,” The Washington Post (Dec. 9, 2021).

⁵¹⁴ See Surya Deva (Special Rapporteur on the right to development), *Reinvigorating the right to development: A vision for the future*, U.N. Doc. A/HRC/54/27 (Aug. 4, 2023), Section V.F.

⁵¹⁵ IPCC Working Group II, *AR6: Climate Change 2022 Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, page 1963.

⁵¹⁶ “IMF says private sector needs to shoulder most of climate investment burden.” Reuters (October 2, 2023), <https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/imf-says-private-sector-needs-shoulder-most-climate-investment-burden-2023-10-02/#:~:text=Of%20the%20%245%20trillion%20in,about%2080%25%20of%20these%20investments>.

⁵¹⁷ *Emissions Gap Report 2022*, UNEP (Oct. 27, 2022), page xxvii.

⁵¹⁸ *Id.* at page xxvii.

members of the OAS, particularly the least developed States and the Small Island Developing States.

268. Pursuant to international human rights law, States should dedicate the maximum available resources to fulfilling their human rights obligations. In the context of the climate emergency, this means allocating the maximum available financial, material, and human resources to shift to renewable energy, clean transport and agroecological farming; halting and reversing deforestation and soil deterioration; and increasing adaptive capacity, especially in vulnerable and marginalized communities.
269. Financing for mitigation and adaptation strategies and initiatives has grown globally but still falls short of current global needs. As an example, financing flowing from industrialized to developing countries has never met the commitment of US\$100 billion per year originally made at UNFCCC COP15 in Copenhagen in 2009 and reiterated in the Paris Agreement.⁵¹⁹ The United Nations Adaptation Gap Report 2022 found that, in 2020, industrialized countries only pledged a combined mitigation and adaptation finance of US\$83.3 billion.⁵²⁰ To limit warming to 1.5°C or 2°C, the average annual investment required for the period from 2020 to 2030 is approximately three to six times greater than current levels.⁵²¹ The United Nations estimates that the annual need for adaptation finance for developing countries alone could be between US\$215 to US\$387 billion.⁵²² These statistics reveal the disparity between current levels of climate finance and what is needed for countries to mitigate and adapt to climate change related challenges.
270. States recognized the need for transformative climate financing in Section 1(c) of Article 2 of the Paris Agreement. This provision aims to strengthen the global response to the threat of climate change in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by: “making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.”⁵²³
271. In accordance with Article 2 of the Paris Agreement and their human rights obligations, States are under a duty to refrain from directing finance flows toward any policy or action that is inconsistent with a low emissions pathway and/or climate-resilient development.⁵²⁴ Therefore, States should adopt policies and

⁵¹⁹ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, pages 28-29.

⁵²⁰ Paul Watkiss, Georgia Savvidou, Pieter Pauw, and Dipesh Chapagain, “Chapter 3: Global progress on adaptation financing in developing countries,” in *Adaptation Gap Report 2022*, UNEP, page 18.

⁵²¹ IPCC, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*, page 29.

⁵²² *Adaptation Gap Report 2023*, UNEP (Nov. 2, 2023), <https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2023>.

⁵²³ Paris Agreement, Art. 2.

⁵²⁴ *Id.*

budgeting in accordance with the obligation to adequately allocate their national budgets to mitigate and reduce greenhouse emissions, restore natural carbon sinks and undertake adequate adaptation actions to protect vulnerable communities.

272. Section 2 of Article 2 of the Paris Agreement also provides for implementation that reflects “equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.”⁵²⁵ States therefore should frame their obligations based on national circumstances and budgetary needs, and allocate public financing in their budgets where private financing is not available. In *PSB et al. v. Brazil (on Climate Fund)*, the Supreme Court of Brazil ruled that the executive branch has a constitutional duty to execute and allocate funds to mitigate climate change, based on, among other things, the constitutional right to a healthy environment and Brazil’s commitments under the Paris Agreement.⁵²⁶

1. States should be proactive in overcoming the barriers to adequate financing

273. The climate finance gap is mainly the result of four factors: (a) the failure to implement the polluter pays principle; (b) the failure to mobilize maximum available resources; (c) unsustainable debt burdens for many low-income States small island developing states and other climate vulnerable States; and (d) lack of access to capital at affordable rates for mitigation and adaptation projects. To overcome these challenges, States should be more proactive in overcoming the systemic barriers in the current international financial system. The UN Secretary General has requested that States rethink climate financing by demanding more decisive and direct actions.⁵²⁷ This call-to-action has been materialized in multiple international initiatives, such as the “Bridgetown Initiative 2.0,” which aims to reform the international financial system.⁵²⁸
274. The Bridgetown Initiative 2.0 highlights six key action areas to take concrete steps to support all developing States, including to: (a) provide liquidity support of at least US\$100 billion of unused special drawing rights through the IMF and multilateral development banks; (b) restore debt sustainability by restructuring sovereign debt with long-term low interest rates; (c) increase official sector development lending to reach US\$500 billion annual stimulus for investment in sustainable development swaps (discussed below); (d) mobilize more than US\$1.5 trillion per year of private sector investment in the green transformation; (e) modify

⁵²⁵ *Id.*

⁵²⁶ Supreme Court of Brazil, *Partido Socialista Brasileiro (PSB) et al. v. Brasil*, ADPF 708, (July 1, 2022)

⁵²⁷ Masayoshi Suga, *With clock ticking for the SDGs, UN Chief and Barbados Prime Minister call for urgent action to transform broken global financial system*, UN (Apr. 26, 2023), <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2023/04/press-release-with-clock-ticking-for-the-sdgs-un-chief-and-barbados-prime-minister-call-for-urgent-action-to-transform-broken-global-financial-system/>.

⁵²⁸ *Id.*

the governance and management of international financial institutions to have more equitable and inclusive management and supervision; and (f) create an international trade system that supports green energy and the required transformations.⁵²⁹

2. States should consider putting a price on greenhouse gas emissions

275. Carbon pricing is a mechanism by which the external costs of greenhouse gas emissions (e.g. crop damage, health care costs from droughts and heat waves, and property loss from sea level rise and flooding) are connected to the source.⁵³⁰ The source then pays per unit of climate pollution emitted.⁵³¹ Carbon pricing shifts the burden of paying for greenhouse gas pollution from the public to polluters, forcing the latter to decide to alter their activities or continue emitting and paying the price. Carbon pricing has been formulated in different ways, but to be most effective, it should be implemented in a manner that predictably increases over time to change emitter behavior. Funds generated from carbon pricing could then be used to close the gap in carbon financing discussed above.
276. At present, only one-quarter of global carbon emissions are priced. The International Monetary Fund has proposed to expand this coverage by implementing an international carbon price floor agreement, which would have States pay a floor price of \$25-\$75 per ton of carbon depending on the States' level of economic development.⁵³² An international carbon price floor would help accelerate decarbonization.
277. The commercial aviation and international shipping industries are major contributors to greenhouse gas emissions. Together, these industries release billions of tons of CO₂ a year.⁵³³ Emissions from these industries are projected to continue to rise in the decades ahead.⁵³⁴ Furthermore, the industries' CO₂ emissions are mainly unregulated and not addressed by carbon pricing mechanisms.⁵³⁵

⁵²⁹ Public Relations, *Bridgetown Initiative 2.0 Highlights Six Key Action Areas*, Barbados Government Information Service, <https://gisbarbados.gov.bb/blog/bridgetown-initiative-2-0-highlights-six-key-action-areas/>.

⁵³⁰ "What is Carbon Pricing?", Carbon Pricing Dashboard," The World Bank, <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/what-carbon-pricing>.

⁵³¹ *Id.*

⁵³² Jean Chateau, Florence Jaumotte, & Gregor Schwerhoff, "Why Countries Must Cooperate on Carbon Prices," International Monetary Fund (May 19, 2022), <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/19/blog-why-countries-must-cooperate-on-carbon-prices>.

⁵³³ See *Maritime Shipping*, The International Council on Clean Transportation, <https://theicct.org/sector/maritime-shipping/>; see also *Tracking Aviation*, International Energy Agency, <https://www.iea.org/energy-system/transport/aviation>.

⁵³⁴ David R. Boyd and Stephanie Keene, *Air Travel and Maritime Shipping Levies: Making Polluters Pay for Climate Loss, Damages and Adaptation*, UN Special Rapporteur Policy Brief #2 (2021), page 5.

⁵³⁵ *Id.*

278. To address these industries' greenhouse gas emissions, States should apply the polluter pays principle and impose carbon pollution levies that could be redistributed to low-income States, Small Island Developing States, and other climate-vulnerable States.⁵³⁶ Multiple models for a levy have been proposed, such as a levy of \$100 per ton of CO₂ emitted by shipping and \$25 per passenger for air travel.⁵³⁷

3. States should consider participating in collaborative schemes, including debt-for-climate swaps

279. States should collaborate internationally to explore bilateral and multilateral investment and capital structures that are beneficial for the environment, human rights and all participating parties. Many of the least developed States have been unable to adequately invest in recovery, climate action, and sustainable development due to capital constraints and unsustainable debt burdens. Some have to borrow from international capital markets at much higher interest rates than industrialized States.⁵³⁸

280. However, certain investment structures may assist States in obtaining climate-related financing. An example is the sustainable development swap, which could redirect debt service payments toward investments in sustainable development and climate action. Debt-for-climate swaps could be structured to allow creditor countries to apply the value of the debt relief towards their climate commitments.⁵³⁹ For example, Bolivia and Conservation International signed the first debt-for-nature agreement in 1987, pursuant to which Conservation International purchased US\$650,000 of Bolivia's foreign debt in the secondary market at a discount in exchange for the Bolivia's commitment to set aside 3.7 million acres in three conservation areas as buffer zones.⁵⁴⁰ However, States should always ensure that debt-for-climate and debt-for-nature swaps include human rights safeguards, are developed in consultation with potentially affected communities, respect the right to free, prior and informed consent of Indigenous Peoples, and that persons whose rights are allegedly affected have access to justice with effective remedies.

g. States should implement oversight and education programs to promote awareness of the climate emergency

281. To further promote climate literacy and thereby promote community participation and political engagement, States should that education systems include science-based climate-change curriculum, employ trained educators, and address the

⁵³⁶ *Id.* at page 4.

⁵³⁷ *Id.* at para. 50.

⁵³⁸ United Nations Secretary-General's SDG Stimulus to Deliver Agenda 2030, UN (Feb. 2023).

⁵³⁹ *Id.*

⁵⁴⁰ J. P. Resor, *Debt-for-nature swaps: a decade of experience and new directions for the future*, FAO.

ethical, political, cultural and economic aspects of climate change.⁵⁴¹ For example, the Dominican Republic enacted the Environmental Education and Communication Law, which aims to incorporate climate education into all levels of the country's academic system.⁵⁴² The country's stated goal is to train 200 teachers in climate education by 2024 and to integrate climate education fully into teacher training institutions by 2030.⁵⁴³

282. Similarly, Colombia adopted the National Climate Change Policy in 2017, which outlines ways to address information dissemination on education, training and public awareness, science and technology and climate change management planning and financing.⁵⁴⁴ The policy's stated goal is to increase climate literacy in the country's education system.⁵⁴⁵ Colombia has also created the Interinstitutional Technical Committees of Environmental Education, which implement national environmental policies and climate education according to each region's local guidelines.⁵⁴⁶

VII. LOSS AND DAMAGE

283. "Loss and damage," the third critical pillar of climate action, refers to both economic and non-economic harms arising from the climate emergency. Economic harms include measurable impacts, such as infrastructure damage, costs of rebuilding, increased health care expenditures, and agricultural losses. Non-economic harms refer to the negative impacts of the climate emergency that are difficult but not impossible to place a dollar value on, such as trauma from experiencing catastrophic weather events, loss of traditions and community, impacts on cultural rights, and displacement.
284. Loss and damage include the sudden effects of extreme weather events including hurricanes, typhoons, heat waves and wildfires, but also slow-onset events such as sea-level rise, rising global temperatures, ocean acidification, loss of biodiversity, drought, and desertification.
285. The IPCC has recognized that the likelihood of exceeding adaptation limits increases as the magnitude and pace of climate change increases. When prevention,

⁵⁴¹ *Climate Literacy is the Key to Reversing Climate Change*, Earth Day (Apr. 19, 2023), [https://www.earthday.org/climate-literacy-is-the-key-to-reversing-climate-change/#:~:text=The%20Education%20International%20Manifesto%20on,science%2C%20\(3\)%20addressing%20the](https://www.earthday.org/climate-literacy-is-the-key-to-reversing-climate-change/#:~:text=The%20Education%20International%20Manifesto%20on,science%2C%20(3)%20addressing%20the).

⁵⁴² Climate Change Laws of the World, Dominican Republic, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, <https://climate-laws.org/geographies/dominican-republic>.

⁵⁴³ Christina Kwuak, *The Climate Change Education Ambition Report Card*, Education International Research (Sept. 28, 2021), <https://www.ei-ie.org/en/item/25344:the-climate-change-education-ambition-report-card>, page 45.

⁵⁴⁴ *Getting every school climate-ready: How countries are integrating climate change issues in education*, UNESCO (2021), unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379591/PDF/379591eng.pdf.multi.

⁵⁴⁵ *Id.*

⁵⁴⁶ *Id.*

mitigation and adaption efforts are unsuccessful or impossible to implement, addressing loss and damage post facto becomes necessary.

286. Signatories to the Paris Agreement acknowledged “the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change.”⁵⁴⁷ The agreements of COP27 further recognized the importance of addressing climate-related loss and damage, with States agreeing to establish a loss and damage fund for vulnerable communities impacted by climate change.
287. In addition to fulfilling their obligations to address loss and damage pursuant to international environmental and climate agreements, States should adhere to international human rights law in addressing climate-related losses and damages. The loss and damage experienced due to climate change fundamentally impacts the rights recognized in international human rights law – including, *inter alia*, the rights to life, food, water, health, livelihood, culture, and a clean, healthy, and sustainable environment.
288. Communities and individuals most in need of international human rights protections also tend to be the most vulnerable to the losses and damages inflicted by climate change. Effectively addressing loss and damage arising from or related to the climate emergency requires a human rights-based approach.
289. States should move forward with urgency to operationalize the Loss and Damage Fund (agreed to at COP27) and provide the required magnitude of financing, which is estimated at \$290 billion to \$580 billion annually.⁵⁴⁸ The bulk of funding should come from current and historically high emitting States, based on the polluter pays principle.
290. In designing and operationalizing the Fund, to ensure that loss and damage remedies are just and effective, States should proactively incorporate human rights principles into their efforts. State efforts to provide redress and remedy for loss and damage should incorporate and at all times respect core human rights principles, including non-discrimination and effective access to remedy.
291. The Fund should not only be aimed in remedying past injustices suffered by vulnerable States and peoples, but also adopt a forward-facing outlook that seeks to strengthen local communities from inevitable environmental damage while preventing repetition of harm. As outlined in the 2023 Maastricht Principles, States should establish national and international programs for reparation of the human rights of future generations that include the principles of restitution, compensation,

⁵⁴⁷ Paris Agreement, Art. 8.

⁵⁴⁸ Anil Markandya & Mikel González-Eguino (2018): *Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A Critical Review*. In: Mechler R., Bouwer, L., Schinko, T., Surminski, S. Linnerooth-Bayer, J. (eds): *Loss and damage from climate change. Concepts, methods and policy options*. Springer, pages 343-362.

and satisfaction.⁵⁴⁹ When restitution is not possible, victims should receive compensation, either monetarily or in kind. Finally, the satisfaction of reparations for future generations includes full public disclosure of causes and conditions leading to violations, mechanisms to provide victims with the truthful account and details of violations, and administrative or judicial sanctions to those responsible for violations.

292. Funds and obligations of loss and damage are primarily concerned with creating a prospective framework for addressing present and future harms caused by the climate emergency. The existence of such a framework should not be used as a basis for excluding the right to redress for damage caused by States' past acts and omissions. The right of access to justice, including rights to redress and remedy, are a core component of the right to a healthy environment.

VIII. CONCLUSION

293. Respecting, protecting and fulfilling human rights, including the right to a clean, healthy, and sustainable environment (which includes, *inter alia*, the right to a safe climate, healthy ecosystems and biodiversity, and a non-toxic environment), could be a critical catalyst in spurring the urgent, systemic and transformative changes required to achieve a sustainable future. Human rights empower the public and promote accountability by imposing enforceable obligations on governments to implement effective and equitable actions to address the planetary crises.
294. In light of the climate emergency that humanity is facing, every molecule of greenhouse gas counts. There are no marginal or insignificant emissions. There is no time to lose. As the IPCC has stated, "Every bit of warming matters, every year matters, every choice matters."⁵⁵⁰

⁵⁴⁹ See *Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations* (adopted on Feb. 3, 2023).

⁵⁵⁰ IPCC, *Global Warming of 1.5°C*, Foreword at (vi).

Respectfully submitted:

Marcos Orellana.

DR Boyd

Deva

Marcos Orellana

Special Rapporteur on Toxics
& Human Rights

David Boyd

Special Rapporteur on Human
Rights & the Environment

Surya Deva

Special Rapporteur on the
Right to Development